

302930

H
24

UNIVERSIDAD FEMENINA DE MEXICO

Escuela de Relaciones Internacionales

Estudios Incorporados a la UNAM

EL SALVADOR:

UNA DECADA DE GUERRA CIVIL

TESIS CON
FALSA FE ORGEN

T E S I S

Para obtener el Título de
LICENCIADO EN RELACIONES
INTERNACIONALES

P r e s e n t a:

MARICELA MIREYA REYES LOPEZ

Director de Tesis:

Lic. Margarita Alvarez Gutiérrez

MEXICO, D. F. 1991



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

El Salvador: una década de guerra civil.

INTRODUCCION.....	1
I. Marco Teórico.....	5
II. Capítulo 1. GENERALIDADES HISTORICAS DE EL SALVADOR	
1.1 Breve exposición de antecedentes históricos.....	11
1.2 Situación Política del periodo 1930-1950.....	18
1.3 Situación Política del periodo 1950-1970.....	29
1.4 Situación Política del periodo 1970-1979.....	39
1.5 Fuerzas Organizadas. Partidos Políticos, Organizaciones Politico-Militares y de Masas.....	50
III. Capítulo 2. RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA. LA GUERRA CIVIL	
2.1 Situación Política de las Juntas de Gobierno y la Asamblea Constituyente, principio de los ochenta.	58
2.2 Principales Acciones del FMLN-FDR durante los cuatro primeros años de los ochenta.....	73
2.3 Presidencia de José Napoleón Duarte. Primeros pasos hacia la paz	90
2.4 FMLN-FDR. Principios para establecer la paz	110
2.5 Desarrollo militar de la guerra civil	120
IV. Capítulo 3. EL SALVADOR DIRIGIDO POR EL PARTIDO ARENA. ALFREDO CRISTIANI, 1989	
3.1 Elecciones que dieron el triunfo a Cristiani	140
3.2 Necesidades de un verdadero diálogo-negociación.....	152
3.3 Se rompen las condiciones por alcanzar la paz.....	181
V. Capítulo 4. LOS ESTADOS UNIDOS. GUERRA Y DINERO, LIMITES PARA LA PAZ SALVADOREÑA.	
4.1 La Administración Reagan y su modalidad estratégico militar hacia El Salvador.....	238
4.2 Bush-Cristiani y la ayuda norteamericana.....	284

Conclusiones.....	311
Anexo No. 1 CASO DE LOS JESUITAS ASESINADOS POR MILITARES.....	320
Anexo No. 2 ACCIONAR MILITAR DEL EJERCITO SALVADORENO Y LA GUERRILLA DESDE EL INICIO DE LA PRESIDENCIA DE CRISTIANI HASTA SEPTIEMBRE DE 1991.....	329
Bibliografia consultada.....	346

Introducción

El pueblo salvadoreño sabe por experiencia que la guerra civil actual tiene sus orígenes desde mucho tiempo atrás, y no empezó en la década de los ochenta al surgir las organizaciones político-militares o la formación de la guerrilla, esto más bien, es el resultado de años de represión e injusticia social de los más fuertes sobre los más débiles.

Una fecha exacta del inicio del conflicto difícilmente puede establecerse, no obstante, hechos históricos como: la aparición del capitalismo como forma de producción, que determinó el carácter de una sociedad a través de la economía en la que se apropió de los medios de producción, que generó una división clasista, que llevaba en sí los gérmenes de la confrontación armada, como instrumento de superación del descrédito y miseria que genera la negación de las condiciones vitales para las mayorías, en beneficio de las minorías; y la masacre de los campesinos de 1932, movilizada para exigir el derecho a la tierra, pero apagada por el entonces presidente "dictador" Maximiliano Hernández, son hechos, entre otros, que prepararon el panorama revolucionario actual, cuyas características teóricas son la transformación básica de las instituciones y los principios políticos, económicos y sociales, resultantes de un derrocamiento del orden gubernamental establecido.

Las condiciones materiales de vida de las grandes mayorías fueron cada año materializándose y profundizándose, dando paso a las crisis periódicas que ha vivido El Salvador en los últimos

años: 1944, 1948, 1960, 1972, 1979, 1984, 1989. Tales situaciones son resultado del agotamiento del sistema capitalista como forma económico-social, pues los intentos de revertirlo han sido esfuerzos estériles causados por la contradicción fundamental de un sistema egoísta, inhumano e injusto, en el cual, los intentos reformistas han procurado mantener el poder económico, político y social en manos de la poderosa oligarquía, siempre fiel al imperialismo norteamericano, en detrimento de de las masas populares.

Es así que se observa en la década de los ochenta, las condiciones insoportables de la vida salvadoreña, dando pie a que el descontento popular, tuviese como última y única alternativa, la lucha nacional revolucionaria. Resulta una tarea histórica, para aquellas fuerzas sociales comprometidas con las mayorías populares, evitar la profundización de la guerra civil y la crisis existente.

Tratando de plantear una hipótesis, lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es que los conflictos y contradicciones de este país tan pequeño son difíciles de resolver, dado que al interior de las estructuras económicas, políticas y sociales, se han agotado las fases de su desarrollo. Concretamente, la crisis salvadoreña es una crisis orgánica de las estructuras mismas, lo que implica que una verdadera solución, significa necesariamente la superación de estas estructuras que se han vuelto realmente un obstáculo para el desarrollo del país.

El presente trabajo fue elaborado por la necesidad de entender y tomar conciencia de una realidad dramática e inhumana, que directamente ha afectado a millones de salvadoreños en el aspecto

económico, político, social y cultural. Si bien es cierto que tales aspectos no pueden desarrollarse como debieran, en medio de una guerra civil, también debemos preguntarnos, si consiguiendo la paz, ¿aquellos se resolverían? Sin duda el establecimiento de la paz traería consecuencias negativas inmediatas, ya que un pueblo desgastado en todos sentidos, como lo es El Salvador, no estaría preparado para resolver en el futuro inmediato su situación de miseria, falta de vivienda, analfabetismo, mínimo grado de desarrollo, desempleo, etc. No obstante, el establecimiento de la paz, es importantísimo para enfrentar todos estos problemas.

El trabajo se inicia con un capítulo de antecedentes generales, con el objeto de introducirnos al problema guerrillerista imperante, da cuenta somera de la historia de El Salvador desde su Independencia hasta la conformación en bloques de las fuerzas populares, cuya aparición representó la nueva forma de lucha por parte de las masas populares.

El segundo capítulo está dedicado a explicar la iniciación de un camino que ya no se abandonaría: la guerra civil; así como las posibilidades existentes de crear una paz sobre las bases planteadas de dos actores: el gobierno y la guerrilla. Se tratará de explicar por qué bajo la presidencia de Duarte no se pudo lograr la pacificación del país, la democratización del proceso, la satisfacción económica de las mayorías populares y el sometimiento del poder popular al poder civil.

El tercer capítulo es el más actual, el cambio de la Democracia Cristiana en el poder, a la Ultraderecha de Alfredo

Cristiani donde se atiende, principalmente, a la búsqueda de establecer un diálogo-negociación y sus lamentables tropiezos. La información es hemerográfica en su mayoría, con el fin de que el material histórico reciente de fuentes directas, trate de ser lo más apegado posible a la verdad y esperando que pueda ser útil, no para hacer una denuncia, aunque sería un tema interesante a proponer en otro trabajo, sino para encontrar las posibles alternativas de solución al conflicto.

Finalmente, el capítulo cuatro es dedicado a explicar de manera general el papel de los Estados Unidos, cuyo objetivo ha sido aniquilar o debilitar cualquier movimiento popular que tienda a la transformación radical de las estructuras políticas, económicas y sociales. En este sentido, la estrategia actual de conflictos de baja intensidad diseñada por el Pentágono, ha sido la nueva modalidad.

Ya lo ha mencionado anteriormente Jeane J. Kirkpatrick en su libro "Dictadura y Contradicción", que los Estados Unidos no son de ningún modo un actor nuevo en la política centroamericana, ha sido importante como fuente de asistencia y ha ejercido un poder de veto sobre gobiernos del área y reforzado con su aprobación tácita a gobiernos aceptables. Esta intervención, determina el actuar del gobierno salvadoreño, principalmente el establecido desde la década de los ochenta, con la Administración Reagan, durante la cual se aumentó la asistencia económica y militar y comenzó a suministrar armamento necesario para la lucha antiguerrillera.

I. Marco teórico.

La guerra es la columna vertebral de la situación política en El Salvador, plasmado en un enfrentamiento entre dos voluntades de poder. Representa la máxima elevación y agudización de la lucha de clases que en diferentes momentos históricos se ha presentado en diversas formas y manifestaciones, es decir, ha optado por el camino de los cambios, de las revoluciones.

Típicamente, una revolución comprende el levantamiento popular y el empleo de la violencia contra la clase gobernante, si tiene éxito, los dirigentes revolucionarios se apoderan del centro del gobierno y pueden instituir entonces reformas básicas que estén de acuerdo con el gobierno revolucionario (1). Hasta ahora, las "revoluciones" que registra la historia de El Salvador, no han tenido el éxito suficiente para llevar a cabo el cambio radical necesario, que posiblemente daría paso al establecimiento de una sociedad más justa.

La problemática salvadoreña es política, y toda crisis política consiste en el conjunto de características particulares que asume la lucha de clases en una sociedad cuando, como lo asienta Poulantzas en su libro Fascismo y Dictadura (2), un cierto equilibrio general se rompe y alcanza el campo de las relaciones sociales. Para que tal acontecer se produzca, tiene que alcanzar una dimensión social tal y afectar una totalidad de fuerzas sociales relacionadas en una forma específica de organización.

Esta situación es justamente la vida cotidiana en El Salvador, donde es preciso reconocer que al carecer de paz, esta se convierte

en anhelo, expresado en diferentes manifestaciones y por distintos sectores de la sociedad, donde el conflicto tiene también raíces en la profunda insatisfacción de las necesidades de empleo, salud, educación, vivienda, etc, y que cada vez son menos atendidas, aunados al problema del alto índice demográfico, es decir, la problemática es también económica y social.

Por otra parte, el término de guerrilla utilizado a lo largo de este trabajo, está fundamentado en la definición de Régis Debray, citado por la UNESCO en su Diccionario de Ciencias Sociales (3). La guerrilla es la forma principal, casi exclusiva, de la lucha revolucionaria en América Latina. La guerrilla empieza con un pequeño foco, con un reducido número de combatientes que poco a poco se transforma en un movimiento de masas. Es necesario avanzar del pequeño al grande; el pequeño es el foco de guerrilla, núcleo del ejército popular. No es un frente que va a crear a ese núcleo, pero sí es el núcleo que a medida en que se desarrolla, permitirá la creación de un Frente Nacional Revolucionario, es el pequeño motor que pone al gran motor de las masas en movimiento y precipita la formación del frente en cuanto aumentan las victorias del pequeño motor.

La guerrilla se caracteriza por la acción bélica de formaciones de escasa entidad, autónomas en su movimiento y jerarquía funcional, especialmente en emboscadas, asaltos por sorpresa y breves combates, y sus miembros son voluntarios. Es por tanto, una suerte de élite combatiente, que tiende a actuar con independencia o autonomía no solamente de los centros militares,

sino también de los órganos políticos nacionales, como corresponde a una fuerza irregular y de origen espontáneo y voluntario. Aquí se ubican las actividades de grupos opositores como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y los grupos de oposición que apoyan sus causas, aunque algunos no persigan la actividad militar como meta para lograr la pacificación, como el caso del Frente Democrático Revolucionario.

El guerrillerismo tiende a apoyar las soluciones liberales, democráticas o genéricamente progresistas, tiene un contacto más directo con la población que las fuerzas armadas regulares, y con el tiempo, es más proclive a la dirección por caciques o caudillos.

Otro término utilizado es el de guerra civil, entendiéndose como la efectuada en diferentes zonas geográficas, divisiones políticas o fracciones ideológicas dentro del país. Puede comprender la lucha entre un gobierno establecido y fuerzas antigubernistas, o puede desarrollarse durante un periodo intermedio entre grupos que luchan por alcanzar el poder y la legitimidad como nuevo gobierno (4).

Por lo que respecta a la participación de los Estados Unidos en Centroamérica, la doctrina aplicada ha sido la planteada a mediados de la década de los ochenta, llamada Doctrina Reagan que a su vez está basada en la Doctrina de Seguridad Nacional.

La Doctrina Reagan fue definida por el Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Patrick Buchanan (5), en los siguientes términos:

1.- (....) la doctrina dice que no tenemos que resignarnos ante el

hecho de que una vez que un país se ha convertido en miembro del campo socialista o comunista deba permanecer allí para siempre. Allí donde movimientos de liberación genuinos busquen recapturar su país de una tiranía comunista impuesta desde afuera, Estados Unidos se reserva el derecho, y puede en efecto, tener la obligación de apoyar a esos pueblos".

2.- "Para que la doctrina se aplique, un régimen ha de ser instalado por medio de la fuerza, el fraude o el engaño, y con el apoyo externo del bloque soviético".

3.- Los líderes de la resistencia no deben estar necesariamente decididos a establecer una democracia parlamentaria, pero deben tener como objetivo la autodeterminación nacional".

4.- Debe haber una perspectiva de victoria. "Si todo lo que hacemos es enviar a la gente a luchar y a morir (....) eso está mal. Pero si la iniciativa parte del pueblo y necesitan armas y están dispuestos a luchar y morir por sus convicciones, tenemos la obligación de ayudarlos".

La Doctrina Reagan, desde el punto de vista estratégico, formulada a raíz de la crítica de la experiencia de Vietnam, sostiene la necesidad de descartar la distensión y, sobre todo, afirma el imperativo de pasar de la contención estratégica a la ofensiva estratégica. Para ello apela a dos conceptos clave: el Despliegue Rápido y los Conflictos de Baja Intensidad (6). El Despliegue Rápido "procura evitar el gradualismo y empantanamiento que llevaron a la derrota de Vietnam. El objetivo es montar fuerzas de intervención ligeras, que invadan rápidamente y salgan lo antes

posible. En consecuencia, el Despliegue Rápido es atingente a una invasión militar directa con tropas propias.

Por su lado la Guerra de Baja Intensidad es el concepto central de la doctrina Reagan, en la medida que encara los desafíos considerados más álgidos (no convencionales; incluye contrainsurgencia, contraterrorismo y aliento a movimientos contrarrevolucionarios). El área crucial de prueba ha sido Centroamérica en general y El Salvador en particular.

Finalmente, por lo que respecta al término de guerra psicológica, deberá entenderse como las actividades políticas, militares, económicas y sociales, emprendidas en periodos de inestabilidad para influir en los pensamientos y acciones. Su objetivo es debilitar el deseo de lucha de los enemigos, o los posibles enemigos, en reforzar la resolución del pueblo de una nación o la de sus aliados, o el logro de objetivos diplomáticos. Se lleva a cabo principalmente mediante la propaganda o las campañas ideológicas basadas en estrategias y tácticas que llevan a cabo las principales potencias (7).

Notas bibliográficas del Marco Teórico.

- 1) Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, p. 121.
- 2) POULANTZAS, N. Fascismo y Dictadura, p. 58.
- 3) Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, p. 61.
- 4) HERNANDEZ, Edmundo. Diccionario de Política Internacional, p. 74.
- 5) U.S. News and World Report, 27 de Enero de 1986, en Estados Unidos, Perspectiva Latinoamericana, p. 28
- 6) ESCURRA, Ana María. Intervención en América Latina, p. 74.
Un estudio amplio y analítico se encuentra en BERMUDEZ, Lilia, Guerra de Baja Intensidad, Reagan contra Centroamérica.
- (7) Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, p. 69.

II. Capítulo 1. Generalidades históricas de El Salvador.

1.1 Breve exposición de antecedentes históricos.

El Salvador es un país independiente desde 1821, antes tuvo que pasar por frustrados intentos de libertad desde 1811. El 15 de Septiembre de 1821, la Capitanía General de Guatemala (que desde 1542 la componían Chiapas, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador) proclama la independencia del país más pequeño de Centroamérica. Un año después, El Salvador rechaza la anexión de Centroamérica al Imperio de Iturbide, pero invadido por tropas mexicanas, es obligado a incorporarse hasta el derrumbe del Imperio, posteriormente se separa de México. A Excepción de Chiapas, los cinco países se unieron para formar la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formó parte El Salvador hasta 1841 cuando proclamó su separación y elaboró su primera Constitución (1).

Las dos décadas posteriores están marcadas por la indesición de formar una república tripartita con Honduras y Nicaragua; por la constante enemistad con Guatemala; y, por el incidente que provocó un norteamericano conocido como William Walker, quien apoderándose de Nicaragua se proclamó su presidente, y cuando las naciones centroamericanas se unieron para expulsarlo de la región, lo cual consiguieron, las fuerzas salvadoreñas, al mando del general Gerardo Barrios, desarrollaron un papel importante y eficaz. La popularidad adquirida le valió a Barrios para hacerse cargo de la presidencia de El Salvador de 1859 a 1863.

Gerardo Barrios creía en la Centroamérica unida, su mandato dictó la separación de la Iglesia y del Estado, la enseñanza laica, reorganizó el Ejército, creó la Marina Mercante, ordenó la intensificación del cultivo del café (2), (producto que ya se visualizaba como matriz agroexportadora) y siguió apoyando el cultivo del añil, materia prima de exportación más importante de ese momento.

Económicamente, del periodo independentista hasta 1864, aproximadamente, se desarrolló una transformación lenta y desigual de la estructura económica colonial, de donde se irían consolidando las bases para el surgimiento y desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. Es durante la década de los sesenta a los ochenta cuando se provocó la descomposición del modo de producción prevaleciente, culminando en un periodo de acumulación originaria cuya aceleración la determinaron dos factores, principalmente:

1.- El auge de la economía añilera, de la cual los índices más altos de exportación se alcanzaron en 1872.

2.- Como reflejo y condición, la lucha de intereses por el poder "que detriminaba periodos alternativos de avance y retroceso en razón de la ideología, a veces claramente desplazada, de los gobiernos que se alternaban el poder" (3).

Simultáneamente a ésta transformación, se determinaba a nivel mundial, el desarrollo del capitalismo, cuya primera fase fue la extendida dos décadas antes de la independencia de El Salvador, hasta el año de 1880, cuando Inglaterra, principalmente, y otros

países europeos, establecieron las relaciones de producción, hacia finales de ese periodo. El principal objetivo de Inglaterra fue la obtención de materias primas o productos agrícolas. Y, una segunda fase fue la comprendida entre 1880 y 1930, cuando Inglaterra se vió desplazada, por Alemania y Francia fundamentalmente, y por la ya vislumbrante dominación de los Estados Unidos cuyos objetivos giraron hacia la esfera de la producción por medio de la inversión directa de capital (4).

Es durante 1880 cuando El Salvador se articula al mercado mundial dentro de la división internacional del trabajo, pero con la desventaja de hacerlo con un sólo producto: el café. Su comercialización interna y externa quedó controlada por capital extranjero, dándose por ello, efectos negativos tales como:

a) Una inversión nacional y de inmigrantes concentrada en el sector primario (estos inmigrantes controlaban las firmas comerciales importadoras-exportadoras, y se incorporaban paulatinamente a la vida salvadoreña a través de matrimonios).

b) La inversión extranjera se relacionaba en las mismas actividades donde se invertía, es decir, los dueños de bancos o ferrocarriles, invertían en las ramas bancaria o ferrocarrilera, según el caso.

c) Si la plusvalía se verificaba en un mercado externo, no se podía ampliar el mercado interno, y por tanto, no se generaba un desarrollo en el proceso industrial.

d) Según la tesis de Anibal Quijano (5), "si la producción se destina al mercado interno de las burguesías imperialistas,

determina una ligazón orgánica entre inversión externa imperialista y mercado interno de estas burguesías", para el caso de El Salvador "está ligada orgánicamente a la inversión interna de esas burguesías, siendo por eso mismo para ellas, un mercado externo".

e) Retomando la tesis anterior se desprende que al no desarrollarse la producción industrial, sólo la burguesía tenía acceso a los bienes industriales exportados, pero las capas medias, campesinos y capas urbanas no tenían acceso a los mismos.

Hacia 1881 se promulgaron Leyes de Extinción de Comunidades y Ejidos, dictadas por el entonces presidente Rafael Zaldívar, los posteriores presidentes, hasta la segunda década del presente siglo, también se dedicaron a aplicar las extinciones y expropiaciones totales de las tierras, tierras que posteriormente integrarían la parte constante de capital donde se crearía el limitado mercado interno.

Las expropiaciones se fundamentaron en encuestas oficiales y sus conclusiones argumentaban que el desarrollo de la agricultura comercial se lograría si las tierras estuvieran en manos de individuos como propiedad privada, por que los métodos de la agricultura de subsistencia que se llevaban a cabo, eran inadecuados. Como resultado se fortaleció la forma privada de la propiedad comunal, iniciándose una campaña en contra de la propiedad comunal indígena.

Entre estos dos escenarios, el de la expropiación y el fortalecimiento de la propiedad privada, quedaba una mayoría de campesinos abandonados por el estado o robados por la oligarquía

terrateniente, hecho que se tradujo más tarde en el descontento campesino por hacer respetar sus derechos. Las primeras manifestaciones resultantes del proceso de expropiación de tierras comunales en el siglo XIX sucedieron en 1885, siendo presidente de El Salvador, Fernando Figueroa, y en 1898, con el mandatario Tomás Regalado, y es hasta 1922 cuando se produjeron las primeras huelgas como instrumento de lucha.

Con la promulgación de la Constitución Política de 1886, a cargo del presidente Francisco Méndez (1865-1890), la situación que transformaba las bases sociales y económicas de la sociedad salvadoreña, dieron a la clase cafetalera el poder de imponer sus bases ideológicas, ya que por medio de la Carta Magna, tratarían de construir la unidad nacional y buscarían su propio desarrollo.

A finales del siglo XIX se van creando ya los matices para el surgimiento del proletariado y semiproletariado agrícola en El Salvador, y se va integrando el mayor ejército laboral de reserva en Centroamérica (consecuencia después del surgimiento de la sobrepoblación). También, y como ironía, la forma de sucesión presidencial va a ser por medio de golpes de estado. Entre 1871 y 1911, se dieron diez periodos presidenciales, de los cuales seis llegaron por golpes de estado (6), y cuatro fueron electos a través del "voto popular".

A principios del siglo XX, el panorama social y político comienza a cambiar. Se suscitan varias contradicciones dentro de la oligarquía que empiezan a plasmarse en torno al claro desplazamiento del eje imperialista, de Inglaterra a los Estados

Unidos y Alemania y a la diversificación del aparato productivo. El bloque oligárquico, consolidado desde la época de anarquía, comienza a tener alteraciones y contradicciones justo al inicio del periodo presidencial de Manuel Enrique Araujo, ya que una fracción simpatizaba con los intereses ingleses mientras otra simpatizaba con los norteamericanos.

Para adentrarnos en la historia de El Salvador a nivel político social, cabe señalar que durante el mandato de Enrique Araujo (1911-1913), se reforzó el servicio militar con medidas de varios tipos, algunas de ellas fueron: a) el establecimiento del servicio militar obligatorio para todos los sectores de la población, lo que antes sólo era aplicado a los habitantes del sector rural; b) se reabrió una academia militar para reiniciar un proyecto fallido en varios intentos anteriores de formar profesionalmente a los estratos superiores del ejército. Esta academia tendría gran importancia en la vida política del país; c) creó un nuevo organismo militar, la Guardia Nacional, con la asesoría de oficiales españoles, la cual se convertiría rápidamente en una institución de apoyo para los presidentes posteriores y así contrarrestar las actividades de los oponentes políticos, o a las facciones militares opositoras. Esta institución tendrá gran influencia para mantener el orden público en las zonas rurales, y desarrollaría principalmente funciones de vigilancia (7).

La historia registra una etapa con características de hechos magnificadas (asesinato de Enrique Araujo en 1913), y desplazamientos de poder a nivel externo (desplazamiento de Zelaya en Nicaragua,

por su lucha contra los intereses canaeros de los Estados Unidos), que permitieron la entronización de la llamada dinastía Quiñónez-Meléndez al poder (1913- 1931), fracción norteamericanizante que estuvo en conflicto con el sector agroexportador tradicional que estaba representado por Miguel Tomás Molina, apegado a los intereses británicos junto con las clases populares, de aquí la división del bloque oligárquico antes mencionado.

Carlos Meléndez y Alfonso Quiñónez fueron, alternadamente, los sucesores de Araujo y quienes iniciaron una dictadura civil, manteniéndose en el poder hasta 1927, es decir, el periodo comprendido entre 1913 y 1927 fue cubierto por una sola familia la que condujo al país "con la eficacia de una hacienda cafetalera en cuyo interior se da a los peones látigo y medicinas" (8).

Los miembros de la dinastía Quiñónez-Meléndez contaron con el claro apoyo de funcionarios públicos, grandes productores beneficiadores y exportadores, por un lado, pero por otro, en varias ocasiones recurrieron a la organización de grupos de artesanos y campesinos en un partido político llamado "La Liga Roja" en el cual se apoyaban para asegurar sus constantes reelecciones. Al sector campesino se le mantuvo próximo a ese partido, mediante la cesión de cargos municipales en ciudades y pueblos del interior del país. La Liga Roja, como institución política, tuvo también funciones paramilitares y fue utilizada como mecanismo represivo contra las manifestaciones de la oposición.

El gobierno emitió medidas proteccionistas, apoyando mínimamente sólo a la industria textil, henequenera y algodónera,

pero nada obtenían en apoyo las clases cafetaleras tradicionales. Aquí se acentuaba más la lucha interna del bloque oligárquico, y por consiguiente, la lucha por formar un nuevo bloque burgués, donde se intentaría la incorporación de clases subalternas.

El siguiente gobierno, el de Pío Romero Bosque (1927-1931) fue el último representante de la dinastía, (por eso se anotó arriba que el mandato duró hasta 1931). Durante los cuatro años se decretaron leyes referentes a; la prohibición de importar maquinaria automática para manufacturas de zapatos; a la exención de impuestos para los ingresos derivados del cultivo de maíz, frijol, arroz, y en general para todos los cereales; emisión de leyes de protección para trabajadores comerciales; creación de Juntas de Conciliación entre obreros y patronos, entre otras. Las medidas laborales sólo fueron en favor del asalariado urbano, como señala Guido Véjar (9), porque al mismo tiempo se producía una persecución contra la organización sindical y contra activistas de izquierda en la zona rural.

En todo este marco, los distintos intereses de hegemonía y lucro de los que poseían propiedades, aceleraron el proceso de toma de conciencia y organización de aquellos que no poseían, así, llegaría el momento de la movilización campesina.

1.2 Situación política del periodo 1930 a 1950.

El Salvador, como parte del conjunto de las naciones latinoamericanas, adoptó la forma del capitalismo dependiente, principalmente de los Estados Unidos, quien terminó imponiéndose

hasta convertirse en el más fiel representante del capitalismo mundial, y de paso, determinando la formación económico-social a la región latinoamericana. Además, El Salvador tiene el agravante de ser un país de tendencia monocultivista y sin materias primas estratégicas, razón que hace pronunciar su carácter de nación capitalista dependiente, y como consecuencia, se establece una diferencia estructural profunda entre los poseedores de los medios de producción y los que sólo tienen su fuerza de trabajo.

En este esquema de formación socio-económica, El Salvador es perturbado en 1932, como una continuidad lógica del pasado, dado cien años antes por las masas campesinas guiadas por Anastasio Aquino, pues las condiciones subhumanas de vida que obligaron a los indígenas a sublevarse se habían profundizado aún más.

La toma de conciencia por parte de los campesinos provocó, entre otras cosas, la creación de foros, confederaciones, partidos, o simples grupos, en donde pudieron reivindicar sus derechos, basándose en sus propias ideas y que conjuntamente a hechos externos, como fue la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la lucha guerrillera de Augusto Cesar Sandino contra los marines norteamericanos en Nicaragua, prepararon el terreno para la lucha que llevarían a cabo las masas trabajadoras.

En las circunstancias descritas, en 1931 hace campaña política para las elecciones presidenciales, el líder del Partido Laborista, recién creado, Arturo Araujo, educado en Inglaterra de donde retomó la doctrina del Labour Party. Durante su campaña planteó la expropiación y reparto de latifundios, distribución de tierras del

estado y la limitación de la jornada laboral, que por supuesto provocó el disgusto de los finqueros cafetaleros, de los grupos de poder económico y de los hacendados.

Entre otros candidatos presidenciales, se encontraban: Enrique Córdova, quien tenía una tradición de oposición a la dinastía Quiñónes-Meléndez, y representaba al Partido Evolución Nacional; Alberto Gómez Zárate, Ministro de Guerra del gobierno anterior y que dirigía el Partido Zaratista; Maximiliano Hernández Martínez, dirigente del Partido Nacional Republicano que agrupaba a profesionales, trabajadores y productores de café; Miguel Tomás Medina, también opositor a la dinastía y líder del Partido Constitucional; y, Antonio Claramount Lucero, quien gozaba de prestigio dentro del gremio militar y lideraba el Partido Fraternal Progresista con apoyo de los campesinos (10).

Las elecciones favorecieron a Arturo Araujo por mayoría, que a decir de varios autores, fueron las últimas elecciones libres y democráticas del país (11). Fue elegido por la Asamblea Legislativa como presidente de la República por unanimidad, el 1 de Marzo de 1931. (Los militares, como grupo institucional aún no intervenían en la política, aunque sí formaban parte importante como aparato represivo del estado).

Paralelamente, dos hechos importantes agravaron la crisis económica de El Salvador. En el primer semestre de 1929 se produjo la caída de los precios internacionales del café, afectando directamente al país, y a nivel externo, los efectos del crac de Nueva York incidieron también en su interior.

Mientras, el nuevo gobierno realizaba reformas, pero se topaba con la reacción de los cafetaleros: el despido masivo de trabajadores, la negación de pagar salarios, la presión al gobierno de suprimir los impuestos de la exportación de café, quienes además utilizaron la fuerza pública para restablecer el orden en sus propiedades. Los choques entre la Guardia Nacional y los campesinos y trabajadores se intensificaron peligrosamente. Los sectores del campo y la ciudad fueron afectados, llevando consigo el hambre y la desesperación a los pequeños campesinos minifundistas. A esto se suma el que los elementos militares dejaron de recibir sus sueldos porque las arcas fiscales se encontraban vacías. Este clima de incertidumbre puso en desequilibrio al gobierno.

La presidencia de Araujo se desarrolló en un vacío absoluto de poder, sin lograr el cumplimiento de las promesas hechas a obreros y campesinos, tuvo que enfrentar la abierta hostilidad de la oligarquía que veía en él un peligro mayor que en el candidato de la dinastía Quiñónez-Meléndez. Abandonado por los sectores de poder, su gobierno careció de cuadros burocráticos y se enfrentó a la oposición creciente del Partido Comunista y a la pequeña burguesía (12). El 2 de Diciembre de 1931, el Ministro de Guerra, Maximiliano Hernández Martínez derrocó a Arturo Araujo, de aquí en adelante la vida política de El Salvador estaría marcada por la constante represión, por golpes de estado y por la miseria de la mayoría de la población. (Araujo intentó realizar una invasión desde Guatemala, donde se encontraba, pero fue abortado su plan).

El nuevo mandatario asumió la presidencia enfrentando la

oposición del Partido Laborista y del Partido Comunista, este último calificó la situación como revolucionaria, y por ello se encaminó al asalto del poder para implantar una democracia burguesa hegemonizada por el proletariado. Aunado a la falta de apoyo social, se encontró a la falta de reconocimiento internacional, especialmente de los Estados Unidos, ya que en base a los Tratados de Washington de 1923, este país niega el reconocimiento a los gobiernos surgidos de revoluciones.

En general la sociedad al principio sí apoyó a Hernández Martínez, sin embargo, fue la represión que llevó a cabo la que lo desprestigió progresivamente. Una de las leyes dictadas en este aspecto deja entrever la ideología equivocada y absurda para los fines que perseguía, tal es la Ley de Cédula Patriótica de Defensa Social, documento de identificación que servía de pasaporte interno y externo, y garantizaba la no captura por parte de los cuerpos policiales. La cédula era tan costosa, que obviamente la mayoría de los salvadoreños, casi un 80% (13), no podía adquirirla.

El gobierno de facto de Hernández Martínez, convocó a elecciones para diputados y alcaldes municipales durante los primeros días de Enero de 1932. El Partido Comunista Salvadoreño, creado en 1930, participó en la contienda electoral y obtuvo triunfos en algunas ciudades del centro y occidente del país, ganando influencia sobre las masas campesinas y urbanas. Esto no beneficiaba en su afán de poder del presidente, por lo que, para aminorar el triunfo de los comunistas, se valió del fraude y la represión y ordenó la suspensión de las elecciones, justamente en

las ciudades consideradas por él como "opositoras", las del centro y occidente. El Partido Comunista trató de dialogar los hechos con representantes del gobierno, pero la respuesta negativa lo obligó a movilizar una insurrección con el fin de impedir la represión en el campo y el desbordamiento de los campesinos que ya se estaba desarrollando (14).

La aceptación de que el Partido Comunista participara en las elecciones y el permitir el desenvolvimiento de sus planes comunistas respecto a la insurrección popular, fue solamente una maniobra martinista para, oportunamente, capturar a sus líderes, desmembrar sus cuadros de dirección y realizar la matanza popular más grande que había conocido la historia de El Salvador, hasta ese momento (15).

Las masas populares apoyaron y participaron en la insurrección porque, por una parte, reconocían su estado de explotación y miseria y necesitaban realizar acciones violentas que aseguraran de inmediato la conquista de sus tierras, y por otra, se revelaron contra el régimen político, principalmente contra las acciones de la Guardia Nacional que había llevado a cabo persecuciones injustificadas. La insurrección campesina actuó con influencia y orientación del movimiento proletario internacional de la época y el Partido Comunista trató de imponer la dirección de vanguardia al movimiento, "el movimiento campesino no se circunscribía únicamente en la recuperación de la parcela perdida sino que consideraban la toma directa del poder y la puesta en práctica del programa con perspectivas socializantes" (16).

La insurrección fue sofocada represivamente, y la Guardia Nacional y la burguesía agraria, organizadas en las "Guardias Cívicas", se tomaron el derecho de asesinar en masa a cientos de campesinos. Esta actitud de "apoyo" al régimen gubernamental, sólo mostró la conveniencia que para la burguesía representaba un régimen de mano dura (17) ya que esta era la manera más eficaz de defender sus intereses, "quizá la burguesía cafetalera tuvo la suficiente visión de clase o instinto oligárquico para percatarse de que un ciclo histórico se cerraba (el de los gobiernos civiles demoliberales y seudodemocráticos, juego electoral ocasional, relativas libertades coyunturales, todo ello generalmente dentro de un contexto estable), y se abría otro: el del "orden", apoyado en la dictadura militar" (18). En este lapso, se fusionó la oligarquía y el militarismo, unión que provocó el viraje radical para la vida del país.

Después de los acontecimientos de 1932, las hostilidades entre las clases se agudizaron, el comunismo planteado por el Partido Comunista Salvadoreño produjo pánico y odio, y el clima de terror y represión manipuló y transformó el modo de pensar del pueblo salvadoreño.

En cuanto a la economía, el régimen martinista adoptó medidas de tipo intervencionista para aminorar los efectos de la crisis. La economía monoexportadora siguió siendo la base del "crecimiento" pero no se incluyeron en ella planes de desarrollo que ajustaran y salvaran la situación imperante. La participación en la toma de decisiones económicas por parte de los cafetaleros y hacendados,

se llevó a cabo por medio de instituciones como la Compañía del Café, el Banco Central, el Banco Hipotecario, etc. La industria manufacturera no se fomentó, por el contrario, se obstruyó el desarrollo industrial cuando se decretó la prohibición de establecimientos de fábricas dedicadas a la producción de calzado, artículos de metal y pequeñas fábricas de ladrillo. Igualmente, se prohibió la importación de maquinaria de tipo agrícola, considerando que así se mantendría el volumen del empleo en el campo. El movimiento obrero por su parte, estaba terminado, legal y físicamente, sólo se permitió la existencia de asociaciones dirigidas por patronos, y en 1935, el presidente creó el partido oficial "Pro-Partía", con la burocracia estatal y con elementos de capas medias, específicamente profesionales.

La dictadura se fue caracterizando por un pronunciado despotismo, manifestado en el irrespeto e ignorancia de los derechos individuales, la cancelación del derecho de asociación y por la concentración real del poder en manos del dictador, quien para establecer el "orden", se valió siempre de capturas, destierros y fusilamientos, acciones que por supuesto estaban dentro de la legalidad. La Ley Orgánica de la Guardia Nacional, fue decretada para mejorar su tan "buen servicio" demostrado en el levantamiento campesino, se autorizó a este cuerpo a penetrar, sin permiso judicial previo, en todo lugar público y privado, para mantener el orden social (19).

La dictadura de Hernández Martínez fue unipersonal, de carácter feudal colonial que sobrevivió del 2 de Diciembre de 1931

hasta Mayo de 1944, trece años de terror para un pueblo miserable, interrumpido por un breve lapso cuando Andrés B. Menéndez tomó el poder entre 1934 y 1935, pero que no representa mayor cambio por tratarse de una continuidad.

A nivel internacional, y durante la Segunda Guerra Mundial, la derrota del nazifascismo por los países capitalistas, unidos al primer país socialista, creó un clima favorable por la lucha democrática al interior del país. Los grupos intelectuales, los urbanos pequeñoburgueses y las capas medias de la oficialidad, comenzaron a tomar conciencia de la falta de democracia y de la escisión que en este momento existía dentro de la clase dominante. Tal situación provocó el forjamiento de una alianza compuesta por una fracción de la oligarquía, representantes de los grupos medios y populares y oficiales jóvenes del ejército, con el fin de derrocar la dictadura mediante un golpe de estado cívico militar.

La sublevación estalló el 2 de Abril de 1944, pero fue inmediatamente disuelta por el dictador, mediante las formas ya conocidas. No obstante, la burguesía ahora de mayor magnitud, y que antes apoyara a Hernández Martínez, se indignó ante la ola de violencia desatada. Estudiantes pertenecientes a esta burguesía y grupos medios en general, acordaron declararse en huelga, condicionando su finalización a la caída del dictador, la huelga llamada "De Brazos Caídos" tuvo efectos positivos, obligando al presidente a renunciar y abandonar el país.

El carácter heterogéneo y espontáneo de esta burguesía, marca su ambigüedad y debilidad, ya que de acuerdo a las circunstancias,

no existió un aparato político democrático con una dirección capaz y experimentada. Los representantes de la oligarquía, grandes capitalistas agrarios, obreros fabriles, profesionales, empleados públicos, estudiantes, pequeños y grandes comerciantes y capas populares urbanas en general, se unieron sólo en contra de la dictadura autocrática, pero sus intereses fueron distintos. Lamentablemente, el ímpetu mostrado por este pueblo en la actitud contra Martínez, el descontento provocado por los fusilamientos y la huelga general, fueron desaprovechados, y el aparato represivo quedó intacto. El carácter de las masas fue adquiriendo un rumbo caudillista, en torno al líder del fallido golpe de estado, Arturo Romero.

Arturo Romero fundó el Partido Unión Demócrata, PUD, y en él canalizó el ímpetu de las masas. Una fracción mínima de la burguesía agroexportadora participó en dicho partido, pero como se mencionó anteriormente, carecía de una base política y de una dirección homogénea. Sin duda pretendía llegar al poder con la formación de un partido fuerte, pero en realidad se trataba de una formación consecutiva de partidos, pues también se creó la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, dirigida por elementos marxistas. Esta organización desarrolló una fuerte actividad de diferencias con el PUD. A sólo seis meses desde el inicio de la presidencia de Arturo Romero, se generó un golpe de estado más, el 21 de Octubre de 1944, con la participación de la Embajada de los Estados Unidos y grupos vinculados al anterior régimen de Hernández Martínez. Fue encabezado por el coronel Osmin Aguirre y Salinas, ocupando la

presidencia hasta que una conspiración planeada en Guatemala derrocó su régimen. La maniobra planeada en el vecino país, era invadir, con tropas civiles armadas y dirigidas por salvadoreños, el territorio, y ocupar la zona occidental de El Salvador. Aunque el plan no resultó del todo exitoso, el régimen sólo duró algunos meses por que otro golpe de estado lo derrumbó.

De 1945 a 1948 la presidencia estuvo ocupada por Salvador Castañeda C., ya como una costumbre, este dió el golpe de estado el 14 de Diciembre de 1944, pero ahora con la participación de las fuerzas de la joven industria, que se mantenía debilitada y sin el apoyo gubernamental. A fines del mandato, en 1948, con la llamada "Revolución del 48", el régimen adoptó una política de demagogia, apoyada en la emisión de leyes laborales moderadas y en otras medidas de mínimo beneficio social, pero no cesó la represión contra dirigentes obreros y partidos políticos independientes.

Posteriormente, la presidencia fue dirigida por el Consejo de Gobierno Revolucionario, integrado por dos civiles y tres militares. Como en las anteriores ocasiones, el apoyo de las masas sólo se manifestó en sus inicios con base en programas de reformas y justicia que se estaba prometiendo, pero nada se cumplía. Al mismo tiempo se creaba un nuevo partido, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática, PRUD, instrumento por el cual, Oscar Osorio asumió la presidencia del 4 de Diciembre de 1950 al 14 de Septiembre de 1956.

En resúmen, los veinte años comprendidos de 1930 a 1950, se caracterizaron, en el sentido gubernamental, por la presencia de

militares como jefes del ejecutivo, cuyos principales intereses estuvieron determinados por los de la fracción hegemónica que dominaba el bloque en el poder, de ello se deriva que la Fuerza Armada no poseía un proyecto político propio y definido, sino que su actuación y presencia se incertó en el concepto de "seguridad nacional", entendida como la lucha contra el comunismo, donde los fines para combatirlo justificaba los medios.

1.3 Situación Política del periodo 1950 a 1970.

El golpe de estado que llevó a la presidencia de 1950 a 1956 a Oscar Osorio, abrió una etapa importante en el proceso histórico salvadoreño ya que fue promovido el desarrollo industrial y comenzó el auge del capitalismo algodonero. Durante los primeros años de la década de los cincuenta, el estado se convirtió en promotor del crecimiento, después de abandonar el marco superestructural jurídico seudoliberal, heredado del siglo XIX, cuando adoptó la intervencionista Constitución de 1950 que le proporcionaba el control total de la vida económica y social salvadoreña.

Se prescribió el intervencionismo de estado, orientado a asegurar al pueblo salvadoreño la existencia digna del ser humano, garantizar la propiedad privada en función social, a regular con carácter tutelar las relaciones entre el capital y el trabajo, estableciendo la limitación de la jornada laboral, el derecho de asociación sindical, contrato colectivo, salario mínimo, vacaciones anuales pagadas, consideraciones especiales a la mujer, descanso semanal remunerado, seguro social, contrato de aprendizaje, entre

otras, (20). Tales reformas apoyarían en gran medida a la clase trabajadora, cuestión aprovechada por los obreros, quienes lucharon por lograr la formación de federaciones y confederaciones, para hacer valer la Constitución.

Los intereses a nivel estatal expresaron la necesidad de una reorganización de la fuerza de trabajo, pero para explotarla en forma más capitalista, así que en 1952, el estado inició una serie de maniobras, no para romper el movimiento sindical urbano, como en periodos anteriores, sino para coparlo en su dirección, dominarlo orgánica e ideológicamente y aprovecharse del mismo para sus proyectos. (El gobierno de Osorio había venido preparando cuadros con la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO, de los Estados Unidos) (20).

A nivel internacional se desató un incremento en los precios internacionales de café, que provocó un auge aprovechado por el gobierno para realizar algunos programas de vivienda, educación, obras de infraestructura, como la construcción de la termoeléctrica de Lempa y el aeropuerto de Acajutla. Lamentablemente, el excedente generado por las exportaciones fue canalizado sólo hacia un desarrollo industrial, olvidando apoyar a otros sectores productivos, únicamente se impulsó al sector agrícola en el ramo del algodón. Contrariamente a lo que pudiera pensarse sobre los beneficios que consigo trajo el "desarrollo industrial", la corrupción y malversación de fondos en las capas gubernamentales y cafetaleras, propició que el nivel de salarios no se elevara y como consecuencia, perduró la sobreexplotación de los trabajadores

del campo.

Además de los programas impulsados para el apoyo industrial, se inició con la práctica de un esquema integracionista en el área centroamericana. Sobre la base del régimen se creó el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.

Un nuevo golpe de estado se efectuó para imponer como presidente a José María Lemus, de 1956 a 1960. El régimen sufrió las consecuencias de las oscilaciones del mercado internacional del café, y el ciclo depresivo agravó la situación de la clase trabajadora, profundizando el índice de desocupación y la baja en los salarios. Las actividades organizativas sindicales se unieron para crear la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, pero en 1958 el gobierno formó otra agrupación, la Confederación General de Sindicatos de El Salvador, CGSS, con la que pudo manipular a un gran sector del proletariado.

Hacia 1959, la Revolución Cubana produjo un impacto en la conciencia de las clases populares, de los estudiantes, los intelectuales, proletarios y la pequeña burguesía urbana, al mismo tiempo que se creaban otros partidos.

En lo que concierne a las tareas desempeñadas por la institución militar, en la preservación del orden y en el diseño de un régimen que contemplara mecanismos de participación política regulada, el alto mando de la Fuerza Armada, había auspiciado, desde 1949, la constitución de un partido oficial, el PRUD, al que ya se ha hecho referencia, formado por los antiguos miembros del

partido Pro-Patria que creara Hernández Martínez, y que ahora iba incorporando a miembros del sector público en expansión y clases obreras (22).

De la oposición y denuncia se pasó a la actividad subversiva. El Frente Nacional de Acción Cívica, formado por partidos de izquierda, asociaciones estudiantiles y sindicales, despegó una intensa actividad de agitación, condicionando la preparación y ejecución de un golpe de estado, que realizaría en Octubre de 1960, a la renuncia del presidente Lemus. (En este momento se venía radicalizando la lucha popular contra las represiones del gobierno, proceso que posteriormente desembocó en la formación del Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR, en 1962). Con estos elementos y con el triunfo de la Revolución Cubana, articulado en sus efectos ideológicos a la radicalización de la lucha popular en contra del gobierno de Lemus, en la que surgieron los llamados "grupos de acción", se creó un momento cualitativamente diferente iniciándose una larga discusión sobre táctica y estrategia de la lucha revolucionaria en El Salvador, y que resultaría de gran importancia para las organizaciones obreras.

Paralelamente se impuso como verdad lógica una teoría que intentaba interpretar el proceso cubano, esta fue la tesis que posteriormente es recogida en el trabajo "Revolución en la Revolución" de Régis Debray, que planteó con simplificación la teoría del "foco" y despejó las confusiones entre detonante y vanguardia (23). En las organizaciones políticas, en capas medias y en la pequeña burguesía urbana, se produjo en tal momento, no una

discusión en torno a la nueva forma de enfocar la toma del poder, sino en cuanto al apego a la tesis del "foco" de Debray y una que intentaba articular la nueva estrategia a la lucha de clases que se había venido formando en la clase obrera. La teoría antes mencionada, refería a que "la guerrilla es la forma principal, casi exclusiva, de la lucha revolucionaria en América Latina. Empieza con un pequeño foco, con un reducido número de combatientes y poco a poco se transforma en un movimiento de masas" (24).

En el plano internacional, el presidente Lemus buscó en los Estados Unidos la colaboración respecto a la integración del Mercado Común Centroamericano, e hizo un llamado, junto a su homólogo Dwight Eisenhower, al "establecimiento de un sistema económico justo para las economías centroamericanas (25). El Salvador, Honduras y Guatemala, por su parte, suscribían un acuerdo tripartito de asociación económica, este acuerdo, impulsado por los Estados Unidos, violó los acuerdos de 1958, ya que excluyó al Acuerdo de Industrias de Integración que no convenía a los intereses monopolistas estadounidenses.

Ante las nuevas ideologías y la política exterior, se realizó otro golpe de estado que derrocó a Lemus y la presidencia fue ocupada por una efímera Junta de Gobierno, desde el 16 de Octubre de 1960 hasta el 25 de Enero de 1961, formada por tres civiles y tres militares, sin embargo las tendencias heterogéneas en su interior no lograron depurarse. Durante este mandato no se realizaron cambios estructurales sino que se restableció la legalidad y se promovió un proceso democrático y constitucional,

que desembocó en un evento electoral libre. Quizá el cambio importante fue cuando la Junta otorgó el reconocimiento legal a agrupaciones políticas y sindicales, entre ellas, al Partido Demócrata Cristiano y al Movimiento Nacionalista Revolucionario.

Los conflictos entre las fuerzas populares y la oligarquía se agudizaron, y la Junta fue depuesta el 25 de Enero, mediante obviamente, un golpe de estado, planeado y realizado por agentes del imperialismo y la oligarquía quienes impusieron en el poder al coronel Julio Adalberto Rivera, ocupando la presidencia de 1962 a 1967. El golpe de estado fue la respuesta a los intentos por implantar un régimen que no fuera presidido por las Fuerzas Armadas y en el que la burguesía agroexportadora no tuviera una representación privilegiada.

El nuevo orden que auspiciaría la institución militar, contempló, además de la ampliación de las bases de apoyo al Estado, el estatuto de participación de la oposición política. Se había iniciado un proceso de urbanización y expansión de los sectores medios, se crearon nuevos partidos, uno de ellos, el Partido de Conciliación Nacional, PCN, formado con los restos del PRUD.

Otro motivo del golpe de estado fue la preocupación de los agentes del imperialismo norteamericano, de que las libertades prolijadas por la Junta de Gobierno, incentivaran algún movimiento popular influenciado por la Revolución Cubana y por el temor a que se siguiera una política independiente al control norteamericano y de sus programas reformistas.

Ante la situación difícil y dubativa, la reacción de las

clases populares no se hizo esperar, pidieron armas para defender a la Junta, pero su mismo cuartel se negó a proporcionárselas. Una manifestación popular que se dirigía hacia el cuartel de los golpistas fue ametrallada. Se disolvió el gobierno ante la incapacidad de establecer el orden y surge un Directorio Militar para dirigir la presidencia.

El Directorio Militar fue de hechura netamente norteamericana y, por tanto, intentó la puesta en práctica de la línea reformista para que los Estados Unidos pudieran neutralizar la influencia del movimiento revolucionario cubano en el continente. La Alianza para el Progreso, ALPRO, acompañada de una amplia publicidad para las familias que controlaban la riqueza del país, encuentra resistencia tenaz entre éstas y en los grupos dominantes en general. No existía un grupo empresarial diferenciado de los que explotan la tierra, capaz de absorber con beneplácito las reformas acompañadas de dólares que proporcionaba la ALPRO.

El Directorio Militar justificó el apoyo norteamericano, alegando la posible intromisión del comunismo, pero por otro lado, se materializaba la subordinación institucionalizada del ejército a las decisiones del Pentágono, proceso iniciado desde 1961 y concluido con la creación del Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, en 1964, durante el gobierno de Julio Adalberto Rivera. "Con CONDECA, los ejércitos centroamericanos se subordinan totalmente al Pentágono. La seguridad de los Estados Unidos pasó a representar, en la realidad, la razón de ser y de actuar de los ejércitos centroamericanos" (26).

Un gobierno más, el de Adalberto Rivera, se caracterizó por el intento de aplicar las reformas propiciadas de la nueva política norteamericana, entre ellas, la nacionalización del Banco Central, la creación de programas de vivienda popular y la rebaja de los precios de alquiler y el decreto de un estatuto protector para los campesinos. Pero estas reformas no consiguieron aminorar la crisis, sino por el contrario, provocaron el descontento de elementos antirreformistas y prooligárquicos. También se pusieron en práctica medidas aprobadas por los Estados Unidos, para continuar con las políticas de integración centroamericana. "Los Estados Unidos tenían en ese momento receio en contra de la CEPAL porque ésta impulsaba políticas de desarrollo hacia adentro, en el marco del capitalismo" (27), lo que afectaba sus intereses.

El periodo comprendido de 1967 a 1972 estuvo dirigido por Fidel Sánchez Hernández, siendo la guerra con Honduras el hecho más sobresaliente. Ridículamente llamada la Guerra del Fútbol, fue un efecto consecuencia de la crisis del Mercado Común Centroamericano. A nivel económico, el desarrollo industrial de Guatemala y El Salvador se apoyó en el mercado que encontró en los países del área, principalmente en Honduras y Nicaragua. Paralelamente, la United Fruit, trasnacional norteamericana, tenía intereses directos en Honduras, Costa Rica y Guatemala, en ese orden de importancia, para encargarse desde 1950 de la comercialización y transporte del banano y otras actividades que dominaba también mediante cadenas de supermercados, enlatados y la exportación de flores, así como compañías financieras e hipotecarias. Además de la United Fruit,

la región albergaba a ochenta de las cien más importantes trasnacionales de los Estados Unidos, la mayoría ubicadas en el sector industrial. Los intereses de estas trasnacionales coincidían con los intereses de las burguesías salvadoreña y guatemalteca, quienes conformaron definitivamente a partir de 1960 el Mercado Común Centroamericano.

En tales circunstancias, la burguesía salvadoreña copó con su producción el mercado de Honduras, que en ese momento era principalmente agroexportador. Honduras entonces creó una campaña de defensa en contra de los productos salvadoreños que inundaban su país y se negó a renovar el tratado sobre cuestiones migratorias entre ambos países, congeló el capital salvadoreño invertido y aprobó una ley de reforma agraria para impulsar un nuevo tipo de economía y crear así un mercado interior. Para ello debía quitar tierras y expulsar del país a cientos de miles de inmigrantes salvadoreños que ingresaron a Honduras huyendo de la represión del régimen de Hernández Martínez desde 1932. La situación alteró los procesos políticos en El Salvador y Honduras. La burguesía, a pesar de su recuperación referente a la exportación de manufacturas y semimanufacturas, absorbidas por el mercado hondureño, no pudo controlar la crisis política imperante, porque el mercado más importante se cerraba a sus productos industriales.

La crisis política se manifestó a nivel nacional, en el retorno obligado de campesinos y asalariados rurales de las bananeras hondureñas, quienes al no tener tierras, comenzaron a manifestarse y a ocupar grandes terrenos, que para su desgracia a

su vez estaban ocupados, se incrementó el índice demográfico y consecuentemente la desocupación. Al respecto, la política presidencial ordenó la distribución por todo el territorio de los sin tierra, pero estos, con un sentimiento de lucha por lo propio, se negaron, es decir, ellos querían sus tierras que habían dejado, no otras desconocidas.

El 14 de Julio de 1969, las fuerzas armadas salvadoreñas invadieron el territorio hondureño por tierra y aire. La respuesta hondureña se desató en masacres contra campesinos salvadoreños que aún quedaban en su territorio, provocando el vandalismo en las ciudades fronterizas. El conflicto fue la expresión máxima de la crisis del proceso de integración de Centroamérica, quedó al descubierto la ausencia de "armonía" en el crecimiento propiciado por el Mercado Común Centroamericano.

La desigualdad en los mercados estuvo acentuada por el proceso integracionista, según los siguientes factores (28):

1.- La política represiva que funcionó en El Salvador como un sistema y que había determinado, desde la matanza de 1932, emigraciones masivas hacia Honduras.

2.- La resistencia de la oligarquía salvadoreña a los cambios en la estructura de la tenencia de la tierra. Para la oligarquía, el excedente demográfico solucionó el problema a las estructuras productivas y distributivas, mediante la válvula de escape que significó la emigración hacia Honduras.

3.- La expulsión de Honduras de miles de campesinos salvadoreños, cuya situación se agravó con los efectos de la crisis

del Mercado Común Centroamericano.

4.- Las maniobras de las empresas imperialistas y de los Estados Unidos, como la United Fruit.

Fueron alrededor de cien mil campesinos los que retornaron a su tierra, tierra que ya no tenía ningún nexo con ellos, el sistema agrícola carecía, literalmente, de espacio para ubicar a este contingente. El modelo del capitalismo agrícola dependiente exigía por lo menos una condición: "que el campesino pudiera seguir existiendo como campesino. Cuando por falta de tierras y posibilidades de trabajo el campesino está condenado a morir, la insurrección surge como única salida posible" (29).

Otra de las consecuencias concluyó en el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, la quiebra del proceso integracionista original y el surgimiento colectivo del rencor entre pueblos hermanos, que hasta la fecha no se miran con buenos ojos. Finalmente, la guerra con Honduras agudizó una lucha ideológica en el seno de la izquierda, que en el Partido Comunista ya se había iniciado.

1.4 Situación Política del periodo 1970 a 1979.

Los problemas centrales de carácter histórico que hacia esta época profundizaban la crisis política, económica y social en el país, fueron principalmente; la cerrada estructura de poder, donde el dominio lo detentó la institución militar y la burguesía multisectorial-agroexportadora; y la concentración de la propiedad de la tierra y de las principales actividades económicas en manos

de aquella burguesía. La burguesía se convirtió en multisectorial, porque si bien, el relativo crecimiento de años anteriores, permitió la expansión del capital proveniente de otros grupos, sobre todo del comercio, el capital agroexportador fue el que más se extendió y pudo conservar la mayor parte de la inversión productiva del país (30).

Si la ordenación de poder la conformaban las Fuerzas Armadas y la burguesía agroexportadora, ambas excluyeron a los demás grupos de su derecho sobre la toma de decisiones y, obviamente, del derecho a la propiedad de la tierra, en el país más pequeño de América Latina y donde la agricultura es la actividad fundamental. La fuerza de esta burguesía había radicado también en la propiedad de las empresas para transformar y exportar el café. El comercio, parte de la industria, el transporte, la disponibilidad de divisas para exportar, la demanda y el empleo, se encontraban determinados por la producción y exportación cafetalera.

Durante los años en cuestión, el bloque en el poder estaba conformado básicamente por las siguientes fracciones:

- a) el sector industrial de la oligarquía, con carácter hegemónico,
- b) nuevos sectores industriales,
- c) el sector financiero,
- d) el gran comercio y,
- e) la vieja clase terrateniente oligárquica.

El periodo se caracterizó por la gran movilización política, que poco a poco se fue desencadenando por los constantes fraudes electorales, entre estos sobresalen los de 1972 y 1977, cuando se

les arrebató la presidencia a los partidos de oposición, que se habían aglutinado en la Unión Nacional Opositora, UNO, formada con los partidos Demócrata Cristiano, PDC, el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, la Unión Demócrata Nacionalista, del Partido Comunista, UDN, y otros conformados por la pequeña burguesía. La presidencia y la Asamblea Legislativa continuaron en poder del partido oficial, el de Conciliación Nacional, PCN, con militares como presidentes: el coronel Arturo H. Molina de 1972 a 1977 y el general Carlos H. Romero de 1977 a 1979.

La frustración de amplios sectores de la población fue notoria, porque cuando se convencen que electoralmente no podían incorporarse al sistema político y que además sus demandas no fueron satisfechas, comenzaron paulatinamente a menospreciar la vía electoral y buscaron otras alternativas de lucha. Las recién creadas organizaciones político-militares se nutrieron con militantes que comprendieron que la lucha electoral no era válida para alcanzar el poder, por tanto, la estrategia que se había trazado como única vía posible para cambiar al Estado salvadoreño, la lucha militar, captó gran cantidad de simpatizantes, que se tradujo en el auge y desarrollo de las organizaciones populares como el Frente de Acción Popular Unificado, FAPU, el Bloque Popular Revolucionario, BPR, y la Liga Popular 28 de Febrero, LP-28.

El descontento creciente del pueblo repercutió en un clima de inconformidad, que desde antes ya existía en una buena parte de la oficialidad, sobre todo en los elementos jóvenes. Se había manifestado ya objetivamente con el intento de un golpe de estado

en Marzo de 1972, dirigido por una fracción del ejército de tendencia constitucionalista y nacionalista. El Consejo de Defensa Centroamericano, el presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle y el gobierno guatemalteco de Arana Osorio, habían contribuido al fracaso de ese golpe.

El gobierno al que se hace referencia fue el del coronel Arturo Molina, quien continuó con la política de estimular la "modernización" de la estructura económica, por medio de la diversificación en la producción agropecuaria, el fomento de la producción industrial, la creación de "zonas francas" y la ejecución de obras de infraestructura. No obstante, el crecimiento económico sólo benefició al imperialismo y a minorías cada vez más concentradas. La estructura de la tenencia de la tierra no se tocó, la distribución del excedente continuó apoyándose en los métodos de irracionalidad e injusticia, cuestiones que solamente desataron la reivindicación de las clases populares. Ante la presión que ejercían los sectores populares, el gobierno intentó salirle adelante a las demandas populares y propuso una tímida "transformación agraria" que inmediatamente provocó una reacción del bloque en el poder.

Un recuento de los principales acontecimientos que se desarrollaron a partir de la aprobación del decreto que anunciaba el inicio de la transformación agraria, nos puede ilustrar sobre el sistema político imperante.

- El 29 de Junio de 1976, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del primer Distrito de Transformación Agraria.

- El 30 de Junio la ratificó el Poder Ejecutivo.

- El 1 de Julio, Molina, en un mensaje a la nación dijo: "la luz de la Transformación Nacional, (refiriéndose al inicio de la transformación agraria) se encendió en el país para siempre... (y que)... nada ni nadie nos hará retroceder un sólo paso en la Transformación Agraria" (31).

El proyecto de Transformación Agraria consistió en ir cambiando en forma paulatina la estructura de tenencia de la tierra en el agro salvadoreño, para ello, el territorio se subdividió en distritos agrarios; para realizar el objetivo, se iban a tomar en cuenta las condiciones internas que presentara cada distrito, así los límites de tenencia de la tierra estarían condicionados por elementos de rendimiento, calidad, potencialidad, rentabilidad, etc. Después de finalizar un distrito se pasaría a otro, es decir, la ley era aplicable a todo el territorio, aunque no lo sería al mismo tiempo (32).

Lo que desencadenó la reacción del bloque en el poder fue la promulgación de la Ley del Primer Distrito, que abarcaba la zona algodonera de los Departamentos de Usulután y San Miguel; el límite máximo que podía tener una familia, no persona, era de cien hectáreas. Como dato de referencia, se afectaban cuarenta haciendas con una extensión mayor a las 500 hectáreas (33), cuya propiedad pertenecía a las familias oligarcas. Nunca se conocieron los distritos restantes, ni mucho menos las condiciones o límites de tenencia que tendrían.

El proyecto estuvo enmarcado dentro de los principios de la

Constitución, por tanto, no podía ser objetado jurídicamente por la Suprema Corte de Justicia. Políticamente, estaba encaminado a quebrar gradualmente el poder económico de la tradicional clase terrateniente burguesa y su desplazamiento del bloque en el poder.

Inmediatamente después de la aparición y puesta en marcha de tal ley, el bloque en el poder cerró filas y todas sus organizaciones públicas rechazaron en forma categórica al citado proyecto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, el Frente de Agricultores de la Región Oriental, FARO, fueron algunas.

La dura presión ejercida por dichas organizaciones frustró el intento de la transformación en el campo, que apenas duró tres meses, hasta el primero de Octubre del mismo año, fecha en que la Asamblea Legislativa efectuó cambios substanciales al contenido de la Ley, que desvirtuaban los propósitos originales con que fue creada, desapareciendo incluso de la terminología utilizada por el gobierno, la frase de "transformación nacional". Una expresión que se acuñó en El Salvador luego de los cambios introducidos a la Ley, mostraba claramente de donde proviene el poder en el país: "A sus órdenes mi Capital", que hace clara referencia a que un presidente, coronel, recibía órdenes del gran capital y las cumplía.

Las organizaciones empresariales, una vez reformada la ley, declararon que "en términos generales creemos que con las reformas introducidas a las leyes.... se ha logrado borrar muchos de los errores que contenían y, por otra parte, ha quedado plenamente demostrado el poder y la voluntad de un pueblo cuando se une para

reclamar sus derechos" (34).

El café siguió siendo el rey de la economía salvadoreña. El hecho de que se vendiera a firmas alemanas, contribuyó a que la burguesía salvadoreña adquiriera una fisonomía más altanera y nacionalista que otras burguesías centroamericanas. La burguesía salvadoreña no ha estado dispuesta nunca a perder nada, a pactar con un proyecto mínimamente modernista o reformista. En 1976, con la reforma agraria, se puso de manifiesto su carácter. No cedió ni un ápice en la dominación que tenía sobre las riquezas del país, y que le aseguraban ganancias desproporcionadas. La burguesía salvadoreña ha contribuido con su pertináz miopía a acelerar el proceso de concientización del pueblo (35).

En todo el proceso de disputa, los partidos de oposición, las organizaciones populares, las político-militares y otros gremios y asociaciones, tuvieron una presencia marginal, estableciéndose la lucha entre el gobierno y las organizaciones corporativas de la gran burguesía. Los resultados a partir de este momento fueron claros, se observó un fortalecimiento del sistema político, de las posiciones del bloque en el poder y una menor permeabilidad en el acceso de las demandas populares. La respuesta que dió el gobierno a la creciente movilización popular fue la represión, lo cual condujo paradójicamente a un fortalecimiento cualitativo y cuantitativo de las organizaciones populares y de las político-militares, pues ante el cierre de espacios políticos, la vía electoral denegada y el endurecimiento de las posturas antipopulares, a la población no le quedó otro camino que

fortalecer las organizaciones representativas.

Para las elecciones presidenciales de 1977, nuevamente los partidos de oposición entraron en coalición, y de nueva cuenta mediante un fraude, fue impuesto como presidente el general Carlos Humberto Romero, militar de línea dura y de clara tendencia anticomunista, por tanto, su mandato se caracterizó por una cruenta represión, en donde una creciente movilización popular no se detenía ni se amedrentaba.

Anteriormente, la Unión Nacional Opositora, UNO, postuló al demócrata cristiano, ingeniero José Napoleón Duarte para la candidatura presidencial de 1972, este obtuvo el triunfo, pero "increíblemente" por medio de las formas conocidas, no se reconoció. Ahora el fraude volvía a repetirse, cuando el candidato de la UNO postulaba en 1977 al coronel Ernesto Claramount.

Respecto al plan económico del gobierno de Romero, este respondería en lo fundamental a los intereses más excluyentes. A partir del fracaso de reforma agraria, los sectores más recalcitrantes de la burguesía, tomaron la iniciativa política, y a través de sus asociaciones y del Frente Agrícola de la Región Oriental, FARO, emprendieron campañas contra quienes habían apoyado la reforma agraria y contra aquellos que defendía el derecho de las agrupaciones populares de luchar por sus demandas. Su acción contribuyó a la desestabilización política.

De esas campañas destacaron las efectuadas contra la Iglesia entre Diciembre de 1976 y Junio de 1977. Hubo amenazas y asesinatos de curas, y la Iglesia, principalmente la Católica, fue convertida

en defensora de demandas generales de la población. La situación se tornó caótica, la burguesía estaba inconforme, la sociedad dividida, se desató una agitación popular que llegó a cuestionar al estado, de nueva cuenta salió el ejército salvadoreño con su tradicional fórmula de golpe de estado y depuso al general Romero el 15 de Octubre de 1979.

Romero intentó llevar a cabo un "diálogo nacional", rechazado tanto por los partidos que venían participando en las elecciones como por las organizaciones populares armadas (Fuerzas Populares de Liberación, FPL, Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARN, etc.)

En otro sentido, los sucesos nicaragüenses de 1979; el cerco a Managua donde los sandinistas ocuparon ciudades importantes; la fusión entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y otros grupos armados; la declaración del estado de sitio en Junio; la deposición del general Anastasio Somoza por el FSLN; la reconstrucción nacional que haría pedir ayuda a países comunistas, etc, preocuparon enormemente a la Embajada de los Estados Unidos, que veía la posibilidad de que se desatara una situación parecida, de ahí que comenzaran a planear cómo resolver una problemática tal, habida cuenta de que en Mayo de ese mismo año, los sectores populares salvadoreños habían demostrado su capacidad de resistencia y combatividad en lo que se dió por llamar "Mayo Heroico", cuando el Bloque Popular Revolucionario, a través de marchas callejeras, tomas de embajadas y huelgas lograron liberar a tres de sus máximos dirigentes. Ante tal situación, el gobierno

respondió con la tradicional represión, pero no logró amedrentar a los sectores populares, sino que estos continuaron con su forma de lucha, la represión ya no fue suficiente para contener la combatividad de las organizaciones, por ello, se hacía necesario buscar nuevas fórmulas.

La toma del poder por los sandinistas inquietó a los Estados Unidos, pero también a los militares salvadoreños al ver que la Guardia somocista de Nicaragua fue derrotada, les hizo pensar que podría repetirse este hecho en El Salvador y los obligó a tener una respuesta inmediata: deponer a Romero y llamar a ciertos sectores no radicales a formar un gobierno con ellos. El mismo día del golpe de estado, el ejército publicó la "Proclama de la Fuerza Armada Salvadoreña", en donde se le imputaba al gobierno romerista el fomento a la corrupción, violación a los derechos humanos, la creación del desastre económico y social, y sobre todo, el haber desprestigiado a la corporación armada. Asimismo, estableció un programa de lineamientos de emergencia, solicitando el cese de toda violencia, para lo cual combatiría contra todas las organizaciones extremistas, garantizaría el respeto a los derechos humanos, permitiría la actividad partidaria de todas las ideologías, realizaría elecciones en su momento y decretaría una amnistía general.

El golpe de estado dió paso al establecimiento de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que se integró con los coroneles, Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majano, y tres civiles, Guillermo Manuel Ungo, del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, Román

Mayorga Quiróz, Rector de la Universidad Centroamericana, UCA, de jesuitas, y Mario Andino, representante del empresariado medio. La Junta fue apoyada por el PDC y el MNR, aunque este último lo hizo condicionalmente. En cambio el Partido Comunista exigió de ella el levantamiento del estado de sitio impuesto, la libertad de presos políticos y desaparecidos, la limpieza de fascistas en el aparato estatal, el cese de toda represión popular, garantías a la libertad de expresión, movilización, reunión y organización (36).

Los sucesos de la década de los setenta, mostraban claramente que el bloque en el poder, a pesar de las recomposiciones que se dieron en su interior, no estaba dispuesto a soltar el control que ejercía sobre el sistema político salvadoreño, ni permitiría la incorporación de nuevos sectores considerados como progresistas. En términos generales, los intentos de reformismo tratarían de dar salida a la crisis interburguesa, cuajada desde tiempo atrás, y trataría de aislar a las organizaciones revolucionarias del movimiento de masas, reduciéndolas a una izquierda extremista y fuera de la nueva realidad.

Tanto el acceso de la democracia cristiana a la Junta de Gobierno, (que poco a poco ganaría un respaldo incondicional de los Estados Unidos) como la unificación de las agrupaciones revolucionarias, delimitaron el campo de los adversarios e inauguraron el estado de guerra civil abierta que delinearía una nueva estructura de poder e introduciría cambios al régimen político.

1.5 Fuerzas organizadas. Partidos políticos, organizaciones político-militares y organizaciones de masas.

Los gobiernos antes decritos siempre auspiciaron la creación de partidos "oficiales" para mantener en sus filas, por lo menos, a un buen número de simpatizantes fieles, entre estos destacaron:

- PRO-PATRIA, creado en 1935 por Hernández Martínez y que desapareciera con él en 1944.

- PRUD, Partido Revolucionario de Unificación Democrática, creado en 1945 por Oscar Osorio y la Fuerza Armada. Lo conformaron antiguos miembros del partido Pro-Patria, miembros del sector público y obreros. Se desintegra con la caída del presidente.

- PCN, Partido de Conciliación Nacional, formado con los restos del PRUD en 1961 y por obreros de la oficialista Confederación General de Sindicatos Salvadoreños, CGSS, empleados públicos y por una organización campesina fundada en 1968 con el apoyo del American Institute for Free Labour Development, la Unión Nacional Salvadoreña. El partido se mantuvo en el poder hasta la imposición de las Juntas de Gobierno de finales de 1979 y principios de 1980.

Como organizaciones paramilitares destacó:

- ORDEN, Organización Democrática Nacionalista, dedicada a sembrar terror en el campo, creada en 1967 con el presidente Fidel Sánchez, apoyada y financiada por las Fuerzas Armadas Especiales de los Estados Unidos, los Boinas Verdes.

Como partidos legales de oposición destacan:

- MNR, Movimiento Nacional Revolucionario, quien llevó a cabo tareas organizativas entre obreros y campesinos. Auspició la

fundación de la Unión Nacional de Obreros Cristianos, UNOC, y la Federación Cristiana de Campesinos, FECCAS.

- UNO, Unión Nacional Opositora, constituida por el centro y la izquierda política. Atrajo a sus filas durante las contiendas electorales a la Unión Demócrata Nacionalista, UDN, al PDC y MNR.

La situación de violencia generada durante cuatro décadas, dió origen a la creación de organizaciones cualitativamente diferentes en sus programas, concepción política y dirección militar, de los focos guerrilleros de los sesenta, las más importantes fueron:

- ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, surgido en 1971 con elementos cristianos radicalizados de la pequeña burguesía. Se dividió en 1974, a raíz de divergencias que culminaron con el asesinato del escritor y político Roque Dalton. Posteriormente emanó de este la Resistencia Nacional.

- FARN, Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, creada en 1975, impulsó la creación del Frente de Acción Social Unificada, FAPU.

- FPL, Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí", surgidas en 1970 como organización clandestina. Como su dirigente lo ha explicado, "nació como necesidad del proceso revolucionario cuando se requería de la construcción de elementos políticos capaces de implementar su lucha de manera integral en todos los terrenos, la vida ha demostrado que el avance del proceso de la lucha de clases no se puede detener con esquemas dogmáticos, esquemas que, en determinado momento, ya no responden a la realidad objetiva y a la necesidad histórica del desarrollo social (38).

- PCS, Partido Comunista Salvadoreño, creado hacia 1930, pero en

1960 dió un viraje manteniendo la concepción de la teoría de Regis Debray. Se pronunció por una estrategia de luchas paralelas, armada y de masas, y en los setenta adoptó la vía insurreccional. (De aquí se crearía el Frente Unido de Acción Revolucionaria cuya duración fue de sólo tres años).

- PRTC, Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, creado en 1979.

De la actividad política de estas organizaciones, como punto de atracción para fuerzas más amplias, surgieron los frentes de masas, cada uno de ellos relacionado en el mismo orden con las políticas de las organizaciones antes descritas, estas fueron:

- LP-28, Ligas Populares 28 de Febrero, creadas en 1979.

- FAPU, Frente de Acción Popular Unificada, creado en 1974, fue una organización clandestina que desarrolló trabajo social.

- BPR, Bloque Popular Revolucionario, organización clandestina creada en 1975 con sectores medios y populares. Adoptó la lucha popular prolongada, ligando las demandas gremiales a las políticas, por ello tuvo un carácter estratégico y su eje central para la acción, fue la alianza con obreros y campesinos con hegemonía proletaria. Ha sido el frente de masas más organizado que en ese momento lo conformaron el Comité Coordinador de Sindicatos "José Guillermo Rivas" y la Federación Sindical Revolucionaria.

- UDN, Unión Democrática Nacionalista, surgida en 1970.

- MLP, Movimiento de Liberación Nacional, surgido en 1979.

El 11 de Enero de 1980 las cinco organizaciones anteriores, se van a unificar en la Coordinadora Regional de Masas, CRM, su

programa básico antimperialista revolucionario, con fuerte influencia proletaria, estaría sostenido por organizaciones armadas que defienden el programa de revolución socialista y por sindicatos de masas independientes del estado. Forman parte de dichos frentes un grupo importante de las organizaciones sindicales, obreras y campesinas que desarrollarían una actividad sindical y política dando una base de clase y de masas organizadas a dichos frentes. Esta base de masas se completó en el último periodo, con la constitución y desarrollo de comités populares de diversos tipos en fábricas, comercios, pueblos o zonas campesinas.

Finalmente, a las organizaciones que integrarían la CRM se le unirían, con tendencias democráticas antimperialistas, no socialistas, para constituir el 18 de Abril de 1980, el Frente Democrático Revolucionario, FDR, que adoptó como programa el de la Coordinadora. Formado el FDR se aglutinaron en él todas las organizaciones revolucionarias y los partidos, instituciones, gremios y personalidades democráticas. Se constituyó con carácter de frente amplio como instrumento político del pueblo salvadoreño para impulsar su lucha de liberación, y construir una sociedad nueva y justa, libre de corrupción y de violación a los derechos humanos. En sus inicios la integraron las siguientes organizaciones:

Coordinadora Revolucionaria de Masas.

Movimiento de Liberación Popular.

Movimiento Nacional Revolucionario.

Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos de El Salvador

Movimiento Popular Socialcristiano.

Federación Sindical Revolucionaria.

Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños.

Federación Unitaria Sindical de El Salvador.

Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social.

Sindicato Textil de Industrias Unidas, S.A.

Asociación General de Estudiantes Universitarios.

Como observadores: Universidad de El Salvador, UES, y la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA.

El FDR hizo suya la "Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario", cuyos objetivos fueron movilizar e incorporar al proceso de liberación, a todos los sectores representativos del pueblo y denunciar el apoyo económico y militar del gobierno de los Estados Unidos a la Junta Militar Demócrata Cristiana (39).

Según la Plataforma, al triunfo de la revolución se construiría una nueva sociedad sobre la base de un nuevo estado. Llevaría a cabo reformas profundas en el campo y en la política de nacionalizaciones y expropiaciones. Planteó "una democracia proletaria de masas, para ello, es requisito indispensable de la participación permanente y rotativa de las bases del pueblo en el estado y en las unidades de producción, en los órganos de poder popular y en las organizaciones de los productores directos" (40). El último paso del proceso de coordinación, agrupación y centralización de fuerzas ha sido la constitución en Junio de 1980 del mando único de las organizaciones político-militares, la

Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, que en Octubre del mismo año se anunciaba ya como Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y junto al FDR fungiría como dirección de las fuerzas revolucionarias.

Citas bibliográficas del Capítulo 1.

- 1) Almanaque Mundial 1985, pp. 238 y 239.
- 2) DALTON, Roque. Las Historias Prohibidas del pulgarcito, pp. 52 y 53.
- 3) MENJIVAR, Rafael. Formación y Lucha del Proletariado Industrial Salvadoreño, p. 26.
- 4) Ibid. pp. 26 a 28.
- 5) Ibid. pp. 30 y 31.
- 6) GUIDOS, Véjar Rafael. Ascenso del Militarismo en El Salvador, p. 89.
- 7) Ibid. p. 95.
- 8) Ibid. p. 106.
- 9) Ibid. p. 121.
- 10) Ibid. pp. 157 a 159.
- 11) Roque Dalton, Adolfo Gilly y Rafael Guidos Véjar coinciden en señalar que fueron las últimas elecciones democráticas y libres que ha vivido El Salvador.
- 12) GUIDOS, Véjar. Op. cit. pp. 167 a 184. "La incapacidad de Araujo es la incapacidad de la fracción burguesa y los demás grupos que se cohesionan en torno a su proyecto social de presentar una alternativa económica a las clases subalternas que sustituyen a la cafetalera. Es la imposibilidad de la fracción burguesa de respaldar económicamente la emisión de una política que legitimaba con mucha anticipación unas probables relaciones de producción que dominaran sobre las agrarias. El apoyo popular con matices reformistas, impulsó demasiado lejos a Araujo que muy rápidamente se encontró sin nexos reales, que lo debilitaron casi inmediatamente de su arribo al poder. No fue un estado vacío de poder, sino un poder en el vacío, que progresivamente se aísla de la sociedad y se diluye entre los componentes de la sociedad". p. 210.
- 13) Ibid. p. 22.
- 14) SALAZAR, Valiente Mario. "El Salvador. Crisis, Dictadura y Lucha" en América latina, Historia de Medio Siglo, pp. 91 y 92.
- 15) DALTON, Roque. Op. cit. p. 114. "asi fue que en Diciembre de 1931 se efectuaron grandes levantamientos populares en los Departamentos Occidentales de la República, organizados por los líderes principales Farabundo Martí y los estudiantes Mario Zapata y Alfonso Luna, que tenían su cuartel general en los suburbios de San Salvador, donde fueron capturados y fusilados inmediatamente, sin forma de juicio alguno..."
- 16) GUIDOS, Véjar. Op. cit. p. 18.
- 17) GILLY, Adolfo. Guerra y Política en El Salvador, p. 36. plantea que fueron entre 30 y 40 mil los masacrados, es decir, el 4% de la población de ese momento.
- 18) SALAZAR, Valiente. Op. cit. p. 24.
- 19) GUIDOS, Véjar. Op. cit. p. 24.
- 20) LAZO, Marín José. La Factibilidad de Implementar un Programa de Estabilización y Reactivación Económica en una Economía de Guerra. Caso de El Salvador, 1986, p. 18.
- 21) MENJIVAR, Rafael. Op. cit. pp. 128 y 129.

- 22) MENJIVAR, Rafael. El Salvador, el Eslabón más Pequeño. p. 78.
- 23) DEBRAY, Regis. Diccionario de Ciencias Sociales de la UNESCO. p. 627.
- 24) Ibid. p. 628.
- 25) SALAZAR, Valiente. Op. cit. p. 113.
- 26) Ibid. p. 114.
- 27) Ibid. p. 113.
- 28) Ibid. p. 116.
- 29) CABARRUS, Carlos R. "El Salvador de Movimiento Campesino a Revolución Popular" en Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos. p. 90.
- 30) GORDON, Rapoport Sara. Relaciones Centroamérica-México. p. 24.
- 31) LAZO, Marín. Op. cit. p. 10.
- 32) Ibid. p. 40.
- 33) Ibid. p. 10.
- 34) Ibid. p. 42.
- 35) CABARRUS, Carlos. Op. cit. p. 81.
- 36) SALAZAR, Valiente. Op. cit. p. 132.
- 37) GILLY, Adolfo. Op. cit. p. 50.
- 38) MENENDEZ, Rodríguez Mario. El Salvador: Pueblo Contra la Oligarquía. Entrevista con Marcial, dirigente de las FPL. p. 190.
- 39) Ibid. pp. 199 a 205.
- 40) SALAZAR, Valiente. Op. cit. p. 136.

III. Capítulo 2 Recrudescimiento de la violencia. La guerra civil.

2.1 Situación Política de las Juntas de Gobierno y la Asamblea Constituyente, principio de los ochenta.

Primera Junta.

El período de la primera Junta Militar, establecida del 16 de Octubre de 1979 al 3 de Enero de 1980, puede considerarse como una continuidad de movimientos de carácter estratégico, donde van tomando forma y fuerza las grandes organizaciones beligerantes.

La pequeña burguesía y los sectores reformistas, acogieron con beneplácito el golpe militar que derrocó al presidente Romero. Entre alguna de las razones, "les parecía que había llegado el momento de ajustar cuentas con la oligarquía y aplacar los ánimos de las masas populares; de matar dos pájaros de un tiro y superar la crisis política por la que atravesaba el país" (1).

La Junta contó con el apoyo de los oficiales jóvenes del ejército, los democristianos, los socialdemócratas (Movimiento Nacional Revolucionario, MNR), las tendencias nacionalistas, el Partido Comunista Salvadoreño y otros sectores. El presidente Carter de los Estados Unidos, también daba, por supuesto, su apoyo, que en realidad, formaba parte de la estrategia de "democracia" del imperialismo, y cuyo objetivo sería dar una salida a la crisis interburguesa, cuajada dentro del Estado salvadoreño, y cortar el apoyo que tenían los movimientos revolucionarios de masas.

La situación imperante y la fuerza de un movimiento popular, hizo necesario una serie de reformas al sistema político, que fuera

concordante con las políticas económicas. Pero dentro de esta línea reformista existían dos puntos de vista contrarios; uno, deseaba hacer cambios estructurales por medios no violentos, así podría ganarse a las masas populares, fue la posición de algunos miembros de la Junta; otro, opinaba que el cambio debía ser dirigido a eliminar al movimiento popular, posición de la oligarquía.

La crisis interburguesa se había manifestado desde tiempo atrás, pero durante éste lapso, nadie sabía quien iba a realizar las reformas, ni cual sería su respaldo, tal situación estaba gestando un cambio, donde el capital entraba en una fase estratégica por su dominación, "se efectuó un enfoque político en el que la oposición reformista pasó al gobierno y el antiguo partido oficial cambió a la oposición de derecha" (2). La oligarquía esperaba que los reformistas controlaran los movimientos populares, los reformistas deseaban levantar reformas oligárquicas para ganarse a las masas, si bien existía conciencia de la necesidad de construir un nuevo régimen y gobierno, los intereses y medios para su realización eran distintos.

Desde décadas anteriores, se venía desarrollando una creciente lucha social por parte de las organizaciones populares, estas se acrecentaron aun más, manifestándose un descontento general en: ocupación de embajadas, iglesias, movilizaciones populares, quema de autobuses, paros de apoyo, ocupación de plantas industriales, etc., hechos que llevaron a una parcial paralización de la capital. Las acciones fueron contrarrestadas violentamente por medio de la represión, pero resultó insuficiente, por lo que la oligarquía

acusaba al gobierno de su inútil e ineficaz forma para establecer el orden.

La lucha de clases agudizaba los problemas económicos, se frenó la inversión de capitales, la producción social disminuyó y varias empresas cerraron sus plantas. La crisis mantenía un matiz político y podría ser superada políticamente, sin embargo, las acciones de los grupos populares, evidenciaban que no era posible postergar por más tiempo reformas socioeconómicas que se venían exigiendo tiempo atrás.

Queda claro que el gobierno de la Junta Militar no era de carácter homogéneo, de aquí se explica la división interburguesa en su interior, ya que los puestos del aparato estatal lo ocupaban, tanto políticos democráticos y reformistas, quienes estaban en contra de la oligarquía y planteaban reformas de beneficio popular, como por militares aliados a la vieja clase dominante y quienes disparaban en contra del pueblo en beneficio de la oligarquía.

A finales de Diciembre se planteó un ultimátum al Consejo Permanente de la Fuerza Armada, (COPEFA), que era la asamblea representativa deliberante de los militares (donde reside realmente el poder), exigiendo que "la Junta Revolucionaria de Gobierno asuma efectivamente la comandancia general de la Fuerza Armada..." y que "toda orden del día del Ministerio de Defensa que contenga nombramientos, bajas, traslados y ascenso de oficiales, debe ser discutida y aprobada por la Junta en pleno" (3). El 3 de Enero de 1980 el COPEFA rechazó todas las demandas, y consecuentemente, renunciaron los miembros civiles de la Junta (Guillermo Manuel

Ungo, Román Mayorga y Mario Andino), y todos los miembros del gabinete, excepto el Ministro de Defensa.

La Junta no pudo dictar una sola reforma estructural, su "logro" fue crear desconfianza en el pueblo, y acentuar el rechazo de la oligarquía. No logró dividir a los revolucionarios ni contuvo al movimiento de masas, tampoco superó el problema de la crisis interburguesa. Su fracaso no ocurrió en el vacío, sino que "la continuidad de la política de las organizaciones político-militares y de sus frentes de masas ofrecía, al mismo tiempo, un polo alternativo de reagrupamiento, arraigado en los trabajadores y en sus organizaciones sindicales" (4). Se retiraron de ella los socialdemócratas, los nacionalistas, demócratacristianos y el Partido Comunista.

Segunda Junta.

La segunda Junta sólo permaneció de Enero a Marzo de 1980, y marcó el giro definitivo del reformismo "contrainsurgente" (5), al igual que definió la línea general de la visión del movimiento popular, es decir, su programa democrático revolucionario. No surgió como gobierno oligárquico, sino odiado por la oligarquía, tampoco como gobierno popular, sino repudiado por el pueblo. Surgió del pacto del ejército y de la democracia cristiana, caracterizándose como un gobierno reformista de derecha.

Esta Junta se planteó debilitar a la oligarquía, para ello debía abrir canales de participación democrática, redistribuir ingresos, apoyar a la industria, y, por supuesto, resolver los problemas de reforma agraria. La reforma agraria era visualizada

como generadora de una clase media rural que contribuiría a la liquidación del movimiento de masas en el campo. Si bien, al principio la Junta no tenía apoyo, la idea de "democracia" planteada por ésta, le dió una base poderosa posteriormente, modificando las ideas originales de los demócrata-cristianos y al mismo gobierno. El proyecto reformista de la Junta englobaba también la cuestión financiera y del comercio exterior, pero ningún sector creía en ellas, únicamente los Estados Unidos las apoyaron, no sin antes aplicarles un carácter contrainsurgente, para controlar su relativo alcance. Su interés seguía siendo el mismo: terminar con el movimiento popular y disminuir las disputas de la oligarquía contra el gobierno. Como puede apreciarse, ahora la política estaría en manos de los estadounidenses, "ante la ausencia de una burguesía alternativa y capaz de asumir como propio el planteamiento reformista, éste se implantaba desde el exterior" (6), los Estados Unidos reforzaron sus programas de ayuda mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, esto significó que se redactarían en inglés los planes de gobierno y se aumentaría la asistencia técnica a los cuerpos represivos.

La fuerza dominante que había perdido dos partidos, trasladados al campo popular, ahora se convencía de que la guerra era el punto central de cualquier intento de defensa del régimen de dominación, y sus objetivos de acción política consistían en recuperar el gobierno para impedir las reformas y dictar medidas económicas sin restricciones al capital y expulsar del ejército a los militares reformistas. Apareció así, una nueva organización

política de derecha, el Frente Amplio Nacional, FAN. Este frente de corta vida, es el antecedente inmediato de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y frente en el cual figuran representantes de los cafeticultores y los algodoneros, pilares no sólo de la oligarquía salvadoreña sino también centroamericana. Sus portavoces en Washington (el mayor y exjefe del Servicio de Inteligencia de la Guardia Nacional, Roberto D'Aubuisson Arrieta, y el cafeticultor Alfredo Mena Lagos) pretendieron representar la alianza entre el ejército y la burguesía agroexportadora. Esta alianza, que financió las actividades paramilitares de ORDEN y de la Unión Guerrera Blanca, se presentaba en la escena como la última garantía del orden frente al comunismo (7). Según este frente, contaba con el 90% del apoyo de los oficiales del ejército salvadoreño, y propuso una integración del gobierno para que llevara una política derechista y represiva coherente. Cabe mencionar, por otro lado, que un día después del anuncio de proclamación del FDR en San Salvador, el Frente Amplio Nacional se proclamaba como tal en la ciudad de Washington.

Los reformistas querían apoyarse en el ejército, por que así tendrían el monopolio del uso de la fuerza para destruir a la vanguardia armada del pueblo. Pero en el mismo ejército existían matices reformistas y matices ligados a la oligarquía. Vieron la necesidad de que el éxito radicaba en organizar un nuevo ejército.

Tercera Junta.

Entre un esquema de controversias, iniciarían las acciones de una tercera Junta de Gobierno, llamada Junta Democristiana, que

duró de Marzo de 1980 a Marzo de 1982. Estaría encaminada a crear reformas económicas que generarían un nuevo sistema político.

Entre sus objetivos principales pueden numerarse tres:

1) que el Estado pudiera controlar una parte del excedente económico y reorientarlo hacia la inversión de capitales; y crear fondos para gastos militares,

2) militarmente, controlaría el territorio nacional, monopolizaría el uso de la fuerza para destruir a la vanguardia armada popular, y,

3) se aseguraría el aumento de la clase media rural que ayudaría a liquidar al movimiento de masas en el campo.

Al inicio de la Junta, los Estados Unidos pusieron en marcha una estrategia reformista-contrainsurgente, mientras el gobierno salvadoreño anunciaba la Reforma Agraria simultáneamente con el estado de sitio. La estrategia fue orientada para derrotar al movimiento popular armado y generar la base social que sirviera de apoyo a la democracia cristiana. Se esperaba también debilitar a la clase dominante y de ser posible, someterla a la visión norteamericana. Trataría además de incorporar a la oligarquía al gobierno mediante el anuncio de elecciones generales. Pero la oligarquía no buscaba incorporarse al gobierno, buscaba un nuevo sistema político a través de golpes de estado, mismos que a tiempo supieron abortar los Estados Unidos, no es que se opusieran a la participación de la oligarquía en el gobierno, sino que, un golpe de estado suponía un desplazamiento total de la "manejable" democracia cristiana.

La primera fase de la Reforma Agraria decretaba que todas las propiedades de más de 500 hectáreas serían expropiadas. Esto no representaba problema para los terratenientes porque casi no había cafetales que sobrepasaran 500 hectáreas y se apresuraron a repartir las que sobrepasaran entre sus propios familiares. La tierra que quedaba para repartir no eran más que pastizales o tierras áridas (8). Grandes operaciones militares donde se encontraba la guerrilla, tenían que impedir que también ahí se repartiera la tierra, pero el ejército en cooperación con ORDEN, sembró el terror en el campo.

La segunda fase, que afectaría a las fincas entre 150 y 500 hectáreas, la tierra más productiva, no llegó a efectuarse. El gobierno no se atrevió a enfrentarse con la oligarquía. Inclusive, a fines de Marzo, 500 técnicos del instituto responsable de ejecutar la reforma, se declararon en huelga y el vicesecretario de Agricultura presentó su renuncia.

En Abril de 1980 se proclamó el decreto 207: la tercera fase de la Reforma Agraria. Fincas de más de 100 hectáreas que no eran cultivadas por sus propietarios serían repartidas entre los campesinos, con un máximo de siete hectáreas por familia. Pero más del 60% de los campesinos salvadoreños, los que no podían siquiera alquilar un pedazo de tierra, no entraron en el reparto. Los beneficiarios debían ser los campesinos capaces de alquilar tierra, además tendrían que cultivarla durante 30 años, antes de llegar a ser dueños, situación que jamás se da en El Salvador (9). ("La tierra es para quien la trabaja", había sido una consigna que en

los 70 fué propaganda en Vietnam, en el marco de los planes contra-insurgentes). Finalmente, la Reforma Agraria permitió la creación de un sector campesino, representado en la Unión Comunal Salvadoreña, UCS, que constituyó un apoyo a la Democracia Cristiana, pero también creó el odio de la oligarquía que lo acusaba de ser un partido procomunista.

Económicamente, la inversión se había retraído a causa de los relativos elevados niveles salariales, por lo que la medida impuesta de congelar salarios, solo vino a pronunciar más la inconformidad y repudio del pueblo hacia el gobierno. Al mismo tiempo, un sector urbano apoyado y financiado por los Estados Unidos, se unificaba en la Unión Popular Democrática, UPD, apoyando las reformas y al gobierno. La oligarquía por su parte, influyente en el ejército, empezó a actuar en contra del pueblo, clandestina u oficialmente, con los llamados escuadrones de la muerte (operando bajo dos nombres: Ejército Secreto Anticomunista, ESA y Brigada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez, BAMHM, posteriormente se van creando nuevos con nombres de empresarios destacados o de acuerdo a la situación imperante) dañando al movimiento popular (y a los planes reformistas). Fueron más de quince mil muertos y cientos de miles de refugiados o desplazados, situación que debilitó el crecimiento de las organizaciones revolucionarias (10), y sembró el terror en toda la población.

Al interior del ejército dividido, un personaje importante lo constituyó el Coronel Arnoldo Majano, presidente en la Junta y comandante supremo del ejército y de los oficiales jóvenes. El 8

de Mayo de 1980, ordenó la aprehensión de Roberto D'Aubuisson y de un grupo de militares y civiles de extrema derecha, acusados de perpetrar un golpe de estado de ultraderecha. Se abre una crisis en el ejército y varios cuarteles piden su liberación. Esta acción le costó el puesto a Majano, substituyéndolo el Coronel Jaime Abdul Gutiérrez. Quedaba demostrado que Roberto D'Aubuisson pesaba más que el coronel Majano y es que este último, cubría con una fachada "reformista" la política represiva de la clase dominante en los altos mandos, y en consecuencia, no podía y no quería, llamar en su apoyo ningún sector popular para inclinar en su favor la balanza dentro de la Fuerza Armada. Por otro lado, como presidente en la Junta, buscaba ser apoyado pero no por quienes asesinaban al pueblo salvadoreño.

Periodo de la Asamblea Constituyente.

Ante el fracaso de las Juntas de Gobierno, se estableció la Asamblea Constituyente de Abril de 1982 a Junio de 1984. El carácter de la revolución se había hecho más evidente, al igual que la conducción de los Estados Unidos sobre la política nacional. Para el 28 de Marzo de 1982 el régimen en turno había programado elecciones de diputados a una Asamblea Constituyente, donde se incorporarían a representantes de la oligarquía en el gobierno y se buscarían avances político-diplomáticos para detener la guerra. Las elecciones representaban una esperanza, además, contando con el apoyo de la Iglesia Católica, se garantizaba que la mayoría de la población tuviera el acceso a las votaciones, es decir, le daba un matiz de verdadera participación.

Las elecciones fueron rechazadas por parte de la alianza FDR-FMLN, ya que argumentaron que no existía el clima favorable para su desarrollo, que sólo se trataba de una farsa, incapaz de resolver el problema conflictivo. Boicotearon las elecciones en varios Departamentos, en Santa Ana, Chalatenango, Usulután y algunas ciudades periféricas de San Salvador, sin embargo fallaron en su intento y las elecciones se llevaron a cabo. Esta vez el gobierno había obtenido un punto a su favor. Los resultados evidenciaban el posible triunfo de la Democracia Cristiana, pero no alcanzaba una mayoría frente a la derecha coaligada. Al tercer día de las elecciones, los partidos de oposición se unían en contra de la DC y se abría un periodo de luchas intestinas. "El árbitro: los Estados Unidos" (11).

El desarrollo electoral había dado a la oligarquía una mayoría en la Asamblea Constituyente, mayoría que aunque estaba dividida, tenía en común el desprecio a las reformas, a la democracia cristiana y a Napoleón Duarte. El 22 de Abril de 1982, Roberto D' Aubuisson fue electo presidente de la Asamblea Constituyente y la derecha ocupó todos los puestos directivos. La Democracia Cristiana estaría en la oposición. Faltaba elegir a un presidente provisional para la República y los Estados Unidos lograron "poner" a un hombre de su confianza y que no pertenecía a la democracia cristiana, este fue Alvaro Magaña, nombrado el 29 de Abril. Del gabinete conformado, sólo las oficinas de Educación, Relaciones Exteriores y Trabajo, no pertenecían al grupo oligárquico, dicho de otra manera, "fue todo lo que la diplomacia yanqui pudo arrebatarse a

la oligarquía para sus protegidos" (12). La presidencia dio a conocer la designación del General Eugenio Vides Casanova, Director de la Guardia Nacional como Ministro de Defensa.

Jurídicamente, una nueva Constitución contemplaba la pena de muerte únicamente para los delitos contra la seguridad del Estado: rebelión, sedición, espionaje. En cuanto a los magistrados y jueces, se establecía que fueran apolíticos y fungieran por un periodo de seis años y no de tres como lo establecía la actual (13).

Fue hasta los primeros días de Agosto de 1982, cuando el régimen trató de forjar algunos acuerdos para formar un gobierno de "unidad nacional". Se buscaba generar un movimiento de concentración y centralización del poder local (gubernaciones y municipios en manos de la Democracia Cristiana) hacia los partidos mayoritarios. Así surgió el "Pacto de Apaneca" (lugar natal de Alvaro Magaña) con tres comisiones: de Paz, de Derechos Humanos y Política. El 3 de Agosto los cuatro partidos políticos, ARENA, PCN, PDC y PPS firmaron el Pacto, comprometiéndose a permitir el funcionamiento de un gobierno plural y con el cual el gobierno intentó alcanzar puntos básicos como: derechos humanos, democratización, pacificación total del país, recuperación económica, reformas, confianza y seguridad y fortalecimiento de relaciones internacionales. Sin embargo el resultado fue contrario a lo esperado. El "Pacto de Apaneca" creó nuevas contradicciones, entre ellas, la escisión de una fracción autónoma del PCN y la pugna entre Arena y la Democracia Cristiana, por el reparto de las

alcaldías (la de San Salvador quedó en manos del PDC, la de Santa Ana en ARENA y la de San Miguel en el PCN).

A principios de 1983 el gobierno se había propuesto profundizar en la construcción del sistema político, anunciaría nuevas elecciones para recuperar terreno en el plano internacional, se valió del pronunciamiento de amnistía para presos políticos, que entró en vigor el 16 de Mayo de 1983 y que favorecía supuestamente a los guerrilleros que dentro de los 60 días posteriores a su emisión depusieran las armas (era de esperarse que resultó un truco gubernamental para incluso asesinar a los que creyeron en ella); desocupar las instalaciones de la Universidad de El Salvador y realizar para 1984 elecciones presidenciales. Formó además dos comisiones, la Comisión de Paz y la Comisión de Derechos Humanos. Como contraparte, la oligarquía accionaba a sus escuadrones de la muerte, mientras, irónicamente se hablaba de paz y democracia.

El periodo de la Asamblea Constituyente, marca las divisiones existentes al interior de la misma, del Partido de Conciliación Nacional, una fracción se organizó en el Partido Auténtico Institucional Salvadoreño, (PAISA), y otra, en el Movimiento Estable Republicano Centrista, (MERCEN), esiciones que crearon a su vez nuevos bloques. La DC se alió con PAISA, aunque sólo de momento para derrocar la directiva de la Asamblea Costituyente, después ARENA y PAISA se alian para impedir que la DC y el PCN disminuyeran el poder legal adquirido por Roberto D'Aubuisson.

En general, el periodo de la Constituyente fue un periodo compartido, entre la visión contrainsurgente (minoría) y la visión

oligárquica (mayoría). Pero a este momento la oligarquía pasaba por un punto de recomposición de la vieja clase dominante en función de la visión reformista, cuestión que constituía el complemento necesario al proyecto norteamericano: la creación de una burguesía "no oligárquica" capaz de imponer una hegemonía (14). Cabe referirse brevemente a lo que la oligarquía ha significado durante todos estos años. Históricamente estaba ligada en base a un sector propietario del suelo, agroexportador y con intereses financieros, su imagen, por tanto, era la del empresario moderno que utiliza técnicas avanzadas, tanto en el agro como en la actividad financiera e industrial. En 1981 la clase dominante crea su propio partido, Alianza Revolucionaria Nacionalista, ARENA, apoyado por "catorce familias" y por sectores industriales, comerciales y capas medias. ARENA es el único partido de clase que existe dentro del sistema político, se opone al reformismo en general, pero prácticamente su función ha sido limitar los alcances de las reformas económicas.

Los Estados Unidos ven en esta oligarquía en transición, una forma de manipular las acciones gubernamentales. Al principio se encontraron en una situación en la que no podían detener las reformas económicas, así que las aceptaron, dándoles el matiz contrainsurgente. Necesitaban convencer a la oligarquía de aceptar el reformismo como punto estratégico de su política de "democracia"; y de crear un nuevo ejército mediante uniones especiales para substituirlo. Esto tenía que ser suavemente y no darle un golpe bajo a la oligarquía, para no provocar un

enfrentamiento interno de carácter armado. (La unión, ARENA-Estados Unidos se vería plasmada definitivamente en tan sólo unos años más, durante la presidencia de Alfredo Cristiani).

La Asamblea Constituyente programó para el 25 de Marzo de 1984 las elecciones, para la presidencia y vicepresidencia de la República. De aquí en adelante la clase dominante no cuestionaría al gobierno. De estas elecciones no surgió un ganador, debido a la inexistencia de una mayoría absoluta, pero se procedió a realizar una segunda ronda el 6 de Mayo donde unicamente participarían la DC y ARENA, quienes habían obtenido el mayor número de votos en la primera ronda. "El 25 de Marzo la DC obtuvo 549 727 votos, el 43.31% del total, el 6 de Mayo sumó 752 625, el 53.59%" (15), esta votación dio el triunfo a José Napoleón Duarte.

Militarmente, estos años se caracterizaron por la presencia de una fuerza nacional y popular que propinó serias derrotas a contingentes superiores y apoyados por los Estados Unidos. El ejército salvadoreño se incrementó tanto en personal como en equipo, valiéndose para ello de una política de reclutamiento, concentrada en las zonas occidentales del país. También se aceleró la promoción de oficiales, acortando sus estudios, así pudieron escalar los grados más altos en un tiempo mínimo. Se crearon brigadas de infantería, se incrementó el presupuesto de defensa y se llevaba a cabo el entrenamiento a oficiales y tropas salvadoreñas con asesores norteamericanos e inclusive en territorio de los Estados Unidos.

2.2 Principales acciones del FMLN-FDR durante los primeros cuatro años de los ochenta.

Durante el periodo de la primera Junta, las organizaciones revolucionarias salvadoreñas se perfilaban fuertemente como bloques de masas, el desafío reformista les significó un momento de crucial decisión, "si aceptaban la invitación al apoyo crítico, como habían hecho otras tendencias, corrían el riesgo de desarmar sus fuerzas, de cortar el ritmo de la lucha de masas, y, de que una vez logrados estos objetivos, la Junta limitase las reformas a algunas concesiones menores para ganar prestigio y retomar el control de las masas a través de las direcciones sindicales oficialistas" (16), es decir, habrían entrado en una operación de frente popular, con un sector hegemónico de políticos burgueses progresistas, miembros civiles y militares de la Junta, y su objetivo principal; la salida revolucionaria, se atrasaría. Por otro lado, "si continuaban la lucha contra el estado burgués, ahora dirigido por la Junta y contra su ejército, que se declaraba reformista, el riesgo era quedar aislados por las reformas de la Junta y de sus aliados nacionalistas, socialdemócratas y comunistas y de aparecer como una oposición extremista y sectaria" (17). La negativa a no desarmarse ni apoyar a la Junta, iba dirigida a poner a prueba sus promesas, y a exigir el cumplimiento efectivo de sus reformas, incluso con huelgas y movilizaciones de masas urbanas y campesinas. Con ello harían reconocer la autoridad que tenían como fuerza revolucionaria, principalmente sobre los trabajadores, y

aparecerían desafiando a los militares progresistas y a las tendencias reformistas que en ese momento eran sus aliadas.

Durante la segunda Junta, el desarrollo de las organizaciones político-militares se coordinaba en una unión en el seno del Frente Democrático Revolucionario, FDR, expresando sus intereses en la Plataforma de un Gobierno Democrático Revolucionario. La formación del FDR (descrita en el capítulo anterior) polarizaba la situación en dos bandos contrapuestos y beligerantes, polarización que obligó a la Junta a aparecer cada vez más identificada con sus apoyos de extrema derecha, a las organizaciones paramilitares, y a depender abiertamente del apoyo de los Estados Unidos y de su embajador, Robert White.

De Enero a Marzo de 1980 se va dando el seguimiento de acciones de propaganda y agitación creada por organizaciones político-militares, que van ganando la dirección de las masas, van llevando a actuar a los sindicatos y creando la ruptura definitiva con el reformismo; es un momento de efervescencia organizativa y movilización urbana, cuyo común denominador es la ocupación de poblados, iglesias, embajadas y huelgas obreras, y donde el objetivo principal, es la acumulación de fuerzas a nivel político. Para afianzar más la fuerza con que surgían, se van a incrementar las acciones militares en contra del ejército gubernamental.

La ruptura de la clase obrera con el reformismo, manifestó la capacidad de autoorganización obrera que junto con la clase campesina y de masas, lucharon por sus necesidades inmediatas y por sus derechos. Van aprendiendo las condiciones del ejercicio de

su propio poder en el futuro. El sector más vulnerable a las políticas económicas, al cambio del sistema político y el que sufría directamente la represión fue, y han sido siempre, las capas populares del pueblo salvadoreño. A este punto ya estaba cansado de callar, ahora sus reivindicaciones se hacen a gritos, sin importar las consecuencias. Varios hechos sangrientos relevantes marcarían en la mente del pueblo salvadoreño, la convicción de luchar contra sus enemigos. Para ejemplificar, se mencionan a continuación algunos.

1.- La Coordinadora Revolucionaria de Masas (creada el 11 de Enero de 1980, y que agrupaba a los cuatro frentes de masas: BPR, FAPU, UDN y LP-28) había llamado a una huelga general el 17 Marzo de 1980, movimiento que se llevó a cabo con la ocupación de fábricas, puertos, haciendas y comercios, fueron contrarrestados violentamente por la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Hubo muchos obreros asesinados ahí mismo. La represión fué dirigida más contra los obreros industriales y los trabajadores agrícolas en huelga, que contra los efectivos armados de los movimientos guerrilleros (18).

2.- El 22 de Enero se realizó una gigantesca manifestación por las calles de San Salvador, para conmemorar el 48 aniversario de la insurrección campesina de 1932, fue la más nutrida hasta ese momento. El pueblo se hizo acompañar por equipos de defensa, grupos de milicianos y guerrilleros armados. Según estimaciones, el número fluctuaba entre 250 y 300 mil manifestantes (19). La represión arremetió contra ellos.

3.- A comienzos de 1977, momento de crisis entre la Iglesia y el Estado, Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue nombrado Arzobispo de San Salvador. Los dos Romero, presidente y arzobispo, llegarían finalmente a construir los dos polos de conflicto. La Iglesia fue acusada de ser la responsable de la lucha creciente y radicalizada de los campesinos. Los escuadrones de la muerte asesinaron a varios jesuitas, acelerando una cacería contra sacerdotes acusados de ser comunistas, sin escapar de ella Monseñor Romero. El 23 de Marzo de 1980, pronunciaba un discurso, había mandado una carta abierta al presidente de los Estados Unidos, James Carter, en la que pedía no seguir mandando armas a El Salvador. LLamó a los soldados a la desobediencia y concluía "en el nombre de Dios y de este sufrido pueblo... les suplico, les ruego, les ordeno: cesen la represión" (20). Al día siguiente fue asesinado al oficiar una misa. Hasta la fecha, nadie ha sido responsable, sin embargo, las conclusiones de que fue una maniobra realizada por la extrema derecha, no dista mucho de la verdad. Las denuncias públicas ante el pueblo y ante periodistas extranjeros que llegaban hasta la Catedral para grabar sus homilias, nos hacen pensar, a quienes no les convenía este atrevimiento: a la extrema dercha y a los Estados Unidos.

El llamado de Monseñor Romero a los soldados no era un caso de conciencia o inspiración divina, "es un acontecimiento terrenal de la lucha de clases" (21). Sus verdugos cometieron un error, por que el resultado de su crimen se volcaría sobre ellos. Consideraron que no tenían otra alternativa: "para salvar al ejército había que acallar de inmediato esa voz que sonaba en los oídos católicos de

soldados campesinos con una autoridad superior a la de los oficiales que les ordenaban reprimir" (22). (La investigación del caso de Romero ha tardado años, se localizó al culpable, según fue el capitán Alvaro Saravia, socio de D'Aubuisson, y se consiguió que lo detuvieran en los Estados Unidos, pero por algún formalismo quedó libre en 1988)

El 30 de Marzo se realizó el sepelio de Monseñor Romero. Más de 100 mil personas asistieron al acto, y pese a que en las anteriores manifestaciones ya habían sido masacradas, la matanza se repitió, multiplicada. Francotiradores ubicados en los edificios que rodean la plaza frente a la Catedral, atacaron a la multitud allí reunida con ametralladoras, granadas y bazukas (23). Hasta la fecha no ha habido justicia para este caso, aunque todos los salvadoreños saben quien es responsable.

Militarmente, en Julio de 1980, entró en actividades el batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, entrenado para combatir al FMLN y destruir sus posiciones ganadas en Chalatenango. La maniobra fracasó al grado de que en Enero de 1982, el batallón había sufrido demasiadas bajas y estaba desgastado, por ello se hacía necesario recurrir a la formación de nuevos batallones (todo fracaso representaba intensificar el odio de la oligarquía hacia el gobierno).

La situación de violencia y represión, hizo que las organizaciones populares buscaran la capacidad para enfrentar la instancia armada del régimen, intentan construir una fuerza social, política y militar, tarea plasmada en la Dirección Revolucionaria

Unificada, DRU, y, posteriormente en la creación del FMLN a finales de 1980. Llevaron a cabo un reclutamiento masivo hacia las estructuras militares por medio de las organizaciones de masas, el apertrechamiento de armas y municiones, prepararon las primeras fuerzas regulares e incorporaron a las capas medias urbanas, principalmente, al FDR. Así mismo se dieron a la tarea de buscar el apoyo internacional para el programa democrático-revolucionario.

Quizá las tareas no tuvieron un éxito inmediato, primero, a causa de la constante represión que provocaba un desgaste a las fuerzas revolucionarias, y, segundo, por que el reclutamiento masivo y forzoso por parte del gobierno, redujo la capacidad de movilización de las masas urbanas.

Los problemas que las fuerzas populares enfrentaban, no impidieron que se llevara a cabo una ofensiva el 10 de Enero de 1981, la llamada "Ofensiva Final". teniendo como elemento estratégico, la insurrección. No tuvo mucho éxito ya que es necesario reconocer que no se encontraban en un momento oportuno, el pueblo estaba desmovilizado y sin medios para defenderse del ejército. Esta oportunidad la aprovechó el gobierno para hacer notar que tenía la capacidad de derrotar al movimiento revolucionario. Sin embargo no todo estaba perdido, el mismo 10 de Enero, las fuerzas populares habían construido una retaguardia interna en cinco departamentos, asentando los destacamentos armados del FMLN. Contaban con la ayuda de la población civil, que no sólo acrecentaron en número los organismos militares, sino que además, les proporcionaron alojamiento, alimentos y medicinas.

La ofensiva de Enero, hizo concientizar al reformismo de que necesitaba un nuevo ejército, sabía que el actual, como brazo fuerte de la oligarquía, no representaba una base útil. También los Estados Unidos entendieron que era necesario incrementar la ayuda militar al gobierno salvadoreño, y que debían proporcionar asesores y preparar tropas especializadas.

En general, la táctica fundamental del FMLN durante el primer semestre, consistió en la defensa escalonada de posiciones que sin llegar a convertirse en una guerra de posiciones, le permitió la asimilación de una experiencia táctica en lo militar, que en un futuro sería de gran valor no sólo defensivo sino también ofensivo.

Entre Julio y Agosto de 1981, el FMLN logra dar el primer golpe militar de importancia con la toma del Perquín (una de las más importantes bases del ejército salvadoreño), la captura de los primeros prisioneros y la recuperación de más de medio centenar de armas de guerra (24). Fueron poco a poco ocupando pueblos, Joateca, Osicala, Torola y Arambala, del Departamento de Morazán; El Jicaro, Las Vueltas y La Laguna, del Departamento de Chalatenango (25), también iniciaron acciones coordinadas entre las diferentes organizaciones político militares, articulándose como campañas.

La táctica gubernamental hacía un esfuerzo por mantener el control político-militar de las zonas urbanas, mantener operativos militares de contención donde las fuerzas populares tenían sus asentamientos, formar brigadas y batallones especiales, dentro del país y en los Estados Unidos, e incrementar el traslado masivo de población a los lugares dominados por el gobierno.

Un acierto del movimiento popular fue obtener su legitimidad en el exterior, creando la Comisión Politico-Democrática y la instalación de representantes en países occidentales. Consiguieron la resolución de la Conferencia de Países No Alineados, que condenaba cualquier intervención de fuerzas extranjeras en El Salvador (12 de Febrero de 1981), y, el reconocimiento por parte de México y Francia (26), de la alianza del FMLN-FDR como fuerza representativa (Agosto de 1981).

El FMLN avanzaba hacia la zona rural y reforzaba su legitimidad en el campo internacional, pero perdía influencia entre las zonas urbanas que, económicamente, sufrían los efectos del congelamiento de los salarios, el desempleo y la inflación. Mientras se debatía la lucha por el poder dentro de la Asamblea, el enfrentamiento armado avanzaba. El gobierno rechazaba cualquier diálogo con la insurgencia y respondía con constantes operativos militares.

En Mayo de 1982, regresaron los batallones, entrenados en los Estados Unidos, en las bases Fort Bragg, "Atonal" y "Ramón Belloso" que junto con el "Atlacatl" constituyeron la fuerza operativa con que el régimen contaba para detener el avance insurgente. Pero hacia Junio, el FMLN comienza a aplicar con sentido estratégico el principio de la concentración de fuerzas y abrió nuevos teatros de operaciones. Se logra así cambiar bruscamente el curso estratégico de la guerra con la campaña "Comandante Gonzalo" cuando se produce la victoriosa batalla del Moscarrón, Departamento de Morazán, el primer aniquilamiento a gran escala, que asentó de manera firme el

ritmo de acumulación que debía seguir la guerra en adelante (27).

Para Octubre se produjo otro momento de importancia estratégica: el FMLN logró una mejoría substancial en la coordinación y simultaneidad de sus acciones. Comienzó a ganar puntos estratégicos de terrenos cercanos a la retaguardia y a expandir sus áreas de control. Las acciones de aniquilamiento de fuerzas enemigas se multiplicaron y profundizaron a tal grado, que sólo la ayuda norteamericana fue capaz de mantener en pie al ejército salvadoreño. "El sabotaje cobró dimensiones de grandes alcances estratégicos en la desestabilización del gobierno, al punto que únicamente la ayuda capaz de mantener en pie la economía del país y la precaria cohesión del bloque de poder de las clases dominantes" (28).

Desde esta fecha hasta Abril de 1983, el FMLN mantuvo control militar en casi todas las zonas del país, desarrolló un trabajo organizado con la capacidad de aniquilamiento a posiciones enemigas. Fue recuperando pertrechos, reagrupando militares con poder de operación a nivel nacional y utilizando cada vez más una artillería liviana y semipesada. Del 8 de Enero al 6 de Abril se desarrolló una campaña militar llamada "Héroes Revolucionarios de Enero", y en seguida otra, "Comandante Ana María, juramos Vencer" del 7 de Abril al 24 de Mayo, y una tercera, "Frente a la Agresión de Reagan, el Salvador Vencerá", realizada del 22 de Mayo al 2 de Septiembre (29).

Simultáneamente a los avances revolucionarios, la alianza de la democracia cristiana desempeñaba sus tareas en el terreno

diplomático, obtenía el apoyo de muchos países a su propuesta de diálogo de Octubre de 1982. (Paralelamente, el Grupo Contadora gestionaba su propuesta de paz, rechazada por el gobierno salvadoreño y por los Estados Unidos). La propuesta de diálogo, que contaba con el apoyo de la Iglesia, perdió su oportunidad de salvar al país, ya que los avances revolucionarios provocaron su control por medio de la represión.

Al interior del ejército se discutían las estrategias de lucha. Una impulsada por ARENA que proponía la ofensiva total, arrasando las zonas de control insurgente para lograr la victoria a corto plazo, y otra, la de los oficiales ligados a la embajada norteamericana que quería la contención del FMLN, apartarlos de la población civil y llegar al aniquilamiento, esto sería a largo plazo. Esta última opción fue la que realmente se impuso. El desacuerdo al interior del ejército representó un problema. Por un lado, estaba la opinión de los jefes de batallones especiales, quienes decían que la estrategia debería estar orientada hacia las actividades de contrainsurgencia y no de guerra regular que utilizaba a pequeños grupos para entrar en la zona de control, y por la otra, estaba el alto mando considerando que para contener al FMLN debía usarse masivamente a los batallones en forma regular para su aniquilamiento. De aquí que el accionar tuviera poca efectividad, es decir, no había una estrategia y táctica unificada en los mandos, sino mas bien, una desconfianza entre los oficiales. Tal situación se evidenció, por ejemplo, durante las operaciones contrainsurgentes en Chalatenango, en Mayo de 1982, a cargo del

batallón "Atonal", y la de Morazán, el 5 de Julio, a cargo de los batallones "Atlatcatl" y "Belloso", donde además de las bajas, se registraron altos costos materiales y sobre todo, la baja moral.

Puede entenderse entonces, que a esta fecha existían dos ejércitos fusionados en uno sólo, un ejército oliogárquico comprometido con el proyecto agroexportador, el cual cuidaba la retaguardia por que accionaba en las zonas menos conflictivas, es decir, en la zona occidental y central; y el ejército contrainsurgente bajo dirección de oficiales pronorteamericanos, y cuyo accionar se llevaba a cabo en el teatro de la misma guerra: la zona oriental, para-central y norte del país. Ambos ejércitos se encontraron incapaces de detener las acciones revolucionarias. La táctica llevada a cabo por el ejército afín a los intereses norteamericanos, consistía en distinguir los territorios. Los lugares donde dominaba el FMLN fueron catalogados como económicamente importantes pero no socialmente recuperables para el régimen, ya que la población civil estaba del lado de los rebeldes y, por tanto, no podían actuar directamente. Aquí debía lanzarse la estrategia de aniquilamiento, bombardeos de artillería y aéreos masivos indiscriminados, con el objeto de atacar los abastecimientos del FMLN. Por otro lado, se encontraban los lugares de más reciente control insurgente, y por ello se podía recuperar el espacio físico y social. Los operativos estarían destinados a destruir físicamente al movimiento y ganarse a la población.

Para tratar de ganarse a los poblados y desarrollar esta táctica, se creó a mediados de 1983 un plan llamado "Bienestar para

San Vicente" (30), planificado en dos etapas. Una para destruir los campamentos guerrilleros de la zona, es decir, "limpiar" el volcán Chinchontepeque, y otra, reconstruir con mejoras sociales a la población, que incluía el repoblamiento de la zona con refugiados y la estructuración de defensa local dirigida por el ejército pero ejecutada por la misma población. El plan fracasó, primero por que el ejército ocupó el volcán de San Vicente, pero no "encontró" al FMLN, este se había replegado junto con la población civil y, segundo, por que el FMLN golpeaba los abastecimientos del ejército y le provocaba muchas bajas. ¿A qué población civil se le aplicaría su acción cívica?, al no haber refugiados, ¿quiénes iban a repoblar San Vicente? Irónicamente, los víveres destinados a la población fueron a parar en manos del mismo FMLN. La población local también salió ganando, por lo menos se arreglaron algunos baches de los caminos. A mediados de Junio inició otra operación militar parecida a la anterior, en Usulután, pero sucedió lo mismo que en San Vicente. Los batallones Atlacatl y Atonal había sufrido demasiadas bajas, la guerrilla les había capturado un buen número de armas. Como compensación, nuevos reclutas fueron incorporados al ejército y dos nuevos batallones, el Lenca y el Arce, se unirían a los ya existentes, sin embargo estos batallones ya no serían entrenados en los Estados Unidos, porque viendo la realidad de los otros, estos resultarían demasiado caros para asegurar su eficacia.

El 4 de Septiembre de 1983 el FMLN inició una nueva campaña militar titulada "Independencia, Libertad y Democracia para El Salvador" con un violento ataque a la tercera Brigada en San Miguel

y múltiples ataques en el norte de Morazán. Uno de los objetivos políticos de esta campaña sería demostrar que los planes de contrainsurgencia, como el de San Vicente, no habían logrado revertir en lo fundamental la dinámica de la guerra.

La última campaña de este año fue "Fuera Yanquis de Granada y Centroamérica", que llevó a sus fuerzas estratégicas a amenazar muy de cerca las cabeceras departamentales. Las fuerzas del ejército salvadoreño mostraron una baja moral observada con la huida de la tropa a poblados vecinos a los que se estaban combatiendo para vestirse de civiles y poder salvarse (31), situación que se repetiría en el futuro, incluso se dieron huidas a países vecinos.

Para Diciembre de 1983, el ejército salvadoreño inició el más vasto operativo contrainsurgente conocido hasta esa fecha: once de los catorce departamentos fueron escenarios de guerra, y veinte mil efectivos militares (el 100% de su fuerza operativa) fueron movilizados contra el FMLN, casi como la ofensiva total. El FMLN contraatacó con golpes contundentes logrando suspender las operaciones y creando un fracaso más (32). El FMLN salía un tanto victorioso, ni el diseño de los asesores norteamericanos ni el diseño oligárquico generaban avances importantes.

Es necesario precisar que los asesores norteamericanos y las fuerzas armadas gubernamentales, actuaron conforme al plan contrainsurgente de dividir, a lo largo, el país en dos zonas; la zona norte de topografía montañosa, (que favoreció a la guerrilla porque le servía de retaguardia), la más despoblada, con una

economía secundaria y atrasada, con menor cantidad de vías de comunicación; y la zona central sur, donde se encuentran los asentamientos urbanos y núcleos económicos principales, con una alta densidad de población, a la que se le consideró desventajosa para el establecimiento de frentes de guerra o áreas de control guerrillero, ya que su infraestructura permitía a las fuerzas gubernamentales movilizarse con facilidad.

Las metas básicas del plan contrainsurgente fueron: a) despoblar el norte para eliminar la base política y social de apoyo del FMLN, b) destrucción de la producción de guerra en los frentes o áreas de control del FMLN (quema de cultivos, destrucción de medios de trabajo agrícola, exterminio de animales, etc.), c) aislamiento de la zona norte mediante cercos y contenciones en las vías de acceso, cortando toda ruta de abastecimiento, d) creación de aldeas estratégicas, e) restricción de la actividad de la Cruz Roja Internacional en los refugios para evitar la acción política, f) incremento en la zona sur y centro del terror masivo, con el fin de minar la moral del pueblo, g) definición de las zonas de operativos militares para ser "limpiadas", y, h) controlar la zona centro y sur con fines de uso político para las elecciones próximas con las que se pretendía legitimar al régimen. Con todo ello, como ya se anotó, la resistencia activa insurgente en todos los frentes bélicos y la escasez de tiempo para la preparación de la fuerza móvil estratégica del ejército salvadoreño, dificultaron el éxito de estas operaciones.

Durante el periodo electoral de 1984 que dió el triunfo a

Duarte, el FMLN cambió la estrategia del boicot anterior de 1982. Ahora le quitaba importancia al proceso electoral, por que éste no expresaba la voluntad del pueblo; argumentó que era una comedia prefabricada por el gobierno salvadoreño y por los Estados Unidos y tomó la consigna de "llevar la guerra antes y después de las elecciones". Si el pueblo se encontraba en guerra, resultaba fácil cuestionar las elecciones generales, "y en un país donde no existía libertad de expresión, y donde la muerte y represión era perpetrada por escuadrones de la muerte, la trama debía venir de la extrema derecha" (33). En el fondo, las elecciones sólo tenían el objetivo de mantener la situación de guerra y para justificar y potenciar el proyecto norteamericano en El Salvador.

El desarrollo de la guerra durante estos cuatro años, bien pareciera que la suerte acompañó a los insurgentes, pero se trataba más de una base bien cimentada de organización, además, debe tomarse en cuenta que es la mayoría de la población, la de menores recursos la que participa directa o indirectamente en la lucha. No se tiene ni armas sofisticadas (por ahora), ni dinero, y es una población en su mayoría analfabeta. Al interior del FMLN existe un germen de sistema administrativo (34) que a grandes rasgos es el siguiente:

1.- El Poder Popular Local, PPL, nace de la necesidad que tienen las masas de transformar, revolucionariamente, el viejo orden político, administrativo y coercitivo local del régimen. El elemento básico de la concepción del PPL es que, ante la política impulsada por el régimen salvadoreño con la asesoría

norteamericana de aislar al pueblo de las fuerzas revolucionarias, desdoblado las zonas de control político-militar y las que quedan en la periferia, de estas se debe responder con la política de que el pueblo, las masas, deben aferrarse a la tierra en que han nacido, liberándola a costa de todo sacrificio. Funcionan básicamente en las zonas de control revolucionario, organizando sus tareas de acuerdo a la tipificación de la zona: en las zonas bajo control es un poder único, en las zonas de disputa, es un poder dual.

2.- Asamblea de Base. La población civil se encuentra organizada en grupos familiares (aproximadamente 15 familias, de 8 a 10 miembros) y cuenta con una directiva de grupo elegida por ellos. La Asamblea es el órgano de consulta del gobierno local. Es la instancia más alta de los PPL.

3.- La Directiva Local. formada por:

- a) un presidente, supervisa el funcionamiento de las tareas, representa a la comunidad o base en cualquier acto y coordina el trabajo al interior de la directiva;
- b) responsable de la organización, controla e incorpora a la población al proceso de liberación en marcha;
- c) responsable de salud, coordina los servicios sanitarios y su abastecimiento. Se encarga de instruir la práctica de primeros auxilios, atención y cuidados de enfermos y heridos y algunas técnicas de cirugía menor. Los problemas de falta de medicinas y recursos humanos son notorios, así mismo al no contar con equipo suficiente dificulta el trabajo médico (hasta Diciembre de 1982 el

FMLN sólo contaba con 2 hospitales de campaña completamente equipados)

d) responsable de educación y cultura, elabora planes de alfabetización y cultura; se estudian documentos que dan cuenta de los diversos aspectos de la sociedad salvadoreña y se discuten acontecimientos recientes. Prácticamente la educación es política.

e) responsable de producción y distribución, promueve la organización colectiva de la producción, distribuye el terreno para la siembra, obtiene los insumos, coordina las bodegas de reserva. Los recursos para la siembra son tradicionales, a falta de tecnología se utiliza la imaginación y la destreza. (Entre otras cosas se ha intensificado la producción de miel de abeja que ha resultado de mucha utilidad curativa, así como un alimento de primer orden. La cera de abeja se ocupa para fabricar velas ya que se carece de electricidad)

f) responsable de autodefensa, organiza a la población para enfrentar "las operaciones de limpieza" del ejército gubernamental, promueve la participación en la preparación del terreno para el combate y orienta sus responsabilidades junto con las milicias, en las actividades combativas.

El FMLN cuentan con su propia radiodifusora que transmite el desarrollo de la guerra a todo el pueblo, principalmente en el área rural. Radio Venceremos hizo su primera transmisión en la histórica fecha del 10 de Enero de 1981, día de la insurrección popular; y Radio Farabundo Martí creada sobre la clandestinidad. Una administración de ésta índole no es la base de una acción exitosa,

pero aunada con la unión de un pueblo que vive y lucha con la esperanza de tener algún día lo que le corresponde, es lo que mantiene en pie al movimiento insurgente.

En suma, se distinguen dos características en el desarrollo de la guerra del periodo descrito:

1.- Es una lucha de la mayoría de un pueblo contra una minoría dominante sostenida por un ejército profesional y cuerpos policiales armados y asesorados por los Estados Unidos.

2.- La guerra se libra en todos los campos: militar, político, económico y diplomático, utilizando la combinación de medios legales e ilegales, abiertos y clandestinos, urbanos y rurales.

2.3 Presidencia de José Napoleón Duarte. Primeros pasos hacia la paz.

Duarte va a encarnar a una sociedad salvadoreña muy distinta a la que las Juntas de Gobierno representaron. Esta vez, acicateado por el espectro de la revolución, el régimen oligárquico había asumido un nuevo ropaje, se venía preparando para una nueva conquista. El reformismo se instaló en la única manera posible; sin el pueblo, por ello la base tenía que crearse con un bloque hegemónico; la oligarquía se acercaba a la aceptación de lo que quedaba de las reformas, sobre ellas, se constituía una nueva sociedad política que les daría legitimidad.

Antes de ocupar la presidencia, viajó a Honduras, Guatemala y Costa Rica, en busca de apoyo. En San José, Costa Rica, Duarte declaró que no permitiría que tropas extranjeras de los Estados

Unidos, Cuba o Nicaragua, intervinieran en su país. Posteriormente a la visita de los tres países, viajó a Washington, en donde recibió un fuerte respaldo del ejecutivo norteamericano y los elogios de los líderes del Congreso. Thomas O Neill, líder de los demócratas y presidente de la Cámara de Representantes, expresó que se sentía "impresionado con la valentía, decencia y honradez del presidente electo, Napoleón Duarte" (35). (La visita a Washington daría sus frutos en Junio, con la aprobación del Congreso de la ayuda militar)

Ya en el poder, Duarte tenía que llevar a cabo varias tareas:

a) Buscar el sometimiento de la clase dominante a la visión norteamericana, política, militar y sobre todo, como gestores principales de una supuesta reactivación económica.

b) Buscar la creación de una base social de apoyo al gobierno reformista y sus iniciativas.

c) Buscar la ruptura del aislamiento internacional en que había caído el gobierno de unidad nacional.

d) Buscar la derrota militar del FMLN.

Para conseguir estas metas, tenía que enfrentarse a los límites estructurales que el mismo se había impuesto, es decir, por un lado, debía crear reformas económicas capaces de resolver los problemas del país, ya que las anteriores sólo habían mostrado su insuficiencia, y por otro, seguía latente la amenaza de la revolución.

Al inicio de su mandato realizó varias acciones para ganar terreno a nivel nacional e internacional:

-Firma el llamado "pacto social" con la Unidad Popular Democrática. La DC y la UPD se comprometieron por la integración de los sectores marginados al desarrollo socioeconómico y político salvadoreño; apoyar los esfuerzos del Grupo Contadora; lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos; y apoyar los esfuerzos de paz nacional con la participación de todas las fuerzas sociales.

-Viaja a Europa Occidental en busca de apoyo político y financiero, encontrándose con las mismas dificultades que la oposición de izquierda, con el hecho de que la mayoría de los gobiernos tienden a una visión regional y a apoyar las gestiones e iniciativas del Grupo Contadora, el cual se había convertido en el garante necesario ante la comunidad internacional.

-Decide visitar Venezuela, Colombia y Panamá, en el marco de las negociaciones del Grupo Contadora. Esto forma parte de la estrategia que las condiciones internacionales le han impuesto, de la necesidad de conquistar Europa vía Contadora. Pero la estrategia se bloqueó posteriormente ante las negativas del gobierno salvadoreño y norteamericano a firmar el Acta de Paz.

-Pronunció un discurso para intentar la paz ante la Organización de Naciones Unidas.

Este último punto tiene su importancia al constituir el inicio de pláticas en la búsqueda de la paz en El Salvador, tanto a nivel nacional como internacional. El 8 de Octubre de 1984, Duarte pronunció ante Naciones Unidas, "invito a asistir sin armas y con la presencia de la prensa internacional, a la población de La

Palma, Departamento de Chalatenango....., a los jefes del movimiento guerrillero que están en las montañas a fin de que podamos discutir en detalle los alcances (....) para su incorporación al proceso democrático y la preparación de un ambiente de libertad de la próxima conducta popular" (36).

Por fin se hablaba de iniciar un diálogo sin precondiciones en una línea democrático-revolucionaria. Nuevamente El Salvador estaba en el centro del interés mundial, pero esta vez no a causa de la guerra. Duarte supo atraer el interés de casi todo el mundo, inclusive el de los Estados Unidos con la invitación al FMLN-FDR para establecer un diálogo. Probablemente con la esperanza de que sus opositores no podrían prepararse en tan breve plazo.

El proceso de diálogo debe entenderse como un enfrentamiento de importantes dimensiones y apertura de un nuevo campo de lucha política. Era la primer vez que un gobierno tenía intenciones de dialogar con los insurgentes, pero desde el punto de vista de la situación en El Salvador, el motivo fundamental ha radicado en la inserción de las perspectivas de negociación y paz en la mayoría de los sectores sociales del país. Desde 1981, la Conferencia Episcopal de El Salvador, los organismos de derechos humanos, los profesionales y capas medias y distintas organizaciones sindicales y gremiales, se pronunciaron insistentemente reclamando al gobierno el inicio de un diálogo con la oposición.

En particular, para Duarte fueron importantes las advertencias y presiones que en Septiembre de 1984 habían realizado los sindicatos y gremios de influencia demócrata cristiana aglutinados

en la UPD. El "pacto social" comprometía a Duarte a buscar la paz, y una ruptura constituiría un desastre para su gobierno y también para los Estados Unidos, porque podría producir un desplazamiento de nuevos sectores sociales a las filas de la oposición agrupada en el FMLN-FDR.

La democracia cristiana montó un aparato propagandístico, pero sólo demostró que Duarte no tenía nada nuevo que ofrecer, mientras que el FMLN-FDR (quien confirmó su asistencia a La Palma) tenía mucho que exigir. Para realizar tal propuesta el gobierno tenía, previamente, que haber conseguido una garantía, si no de apoyo, por lo menos de neutralidad de parte de la derecha y del ejército. Esto resulta evidente, por que ningún partido de derecha se opuso al diálogo, sino que fue apoyado además por la empresa privada.

Duarte sabía que con diálogo o sin el, los insurgentes no depondrían las armas, pero esperaba capitalizar políticamente ese fracaso, demostrando a la derecha que el poder burgués no era negociable, y, a los sectores populares que apoyaron el diálogo, que él hacía todo lo posible, pero que la paz no llegaba a causa de la intransigencia de la izquierda radical. ARENA por su parte, aunque "neutral", criticó la propuesta hacia el FMLN-FDR "para los marxistas todo diálogo, negociación y acuerdo en relación con la paz, no son sino treguas tácticas que les permiten reacondicionar sus fuerzas" (37).

En realidad, la reunión de La Palma quizá constituyó también una estrategia electoral. En la segunda ronda electoral que dió el triunfo a Duarte, la DC sólo aventajó a ARENA por un porcentaje

mínimo, y ello a pesar del respaldo estadounidense y del "pacto social" con la UPD. Duarte advirtió que la extrema polarización política producida por la crisis, frente a la cual la DC ha sido incapáz de ofrecer soluciones, le era peligrosamente desfavorable. Por eso la apertura de diálogo con el FMLN-FDR se reveló ante Duarte como factor esencial que podría permitirle capitalizar a su favor la reactivación política del pueblo en el debate por la paz. No solamente Duarte podría por fin mostrar en el extranjero que él era quien verdaderamente tiraba los hilos de su política, sino que además su propuesta de diálogo dió, por fin, al grupo de presión internacional de la democracia cristiana, los argumentos que necesitaba para seguir apoyándolo.

Entre las características de la "oferta de paz" de Duarte, se contempla, al menos verbalmente, las intenciones de presentar a la Asamblea Constituyente una amnistía general e inmediata; instruir al ejército para garantizar la circulación de los "alzados" a fin de que se incorporaran a la sociedad; garantizar la participación política de los sectores que respetaran el orden jurídico; otorgar facilidades para quienes desearan abandonar el país y apoyo a los gobiernos que los recibieran; dar garantías para el retorno a refugiados; dictar disposiciones legales que permitieran a la guerrilla incorporarse al proceso político como partido legal; y asegurar garantías a la libertad de expresión. Aunque Duarte se abstuvo de convocar explícitamente a un desarme unilateral de la guerrilla, es obvio que ahí radica el núcleo central de las argumentaciones contenidas en la "oferta de paz".

El acuerdo principal de las conversaciones de La Palma fue la creación de una Comisión Mixta que tendría como finalidad: estudiar los planteamientos y las propuestas presentadas por ambas delegaciones; desarrollar los mecanismos convenientes para incorporar a todos los sectores de la vida nacional en la búsqueda de la paz; y tratar los aspectos que condujeran a lograr la paz en el menor tiempo posible.

Seguida de la reunión de La Palma, se realizó otra en Noviembre, en Ayagualo, Departamento de La Libertad, a instancia de Duarte quien presentó una propuesta cuyo contenido englobó tres puntos básicos (38):

1.- La creación de una Comisión Especial integrada por delegados de ambas partes y teniendo como moderador a un miembro designado por la Conferencia Episcopal.

2.- Demanda de una respuesta a la "Oferta de Paz" planteada en La Palma.

3.- Planteamiento para que los "alzados" suprimieran los asesinatos, la toma de poblaciones y la destrucción de la infraestructura del país.

El FMLN-FDR estaba dispuesto al diálogo, pero se negó a someterse a las disposiciones del gobierno. El 30 de Noviembre, Duarte rechazó la contrapropuesta del FMLN-FDR argumentando la inconstitucionalidad de la misma, situación que llevó a la suspensión del diálogo. La extrema derecha y algunos sectores del ejército ya no tenían una posición neutral, se pronunciaban ahora abiertamente en contra del diálogo. Les molestaba que el FMLN-FDR

ganara, por medio del diálogo, más prestigio en el extranjero. Además, según sus criterios, el diálogo había provocado que los sindicatos y las organizaciones se comportaran torpemente al manifestarse.

A comienzos de Noviembre, más de 30,000 obreros comenzaron una serie de huelgas y paros laborales para exigir al gobierno un alto a las prácticas antisindicales. Otras organizaciones realizaron un paro laboral de una hora, en solidaridad con los obreros en huelga. Todo esto lo provocaba el diálogo según la extrema derecha. Pero existía otro punto para considerar la negativa al diálogo, y quizá el más importante, en pocos días se llevarían a cabo elecciones para la Asamblea y para los Consejos Municipales, y temían que Duarte llegara a ser tan popular, por el diálogo, que su partido se apoderaría de todos los escaños.

Hubo intentos de diálogo posteriores pero con resultados negativos, situación que vino a complicarse con el Plan de Paz del Presidente Duarte, del 5 de Marzo de 1986, en el que se condicionaba la continuidad del diálogo en El Salvador, a la realización de uno simultáneo entre el gobierno y la oposición en Nicaragua. El único hecho positivo en relación con el diálogo durante este periodo, fue la reunión el día 26 de Abril en Lima, Perú, entre miembros del partido Demócrata Cristiano y del Movimiento Nacional Revolucionario y Movimiento Popular Socialcristiano, con el propósito de explorar las posibilidades de reanudar el diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR.

El 1 de Junio de 1986, en el discurso presidencial ante la

Asamblea Legislativa con motivo de su segundo año de gobierno, Duarte convocó a una tercera reunión en Sesori, solicitando además al Arzobispo de El Salvador, Monseñor Rivera y Damas, su cooperación para los arreglos necesarios. El 3 de Junio, el FMLN-FDR expresó su voluntad de asistir. Ambos bandos enviaron a Monseñor sus propuestas. Pero existía divergencia entre ellas. Los principales puntos de desacuerdo eran la realización de reuniones previas de carácter privado, y que la propuesta enviada a través del intermediario planteaba solamente la discusión de la propuesta de Duarte. En contraposición, los dos bandos señalaron que debían discutirse las propuestas de ambas partes; garantizar la presencia de diferentes sectores nacionales; proporcionar garantías para la continuidad del diálogo; y el cumplimiento de los acuerdos. Este último punto es importante para comprender la discusión, ya que la propuesta de Duarte del 1 de Junio, planteaba la convocatoria a una tercera reunión, lo cual implicaba aceptar como la primera la de La Palma y como segunda la de Ayagualo. No obstante en la política no las reconocía.

Como resultado de una reunión preparatoria sostenida en México entre el 20 y 22 de Agosto con representantes del gobierno y del FMLN-FDR, Monseñor Arturo Rivera y Damas, en su calidad de intermediario, dió a conocer los resultados siguientes:

- 1.- fecha de la tercera reunión: 19 de Septiembre
- 2.- el lugar: La ciudad de Sesori, Departamento de San Miguel
- 3.- quedaron puntos pendientes de acuerdo, tales como aspectos de seguridad, comunicaciones, movilización y la búsqueda de

alternativas para implementar el contenido del comunicado conjunto de La Palma.

4.- se determinó acordar una segunda reunión privada para la primera quincena de Septiembre.

Con posterioridad al anuncio de los acuerdos, el 27 de Agosto la Fuerza Armada militarizó la ciudad de Sesori, que había sido escogida precisamente por ser una ciudad desmilitarizada. Duarte se presentó en Sesori el 19 de Septiembre, con todo un despliegue de publicidad. No obstante había fracasado anticipadamente la convocatorias a esta tercera reunión.

Un año más tarde y a nivel regional, se realizaron los Acuerdos de Paz de Esquipulas II, en Agosto de 1987, el cual representó la posibilidad de intentar rearticular políticamente la estrategia contrainsurgente, aunque ahora sobre la base de un discurso en donde la pacificación y democratización del país aparecieron como la tarea prioritaria, sin que esto redundara en la modificación de sus propósitos a nivel estratégico. Es decir, de nueva cuenta se intentaría hacer del tema del diálogo el punto de confluencia de la acción gubernamental y las Fuerzas Armadas.

Los puntos específicos de Esquipulas II para el caso particular de El Salvador fueron los siguientes:

1.- Se aprobó la Ley de Amnistía, (efectiva a partir del 5 de Noviembre) que incluyó a militares detenidos por hechos represivos, y, los gobiernos correspondientes iniciarían el diálogo con todos lo grupos desarmados de oposición interna y con aquellos que se hubieran recogido a la amnistía, como parte del proceso de

Reconciliación Nacional

2.- Cese del fuego dentro del marco constitucional. (Mientras, el ejército realizaba el "Plan Concordia" para evitar sabotajes del FMLN, decía crear las condiciones en el terreno para cumplir el cese del fuego).

3.- Para la verificación del cumplimiento de los compromisos del acuerdo, "en materia de amnistía, cese del fuego, democratización y elecciones libres, se creará una Comisión Nacional de Reconciliación que tendrá las funciones de constatar la vigencia real del proceso de reconciliación nacional" (39).

Al hablar de las fuerzas irregulares, el Acuerdo de Esquipulas hace una distinción entre grupos irregulares o movimientos insurgentes. Esta distinción es un gran avance para no caer en la trampa de la simetría entre la contra nicaragüense y el FMLN-FDR salvadoreño. Si bien, Esquipulas II representaba un intento más serio de comprometerse con la paz, en alguna medida las estipulaciones formales del documento favorecían el que la Comisión Nacional de Reconciliación quedara integrada de tal manera que los intereses populares no fueran adecuadamente representados en ella.

Por otro lado y bajo el espíritu de lo que Esquipulas II representaba, el presidente Oscar Arias de Costa Rica, impulsó la reunión realizada en la sede de la Nunciatura Apostólica de San Salvador, los días 4 y 5 de Octubre. Se logró acordar sobre la creación de dos comisiones, una destinada a analizar los problemas del cese al fuego, y otra, para buscar y preparar acuerdos contenidos en Esquipulas II.

En cumplimiento de los anteriores acuerdos se reunieron en Caracas, Venezuela, los días 21, 22 y 23 de Octubre de 1987, las comisiones del gobierno y del FMLN-PDR. No lograron llegar a un convenio, fundamentalmente discreparon en la manera de implementar el cese al fuego, y programaron otra reunión que celebrarían en México, entre el 30 de Octubre y 4 de Noviembre. Esta vez fue suspendida por el FMLN, debido al asesinato, el 26 de Octubre, del señor Herbert Anaya, Coordinador General de la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamental.

Duarte contribuyó también al fracaso de esta ronda, pues las contradicciones al interior del ejército obligaron al gobierno salvadoreño a endurecer su posición, al exigir el desarme total de la guerrilla. (El Ministro de Defensa, Carlos Eugenio Vides Casanova había reconocido las contradicciones al interior de las Fuerzas Armadas que condujeron a la renuncia de López Nuila. El debate se produjo en torno a la investigación sobre cargos criminales contra militares en retiro, y en especial el coronel Elmar González Araujo, jefe de la Intendencia Militar, quien como comandante del destacamento militar No. 6 de Sonsonate, estaba acusado de ordenar asesinar a cuando menos 17 campesinos en 1983 (40)). A Duarte no le quedaba más que exigir el desarme total de la guerrilla.

1988 es otro año más por intentar crear la paz en El Salvador, ningún acuerdo ha tenido frutos hasta ahora, pero aún se habla de continuar el diálogo entre ambas partes. El 15 de Mayo, Duarte propuso una reunión con los representantes de los principales

partidos políticos (Arena y el Partido de Reconciliación Nacional) para discutir una nueva ronda de conversaciones con la insurgencia. Pero ese momento fue el menos propicio para un diálogo, ya que el marco electoral dejaba de lado la cuestión de la paz. La DC estaba completamente dividida a causa de las disputas entre sus candidatos que se acusaban mutuamente de corruptos. La derecha salvadoreña ahora rechazaba abiertamente cualquier intento de diálogo, primero estaban las elecciones y habiendo posibilidades de que ARENA ganara, era factible aplicar en el futuro inmediato, la estrategia de guerra total.

A finales de Agosto, en un intento por reactivar el Plan de Paz de Esquipulas II, el gobierno costarricense invitó al FMLN-FDR (conjuntamente con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG) a analizar las perspectivas de diálogo. Simultáneamente en El Salvador se pretendió crear el Frente Interno para la Paz con la mayoría de los partidos políticos reconocidos oficialmente, claro, con la excepción de ARENA. El vocero gubernamental criticaba a la insurgencia de haber aceptado la invitación del presidente Oscar Arias, ya que "con ello desarticula los esfuerzos negociadores internos" (41); refiriéndose al Frente Interno para la Paz, concluyó que Esquipulas II sólo establecía negociaciones con grupos no armados, y el FMLN no entraba en este rango.

A su vez, la Iglesia salvadoreña presentó un documento base para el diálogo, apoyado por 62 organizaciones laborales y sociales, para buscar la solución al conflicto bélico. Rivera y Damas declaró que una negociación suponía "dar y ceder" (42), ya

que el documento contenía la tesis a favor de una solución política a través de un diálogo, la constitución de un gobierno participativo, el fin de la guerra y el cumplimiento real de los Acuerdos de Esquipulas II; y propuso realizar un debate nacional.

Los principales objetivos del debate fueron: (43)

1.- Lograr un amplio consenso sobre aquellos puntos mínimamente suficientes para favorecer un pronto cese del conflicto armado y buscar la forma de ir removiendo las causas que le dieron origen.

2.- Favorecer un nuevo ambiente de diálogo, no polarizado, entre las distintas fuerzas sociales, para que se generara un nuevo estilo de concertación social.

3.- Presentar el fruto de este esfuerzo como una colaboración para que el gobierno, la Fuerza Armada y los partidos políticos, por una parte, y el FMLN-FDR, por otra, dieran los pasos necesarios para llegar a un pronto acuerdo que pusiera fin a la guerra.

El arzobispo también incitó a la derecha a participar en el debate, pero esta se negó.

Dentro de la XVIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, realizada en la ciudad de San Salvador el 14 de Noviembre de 1988, el Secretario General, Baena Soares, aseguró que "hay que regresar al diálogo como única vía de solución de las disputas y vía de arreglo pacífico de las controversias" (44), a este discurso prosiguió el de Duarte, reiterando un llamado al FMLN para que depusiera las armas y se incorporara al proceso cívico, y pidió a la OEA su respaldo para llevar a cabo una próxima cumbre

centroamericana, la cual no tuvo eco.

Participaron también el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, y el Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Elliot Abrahms, acompañado del embajador estadounidense en San Salvador, William Walker, representando a los Estados Unidos, ofrecieron una nueva diplomacia en la que los Estados Democráticos debían abogar por la democracia y presionar a sus vecinos no democráticos. También se presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunció la lamentable represión de la vigencia de la libertad de la vida en El Salvador (y Guatemala), aseguró que el problema seguía siendo la guerra interna y fratricida, e igualmente subrayó el rol jugado en la violencia política por las fuerzas de extrema derecha a través de los escuadrones de la muerte.

Por otro lado, la Iglesia Católica iniciaba la Reunión del Secretariado Episcopal de América Central, con la participación de obispos de los 7 países centroamericanos. Sus propuestas: el cese de la injerencia extranjera y el pronunciamiento a favor de cualquier iniciativa que diera un nuevo impulso a Esquipulas II.

Termina otro año y se acercaba también el fin del periodo presidencial de Duarte. Otro de los últimos intentos de paz de la presidencia duartista se reflejó en Febrero de 1989, con la reunión de presidentes centroamericanos en Tesoro Beach, Costa del Sol, El Salvador. (Esta reunión ya había sido aplazada anteriormente en seis ocasiones y desde 1986 los presidentes del área habían celebrado tres encuentros similares). Se habló de solucionar los

problemas internos de cada país, El Salvador se comprometió a cumplir con los compromisos de reforma política y garantías de libertad supervisados por la Comisión de Reconciliación Nacional.

El último diálogo de la presidencia de Duarte, fue realizado en Oaxtepec, México, el 20 y 21 de Febrero de 1989, entre el FMLN y los partidos oficiales salvadoreños. El tema: la propuesta del FMLN de prorrogar las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en Marzo, comprometiéndose a respetar sus resultados si los comicios se posponían, para garantizar un nuevo marco electoral, y sobre todo, este punto delinearía el camino para lograr la paz; respetarían a los alcaldes si estos se desvinculaban de los planes del ejército; decretarían una tregua unilateral y, llamaría a toda su base social a participar en la actividad electoral, (respaldando la plataforma y los candidatos de la Convergencia Democrática). En esta ocasión Duarte argumentó que la propuesta resultaba anticonstitucional. De alguna manera tenía razón, ya que si se hubiera aceptado la propuesta, implicaría hacer modificaciones en el texto constitucional para hacer válidos los comicios.

El hecho de reunir a un vasto grupo entre opositores, líderes de la Comisión Político-Diplomática del FMLN (los comandantes, Ana Guadalupe Martínez y Salvador Samayoa), del FDR (Shafick Handal y Roberto Roca), representantes de los principales partidos salvadoreños (ARENA, con el candidato presidencial Alfredo Cristiani; Guillermo Manuel Ungo de la Convergencia Democrática, coalición electoral de MNR y Movimiento Popular Social Cristiano,

ambos aliados de la insurgencia; el Partido Social Demócrata; Movimiento Auténtico Socialcristiano, MAC, al frente de Julio Adolfo Rey Prendes; el Partido Acción Renovadora, PAR, Hugo Barrera de la ultraderechista coalición Unidad Popular; el Partido Unidad Democrática Nacionalista UDN con Mario Aguiñada), daban la esperanza de que el encuentro además de interesante, podría crear resultados positivos.

Termina el periodo presidencial de Duarte y la paz siguió siendo inalcanzable, la presidencia de Alfredo Cristiani no vislumbraba ningún camino, pero con otro espíritu el pueblo pensaba de antemano: "con Cristiani se aleja pero no se trunca el proceso de paz" (45).

Todo este cúmulo de procesos legales para alcanzar la paz, ha tenido que fracasar, primero, por la existencia de dos proyectos políticos con sus respectivas alianzas de fuerzas sociopolíticas que se enfrentan en el terreno político y en el militar y que condiciona que las formas de solución estén estrechamente ligadas a la correlación de fuerzas en lo interno e internacional. El problema es complejo debido a la gran polarización político-ideológica de la sociedad salvadoreña, y a lo irreconciliable que son los dos proyectos políticos confrontados: el popular y el contrainsurgente. En segundo lugar, existe una falta de voluntad política por parte del gobierno norteamericano para impulsar una negociación real. Todo esto en el marco de un proceso de mayor involucramiento norteamericano en el conflicto, con la respectiva enagenación de la soberanía nacional.

Las tareas a las que Duarte se enfrentó al inicio de la magistratura no fueron realizadas. Quiso reactivar la economía con la creación de los llamados "paquetes económicos" y creó la Oficina de Reactivación Económica para resolver las necesidades, principalmente en la industria textil, apoyando la producción del algodón, que representaba el segundo rubro de captación de divisas del país (46). No hubo avances significativos debido a una recesión acentuada, especialmente en el sector agropecuario.

El primer Plan de Estabilización y Reactivación Económica, PERE, surgió de la necesidad de hacer de la base económica nacional una fuente de financiamiento interno con miras a seguir sosteniendo la guerra. Sus cuatro áreas a desarrollar, fiscal, cambiaria, crediticia y precios y salarios, se sustentaron en la necesidad de reducir el gasto público y aumentar los ingresos estatales.

También fue necesario contrarrestar la inflación, para ello el paquete económico incluía romper con el congelamiento de salarios, aplicado años atrás, y elevarlos, a pesar de ello, los precios de los bienes y servicios se elevaron también, disminuyendo el poder adquisitivo. Entre otras medidas, se devaluó la moneda nacional: el colón, en un 100% y lo único que Duarte logró, fue perder el apoyo de grandes sectores de la población.

Resulta obvio que las disposiciones gubernamentales estaban orientadas al fortalecimiento de sus recursos para el financiamiento del proyecto contrainsurgente. Pero los sectores populares en una demostración de su fortaleza moral para la defensa de sus intereses, plantearon una lucha de carácter permanente

contra las disposiciones del régimen, ya que es elemental reconocer que la clase trabajadora es la que absorbe el costo financiero de la guerra, además de ser la fuente que nutre a través del reclutamiento forsozo, las filas del ejército gubernamental.

Los trabajadores más avanzados se organizaron en la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños, (UNTS, creada en 1986) orientando el accionar reivindicativo a los trabajadores del campo y de la ciudad. Es importante destacar que la UNTS representó una alternativa viable para los trabajadores en su afán de conquista, sostuvo una fuerte oposición contra el régimen de Duarte y condenó los "paquetes económicos". Llevaron a cabo una marcha en Febrero de 1986 exigiendo la derogación de las medidas del paquete, las cuales les afectaban directamente, entre ellas; el incremento al precio de los combustibles, a los insumos agrícolas, a los materiales de construcción, a los productos de la canasta básica, medicinas y servicios públicos. Muchos de los campesinos participantes, pertenecían a las cooperativas de la reforma agraria, las que se suponía componían la base social del gobierno de Duarte. La manifestación logró reunir a cerca de 50,000 salvadoreños (47).

Duarte aplicó un "segundo paquete" que incluyó el llamado "impuesto de guerra" o de defensa de la soberanía nacional, las modificaciones a los impuestos directos constituyeron un punto álgido en el conflicto interburgués, a tal grado que los sectores oligárquicos se ampararon ante la Corte Suprema de Justicia para neutralizar la amenaza financiera, que para ellos significaba la

aplicación de dicho impuesto. Incluso la iniciativa privada llevó a cabo un paro empresarial en 1987, como manifestación en contra de la política económica implantada (48).

Bajo el nuevo enfoque norteamericano en la concepción de países de capitalismo dependiente y subdesarrollado, en El Salvador se estructuró e implementó el programa "Unidos para Reconstruir", tratando de involucrar a los distintos sectores de la población en la realización de diversas actividades de contrainsurgencia. En su desarrollo, el ejército se presentaba a la población en diversas ciudades del país como institución defensora de los intereses de las mismas. El plan también asignó responsabilidades a todas las organizaciones gubernamentales y del sector privado para realizar tareas en el campo económico, social y político-ideológico con el propósito de desprestigiar al FMLN (49).

En suma, lejos de pretender juzgar la magistratura de Duarte, lo negativo y positivo resalta a simple vista. Si bien, por un lado no se alcanzó la paz, no se dió fin a la guerra civil, ni se pudo terminar con la violación a los derechos humanos; no se pudo comenzar un plan económico ni un programa de acción para sacar a la población mayoritaria de la miseria en que vive El Salvador, ni pudo debilitarse a la oligarquía; una respuesta tentativa podría ser que existió (y existe) una situación muy difícil y compleja en este país. Para ello, es necesario tomar en cuenta algunos factores que complementan un fracaso; la densidad demográfica en relación a la escasez de recursos disponibles, el desarrollo cultural de la población y el alto índice de analfabetismo, el bajo grado de

desarrollo y de acumulación de capital, y hay que insistir en la dominación y explotación histórica que una muy pequeña parte de la población ha ejercido.

Por otro lado, económicamente quizá las medidas implementadas fueron necesarias aunque trajeran consigo el descontento popular, pero Duarte trató de resistir a la devaluación del colón, la moneda nacional, y no aceptar medidas estabilizadoras, en ambas medidas cedió algo, pero también resistió. Por último, trató de abrir los canales hacia el diálogo, los abrió, y aunque no tuvo éxito, tampoco puede hablarse de que esos canales estén cerrados.

En general, la carrera política de Duarte fue larga y, a su manera, fructífera pero también trágica. Víctima de cáncer, muere el 23 de Febrero de 1990, aún vió parte de la realidad en su país, que él no pudo controlar. En este marco nacional, tomaría posesión de la presidencia Alfredo Cristiani, se enfrentaría a los mismos problemas, y quizá más profundos, lo que resultaba distinto era que la política sería manejada ahora por la ultraderecha, por una ideología con características peculiares.

2.4 FMLN-FDR. Principios para establecer la paz.

El FMLN-FDR respondió afirmativamente a la propuesta de Duarte en La Palma: "la invitación del presidente constituye la respuesta a la proposición del diálogo que le hicimos llegar en carta privada con fecha 18 de Mayo de 1984, cursada por intermedio de Monseñor Rivera y Damas y reiterada en Junio pasado con el reverendo Jesse Jackson. En tal sentido, partiendo de la disposición de la búsqueda

de una solución política negociada al conflicto interno de El Salvador, expresada reiteradamente por nuestros frentes y demandada por nuestro pueblo y la comunidad internacional, el FMLN y FDR hacen del conocimiento público su aceptación a la reunión en el lugar fecha y hora propuestos" (50). (Jesse Jackson había visitado El Salvador el 26 de Junio de 1984, para incitar al diálogo y entregar a Duarte la propuesta del FMLN-FDR que consistía en 4 puntos: 1)cese de fuego, 2) discusión en San Salvador, 3) aceptar los 21 puntos de Contadora y 4) diálogo sin condiciones)

La propuesta del FMLN-FDR para la reunión de La Palma, dado a conocer por Radio Venceremos, abogó por el cumplimiento de una serie de demandas populares, entre otras: juicio y deducción de responsabilidades por los asesinos de Monseñor Romero, las monjas norteamericanas (51), los líderes asesinados del FDR (52), los periodistas extranjeros victimados en El Salvador, y en general, esclarecimiento de todos los crímenes políticos; libertad a los presos políticos; cese de los bombardeos a la población civil; retiro de los asesores y ayuda militar estadounidense; respeto a la organización, continuidad y profundización de la reforma agraria y reducción del sueldo del presidente, diputados y funcionarios de mayor jerarquía (53).

Para el FMLN-FDR la reunión de La Palma tuvo un efecto de reconocimiento muy importante. No solamente, el que por primera vez fuera reconocido como interlocutor válido y sus más importantes dirigentes fueran entrevistados por los medios de comunicación, (radio y televisión, principalmente) sino que en el extranjero se

conociera muy bien, que eran ellos los que desde tiempo atrás habían lanzado esa iniciativa. Repetidamente Radio Venceremos transmitió como una fuente de noticias perfectamente válida, a la par de agencias internacionales. Por parte del FDR participaron en el diálogo Guillermo Ungo y Rubén Zamora, junto a Fermán Cienfuegos, Facundo Guardado y Nidia Díaz, todos comandantes del FMLN.

En la segunda reunión de Ayagualo, el FMLN-FDR presentó su "Propuesta Global para la Solución Política Negociada y Paz" planteando la necesidad de abocarse integralmente al problema de la guerra, señalando que no había soluciones simples. Rechazaron cualquier solución basada en el sometimiento de las organizaciones populares a los poderes establecidos, enfatizando que no podría ser absoluto el ordenamiento constitucional como marco de la solución política (54).

A pesar de la frustrada reunión, posteriormente hubieron varios intentos para reanudar el diálogo. El 30 de Enero de 1985, el FMLN-FDR dirigió una carta abierta a Duarte en la cual señaló que los frentes consideraban la continuación o suspensión del diálogo como responsabilidad del gobierno, y, que "la oposición beligerante a una solución política por parte de la oligarquía y de los sectores más reaccionarios del ejército era real y era la consecuencia lógica de la resistencia que estos sectores habían hecho siempre al cambio político y social de sus injustos privilegios" (55).

Cuando Duarte incitó a realizar diálogos simultáneos entre los

gobiernos de El Salvador y Nicaragua, con los guerrilleros de ambos países, en Marzo de 1986, se habló de que se trataba de una propuesta de diálogo tácito, y el mismo Monseñor Rivera y Damas afirmaba que el gobierno salvadoreño sabía que "era muy difícil que se diera esta situación, por que el gobierno sandinista ha reiterado constantemente que no dialogará con los rebeldes nicaragüenses sino con su jefe, el presidente de los Estados Unidos" (56).

Una propuesta más del FMLN-FDR se dió a conocer el 10 de Julio de 1986, y los principales puntos sobresalientes fueron: participar en un diálogo nacional con todas las fuerzas y sectores del país y asumir compromisos en el marco del proyecto político que surgiera de diálogo nacional.

Como bases de compromiso propusieron:

- 1.- Solución entre salvadoreños.
- 2.- Amplitud y pluralismo en el gobierno.
- 3.- Cese de fuego.
- 4.- Régimen económico justo.
- 5.- Democracia y rescate de los derechos humanos.
- 6.- Política exterior de paz.

Lamentablemente no se llegó a nada concreto, unicamente se acrecentaron las demandas en cada bando, quizá por que a medida que avanzaba la guerra, crecía también la demanda del pueblo inmerso en ella.

El 26 de Mayo de 1987, el FMLN-FDR publicó una doble propuesta dirigida al Presidente Duarte y al alto mando de la Fuerza Armada.

Fue la propuesta de un "Acuerdo Trascendental para la Humanización y la Reducción del Impacto Económico, Social y Político de la Guerra". Lo formaron de 18 puntos que resumidos son los siguientes:

- suspensión de la guerra aérea, del uso de armas de artillería de largo alcance, y uso de minas de pateo y las trampas "cazabobos" (57);

- suspensión por el FMLN, del sabotaje económico; cese a la destrucción de viviendas y cultivos y suspensión de la despoblación para permitir la repoblación;

- libertad para todos los presos del movimiento popular y gremial y cese a la persecución, captura y práctica de desaparecidos; y,

- suspensión por ambas partes del reclutamiento forzoso y cese de las operaciones de guerra psicológica que han infundido terror y desinformación a la población.

A finales de Noviembre de 1987, Guillermo Ungo, líder del FDR, al regresar del exilio, anunció que entregaría al Arzobispo Arturo Rivera y Damas una nueva propuesta del FMLN-FDR para reiniciar el diálogo en Diciembre en la Ciudad de México. Tres días después, los dirigentes del FDR fueron amenazados de muerte por los escuadrones de la muerte. (En el mismo mes se cometió otro asesinato de un delegado de la gubernamental Comisión de los Derechos Humanos, Joaquín Cárdenas Vargas). Por lo que respecta al regreso de los líderes del FDR, el vicepresidente de El Salvador, Rodolfo Castillo Claramount declaró que "la reciente entrada de líderes del FDR al país había constituido un claro reconocimiento

al espacio político y al proceso democrático" (58).

Una nueva propuesta de la insurgencia salvadoreña fue la reunión para el 22 de Febrero de 1988, con la participación de observadores de los diversos sectores políticos y sociales del país y de los grupos Contadora y de Apoyo, a fin de avanzar hacia resultados concretos, pero fue rechazada a causa de la campaña electoral que en ese momento se realizaba para la Asamblea Legislativa de Marzo próximo.

Cuando Duarte invitó a los partidos oficiales a discutir el diálogo, simultáneamente el FMLN propuso una nueva ronda de conversaciones de paz en Mayo de 1988, con el gobierno, la Asamblea Legislativa y las Fuerzas Armadas, en la que sería mediador el arzobispo Rivera y Damas. Se marcó así la primera ocasión en que la guerrilla convocaba a una reunión junto con los tres grupos antes mencionados. Ambas partes parecían estar dispuestas a negociar, no obstante el fracaso se debió a la intransigencia de los dos bandos.

Posteriormente, en Octubre, comenzó una gira diplomática de la insurgencia salvadoreña por algunos países de América Latina. Primero se entrevistaron con el presidente de Costa Rica, reiterando su disposición al diálogo, pero afirmando también que no depondrían las armas ni se incorporarían a la vida institucional del país como pretendía el gobierno. Después, el presidente, Arturo Borja de Ecuador, recibió a la delegación del FMLN quienes portaban ahora la bandera de diálogo-negociación, y que fue planteada luego también en Panamá el 1 de Noviembre. En Panamá, Rivera y Damas

entregó a los comandantes del FMLN las conclusiones del debate nacional convocado por la Iglesia.

Estas giras sólo reiteraron el apoyo a concretar la paz y permitieron extender el conocimiento, a la comunidad latinoamericana, de lo que estaba viviendo El Salvador. La Iglesia pidió al jefe del estado mayor de las Fuerzas Armadas (que en ese momento tomaba el cargo René Emilio Ponce substituyendo al general Adolfo Blandón) un nuevo diálogo entre ambas partes. Los esfuerzos no se debilitaron, el pueblo entero se congregó en la "gran marcha por la paz", cuyo contexto era un diálogo permanente, y que coincidió con la realización de la XVIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

El año de 1989 marcaría una nueva esperanza con la que el FMLN, a través de la Iglesia, proponía una nueva propuesta de paz. Se refería a postergar los comicios que para Marzo debían efectuarse. Según el canciller salvadoreño, Ricardo Acevedo, se trataba de adecuar a la vía institucional la oferta, por ello aún no estaba descartada, pero se preparaba una contrapropuesta para buscar el concenso. Se preparó una reunión con los partidos oficiales en la Asamblea Legislativa, irónicamente, estuvieron ausentes el PDC y los representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. De hecho eran los principales actores que debían estar ahí. El FMLN estuvo dispuesto a recibir la contrapropuesta pero enfatizó "que la Constitución fue establecida sobre una nación dividida, mientras se escalaba la guerra" y que "quienes usan la Constitución como obstáculo para la paz no se les

puede reconocer como autoridad respetable para decidir el destino de la patria, por que sólo están interesados en afianzarse el gobierno mediante elecciones fraudulentas, para continuar una guerra cuyo costo en dólares no pagan ellos, pero los enriquece" (59). Esto lo decían porque, por un lado, su propuesta podría manejarse como anticonstitucional y, por otro, porque ARENA presentó un proyecto de ley de amnistía transitoria para los comandantes del FMLN que asistieran a la reunión. La justificación de la propuesta del FMLN era que "no podía prepararse en un plazo estrecho para aportar su esfuerzo en el terreno electoral en favor de la paz. No tener en cuenta esto es equivalente a pedir nuestra rendición incondicional, lo que no responde con la correlación de fuerzas en el conflicto, ni con la inmediata perspectiva de desarrollo de la situación que en nada favorece al gobierno y la la Fuerza Armada" (60). El grado de importancia que esta propuesta tuvo en su momento, se plasma en declaraciones del vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Charles Redman, quien dijo que George Bush (presidente desde Enero) estaba considerando la iniciativa de paz del FMLN. Este fue el reconocimiento de más alto rango que haya hecho público el gobierno estadounidense (61).

La propuesta del FMLN puede considerarse hasta aquí de tipo político, pero la negociación de tipo militar que considera un cese del fuego se refleja sobre la base de tres requisitos:

- 1.- Juicio a los responsables de los asesinatos de tres monjas estadounidenses, del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero y de la dirección del FDR ocurridos en 1980.

2.- Disolución de los cuerpos de seguridad militar e integración de sus funciones a organismos civiles, dependientes del Ministerio del Interior.

3.- Regreso del número de efectivos de las Fuerzas Armadas al nivel de 1980 (de los 50 mil a cerca de 34 mil).

Toda esperanza se vino abajo en un sólo día por que el 9 de Febrero, Duarte rechazó la propuesta de paz de la insurgencia e incluso reiteró que no la incluiría en la agenda de trabajo de la reunión proxima de los países centroamericanos, y de hecho así fue. En la reunión cumbre de países centroamericanos del 13 y 14 de Febrero, se habló de derechos humanos y democracia, pero enfatizó más sobre la situación de Nicaragua (además que días despúes se realizarían, en Marzo, los comicios que dieron el triunfo a Alfredo Cristiani del partido ARENA)

En suma, el camino hacia la paz, en esta etapa, posiblemente puede plantearse en el centro de un concenso nacional que llevara a la recomposición del gobierno, incorporando a él a todos los sectores nacionales que estuvieran a favor de la solución política. Junto con la recomposición del gobierno vendría el cese de fuego, que no significaría el desarme del FMLN, pero se podría impulsar el proceso democrático del país. Los planteamientos establecidos en las propuestas de paz ponen de manifiesto que el proyecto democrático revolucionario había reducido sus exigencias, desradicalizando algunos planteamientos, para llegar a lo que puede caracterizarse como un programa mínimo, con un criterio de mayor pluralidad, para poder construir ese concenso nacional con el mayor

número de sectores sociales.

Es evidente la enorme brecha que separan las posiciones entre ambas partes, así como la poderosa fuerza que se opone a la negociación política. Sin embargo, el diálogo se hace necesario para acercar a las partes, sentarlas en la misma mesa, aunque sólo sea, como ha quedado demostrado, para conocer sus planteamientos. Lo más importante, no es ver el relativo fracaso, sino la búsqueda de la continuidad del diálogo para que se consoliden los mecanismos y el contenido de los acuerdos se respete y sea acumulativo.

La Iglesia ha demostrado no claudicar y sí ha permitido la reanudación del diálogo en varias ocasiones. La paz ya no es ahora acordada entre dos fuerzas beligerantes, entre la guerrilla y el gobierno, ha pasado a ser una reivindicación de todos los sectores sociales que la claman. Es significativo en referencia a este punto, los múltiples foros realizados, tales como del "Foro Nacional por la Supervivencia y Paz del Pueblo Salvadoreño" organizado por la UNTS y la Federación Nacional de la Pequeña Empresa (FENAPEZ) los días 3, 4, y 5 de Abril de 1986, así como el "Primer Foro Nacional por la Paz", convocada por organizaciones gremiales, universidades, partidos políticos, organismos humanitarios, asociaciones culturales, etc., los días 5 y 6 de Febrero de 1988, cuyo único objetivo común es hacer realidad los planteamientos de paz, decretando que ambas partes cesen las acciones bélicas. Posteriormente la misma línea seguiría alentando los esfuerzos de paz.

Concretándose el cese el fuego deberá realizarse un referendun

nacional para permitir a la sociedad salvadoreña si quiere la guerra o la solución negociada, pero que esto lo decida únicamente el pueblo mismo. La continuidad de diálogo también se haría patente durante el gobierno de Cristiani, más que nada por una necesidad, porque ya se ha escrito aquí, que la facción a la que pertenece Cristiani estaba totalmente en contra de un diálogo con la guerrilla, no obstante, la continuidad de reunir a los dos bandos sería mejor que aceptar el fracaso de conversaciones.

2.5 Desarrollo militar de la guerra civil.

Básicamente el desarrollo de la guerra en El Salvador de este período, ha comprendido las operaciones militares de uno y otro bando, que incluyen la estrategia, armamento, reclutamiento, etc., factores que determinarán las posibles victorias de cada uno. Cuando se hace mención al ejército salvadoreño, se estará refiriendo a la esfera gubernamental, que a pesar de las divisiones internas de la milicia, se apegan a las órdenes de Napoleón Duarte; los términos de guerrilla, rebeldes o insurgencia, se referirán a las actividades del FMLN. El FDR solamente sigue una línea política, aunque para cuestiones de diplomacia, el FDR-FMLN forman un solo grupo.

Al término de la reunión en La Palma, el ejército salvadoreño inició una ofensiva de gran escala en el Departamento de Morazán: el "Torola 4", operativo que contó con nueve batallones élite y desembarcos de helicópteros. Su duración aproximada de un mes, fue dirigida por el asesor norteamericano conocido como Steele. El

objetivo: destruir a Radio Venceremos, aniquilar la comandancia del Ejército Revolucionario del Pueblo y desestabilizar las escuelas políticas en Morazán, donde los guerrilleros recibían educación y entrenamiento. Esta operación fracasó cuando el FMLN provocó importantes bajas que incluyeron a altos jefes militares (Domingo Monterrosa y el mayor Armando Azmitia Melara, comandante del batallón de Atlacatl; el Mayor Rivas, comandante del centro de entrenamiento de San Francisco Gotera; y, Herson Calito, responsable militar del Departamento de Morazán), representando un golpe muy duro para los intereses estadounidenses.

El incremento de las acciones militares por los dos bandos, siguen desarrollándose a lo largo de 1985, pero ya afirmando algunas características que predominarán hasta la fecha. El FMLN disemina sus operaciones en trece de los catorce departamentos, valiéndose de emboscadas, sabotajes, y fundamentalmente del uso de explosivos. Pero lo que marca un salto cualitativo en la actuación de la guerrilla, es la realización de operativos en las ciudades, principalmente en San Salvador, representando la perspectiva de un repunte del movimiento popular urbano, es decir, se trabaja en torno a "inyectar un nuevo impulso a la lucha popular a fin de que cleve su fortaleza al nivel que ya en ese momento tiene la lucha militar" (62).

El ejército salvadoreño inició a principio de año el operativo "Torola 5", formado por cuatro batallones de soldados y una flota de helicópteros y aviones que sobrevolaron y bombardearon la zona de Morazán. Sin duda hubieron muertes de civiles inocentes, por que

el ejército utilizó los bombardeos para amedrentar a la población. "Torola 5" corrió la misma suerte que el anterior.

Otro operativo fue desplegado al mismo tiempo que se realizaron las elecciones en el mismo año. El ejército salvadoreño anunció el operativo militar "Libertad" para garantizar su buena marcha. Consistió en una serie de invasiones por todo el territorio nacional, para impedir la concentración de la guerrilla. En este marco, encajó una segunda fase de "Torola 5". Simultáneamente el FMLN realizó acciones de sabotaje, por un lado, al sistema eléctrico que dejó a once de los catorce departamentos del país sin electricidad, y por otro, un paro de transporte que desorganizó gravemente la economía nacional. El presidente Duarte sólo concentraba su interés en las elecciones, lo demás pasaba a segundo término.

El Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas, COPREFA, se encargó de emitir el desarrollo de la guerra a todo el país, sin embargo, las cifras de los golpes y bajas que recibía el ejército, eran manipuladas para evitar un desgaste moral entre soldados y el pueblo en general, trataba de hacer creer a la población que la guerrilla estaba aniquilada, (actualmente sigue la misma línea). A partir de 1986, el ejército salvadoreño inició la realización de operativos de mediana y gran envergadura efectuados de manera simultánea. La táctica manejada en ellos fue la saturación de fuerzas en un punto determinado, para lo cual se utilizó un enorme número de efectivos, acompañada del patrullaje en pequeñas unidades, y del uso sistemático de la Fuerza Aérea para combatir

o para transportar armas y refuerzos. Así mismo, las operaciones se fueron caracterizando por la presencia de grandes cantidades de tropas como de las fuerzas especiales, batallones élite y fuerzas paramilitares. El uso de la aviación, si bien ya estaba presente en anteriores operativos, adquiere una importancia fundamental.

A principio de 1986, el gobierno lanzó un plan llamado "Unidos para Reconstruir" con el objeto de ganarse al pueblo, pero suponía que los ataques y patrullajes estaban orientados para desalojar a la guerrilla de las zonas en conflicto. Así, en esas zonas la guerrilla perdería el contacto con la población y daría lugar al "trabajo político" del ejército. El plan fracasó por que no se tomó en cuenta el avanzado grado de organización de la población y la capacidad de la guerrilla y de las milicias clandestinas.

Una característica importante es que el plan fue puramente defensivo, es decir, se destinó a enfrentar la retaguardia del FMLN, con la esperanza de desorganizar a la guerrilla y hasta de desalojarla totalmente de todas sus zonas. El plan incluyó el comienzo de la "Operación Fénix" aplicada en Enero en el volcán de Guazapa, (5,000 hombres movilizados, tres batallones de reacción inmediata, entrenados en los Estados Unidos, una brigada, dos destacamentos, Marina y Fuerza Aérea y artillería. Estas cifras confirman que los despliegues se realizan por contingentes cada vez más numerosos), y fue seguida por la "Operación Carlos", de Febrero, en Morazán (4,000 hombres, se suspende el 13 de Febrero), "Chávez Carreño" en Chalatenango (2,500 hombres), "Héroes de Joateca, en Marzo, en Morazán (2,000 hombres) y "Napoleón Herson

Calito", en Mayo, en el occidente de Usulután y oriente en San Vicente, (3,000 hombres) (63). Todas estas operaciones fracasaron, aunque es una afirmación relativa si se toma en cuenta que hubo muchos civiles muertos y daños materiales.

A nivel estratégico, los planes de contrainsurgencia, es decir, los aplicados por el ejército salvadoreño y orientados por los Estados Unidos, contemplaron el desarrollo de tres fases (64):

1.- Realización de operaciones de limpieza que buscaron no sólo el desalojo de las fuerzas del FMLN, sino también de la población civil ubicada en zonas donde se realizaban los operativos.

2.- Formación de unidades de Defensa Civil que permitiría la consolidación de las posiciones del ejército, tarea que se realizó conjuntamente con patrullajes permanentes cuyo objetivo fue impedir el reagrupamiento de la guerrilla.

3.- Inicio de la reconstrucción de la infraestructura dañada o destruida y el repoblamiento de las zonas con civiles simpatizantes con el gobierno.

Referente a este último punto se aplicó el programa "Unidad de la Repoblación" que unificó a diferentes grupos de desplazados para ser reubicados en aldeas estratégicas en diferentes sitios del país. Realmente ello significó un desplazamiento forzoso, con lo cual se buscaba restarle a la guerrilla la base social de apoyo de sustento, así como cortarle sus canales de apoyo logístico.

Ante la aplicación de medidas económicas dictadas por Duzrte, el FMLN desarrolló el operativo "Muerte al Paquete Duartista. Viva

la Lucha de los Trabajadores", su táctica de concentrar y desconcentrar rápidamente sus fuerzas, le permitió estructurar ataques sistemáticos y continuos a las posiciones del ejército. Tal situación continuó durante todo el año, realizando ataques de mediana envergadura, aún en zonas donde el ejército estaba muy activo (como en el Cerro de Guazapa).

A principios de 1987 el ejército puso fin a la operación contrainsurgente de Morazán, pues además de las bajas sufridas, habían perdido material bélico. Ya como una continuidad, los enfrentamientos no cesaron, sino al contrario, nuevos blancos se incluyeron en las acciones militares, entre otros, el ataque a la emisora del Arzobispado, en Abril, o los enfrentamientos entre guerrilla y ejército en el Departamento de Usulután, donde el FMLN atacó una compañía del batallón Atonal, por mencionar sólo algunos.

En Octubre, cerca de medio millón de refugiados (65) regresaban a El Salvador, bajo la operación "Volvamos a Casa" que el gobierno salvadoreño negoció con Honduras en un ambiente muy difícil, puesto que se temía el que los refugiados ocuparan los Departamentos de Chalatenango, Usulután, Cabañas y Morazán, lugares donde el FMLN mantenía su influencia.

En otro orden, dentro del Plan de Esquipulas II y bajo los compromisos de reconciliación, pacificación, desarmamentización y diálogo interno que el documento obligaba a los gobiernos de la zona, regresaron del exilio los dirigentes del PDR, Rubén Zamora, Guillermo Manuel Ungo y Héctor Oqueli (procedentes de México). El FMLN dió un aval oficial en su regreso, al mismo tiempo que decretó

una tregua nacional de 100 horas. El gobierno advirtió entonces que "cualquiera de los personajes que vuelva del exilio puede ser enjuiciado como cómplice de actividades militares" (66), mientras que la Iglesia Católica los instó a actuar de manera sincera y favorable, pues durante su recibimiento, habían declarado que regresaban para integrarse a la vida política de su país. Los líderes no escaparon a las amenazas de muerte, de los escuadrones de la muerte.

Entre las actividades del FMLN durante Diciembre de 1987, destaca la realizada en la finca de Jucuarán, Departamento de Usulután, contra efectivos paramilitares, enmarcada dentro de la campaña militar "Por la Defensa de los Intereses de los Trabajadores", que iniciaron los rebeldes con la llegada de la temporada de recolección de café a nivel nacional (67). Los resultados en cuanto a victorias, según un balance que dió a conocer la Comandancia General del FMLN, respondía al logro de una mayor integridad en la guerra revolucionaria, acertando en la combinación de la lucha militar con la lucha política y, principalmente, con el movimiento de masas. Basa su estrategia en la integración de los sectores populares a la guerra, en todas sus formas posibles (68).

Las estadísticas dan cuenta de esta afirmación dentro del contenido del balance: durante 1987 las fuerzas rebeldes provocaron al ejército cerca de 9 mil bajas, entre muertos y heridos, destruyeron o dejaron averiados 225 medios terrestres entre camiones de transporte de tropa y blindados, además de 25 medios

aéreos; ejecutaron dos operaciones de gran magnitud, una contra el cuartel de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango y otra contra el cuartel de destacamento militar No.4 de Morazán, y decretaron 7 paros de transporte. En total llevaron a cabo 3 mil 200 operaciones de pequeña, mediana y gran trascendencia (69).

Como parte de una operación conjunta nacional, el FMLN, inició 1988 con una serie de sabotajes al sistema eléctrico y ataques a las posiciones contrainsurgentes de Cayaguana, en el Poy, zona fronteriza con Honduras, al mismo tiempo que el ejército anunció los operativos "Fénix 14" y el "Plan Kilovatio", aplicados en el Cerro de Guazapa, como seguimiento de los anteriores, cuyo objetivo se centró en contrarrestar los sabotajes. En ambos operativos participó el 70% del ejército, que contaba con un total de 52 mil efectivos (70). Paralelamente, tropas gubernamentales realizaban cateos y allanamientos en viviendas periféricas a la capital, quizá como acciones desesperadas contra la insurgencia.

Un golpe más contra el ejército representó el ataque al cuartel de la Sexta Brigada de Infantería en Usulután, caracterizada como una compleja operación militar, que incluyó la neutralización de posiciones castrenses de menor envergadura, el control de tres de las principales carreteras de la zona oriental del país y el sabotaje a las vías de comunicación. Esta acción representaba un salto de calidad, por que ya no era lógico que el gobierno insistiera que en las principales ciudades de los departamentos no pasara nada, que la guerra sólo llegaba a los montes. Quizá un factor en el éxito se debió a la mayor

participación de nuevas fuerzas, que como explica un comandante del FMLN "son fuerzas que constituyen agrupaciones móviles, que se dispersan actuando con eficiencia... como también la participación activa de las masas tanto en la fase de preparación como en la fase de ejecución del plan. Incluso se habla de la fabricación de armamento popular, como el caso de la rampa; la granada para fusil, un tipo perfeccionado de granada Molotov, etc., armas que aumentan considerablemente el poder de fuego" (71). El mismo comandante se refiere al avance militar "como la capacidad de articular en una amplia región" y como avance político, "la unidad permite al FMLN enlazar en un sólo sentido a todas sus categorías de fuerzas y ponerlas a combatir al unísono" (72).

Con motivo de las elecciones de Marzo, el FMLN llevó a cabo sabotajes, teniendo como objetivos militares, las casillas electorales, en esta ocasión paralizaron un 95% del transporte carretero. Cabe agregar que en éste momento se creó un grupo autodenominado Grupo Anticomunista Salvadoreño, GAS, para defender el derecho al sufragio (73), grupos que espontáneamente se formaban en contra de algún hecho significativo, pero que igualmente desaparecían. El ejército por su parte llevó a cabo el operativo "Caminante" para contrarrestar los paros y permitir los comicios, pero el FMLN dejaba claro la existencia de un doble poder presente en el país.

Tal parece que durante el periodo de elecciones, el gobierno únicamente se preocupó por darles seguimiento a las mismas, desatendiendo, relativamente, el accionar de la guerrilla. Un

recuento de Radio Venceremos estableció que las actividades revolucionarias, sólo durante el mes de Marzo, llegaron a 1484 acciones de sabotaje, 380 bajas entre muertos y heridos provocadas al ejército, destrucción de 12 camiones militares, 4 helicópteros, 41 redes telefónicas y numerosos postes y torres conductores de energía eléctrica (74).

A finales del primer semestre, la insurgencia revaluó su estrategia militar que daría paso a iniciar ataques importantes en la capital. Este replanteamiento pudo haber respondido, primero, por la grave ruptura al interior de la democracia cristiana y, segundo, por el vacío físico que Duarte dejaba al ausentarse del país para curarse un cáncer de hígado. El temor de llevar la guerra a la capital, también tuvo eco en la prensa norteamericana. El New York Times afirmaba: "actualmente los rebeldes tienen una gran cantidad de partidarios en los campos y una red clandestina en las ciudades que les permite realizar de cuando en cuando, importantes ataques militares, pero no parece disponer de suficiente apoyo para dirigir un levantamiento masivo, para mantener una prolongada campaña militar, y para aumentar significativamente el tamaño de su ejército, que se calcula entre 4 y 6.000 hombres" (75).

La afirmación anterior estuvo lejos de la verdad, por que el replanteamiento del FMLN se cumplía unos días después con el ataque a una base militar en las faldas del Volcán San Salvador, a sólo dos kilómetros de la capital. El ejército se movilizó con la operación contrainsurgente "Perquín 1" caracterizándose, además de tener como blanco al FMLN, por un programa político militar que

incluía dotación de víveres a los poblados conflictivos de Perquín, Joateca y Jocoatique (76), como forma de ganarse a la población.

El 13 de Septiembre, la guerrilla daba un considerable golpe, al atacar y destruir el cuartel más importante del ejército al norte del país, se trataba de la 4a. Brigada de Infantería de El Paraíso, en el Departamento de Chalatenango y del batallón élite Atlacatl, provocando cerca de 400 bajas entre muertos y heridos (77), y ocupó simultáneamente, cinco poblados en la zona oriental (Cacaopera, Guatajiagua, Sociedad, San Antonio del Mosco y San Isidro, todos del Departamento de Morazán). Anteriormente habían atacado el mismo sitio, (Dic.83 y Mar.87) pero con poco éxito. Esta vez el ataque lo realizaron cerca de 200 guerrilleros, utilizando fusilería y artillería más sofisticada, como piezas de mortero de 81mm (78). Los altos jefes militares restaron importancia a la magnitud del hecho al que calificaron de "ataque frustrado", incluso negaron que los guerrilleros hubiesen entrado, sin embargo, después se reconoció lo contrario. Las acciones del Paraíso, confirmaron la decisión rebelde de contrarrestar los planes castrenses y de mostrar a nivel táctico y de ejecución de operaciones lo que consideran su iniciativa estratégica. También demuestra la crisis de la estrategia militar del alto mando y la poca seguridad que las mismas tienen.

El debate suscitado sobre la estrategia contrainsurgente a raíz de estos acontecimientos, fue manejar la concepción de "guerra total" planteada por una fracción de la Fuerza Armada apoyada por sectores políticos y económicos derechistas en contraposición a la

estrategia de la aplicada guerra de baja intensidad. Este concepto de guerra total cambiaba completamente el enfoque político de la guerra salvadoreña, ya que se utilizaría indiscriminadamente la fuerza militar y paramilitar para destruir la real o potencial base social de la insurgencia en el campo y en las ciudades, sin importar el costo político interno e internacional que se tendría que pagar.

Las acciones guerrilleras se completaron con ataques y sabotajes sincronizados en el Departamento de la Unión, dentro de la maniobra "Vivan los próceres de la Independencia, fuera yanquis de nuestra patria" y con paros de transporte. El operativo contrainsurgente "Caminante" (con la movilización de 400 efectivos) seguía en curso y las calles de San Salvador fueron ocupadas por los elementos del batallón élite Belloso. Estos hechos iban convirtiendo a San Salvador en teatro de guerra, como lo demuestran algunos otros realizados posteriormente: atentado contra la sede en San Salvador de la Agencia Internacional para el Desarrollo (27 Oct 88), el ataque al Cuartel General de la Guardia Nacional (1 de Nov 88), ataques contra centros penales, alcaldías, locales de telecomunicaciones, etc. Según Joaquín Villalobos, miembro de la Comandancia del FMLN, tal postura correspondía a una nueva coyuntura de poder por alcanzar la victoria, por que "el nuevo modelo de dictadura en el Salvador implementado hace 8 años por la Administración Reagan fue desgastado, hasta alcanzar las fuerzas revolucionarias una situación de dualidad de poderes" (79), y donde los sabotajes al sistema económico "son una forma de vetar el

proyecto modernizador capitalista que los norteamericanos han pretendido desarrollar paralelo a la dictadura de nuevo tipo" (80).

El ejército llevó a cabo sus operaciones apoyado con los tres cuerpos de seguridad salvadoreña; la Policía de Hacienda (tiene a su cargo el control en el aeropuerto central y en los puestos fronterizos), Policía Oficial (patrulla las ciudades y controla a la población urbana mediante el uso de sistemas computarizados), y la Guardia Nacional (ejerce su función en áreas rurales no conflictivas y apoya al ejército en las zonas conflictivas), con el fin de incrementar los patrullajes y el control de vehículos y personas.

El principal motivo atribuible al malogro de las acciones del ejército en contra del FMLN, es la división, que como en otro tiempo, permanecían en su interior. Las discrepancias, básicamente giraban en torno a la conducción del conflicto bélico, algunos oficiales eran proclives a ARENA (a la guerra total) y otros a Napoleón Duarte, es decir, a los planes contrainsurgentes.

Las divisiones quedaron plasmadas con los cambios efectuados en Noviembre, con la sustitución del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Adolfo O. Blandón, en el cargo desde 1983, por el coronel René Emilio Ponce. El primero, fue creador, con la asesoría norteamericana, de la nueva táctica militar que pretendió anular las acciones del FMLN. Fue el responsable del Operativo "Fénix" en todas sus versiones, y ha sido fuertemente acusado de tener nexos con los escuadrones de la muerte y de ser responsable de la matanza de campesinos ocurrida el 21 de

Septiembre en el Departamento de San Vicente (81), el segundo, Emilio Ponce, quien también tenía contactos con los escuadrones de la muerte, desempeñó el cargo de Jefe de Operaciones de la Policía de Hacienda de 1980 a 1983, e incluso cuando Roberto D' Aubuisson fue acusado de planear un golpe de estado en 1980, este apeló a su favor al declararlo inocente.

Se hablaba también sobre la remoción de Eugenio Vides Casanova, Ministro de Defensa, (que sucedió durante la presidencia de Cristiani) justificando que los cambios "son normales e institucionales, donde los más jóvenes sustituyen a los mayores" (82), y continuaba, "toda organización de mandos tiende a mejorar el accionar militar, sobre todo, por la nueva mentalidad y espíritu de competencia que inyectan los militares que asumen el control de las brigadas y batallones en todo el territorio nacional" (83). Es posible que se estuviera refiriendo a un grupo de jóvenes militantes conocidos como la "tandona" (84), quienes al darse los cambios, ocuparon el 75% de los mandos claves de la institución castrense y que se caracterizan por tener una concepción "más dura" de la contrainsurgencia.

El último mes del año estaría marcado, además de los constantes combates, por el cerco militar en la Universidad de El Salvador como medida de generar el temor en la comunidad universitaria, y por la renuncia de alcaldes salvadoreños, quienes al autodefenderse del FMLN, por que el ejército es incapaz de hacerlo, tuvieron que evadir sus responsabilidades. Esta actitud se debe por que ante la pérdida de capacidad en el campo de

batalla, el ejército salvadoreño ha tenido que echar mano de otros recursos para contrarrestar a la insurgencia. En este sentido, ha elaborado importantes planes dentro de los cuales la participación activa de las alcaldías municipales es importante. Según el proyecto de ley para el reclutamiento de jóvenes para el ejército, presentado por la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa, las alcaldías debían proporcionar constantemente información al ejército sobre la población entre los 18 y 30 años, con el fin de que el instituto castrense pudiera elevar el número de sus efectivos, que llegaba según fuentes oficiales a los 54 mil, por tanto, la insurgencia les había exigido su renuncia (85). Hasta el 3 de Febrero habían renunciado cerca de 90 de 262 alc. ldes (86).

Por lo que respecta a estadísticas sobre las pérdidas económicas provocadas por el sabotaje a la energía eléctrica durante 1988, estas representaron más de 9 millones de dólares, según la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, y la destrucción de 2 mil estructuras eléctricas (87).

1989 representa un año importante para El Salvador en materia de elecciones, las presidenciales. Va a ser un año también de intensificación de la guerra, de nuevos preparativos técnicos y maniobras del accionar guerrillero; a nivel internacional, sucede la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, George Bush (Enero).

El FMLN preparó una insurrección popular con reclutamiento de jóvenes campesinos y acopio de armamento artesanal. Con la consigna "Vámonos al Topy", los guerrilleros de las montañas del norte de

El Salvador y de otras zonas, prepararon batallas consideradas como decisivas, durante el marco electoral (88). La insurgencia planteó postergar los comicios, cuya negativa fue manipulada mediante la presión del Ministro de Defensa, Vides Casanova, quien incluso amenazó con la idea de un posible golpe de estado: "si Duarte se queda un día más en la presidencia, fuera del orden constitucional, la Fuerza Armada tendría la obligación de deponerlo (89). Por esa fecha el FMLN decretaba una tregua unilateral al mismo tiempo que se llevó a cabo la reunión cumbre de presidentes centroamericanos. Días después reanudó sus ataques, en principio, contra la base del Destacamento Militar de Ingeniería, en el Departamento de La Paz, el ataque al Destacamento Militar No. 2 de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas y en el ingenio de Jiboa, en San Vicente (90). Enfrentamientos de menor envergadura de desarrollaron hasta la toma de la presidencia de Alfredo Cristiani.

Para concluir, tal cúmulo de hechos, elecciones, accionar militar, posibilidades de diálogo, etc, sin duda representan importancia para el pueblo salvadoreño, no obstante, cabe referirse a otro aspecto distinto, pero que también ha generado la guerra. Sólo a manera de reflexión se comentará sobre aquellos otros actores olvidados, que no se han tomado en cuenta para que cuando, ojalá, la guerra termine no representen un grave problema inmediato a resolver.

El primero, el caso de un campesino, como los miles en este país, "Todos los años cosecha café entre Noviembre y Febrero en una granja. Debe recolectar cuarenta kilos de café para ganarse un

dólar. El terrateniente paga el salario mínimo gubernamental y dispone de protección del ejército durante todo el año. Cuando la cosecha es buena, Carlos Campos gana cerca de 60 dólares por temporada, que constituyen sus únicos ingresos durante el año. Los insurgentes quemaron las cosechas de los terratenientes, otras son sembradas de minas" (91). Por otro lado, el café es una de las industrias que se vio afectada por las reformas impuestas por Duarte, privando a las poderosas familias cafetaleras de la extrema derecha, vender su producto en el mercado internacional.

El segundo caso, muy irónico, el de decenas de niños llamados "samuelitos", "es un batallón de menores, que están siendo utilizados en manifestaciones públicas para provocar acciones violentas de las autoridades. El nombre tiene su origen en memoria a un niño de 12 años de nombre Samuel, quien murió en un enfrentamiento armado entre el ejército y el comando "Frente Oriental Francisco Sánchez". Comenzaron a recibir armas a finales de 1984 en las zonas costeras de Usulután por falta de combatientes adultos, y han sido entrenados con técnicas de arrastre vietnamita, avanzadas silenciosas, colocación de artefactos explosivos y penetración a fortificaciones oficiales. También sirven de "correos, para llevar mensajes armas y municiones. Estos menores hijos de campesinos, combaten desconociendo que existe una declaración de los Derechos del Niño, que en sus protocolos de 1949, señala que los menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados" (92).

Citas Bibliográficas del Capítulo 2

- 1) MORENO, Francisco A. "El Reformismo en El Salvador" en Cuadernos Políticos. No. 42. p. 67.
- 2) Ibid. p. 67.
- 3) SALAZAR, Valiente Mario. Op. cit. p. 135.
- 4) GILLY, Adolfo. Op. cit. p. 62.
- 5) MORENO, Francisco A. Op. cit. p. 67. El concepto de contrainsurgente se retoma del mismo autor quien opina que es redundante ya que todo reformismo es contrainsurgente. Se aplica el mismo concepto en este trabajo al hacer referencia de cualquier acción en contra de la guerrilla salvadoreña.
- 6) Ibid. p. 69.
- 7) GILLY, Adolfo. Op. cit. p. 92.
- 8) LIEVENS, Karin. El Quinto Piso de la Alegría. p. 48.
- 9) Ibid. p. 50.
- 10) MORENO, Francisco A. Op. cit. p. 81
- 11) Ibid. p. 75.
- 12) Ibid. p. 75.
- 13) BOLOS, Silvia. "Las Elecciones en El Salvador" en Avances de Investigación. p.18.
- 14) MORENO, Francisco A. Op. cit. p. 81.
- 15) Ibid. p. 83.
- 16) GILLY, Adolfo. Op. cit. p. 59.
- 17) Ibid. p. 59.
- 18) Ibid. p. 76.
- 19) SALAZAR, Valiente. Op. cit. p. 134.
- 20) LIEVENS, Karin. Op. cit. p. 40.
- 21) GILLY, Adolfo. Op. cit. p. 40.
- 22) Ibid. p. 79.
- 23) Ibid. p. 79.
- 24) Documento "Situación Revolucionaria y Escalada Intervencionista en la Guerra Salvadoreña" en Cuadernos Políticos No. 39, p.87.
- 25) MORENO, Francisco. Op. cit. p. 76.
- 26) La Declaración Franco-Mexicana se firmó el 28 de Agosto de 1931. Francois Mitterand y José López Portillo demandaron una solución negociada al conflicto salvadoreño y reconocieron al FDR y FMLN como fuerzas políticas representativas. El documento, enviado a la ONU, dió a los rebeldes el apoyo internacional más importante que habían recibido. Fue criticado pues se discutió si México se entrometía en asuntos de otros países, y de que si el comunicado había sido expedido conjuntamente con otro país, una potencia extracontinental y que fue tomada como ofensiva para la tradición interamericana.
- 27) Documento "Situación Revolucionaria....." Op. cit. p. 88.
- 28) Ibid. p. 88.
- 29) BOLOS, Silvia. Op. cit. p. 5.
- 30) El plan "Bienestar para San Vicente" es enmarcado dentro de la Comisión Nacional de Reconstrucción de Areas, CONARA, diseñada y aplicada por los Estados Unidos.
- 31) BOLOS, Silvia. Op. cit. p. 25.
- 32) MORENO, Francisco. Op. cit. p. 80.
- 33) LIEVENS, Karin. Op. cit. p.

- 34) VENTURA, José. El Poder Popular en El Salvador. p. 21.
- 35) CECARI. "La Primera Administración. Reagan y El Salvador" en Cuadernos CECARI. p. 37.
- 36) Ibid. p. 45.
- 37) Ibid. p. 46.
- 38) CORDOVA, Ricardo. "El Salvador: un Cambiante Escenario de la Paz" en Revista Polémica. p. 23.
- 39) Ibid. p. 28.
- 40) Excelsior. 30/Set/1987. pp. 2 y 24.
- 41) La Jornada. 20/Ago/1988. p. 29.
- 42) Ibid. p. 29.
- 43) Ver documento íntegro de la "Propuesta del Arzobispo de San Salvador para realizar un Debate Nacional sobre la Paz en El Salvador" en Revista ECA. pp. 585 a la 587.
- 44) El Día. 15/Nov/1988. p. 12
- 45) La Jornada. 20/May/1989. p. 27.
- 46) GONZALEZ, Marín M. y Berrios Polio S. "El Salvador: Crisis y Política Económica del Régimen Cristiano. 1984-1988". Ponencia presentada en el VIII Congreso Centroamericano de Sociología. Guatemala, 10-15 de Oct. 1988. Mimeo. p. 9.
- 47) La Jornada. 22/Feb/1986. p. 17.
- 48) GONZALEZ, Marín M. Op. cit. p. 12.
- 49) Ibid. p. 18.
- 50) CECARI. "La Primera Administración..." Op. cit. p. 45.
- 51) El 3 de Diciembre de 1980 fueron encontradas violadas y asesinadas las religiosas de la Orden Maryknoll, Marie Elizabeth Clark, Ita Ford, Jean Donovan y Dorothy Cazal, en Santiago Nonualco. Presuntamente asesinadas por exguardias del ejército.
- 52) El 27 de Noviembre de 1980 fueron asesinados cinco de los ocho dirigentes que integraban el Comité Ejecutivo del FDR, secuestrados primero en un colegio jesuita donde realizaban una reunión de trabajo. El empresario Enrique Alvarez Córdova, el dirigente obrero Juan Chacón, Enrique Escobar Barrera, Manuel Franco y Humberto Mendoza. Mario Zamora hermano de Rubén Zamora, fue líder demócrata, también fue asesinado por esta fecha.
- 53) CECARI Op. cit. p. 21.
- 54) CORDOVA, Ricardo. Op. cit. p. 25.
- 55) Ibid. p. 25.
- 56) El Universal. 17/Mar/1986. p. 2.
- 57) Las trampas cazabobos son una especie de bombas colgantes en los árboles, que al pasar y rozar con cualquier material, estas se acivan.
- 58) La Jornada. 11/Dic/1987. p. 35.
- 59) La Jornada. 3/Feb/1989. p. 35.
- 60) Ibid. p. 35.
- 61) La Jornada. 10/Feb/1989. p. 37.
- 62) SANCHEZ, Ramos Irene. "La Nueva Estrategia Contrainsurgente en El Salvador" en Estudios Latinoamericanos. p. 12.
- 63) Ibid. p. 14.
- 64) Ibid. p. 14.

- 65) Excelsior. 10/Oct/1987.
- 66) Excelsior. 23/Nov/1987. p. 2.
- 67) La Jornada. 15/Dic/1987. p. 35.
- 68) La Jornada. 13/Ene/1988. p. 22.
- 69) La Jornada. 23/Ene/1988. p. 33.
- 70) La Jornada. 06/Ene/1988. p. 21.
- 71) La Jornada. 20/Feb/1988. p. 28.
- 72) Ibid. p. 28.
- 73) La Jornada. 18/Mar/1988. p. 27.
- 74) Excelsior. 05/Abr/1988. pp. 2 y 23.
- 75) Excelsior. 02/Jul/1988. p. 2.
- 76) La Jornada. 05/Ago/1988. p. 31.
- 77) El Día. 14/Set/1988. pp. 1 y 21.
- 78) "Ataque Guerrillero a la Cuarta Brigada" en El Salvador Proceso. 14/Set/1988. pp. 7 y 8. Las piezas de mortero de 81mm son armas de la época de la Segunda Guerra Mundial, montada en transporte militar de armas, dispara 30 rpm enviando cargas altamente explosivas o de fósforo blanco a una distancia mayor de una milla.
- 79) El Mundo. El Salvador. 10/Oct/1988. p. 12.
- 80) Ibid. p. 12.
- 81) El Día. 31/Oct/1988. p. 11.
- 82) "El Salvador: Cambios en los Mandos Militares" en Centroamerica Hoy. p. 4.
- 83) Ibid. p. 5.
- 84) La "Tandona" o la "Sinfónica" es una fracción influyente del ejército salvadoreño graduada de la Escuela Militar en 1966. Es la promoción más numerosa, con 45 integrantes y son considerados como mimados por las fuerzas armadas ya que fueron los primeros "juniors que cursaban los estudios de defensa, mientras sus padres dirigían el Ministerio de Defensa o el Estado Mayor. Desde Julio de 1988 controlaron 6 de las 8 brigadas y 5 de los 7 destacamentos en que está desplegado operativamente el ejército salvadoreño. Además dirigen 2 de los 6 batallones élite, la Marina Nacional, Guardia de Hacienda, Policía y Guardia Nacional. Uno de los elementos que la caracterizan es su abierto rechazo a diversos aspectos de la guerra de baja intensidad propuesta por el Pentágono de los Estados Unidos. Ver, "Así Piensa la Tandona" en Pensamiento Propio. pp. 12, 13 y 14, y "Cambios de Guardia en El Salvador" en Revista Crónica Guatemalteca. pp. 41 y 42.
- 85) El Día. 23/Enc/1989. p. 11.
- 86) La Jornada. 03/Feb/1989. p. 35.
- 87) El Día. 08/Ene/89. p. 12. Los sabotajes del FMLN han sido uno de los hechos más ampliamente manipulados por la propaganda contrainsurgente en términos de los daños que causan a la población y a la economía del país.
- 88) El Día. 22/Ene/1989. p. 13.
- 89) La Jornada. 14/Feb/1989. p. 32.
- 90) La Jornada. 18/FEB/1989. p. 20.
- 91) Excelsior. 19/Ene/1989. p. 3-A.
- 92) El Financiero. 20/Feb/1989. p. 80.

IV. Capítulo 3. El Salvador dirigido por el partido ARENA.

Alfredo Cristiani.

3.1 Las elecciones que dieron el triunfo a Cristiani.

Las elecciones presidenciales de Marzo de 1989 se desarrollaron en un clima de violencia, característica presente en todos los periodos electorales anteriores en El Salvador: La progresión de la violencia se percibió antes, durante y después de las elecciones, y no culminó ni con la toma de posesión del nuevo presidente. De este escenario es responsable el accionar del FMLN, el que con sus constantes combates, logró parcialmente frustrar las elecciones en los catorce departamentos del país, incluyendo la capital. Conjuntamente instó a realizar un paro de transporte, que resultó en un 90% de su inmovilidad. También es responsable la Fuerza Armada, que mediante la Fuerza Aérea realizó bombardeos en algunas ciudades, utilizando helicópteros artillados y armas sofisticadas (1).

Las encuestas preliminares, aseguraron el posible triunfo de Cristiani para ocupar la presidencia y esto fue en parte, una de las razones para rechazar la propuesta del FMLN de aplazar las elecciones. Siendo candidato, e igual que Napoleón Duarte en su momento, sostuvo que su gobierno no permitiría que los Estados Unidos se involucraran directamente en El Salvador, señalando que esto había sido el error de su antecesor. Sin embargo, de inmediato empezó a unir lazos con la Casa Blanca y viajó a Washington el 9 de Abril de 1989. La cadena de televisión norteamericana NBC,

transmitió las palabras de Cristiani: "quiero ver libre a Oliver North porque ayudó a los centroamericanos que no queremos que exista en la región un régimen totalitario como el de los sandinistas" (2), y refiriéndose a la situación en su país declaró: "ARENA quiere ganar la paz, nos sentaremos a platicar con ellos (el FMLN), porque no les tenemos miedo" (3). De esta declaración a la prensa, el elemento básico a rescatar, es la voluntad de sentarse a platicar con el FMLN, (aunque posteriormente declararía lo contrario) pero haciéndose evidente la importancia que los Estados Unidos representan para El Salvador en materia de ayuda económica, militar y política, puesto que siempre buscaría su apoyo.

El cuadro electoral fue conformado por los candidatos de cuatro partidos principales: (4)

- a) El Partido Demócrata Cristiano, PDC, con Fidel Chávez Mena;
- b) Convergencia Democrática, CD, con Guillermo Ungo para presidente y Mario Reni Roldán vicepresidente (la CD es una coalición del Movimiento Nacional Revolucionario y Movimiento Social Cristiano, ambos aliados de la insurgencia, y el Partido Social Demócrta);
- c) Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, con Alfredo Cristiani para presidente y Francisco Merino para vicepresidente, y;
- d) Partido de Conciliación Nacional, PCN, con Rafael Morán Castañeda.

El resultado oficial, dado a conocer por el Consejo Central de Elecciones, CCE, fue (5): ARENA con el 53.82% de los votos; PDC con 36.03%; PCN con 6.35% y CD con el 3.80%. Es oportuno resaltar el porcentaje de este último partido, de 3.80%, el cual ya no

podría ser integrante del CCE al no alcanzar el máximo permitido por la ley electoral, y únicamente se extendió el derecho a los primeros tres. De aquí que Convergencia Democrática haya denunciado el fraude que le evitó obtener ese tercer lugar (6).

En cuanto a las características de las elecciones, resaltaron tres aspectos:

- 1.- Fueron elecciones abiertamente irregulares y "precarias" como acertadamente las calificó Ignacio Ellacuría (7), entonces Rector de la Universidad Centroamericana, debido a la situación de guerra, combates y paro de transporte decretado por el FMLN.
- 2.- De una población electoral de 2.5 millones de personas, 1,000,800 contaron con carnet electoral y sólo 935,000 aproximadamente emitieron votos (8).
- 3.- Hubo aborto de elecciones en algunos departamentos a causa del boicot realizado por el FMLN y por consiguiente un alto porcentaje de abstencionismo, calculado en un significativo 60% (9).

Alfredo Félix Cristiani Bukard, empresario de 40 años, tomaría posesión de la primera magistratura en Junio de 1989, y su mandato duraría cinco años, como lo establece la Constitución. Es el representante del ahora partido en el poder, ARENA. La principal característica ideológica de ARENA (fundada por Roberto D' Aubuisson el 30 de Septiembre de 1981) es su nacionalismo ultraderechista que parte del supuesto de que el país vive en una "agresión del comunismo internacional", y considera que el FMLN y FDR representan dicha agresión, promovida por la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua (10). En relación a los escuadrones de la muerte,

ARENA supone que son parte de la cruzada militar contrainsurgente, la que plantea que debe buscarse el fin de la guerra con el exterminio del FMLN-FDR. ARENA volcó un gran esfuerzo por cambiar su imagen en la campaña electoral, moderó su discurso y eligió a Cristiani como candidato, pero su verdadero cerebro, y esto no es secreto de nadie, sigue siendo D'Aubuisson, quien juega el papel ideológico de guía del partido.

El 1 de Junio de 1989 Alfredo Cristiani tomó posesión de la presidencia de El Salvador y lo acompañaron solamente tres presidentes centroamericanos: Vinicio Cerezo Arévalo de Guatemala; José Azcona Hoyo de Honduras; y, Oscar Arias de Costa Rica; otros países enviaron sus representantes, como el caso de México y Venezuela. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua no asistió, de hecho no tuvo invitación oficial, porque Alfredo Cristiani ha afirmado que Nicaragua da apoyo al FMLN.

En su primer discurso, los puntos principales a resaltar de la plataforma política y económica de ARENA, son básicamente los siguientes:

- 1.- La reprivatización de los bancos.
- 2.- La liberalización del comercio exterior y la exportación del café y de la caña de azúcar.

La plataforma política pretende dar el impulso a un nuevo estilo de desarrollo volcado totalmente hacia el exterior (basado en la exportación agropecuaria), y crear una política económica neoliberal, pues atribuyen al intervencionismo estatal, la crisis económica del país. De aquí que su tesis central sea la

liberalización del comercio externo del café y la caña de azúcar (las cuales fueron sometidas por Duarte al control estatal); la privatización de bancos y algunas empresas estatales; reducción del tamaño del estado a sus funciones estrictamente necesarias; recorte del déficit fiscal mediante la restricción del gasto público; y por último, la reestructuración del sistema agrícola, surgido a partir de la reforma agraria de 1980, tratando de eliminar cooperativas, substituyéndolas por formas de explotación individual de la tierra (11).

De la vertiente política de su discurso, destaca el reconocimiento del estado de guerra que vive el país; del FMLN como una fuerza real y su propuesta de impulsar un diálogo. Este último ofrecimiento fue limitado cuando señaló que el diálogo debía realizarse de manera reservada y fuera del país, y que en él, no habría lugar para contrapropuestas, y únicamente se daría en el marco de la Constitución.

La anterior declaración resulta cuestionable, Cristiani no se fijó en lo difícil que es concebir un diálogo sin propuestas y contrapropuestas, esta oferta tiene más de imposición que de diálogo. Es previsible, además, que las fuerzas populares, que en diversas ocasiones han insistido en la necesidad de que los encuentros con el gobierno se realicen de cara a la sociedad y en territorio salvadoreño, pondrían objeciones a ésta propuesta de diálogo reservado y en el extranjero. Por otra parte, se verían alterados los compromisos de los Acuerdos de Esquipulas II para buscar una salida a la guerra.

En otra parte del discurso, Cristiani reconoció que el problema principal en el país es la extrema pobreza y no el comunismo como ha afirmado D'Aubuisson. No obstante, el proyecto político de ARENA continuaría respondiendo a los mismos intereses de los grupos poderosos que, a partir de 1979 se vieron afectados, más por la incapacidad y la corrupción de la administración democristiana, en el impulso de sus reformas estructurales, que por el contenido económico y social de las mismas. Es por ello que el nuevo gabinete quedó conformado con elementos jóvenes y figuras de relativa experiencia. Miembros de la oligarquía, empresarios, militantes partidarios de la guerra de baja intensidad, otros de la guerra total y ex jefes de los escuadrones de la muerte, todos partidarios, en teoría, de las prioridades que Cristiani definió en su discurso: libertad, honestidad, legalidad y seguridad.

El nuevo gabinete se conformó como sigue, aclarando que algunos miembros sólo se mantuvieron por días o semanas porque fueron asesinados o destituidos: (12)

-Presidente de ARENA: Armando Calderón Sol, propuesto por D'Aubuisson. Obvia su relación con los escuadrones de la muerte.

-Ministerio del Interior y Vicepresidente Constitucional: José Francisco Merino, cuya inclinación hacia el accionar de los escuadrones de la muerte no es desconocida, ha sido el creador de una reforma judicial para el libre trabajo de los cuerpos de seguridad y los organismos militares. (El 17 de Febrero de 1990 es nombrado Ministro del Interior el coronel retirado Juan Martínez Varela, dejando a Merino en la vicepresidencia)

-Viceministro del Interior: Carlos Humberto Figueroa Villalta, exjefe de escuadrones de la muerte. (Jorge Menéndez sustituye a Figueroa en Febrero de 1990)

-Ministerio de la Empresa Estatal de Agua y Alcantarillado: Ramón González Suvillaga. También enclave de los escuadrones de la muerte.

-Ministerio de la Presidencia: José Antonio Rodríguez Porth, quien figuró con importantes puestos en el PCN y en sus gobiernos militares anteriores a 1979. (Fue asesinado el 9 de Junio de 1989)

-Ministerio de Relaciones Exteriores: Manuel Pacas, ex Ministro de Economía del gobierno provisional de Alvaro Magaña, cuya experiencia política y diplomática es dudosa.

-Ministerio de Justicia: Oscar Santamaría, abogado sin mayor brillo, (aunque su fama quizá se alcance en el presente periodo) y asesor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada.

-Ministerio de Hacienda: El economista Rafael Alvaro Cano, graduado en Chile y perteneciente a la escuela de los Chicago Boy's.

-Ministerio de Agricultura y Ganadería: Antonio Cabrales, algodonero.

-Ministerio de Economía: José Antonio Zablah, empresario de la industria licorera.

-Corte Suprema de Justicia: Mauricio Gutiérrez.

-Ministro de Defensa: General Rafael Larios López.

-Viceministro de Defensa: Coronel Juan Orlando Zepeda.

-Director General de la Policía de Hacienda: Héctor Heriberto

Hernández. (sustituido por Ismael Machuca después de dos meses).

-Director General de la Guardia Nacional: Juan Carlos Carrillo Schlekaer.

-Viceministro de Seguridad Pública: Coronel Inocente Orlando Montaña.

-Jefe del Estado Mayor Conjunto: el Coronel René Emilio Ponce. Mantiene el mismo puesto desde la presidencia de Duarte.

-Comandante de la Fuerza Aérea: el General Juan Rafael Bustillo, en el mismo cargo desde 1979. (Presentó su retirada a finales de 1989).

-Jefe de la Fuerza Naval: Humberto Oillalta.

En total ARENA ha conformado su gabinete con más de 25 cambios en los mandos militares que responden a negociaciones con la embajada estadounidense, con lo que al parecer se asumiría la continuación de la estrategia del conflicto de guerra de baja intensidad. El Coronel Sigfrido Ochoa no ha estado de acuerdo en el nombramiento del Ministro de Defensa pues consideró que el cargo debía estar ocupado por un oficial afín a la ideología del partido ARENA (13).

Ante la nueva presidencia, los Estados Unidos advirtieron que la relación con el nuevo gobierno dependería de su adhesión a la democracia y su respeto a los derechos humanos, según la declaración del portavoz del Departamento de Estado, Charles Redman (14), pero también reconocía que las elecciones daban la posibilidad de desarrollar la democracia y que continuarían ejerciendo presión en favor del orden democrático y el mejoramiento

de los derechos humanos. Consideraron a ARENA no como un partido más de derecha, sino un partido de base amplia (15). La Casa Blanca supo de antemano del triunfo de ARENA, basta verificar las declaraciones del Secretario de Estado, James Baker, los primeros días de Marzo: "si verdaderamente creemos en la democracia, deberíamos dar una oportunidad a la democracia. Deberíamos resistir la tentación de elegir ganadores. No tenemos que bajar la guardia en derechos humanos, pero no deberíamos prejuizar" (16), su apoyo fue claro porque a su parecer, el triunfo de ARENA fortalecería la democracia. Posteriormente, la opinión fue más abierta, el vocero Richard Boucher calificó a las elecciones de "gobierno pacífico y en forma democrática" al tiempo, que George Bush aplaudió "el fuerte compromiso en favor de los objetivos democráticos de Cristiani" (17).

Discrepantes a estas opiniones eran las de la oposición, de la Democracia Cristiana, del FMLN, del pueblo salvadoreño. Sentían que con el triunfo de ARENA se reactivaría la represión con los escuadrones de la muerte vinculados con el partido, y advirtieron un reencuentro de la oligarquía y la dictadura militar. Puesto que la necesidad básica ha sido lograr la paz, lo prioritario fue pensar en la posibilidad de llegar al diálogo. Cabe preguntarse si con el nuevo gobierno habría oportunidad de dialogar?. Según el FMLN sí existía esta posibilidad porque "ese gobierno estará más aislado internacionalmente, con los canales de financiamiento de su aparato militar y productivo obstruidos, esto los obligaría a abrir espacios" (18), y por que el gran capital que se encuentra

detrás de ARENA, al ver afectados sus negocios por el sabotaje económico de la guerrilla, exigiría la realización de conversaciones, porque ARENA ha tenido una mayor posibilidad de movimiento y nadie la puede acusar de comunista si conversara con el FMLN; y D'Aubuisson, aunque su temperamento, su pasado y su manera de vivir le han jugado malas pasadas, tiene inteligencia política. A diferencia de Duarte que veía en la negociación de paz un problema político, "Cristiani le daría un enfoque económico, más pragmático y directo, y por tanto no se precipitará en reprimir, sino que enviará a negociar a la comisión gubernamental y fomentará la discusión entre los partidos políticos y el FMLN" (19).

Si en este momento hubiera prosperado una negociación de paz, el panorama político salvadoreño hubiera sufrido un cambio profundo, pues se hubiera integrado a la lucha electoral el FMLN, viéndose obligado a adoptar una característica mucho más plural y democrática, la que le garantizaría convertirse de inmediato en una alternativa de poder, aunque de hecho lo es, pero no legalmente. Sin embargo, el futuro inmediato de El Salvador no pareció crear expectativas positivas en cuanto al logro de la paz, basta analizar el gabinete conformado, el que nos lleva a afirmar que un gobierno manejado por los escuadrones de la muerte, es germen de muerte y violencia.

Desde el punto de vista legislativo, entre algunas medidas llevadas a cabo por Cristiani, encontramos la de reforzar el ámbito legal contra los "golpes de mano" del guerrillero FMLN con el objeto de facilitar las acciones contrainsurgentes y de la Fuerza

Armada, y reprimir a los disidentes y a los medios pacíficos de protesta.

La guerra civil y la debilidad que la democracia cristiana ejerció en los últimos años del poder político, particularmente entre 1987 y 1989, fueron factores que llevaron al estado de derecho a los políticos de ARENA. Es por ello que ahora se animaba, por parte de abogados y empresarios privados, de donde surge Cristiani, a reforzar leyes tendientes para contrarrestar el sabotaje económico provocado por las fuerzas rebeldes, por un lado, y "combatir frecuentes actos de terrorismo, especialmente de asesinatos de ciudadanos connotados que arrastran a El Salvador al caos, para tratar de implantar un sistema totalitario contra nuestras exortaciones democráticas" (20), por otro.

Las leyes sugeridas por Cristiani se aprobaron, pues la Asamblea Legislativa es controlada por el gobierno, así, los cambios convirtieron en un crimen castigado con una larga sentencia en la cárcel, el que las organizaciones internacionales denunciaran violaciones a los derechos civiles o el poseer y distribuir información que subvertiera el orden público. Los cambios propuestos también proscribieron muchas formas tradicionales de protesta no violenta y actos que van a afectar las relaciones internacionales.

Este paquete se ha agregado a los temores de que el gobierno de Cristiani sea controlado por los extremistas de la derecha, que detentan puestos clave en el aparato de la seguridad internacional, que parece contar, a veces, con el apoyo de los llamados de línea

dura. Como posición contraria, los democristianos han considerado a la nueva legislación antiterrorista como "un proyecto fascista" que está contra el pueblo, contra la oposición democrática y que dará lugar a un terrorismo estatal, es decir, la consideran como un grave ataque contra los derechos humanos más elementales.

No cabe duda que se trata de un proyecto represivo, pero ésta vez, se ha aplicado legalmente para no caer en la represión de años anteriores, donde la sociedad internacional, las organizaciones de derechos humanos y el mismo pueblo salvadoreño, denuncien al gobierno. Aún cuando la Asamblea no aprobaba tales leyes, el gobierno se adelantó a aplicar lo sugerido, tal es el caso del allanamiento al campus de la Universidad de El Salvador, sus puertas fueron resguardadas por fuerzas de seguridad, durante tiempo indefinido, desde el 18 de Julio de 1989. El allanamiento fue violento, con lanzamiento de bombas y tiroteos, pues los militares debían "resguardar" las instalaciones. Un sólo hecho es innegable: la Universidad, al igual que la Iglesia, siempre han sido acusadas de ser guaridas de guerrilleros.

En otro sentido, Alfredo Cristiani ha necesitado del apoyo y reconocimiento en el extranjero. A tres meses de gobierno viajó a Gran Bretaña para entrevistarse con Margaret Thatcher, a Italia con Juan Pablo II, y el 2 de Octubre de 1989 participó en la reunión anual de las Naciones Unidas, en Nueva York, exponiendo la situación de su país y el incipiente diálogo con la guerrilla. (reafirmó el apoyo de su gobierno a la creación de una fuerza de cascos azules en las fronteras de la región, para evitar el uso de

santuarios guerrilleros en las fronteras de países vecinos. Javier Pérez de Cuellar, presentó el proyecto al Consejo de Seguridad de la ONU, para su aprobación) (21).

3.2 Necesidades de un verdadero diálogo-negociación.

Sin temor a equivocarnos, las necesidades básicas de El Salvador se concretizan en alcanzar la paz. En el marco de una nueva ronda centroamericana, en Tela, Honduras, Cristiani por primera vez participó a los gobiernos su proyecto de solución de paz. Aunque el tema principal de la reunión fue la desmovilización de la contra nicaragüense, para el caso de El Salvador, se dió paso a la oportunidad de realizar reuniones futuras entre gobierno y guerrilla.

La insurgencia salvadoreña, que ha participado indirectamente en las cumbres centroamericanas, vía Daniel Ortega, declaró su disposición a dialogar directamente con el gobierno derechista, pidiendo a los presidentes centroamericanos su colaboración a este esfuerzo, pero aclaró no estar dispuesta a desarmarse como los mercenarios nicaragüenses, ya que como caso distinto, consideraron que la negociación sería la única salida a la crisis. Demandó en un principio que para las futuras pláticas gobierno-guerrilla, asistieran representantes de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica como mediadora y representantes de la ONU y OEA como observadores. Cristiani respondió desde la cumbre estar dispuesto a dialogar sin necesidad de que primero se acordara el alto al fuego (22), pero para ello crearía una comisión integrada por

ministros de la Presidencia y Justicia, un miembro de la Asamblea Legislativa, uno de la Corte Suprema y un representante personal del presidente (alternativa que creó numerosas críticas por parte de la oposición quienes subrayaron el predominio reservado por ARENA), pero rechazó incluir como mediadores a la Iglesia Católica.

Así se inició el camino hacia el diálogo, donde las diferencias de cada proyecto, fueron y siguen siendo problemas de fondo. El gobierno sostiene que lo que habría que tratar primero es la integración de los rebeldes a la vida civil, mientras que los líderes del FMLN, argumentan que primero debe ponerse fin a los problemas sociales que originaron el conflicto. Cristiani ha estado dispuesto a negociar por ejemplo, la salida del país de rebeldes lisiados de guerra, para que se les pueda prestar atención médica en el extranjero, pero para el FMLN, esto no forma parte de una posible negociación (23). Además, Cristiani no ha logrado el consenso con la línea más dura de su partido, ni con los militares. Por ejemplo, José Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor, apoyó las gestiones de diálogo, y estuvo de acuerdo en permitir la salida de los lisiados, siempre y cuando ellos formaran parte de una negociación, condicionada a que los rebeldes se comprometieran, a no continuar con los sabotajes contra la infraestructura económica del país, pero a diferencia de Cristiani, el general Juan Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea salvadoreña, sostuvo que el sector militar debía participar directamente en un diálogo con el FMLN, posición que no aprueba Emilio Ponce (24).

Una vez creada la comisión de diálogo, se acordó concretar fecha y lugar de las reuniones gobierno-insurgencia futuras (12 y 13 de Septiembre en la Ciudad de México sería la primera) y Cristiani aceptó la intervención de la Iglesia como observadora, eliminando un obstáculo. (Según el Arzobispo auxiliar Rosa Chávez, la Iglesia recibió una invitación formal del gobierno, donde solicitaba la participación del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Romero Astorga y la suya para participar en las reuniones) (25).

Las propuestas para llevar a cabo la reunión fueron, por parte del gobierno (26), con la representación de Oscar Santamaría, Ministro de Justicia, las siguientes:

- Formación de un organismo mixto, con miembros de las dos delegaciones. Este se reuniría dos días cada mes para avanzar en el diálogo y sus integrantes podrían ser substituidos por otros, previa notificación. Asimismo, los miembros de dicho organismo asumirían el compromiso de no retirarse unilateralmente del proceso de diálogo, guardarían reserva sobre los avances de la negociación y darían a conocer comunicados conjuntos previamente acordados.

- Propusieron que las negociaciones no tuvieran mediadores, que fueran directas y con la participación de obispos sólo como testigos.

- Se consideró la necesidad de realizar varias reuniones futuras, debiendo sugerirse los países donde pudieran realizarse. (Guatemala, Costa Rica, Venezuela y México, por ejemplo)

Por parte del FMLN, con la representación de los comandantes,

Shafick Handal y Joaquín Villalobos, la propuesta fue:

- Un alto al fuego concertado a más tardar el 15 de Noviembre de 1989.

- Negociación para el cese definitivo de las hostilidades siempre y cuando se aprobara la reforma constitucional, electoral y judicial.

- Adelanto de las elecciones legislativas y municipales de 1991. "No se le pide al gobierno que se salga de donde está o que abandone la legitimidad que el dice haber obtenido en las urnas, sino que se someta a prueba y que el pueblo lo refrende o lo acepte" (27).

- Depuración de la Fuerza Armada conjuntamente con la disolución de los cuerpos de seguridad, como condiciones que se tendrían que dar para su incorporación a la legalidad como partido político y el fin de la guerra.

- Integración total del FMLN a la vida política a más tardar el 31 de Enero de 1990, integrando a la legalidad como partido político, a sus dirigentes y activistas políticos, así como sus radiodifusoras y demás instrumentos de prensa y propaganda.

- Propuesta de un acuerdo para desactivar la base económica de la confrontación política y social a partir del mantenimiento de las reformas impulsadas por el anterior gobierno de Duarte.

- En el sentido anterior, suspensión o devolución a sus antiguos propietarios de las tierras afectadas por la reforma agraria, la continuación de la misma y la suspensión de medidas que generan alza en el costo de la vida, especialmente en el precio

de los productos básicos de consumo popular.

- Inicio de un proceso judicial que garantice el esclarecimiento de responsabilidades y sentencia a culpables del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y a todos los involucrados en los escuadrones de la muerte.

- Sin que signifique un requisito prioritario, el FMLN podría poner fin a las hostilidades si el gobierno de los Estados Unidos cesaran la ayuda militar a El Salvador.

Las pláticas iniciaron el 12 y 13 de Septiembre, en la Ciudad de México, con cinco miembros gubernamentales y ocho de la Comisión político diplomática FMLN-FDR. Se aceptó el papel de la Iglesia como intermediaria para preparar las posteriores reuniones y como mediadora en el desarrollo de las mismas. (La Comisión Episcopal eligió a representantes eclesiásticos que consideró convenientes para cada reunión). Directamente no participaron los militares, aunque sí se confirmó la presencia del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Emilio Ponce y del Ministro de Defensa, Humberto Larios, como asesores de la delegación gubernamental (28). (Humberto Larios declaró posteriormente que estudiaría la propuesta de la insurgencia de reducir sus fuerzas, siempre y cuando en las instancias políticas se llegara a un acuerdo para que los rebeldes se incorporaran a la vida institucional. Esto fustigó a los grupos ultraderechistas que se oponen a las negociaciones de paz)

Cristiani rechazó el planteamiento de la guerrilla por considerarlo anticonstitucional, cayendo en lo mismo que su antecesor: si el FMLN ha afirmado que la Constitución no es válida,

por haberse creado en periodo de guerra, el gobierno ha justificado su negativa al defenderla, "nosotros no podemos aceptar acuerdos que violen la Constitución de la República, y las peticiones del FMLN son violatorias a esta. Nosotros no podemos aceptar nada fuera del orden constitucional" (29).

De los resultados de esta reunión podríamos preguntarnos si la propuesta del FMLN es viable. Podría ser positiva en muchos sentidos. Basándose de manera realista en la actual correlación de fuerzas, el FMLN no demanda la desarticulación del estado, ni siquiera posiciones de poder previas. Sus demandas integran elementos militares con factores políticos y aún económicos, confiriéndole un carácter global que introduce, en todos los aspectos de la vida salvadoreña, perspectivas de paz, distensión y mejoras socioeconómicas. En términos políticos, el documento significa un claro punto a favor del FMLN, en la medida en que ha colocado al gobierno salvadoreño en una posición difícil: por una parte, la presión nacional e internacional a favor de la solución del conflicto bélico debiera obligarlo a aceptar la propuesta; por el otro, los sectores oligárquicos, preponderantes en el régimen de Cristiani, impugnarán sin duda el programa de pacificación y le antepondrán diversos obstáculos. Pero el gobierno de Cristiani siempre ha mantenido el que la guerrilla deponga las armas para empezar a negociar, y esto significa pedirle al FMLN lo que no es equitativo ya que se disolvería inmediatamente la lucha por lo que el pueblo salvadoreño ha luchado durante años.

En otro orden, durante la reunión, el FMLN decretó una tregua

unilateral, rota por el recrudecimiento de la violencia y bombardeos del ejército, era el inicio de un operativo contrainsurgente que abarcaría los departamentos de San Salvador, La Libertad, Chalatenango y Cuscatlán, zonas de control rebelde. "Ellos tienen una tregua, pero la Fuerza Armada no tiene ninguna y está operando normalmente" fue la justificación <(30) También ver Anexo No. 2>. (Fuerzas especiales antimotines de la Policía Nacional irrumpieron en la sede de una Iglesia Bautista para detener a 60 sindicalistas que buscaban ahí refugio y evitar la persecución de sus captores) (31).

Ante la desatada violencia, el FMLN reanudó su ofensiva en respuesta a los ataques del ejército contra sus unidades y de cara a la represión del régimen que preside Cristiani. Esto redujo significativamente las posibilidades de avanzar en el diálogo y demostró la beligerancia de los sectores más conservadores para entorpecerlo. La violencia se fue agudizando más y estaba en puerta una segunda reunión gobierno-insurgencia.

Como muestra de buena voluntad, Cristiani envió al Congreso un proyecto especial de amnistía temporal para los rebeldes lisiados de guerra, ya que justo en este momento (79 de Oct), un grupo de ellos se manifestaba en las puertas de la Catedral (32), pero el FMLN que no se quedó atrás, decidió cesar los sabotajes contra el sistema eléctrico y telefónico, sin embargo, no aceptó la amnistía, considerando que los lisiados forman parte de fuerzas beligerantes en un país en guerra y se acogen a la Convención de Ginebra que establece el derecho a estos combatientes de salir de

su país para recibir atención médica adecuada.

La segunda reunión se llevó a cabo en Costa Rica, y el compromiso de ambas partes se puso a prueba el 16 y 17 de Octubre de 1989, estando presentes como observadores, los delegados, de Javier Pérez de Cuéllar, Alvaro de Soto y de Joao Baena Soares, Ricardo Gibosh. Se logró un comunicado conjunto suscrito por el Ministro de la Presidencia Oscar Santamaría, por José Antonio Martínez Varela y los negociadores gubernamentales David Escobar Galindo, Abelardo Torres y Hernán Contreras y, por parte del FMLN, Joaquín Villalobos, Shafick Handal, Ana Guadalupe Martínez, Roberto Cañas y Salvador Samayoa.

Las propuestas no cambiaron, pero si aumentaron por parte del FMLN que exigió la destitución del ministro de Defensa, y del jefe de la Fuerza Aérea, Humberto Larios, y jefe por supuesto de la Tandoná. (A esta fecha, la Tandoná de 1966 ya debía haber pasado a retiro, sin embargo mantiene el control de la Fuerza Armada. Entre sus miembros figuran el jefe del Estado Mayor Conjunto, coronel René Emilio Ponce; los viceministros de defensa, coroneles Juan Orlando Zepeda y Vicente Montaña; el subjefe del Estado Mayor, Gilberto Rubio; los directores de las policías Nacional y de Hacienda; los comandantes de las seis brigadas de Infantería que hay en el país y otros 19 oficiales. La Tandoná está promoviendo una reforma que les permita permanecer en activo por otros 5 años) Insistió también en realizar una serie de reformas acompañadas del cese de fuego, como paso previo al cese total de las hostilidades para asegurar que en el proceso de negociación, los avances en

materia de democratización perdieran sentido al uso de las armas. Entre las medidas previas del FMLN, figuran el acuartelamiento de los batallones de reacción inmediata del ejército, de sus unidades de caballería y artillería desplegadas en todo el país, el levantamiento de retenes en las ciudades, pueblos, carreteras y caminos vecinales y la suspensión de las operaciones de combate, transporte de tropas y vuelos de reconocimiento de la Fuerza Aérea. Una vez logradas las demandas, se establecerían los límites geográficos para separar los lugares de asentamiento del ejército y de la insurgencia, que se mantendrían acampados en sus respectivas demarcaciones. A cambio de ello la guerrilla ofreció suspender de inmediato todas sus acciones militares.

El gobierno, por su parte, insistió en el cese de hostilidades por parte de la insurgencia a cambio del simple compromiso gubernamental de detener sus acciones militares de carácter ofensivo. Agregó la posibilidad de crear algunas medidas de reforzamiento al respeto de los derechos humanos para permitir el desarrollo de las actividades normales de la población (33).

Una diferencia quedó plasmada sobre el concepto que ambas partes tienen en el tema del cese de las hostilidades. El texto enfatizó lo que el gobierno entiende por hostilidades: "toda agresión o acto hostil que afecta la vida nacional a través de acciones y técnicas psicológicas armadas y conspirativas en contra de todo objetivo civil y militar" (34), mientras que el FMLN las consideró "no sólo en lo relativo al enfrentamiento militar sino también los actos de hostilidad del estado y de la Fuerza Armada

contra los ciudadanos, expresados a través de las medidas represivas, violación a los derechos humanos, restricción de libertades democráticas, existencia de impunidad de la autoridad civil y militar y todo tipo de actos que contribuyan a generar mecanismos de autodefensa" (35)

Nuevamente resultó un diálogo sin negociación con un esquema agotado. Lo único positivo fue la participación formal de las Fuerzas Armadas, pero días después, en una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Humberto Larios, respaldado por el jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce, por sus dos viceministros, los coroneles Orlando Zepeda y Ricardo Montaña, y por el jefe de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillos, teniendo como telón de fondo a todos los jefes de brigadas, destacamentos y cuerpos de seguridad salvadoreños, 34 oficiales en total, rechazaron la propuesta del FMLN. La impotente e inusual presencia de la jerarquía militar en la conferencia de prensa, tuvo como objetivo, según el propio Larios, demostrar la total unidad de la institución armada en respuesta a la propuesta del FMLN, que propuso pasar a retiro a los 35 oficiales de la Tandoná (36).

Los dos encuentros fueron infructuosos porque todo posible acuerdo entre guerrilla y gobierno en busca de una pacificación, pasa definitivamente por la postura del alto mando de la Fuerza Armada. Su conducta se ha inclinado más por rechazar e impedir cualquier acuerdo que afecte sus planes militares. Durante las pláticas en México, ningún oficial estuvo presente, en Costa Rica, dos altos jefes castrenses asistieron, no como miembros de la

delegación, sino como asesores de la misma. Resultaba ilógico que los coroneles, con mayor poder de decisión, no se sentarán en la mesa de discusiones. En Costa Rica, los militares que asistieron más bien constituyeron un factor de desacoplamiento de la delegación gubernamental, por la mecánica de relación establecida entre ambos. La Fuerza Armada, los gobiernos, salvadoreño y estadounidense y el partido ARENA, parten de una premisa: el FMLN se encuentra débil y por tanto hay que presionarlo y no darle espacio hasta rendirlo. Por eso se rechazó la propuesta insurgente y la negativa del gobierno viene a ser como el fin del discurso mesurado que el mandatario ha mantenido desde la toma de posesión. De pocos avances se podría hablar en éstas dos rondas, quizá el más relevante en relación a los castrenses es que al menos se acercaron a las negociaciones, aunque fue como asesores.

Puede ser esto un signo que a la larga se manifestará en una presencia plena de los militares salvadoreños en las negociaciones, puede ser también que los militares no reciben órdenes, ya a esto había hecho referencia el Rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, al indicar que era necesario la autodepuración del ejército explicando que no debía ser la insurgencia la que dijera quienes debían ser enjuiciados (37). Otras fuerzas han visto con buenos ojos la propuesta rebelde, esta comienza a ser asimilada por los diferentes sectores de la vida nacional. Sin embargo, mientras el ejército no flexibilice hacia posiciones más dialogantes, las reacciones pueden tener muchos tropiezos o, por el contrario convertirse en una forma de presión para arribar a ambientes más llanos y francos en el

debate político. Mientras tanto los días corrían para llegar a un tercer diálogo, donde el FMLN partía de una igualdad de posiciones, mientras el ejército se basaba en una superioridad y de una seguridad de poder derrotar militarmente a los insurgentes.

A fines de Octubre se fue acumulando la violencia que dió lugar al empantanamiento de la tercera reunión que se realizaría en Caracas y a la mayor ofensiva que el FMLN realizara ese año. En primer lugar, el atentado contra la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS, sede de la más grande federación sindical opositora del país, cuyas oficinas en pleno centro de la ciudad fueron destruidas, muriendo varios líderes sindicales, (entre ellos la Secretaria de Relaciones Internacionales de la FENASTRAS y miembro del directorio de la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS, Febe Elizabeth Velázquez). La federación responsabilizó a las Fuerzas Armadas, quizá sin ninguna duda ya que anteriormente habían sido allanadas oficinas de derechos humanos e incluso sedes de la Iglesia Católica y Universidades, además de una serie de detenciones, que indicaban habían sido realizadas por las Fuerzas Armadas (38). El FMLN afirmó tener evidencias de que el acto criminal contra FENASTRAS fue calculado y planificado por René Emilio Ponce, avalado por Cristiani y ejecutado por el coronel Francisco Elena Fuentes, al mando de la primera brigada de Infantería de San Salvador (39).

Después de atentado contra FENASTRAS, el FMLN anunció su retiro del diálogo de Caracas, "hasta que haya garantías para las organizaciones cívicas y gremiales de la oposición, y por que ante

la nueva situación se requiere revisar a fondo las actuales condiciones del proceso de diálogo y sus perspectivas, tenemos que evitar que nuestra presencia en el diálogo sea utilizada para encubrir la responsabilidad del gobierno en esta masacre" (40). Seguramente se refería también a los atentados anteriores contra el opositor, Rubén Zamora, dirigente de Convergencia Democrática y secretario general de MPSC, y de Aronette Díaz, presidenta de la Unión Democrática Nacionalista (41).

Verdaderamente el clima fue muy tenso, los medios diplomáticos consideraron que la violencia en ese momento era peor que la de 1980. La insurgencia salvadoreña solicitó a siete presidentes latinoamericanos la intercesión ante el régimen derechista de Cristiani para buscar una solución política al conflicto interno, e instó a los Estados Unidos a demostrar con hechos su apoyo en favor de negociaciones, considerando la existencia de una indefinición en la política norteamericana hacia El Salvador. Ante la inseguridad de los escalamientos de los escuadrones de la muerte, el FMLN advirtió que intensificaría la lucha armada para presionar al gobierno a pactar una solución negociada (42).

El 10 de Noviembre, la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS, extendió la lista de denuncias contra la represión, por haber sido objeto de allanamiento a guarderías infantiles de hijos de obreros, igualmente fue allanada la Guardería Infantil de FENASTRAS, en Soyapango (43). La sentencia del FMLN se cumplió y se desarrolló una ofensiva sangrienta el 11 de Noviembre (Ver Anexo No. 2), mientras, diálogo, derechos

humanos, respeto a la opinión y demás valores, iban perdiéndose entre la inútil guerra civil.

Comienzó la gran ofensiva y las balas se cruzaron a lo largo del territorio. Se decretó el estado de sitio, se impuso el toque de queda, por primera vez desde 1981 después de una reunión del Consejo de Ministros en pleno, y se suspendieron todas las garantías individuales (44). Cristiani pidió a la comunidad internacional, que condenara al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al hacerle responsable del envío de armas "que asesinan y desangran al pueblo salvadoreño" (45). La mayor parte de los dirigentes sindicales y algunos líderes políticos, como Guillermo Ungo y Héctor Oquellí Colindres, solicitaron protección a las embajadas de Venezuela y México. Simultáneamente el FMLN envió un comunicado a los soldados y oficiales honestos de la Fuerza Armada "a quienes llamamos a reflexionar seriamente, a que ya no sólo están enfrentando al ejército guerrillero del FMLN, sino a todo un bloque que reivindica su derecho a la insurrección" (46) y especificó que "no pretende la toma del poder, sino el alejamiento de sus cargos de los principales jefes militares y funcionarios civiles que se oponen a una negociación en serio" (47). Se refería, entre otros, a Emilio Ponce, acusado por ser uno de los primeros interesados en la continuación de la guerra, pues muchos de sus negocios se basan en la venta de material bélico.

El grupo más afectado fue la población civil, las ciudades carecían de energía eléctrica, agua potable, alimentos, luz, además de que el gobierno dispuso el racionamiento de gasolina. La Fuerza

Aérea salvadoreña en un esfuerzo por desalojar a los rebeldes, bombardeó contra la población civil, principalmente zonas como San Miguel, Ciudad Delgado, Mejicanos, La Esmeralda, Soyapango, Granadino y San Vicente, en la capital (48), mientras la Guardia Nacional realizó "operaciones de limpieza" en poblaciones populares. Estas acciones fueron negadas por el vocero del Estado Mayor del ejército, coronel René Arturo López quien a la vez anunció la prórroga del toque de queda en las zonas de la periferia, y el desalojo de la población civil hacia zonas supuestamente más seguras (49).

La tarea desempeñada por la televisión, en cadena nacional, junto con las radioemisoras comerciales, se limitó a repetir una entrevista con el jefe del Estado Mayor, coronel, René Emilio Ponce, afirmando que la situación estaba bajo control, pero en realidad, aunque el ejército lanzó sus batallones élite en una contraofensiva, parecía en este momento, no haberse operado cambios significativos en la correlación de fuerzas. No obstante, hacia el 19 de Noviembre, los insurgentes habían duplicado sus efectivos con un número no determinado de pobladores de la capital que se habían incorporado al FMLN e iniciaban una nueva fase en su maniobra militar que incluyó ataques contra objetivos específicos y acciones guerrilleras simultáneas en toda la ciudad.

Al respecto, cabe mencionar lo que un comandante del FMLN explicó sobre el desarrollo de la maniobra militar: "el primer día de los combates, varias escuadras guerrilleras ocuparon posiciones en la colonia residencial Escalón, el objetivo fue forzar al

ejército a desplazar parte de sus fuerzas hacia esta zona mientras que fuerzas guerrilleras ingresaban por el este y norte, en las colonias Mejicanos, Zacamil, Cuscatancingo, Delgado y Soyapango. En éstas colonias, los guerrilleros mantuvieron sus posiciones durante el tiempo necesario para incorporar y armar a los nuevos rebeldes. Hecho esto, no había ningún motivo para permanecer en los edificios, sin embargo, las fuerzas del FMLN permanecen en toda esa zona, manteniendo su presencia en un arco al norte y este de San Salvador, al tiempo que por el oeste, en las faldas del Volcán San Salvador conservan el dominio. Al comienzo de la ofensiva se realizó otro ataque por medio de dos o tres escuadras guerrilleras en la colonia de clase media Merliot, al sureste y en las afueras de la ciudad. Cada escuadra está integrada de 5 a 8 rebeldes. En esta colonia el objetivo del ataque eran las instalaciones de la Academia de Policía" (50).

La situación empeoró cuando Cristiani tomó medidas serias para contrarrestar la ofensiva; amplió el toque de queda a las 24 horas del día en casi todo San Salvador, anunció el congelamiento de precios a productos básicos, restringió la prensa nacional y dispuso el cierre a la prensa extranjera de todos los accesos hacia zonas donde los aviones y helicópteros realizaban bombardeos.(51)

Como peculiar acción, debe mencionarse el allanamiento del Hotel Sheraton, cuando soldados del ejército salvadoreño penetraron a los cuartos que hospedaban a la prensa internacional, entre ellos varios periodistas estadounidenses a quienes consideraban como sospechosos, el incidente no pasó a mayores gracias a la

intervención del embajador norteamericano William Walker (52). Lo que sí tuvo trascendencia fue que ahí mismo se hospedaba Joao Baena Soares, Secretario General de la OEA, la prensa manejó que el secretario era un rehén del FMLN, versión desmentida por el propio Baena Soares cuando fue "rescatado" y llevado a los Estados Unidos (53), pero además se hospedaba personal militar estadounidense, fuertemente armado, que se negó a salir de sus habitaciones, pese a que se les dió seguridad para ello. La decisión fue peligrosa ya que la zona era terreno de combate, lo que ponía en riesgo los esfuerzos diplomáticos que se hicieron para garantizar su seguridad. Este hecho representó una oportunidad para dar la posibilidad a los Estados Unidos de intervenir a "rescatar" a sus nacionales, porque los militares siempre se resistieron a abandonar el Hotel, y porque Baena Soares aclaró que nadie, ni siquiera quienes disparaban en contra de los combatientes del FMLN, fueron considerados como rehenes.

Lo que no se aclaró fue el por qué militares norteamericanos se encontraban ahí. Fuentes de los gobiernos de El Salvador y de los Estados Unidos, admitieron la presencia de 14 norteamericanos en el citado hotel, todos armados con rifles automáticos, pero según las declaraciones del Pentágono, ninguno de ellos estuvo involucrado en la guerra. No obstante, nadie supo explicar la razón de su presencia (54).

Independientemente de lo ocurrido, si fue o no ataque premeditado, o si hubo rehenes (como aseguró Cristiani) sólo se demostró que la situación estaba fuera de control por parte del

gobierno e hizo evidente la necesidad de una recomposición del poder. Resaltó también, una vez más, la capacidad militar, de movilización y coordinación del FMLN, probando, por un lado, que las Fuerzas Armadas estaban cayendo en serios errores de operaciones, y por otro, hasta qué punto estaba dispuesto a llegar el gobierno de George Bush en su determinación por impedir la caída del régimen y el triunfo de las fuerzas populares. Mediante el pretexto de rescatar a una docena de militares norteamericanos, Bush ordenó el envío de tropas de asalto Delta a la capital salvadoreña, aunque no llegaron a entrar en acción.

La prudencia y la disciplina mostrada por los guerrilleros, los cuales se retiraron sigilosamente, impidieron un enfrentamiento entre el FMLN y las fuerzas militares norteamericanas. Poco después, como se ha hecho costumbre en este país, en lugar de que el ejército salvadoreño convocara a la prensa para explicar el desenlace de lo ocurrido, lo hizo el embajador estadounidense William Walker, quien en inglés habló del éxito de la operación en el Sheraton y denunció que ésta había sido dirigida por el FMLN desde Managua y la Ciudad de México (55). Se supo que los militares estuvieron en este país independientemente del plan asesor que está vigente entre los Estados Unidos y El Salvador, por medio del cual aquí residen 55 personas con ese rango.

Las acciones militares no se detuvieron, el alto mando del ejército ordenó a sus unidades impedir y agredir las labores humanitarias de evacuación y asistencia a la población, que la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Salvadoreña intentaron realizar

en varias zonas, incluso la Cruz Roja Internacional desde Ginebra, emitió un comunicado solicitando a las partes en conflicto acordar una tregua para, por lo menos, evacuar a los heridos, pero el alto mando rechazó la propuesta: "las treguas no tienen sentido y la única vía válida que acepta el gobierno para acabar con esta situación de guerra es un diálogo supervisado por organismos internacionales" (56).

Un grave suceso lo constituyó el asesinato de los jesuitas catedráticos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA, haciéndose responsable al ejército, ya que fueron los únicos que tenían el poder de movilización durante el toque de queda (Ver Anexo No.1), El crimen desató un proceso de presiones desde los Estados Unidos, y condicionaron la ayuda militar destinada para El Salvador, al esclarecimiento del hecho, que culminó con la destitución del comandante Jorge Rafael Bustillo, Jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña y el enjuiciamiento del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Jefe del Departamento de Inteligencia del Alto Mando.

A fines de Noviembre parecía que El Salvador volvía a la "normalidad", y el FMLN envió una proposición sorpresiva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, expresando su disposición para el alto al fuego inmediato supervisado por las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas para Centroamérica, ONUCA. Solicitó además, la mediación internacional con las Fuerzas Armadas para iniciar la negociación "que requiere la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, para propiciar gestiones con sus aliados en las Fuerzas

Armadas y ARENA para coadyuvar a una solución política y abrir el camino de la democratización y el respeto a los derechos humanos...." (57), en tanto que Cistiani estuvo dispuesto a dialogar sobre el cese de hostilidades, pero como único tema a tratar en un principio y no un cese de fuego táctico que sirviera para reforzar posiciones de la insurgencia. Afirmó que con el cese de fuego, lo que pretendía la insurgencia "es sacar de la derrota que han tenido, una territorialidad que no tienen. Con la eliminación de la vía armada, se eliminará también el uso de la violencia derechista y el ambiente bajo el cual algunos grupos pueden aprovechar la situación" (58).

Simultáneamente, mientras Cistiani habló de diálogo, el Parlamento aprobó un amplio paquete de poderes para permitir al gobierno el encarcelamiento de disidentes por el simple hecho de difundir ideas subversivas. Si se les encontraba un tipo de documentos, dinero u objetos que pudieran presumirse como útiles a la guerrilla, inmediatamente la persona podía ser acusada de terrorista y encarcelada por largos años. El clima de intimidación llegó a tal grado, que algunos noticieros importantes del país fueron conminados, por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, a suspender sus programas o publicaciones, so pena de clausurarlos. La prensa se convitió entonces en un contrincante más de Cistiani, que cuestionó la censura y buscó nuevas vías para romper el silencio impuesto. Posteriormente el gobierno permitió la transmisión "normal" de las emisoras, redujo el estado de sitio, y levemente la violencia se aminoró, el pueblo salvadoreño poco a

poco se reintegraba a la vida diaria, fueron surgiendo las opiniones, los resultados y hasta la esperanza por que todo acabara.

La ofensiva del FMLN no tuvo un éxito general, lo que se visualizaba a mediano plazo fue la prolongación del conflicto hasta llegar al agotamiento de una de las partes. El objetivo del FMLN fue poner todo el arsenal militar y las modalidades tácticas de la estrategia guerrillera para presionar al gobierno de Cristiani, a rediseñar los términos en que formulaba el diálogo. Fue clara la indiscutible participación de asesores estadounidenses, de "unos 2 mil efectivos de la Brigada 82 aerotransportada, con base en Palmerola, Honduras" (59), y la utilización por parte de la Fuerza Aérea, de bombas de 500 libras en la mayoría de sus ataques sobre varios poblados (60).

Según las apreciaciones del coronel Emilio Ponce, en la ofensiva participaron unos 1500 guerrilleros, para rechazarlos el ejército utilizó tanquetas, los aviones A-37, avionetas push and pull, viejos aviones C-47 (versión militar del avión de transporte DC-3 artillados especialmente para la guerra de Vietnam y que ahora se utilizan en Centroamérica y Colombia); helicópteros Hughes-500 y viejos aparatos de entrenamiento T-33 (61). La Fuerza Armada estimó la muerte de 878 guerrilleros y 558 heridos, contra 220 soldados caídos en combates y otros 627 hospitalizados. El FMLN se limitó a decir que había provocado 827 bajas al enemigo (62). Las pérdidas económicas estimadas oficialmente fueron evaluadas en 120 millones de dólares (63), que, aunadas a la caída de los precios

del café, obligarían al gobierno a realizar un ajuste económico de consideración para el año que estaba por iniciar.

A nivel diplomático, organismos de todo tipo se pronunciaron en contra de proseguir la guerra. La ONU, en nombre de Javier Pérez de Cuéllar, pidió condiciones mínimas para reanudar las conversaciones entre guerrilla y gobierno. Presentó al Consejo de Seguridad una petición de la OEA en la que solicitó un rápido despliegue de "cascos azules en El Salvador", (su aceptación modificaría el mandato de las fuerzas de la ONU para Centroamérica, ONUCA, creada el 7 de Noviembre de 1989), y denunció, sobre los derechos humanos en El Salvador, que las Fuerzas Armadas de ese país llevaron a cabo ejecuciones sumarias por motivos políticos y, que el gobierno aumentó las torturas contra opositores a su régimen (64).

Por su parte, la OEA aprobó por unanimidad una resolución en la que pidió el cese a las hostilidades y el reinicio del diálogo. Exhortó a todos los Estados, con vínculos o intereses en la región, a abstenerse de acciones que impidieran el logro de una paz firme y duradera en Centroamérica. El proyecto de resolución había sido presentado originalmente por el canciller nicaragüense Miguel D'Escoto, quien pidió el cese de los bombardeos por parte del régimen salvadoreño contra la población civil y la aceptación de una tregua para la evacuación de los heridos. Tal planteamiento propició la réplica del salvadoreño, Mauricio Granillo, quien rechazó los actos de represión indiscriminados y acusó a Nicaragua de apoyar con las armas a los rebeldes del FMLN (65).

México hizo un llamado, por medio del Secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, a crear condiciones favorables para la paz e instó a la OEA a crear bases reales que ayudaran a propiciar el orden: "o precisa sus objetivos, se reestructura y realiza mejor sus tareas, o pierde su razón de ser. La reorientación de la OEA debe partir de una necesidad insoslayable: la recuperación del desarrollo, ya que una paz hemisférica duradera no puede darse en un contexto de hambre y continuo empobrecimiento de amplios grupos de la población de América" (66). Basada en la resolución de la OEA, la cancillería mexicana promovió ante dicho organismo, el envío de una misión encabezada por Baena Soares e integrada por diez miembros del secretariado, para trasladarse a ese país, a fin de pugnar por acciones más resueltas, tendientes a la concertación de un cese de fuego, el reinicio al diálogo y la adopción de medidas pertinentes para la evacuación y atención, por razones humanitarias, de los heridos (67). Por ello Baena Soares se encontraba en El Salvador hospedado en el Hotel Sheraton.

Entre otros organismos internacionales, la Comunidad Económica Europea, CEE, y países como Francia enviaron ayuda humanitaria de urgencia a El Salvador, consistentes en unos 330 000 dólares y material médico. La CEE manejó los fondos por medio de la Asociación Humanitaria Médicos sin Fronteras y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se sumó también la sección germanoccidental de la Organización Católica de Ayuda "Caritas", poniendo a disposición de la Iglesia Católica Salvadoreña una ayuda inmediata a la población civil 250 000 marcos (68).

El 18 de Noviembre, una delegación española arribó a San Salvador, integrada por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias, y el director de Política Iberoamericana, Yago Pico, con la misión, de evacuar a 52 ciudadanos españoles residentes en San Salvador, y para entrevistarse con Cristiani para tratar el asunto de los jesuitas asesinados. Cristiani les informó sobre una comisión investigadora, formada por la propia España, Inglaterra y los Estados Unidos (69).

El gobierno de Alemania Federal anunció la suspensión de toda su ayuda al régimen salvadoreño, para convertirse así en el segundo país, después de España en tomar esa decisión. La suspensión de la ayuda financiera y técnica para ese año, que consistía en 25 millones de dólares, se decidió luego del retiro de El Salvador de 50 técnicos alemanes, por cuestiones de seguridad (70).

Por su parte, El Grupo de Río pidió el cese inmediato y efectivo de las hostilidades. Los ministros de economía de Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil y México, reiteraron la importancia de mantener las secuencias de las reuniones cumbres centroamericanas. Asimismo, deploraron el continuado suministro de armas a la región centroamericana que ha constituido una flagrante violación a los acuerdos de paz contraídos, por lo que demandaron el cese inmediato de la provisión de armas y equipamiento militar, intra y extrarregional (71).

Otro actor internacional que se pronunció en contra de seguir la guerra civil fue el Vaticano, e invitó, tanto a la guerrilla como al gobierno salvadoreño, a lograr una tregua humanitaria. La

respuesta del régimen fue negativa, y pidió al Papa Juan Pablo II retirar del país a los obispos que "fomentan la violencia", Sigfrido Ochoa, instó a no dejarse presionar por los Organismos Internacionales y "exterminar a los terroristas hasta sus últimas consecuencias" (72).

Uno de los principales resultados negativos a nivel diplomático, fue el concerniente a Nicaragua, quien se adelantó a evacuar a su personal diplomático en El Salvador, como medida de precaución ante el clima de inseguridad y amenazas de muerte. Fue el primer país en adoptar esta medida (después le seguiría España) y el 26 de Noviembre el régimen de El Salvador rompió relaciones diplomáticas y comerciales con este país. Cristiani fustigó duramente a Daniel Ortega por haber apoyado al FMLN en la ofensiva, y ese mismo día aseguró que no participaría en la Cumbre Centroamericana planeada en Managua, el 8 y 9 de Diciembre (73). El 27 de Noviembre, y con carácter de urgente, el gobierno salvadoreño pidió una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la OEA para tratar "lo que considera un acto de agresión de Nicaragua en su contra" (74), el Consejo de Seguridad dió su aprobación pero se le pidió a El Salvador diferir la reunión hasta después de realizarse la cumbre de los presidentes centroamericanos.

Todavía estaban latentes las secuelas de la ofensiva, cuando la Cumbre Centroamericana se trasladó a la capital costarricense, con carácter de extraordinaria, pero quedó pendiente la ordinaria de Managua. El 10 de Diciembre inició, y el tema principal fue la

desmovilización de la contra nicaragüense. Por lo que respecta a El Salvador, el tema urgente era el cese de fuego, abordado en tres propuestas diferentes. La primera, la del propio Cristiani, se concretizó en la realización de una reunión próxima en Caracas con representantes de su gobierno y de la guerrilla, previa al cese de fuego unilateral por parte de ésta. La postura puede considerarse como más flexible si se toma en cuenta la anterior de establecer un diálogo sin negociación. La posición del presidente sin embargo contrastó, con la de su Ministro de Defensa, Humberto Laríos, cuya actitud más dura estableció que no habría ni cese de fuego ni tregua, "la única opción para solucionar la guerra es un cese de hostilidades del FMLN, con lo que automáticamente se acabaría la guerra. La Fuerza Armada no tiene absolutamente nada que concretar con el FMLN" (75).

La segunda posición, antagónica a la anterior, la presentó el FMLN vía Daniel Ortega. Llamó a un inmediato alto al fuego in situ, con la supervisión internacional. Subrayaron el respeto a los derechos humanos, a las libertades democráticas y a las fuerzas políticas y sociales mediante el levantamiento del estado de sitio y la derogación de la ley antiterrorista, libertad a presos políticos, la salida de los lisiados de guerra, el tratamiento médico de los heridos del FMLN y la destitución inmediata de altos jefes militares de las Fuerzas Armadas (76).

La tercera posición, la de Costa Rica, fue "lograr un acuerdo tipo Sapoá (el que se logró en 1988 entre la contra y el gobierno sandinista), que comprendería un entendimiento mutuo, para cesar

hostilidades durante un mes y abriría el espacio para realizar la próxima ronda el 20 de Diciembre en Caracas (77).

El resultado de ésta cumbre, fue la resolución llamada "Declaración de San Isidro de Colorado", que básicamente otorgó el respaldo de los gobiernos de la región a Cristiani y pidió la rendición del FMLN. Como consecuencia el FMLN quedó enfrentado a la difícil alternativa de rendirse sin más o de reforzar su ofensiva, a fin de demostrar a la comunidad internacional, una vez más y por la vía de las armas, su ascendiente entre los grandes sectores de la población.

La propuesta de Cristiani fue un tanto apresurada y poco viable, por que su imagen en esos momentos estaba deteriorada, además rechazó la propuesta de la guerrilla en la medida en que esta modalidad le resultaba del todo desfavorable: la presencia de una misión extranjera facilitaría al FMLN la permanencia en los territorios que controla y porque dicha misión podría constatar, sobre el terreno, que los ataques a blancos civiles, que Cristiani le atribuye a la guerrilla, fueron y están siendo realizados de hecho por las fuerzas militares y paramilitares de su gobierno. Por otra parte, Cristiani estaba consciente de la escasísima representatividad y soberanía de su gobierno, factores que invalidaron, de antemano, su participación en un diálogo con perspectivas razonables de éxito. Por otro lado, la representación gubernamental salvadoreña ante la mesa de negociaciones estaría, al igual que todo el régimen civil, sujeta al control de la Tandoná.

Hay que recordar que estaba pendiente un reunión entre guerrilla y gobierno, suspendida a partir de la ofensiva. A este respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dió a conocer una iniciativa diplomática solicitando al régimen de Cristiani y a la insurgencia del FMLN la reanudación del diálogo interrumpido y que ambos acordaran una amplia tregua navideña. Posteriormente, el FMLN propuso a las Naciones Unidas la reanudación del diálogo con el gobierno y con el apoyo logístico y político de un grupo de países latinoamericanos y europeos, México incluido. Para ellos la reunión representaba mas importancia que la Cumbre Centroamericana, ya que como lo ha explicado Shafik Handal, la guerrilla ha estado al margen de estas cumbres: "Nosotros no consideramos a esas reuniones como instancias que nos obliguen a nada. Tenemos una nación dividida, con doble poder. A esas cumbres en las que no participamos no les reconocemos jurisdicción legal, no nos sentimos obligados de por sí." (78), e hizo referencia a la reunión guerrilla gobierno: "Si hubiera avanzado la negociación FMLN-gobierno, interrumpida en Octubre pasado, no se habría lanzado la ofensiva. El lanzamiento fue una decisión política y uno de sus resultados más destacados es la salida del proceso del diálogo-negociación hasta el nivel de las Naciones Unidas." (79)

La proposición de México sobre la tregua navideña tuvo eco, se inició desde el 22 de Diciembre hasta el 1 de Enero de 1990, y el gobierno acordó suspender el toque de queda durante la Navidad. Pero no se respetó del todo, y, al margen de éstas cuestiones

diplomáticas, la lucha armada continuó y el ejército mantuvo rastreos intensos de rebeldes en zonas conflictivas.

La delegación salvadoreña ante Naciones Unidas presionó para que la resolución de la Asamblea General incorporara los puntos nodales de la declaración de San Isidro de Colorado de Costa Rica, pero los países del Grupo de Río rechazaron tajantemente tal pretensión. La mayoría de las cancillerías de los 18 países, entre ellas la de México, expresaron en privado que el resultado de esa última cumbre centroamericana careció de seriedad (80), porque la participación de la ONU y la OEA, que ya eran miembros de la mesa de negociaciones de El Salvador, fueron ignoradas en San Isidro. La Asamblea General, con el respaldo de los 159 gobiernos acreditados, hizo un llamado a las dos partes para garantizar la seguridad personal y de las representaciones oficiales de los organismos internacionales en ese país, poco después del cateo y saqueo sufrido por las oficinas de la ONU en San Salvador por parte de los cuerpos de seguridad (81).

Dos días más tarde de la iniciativa de México, en Washington, funcionarios estadounidenses "anónimos", dijeron que Cuba enviaba armas a la insurgencia salvadoreña por vía terrestre a través de la Península de Yucatán (82), ésto originó que el alto mando militar salvadoreño investigara el tráfico de armas a la guerrilla salvadoreña. Un portavoz de la Fuerza Armada, también anónimo, indicó que el tráfico era una información clasificada en poder del alto mando militar que la estaba investigando, por ello no cabía ninguna duda, pero no dió detalles (83). Justamente el día de

Navidad, la agencia de noticias Associated Press, AP, transmitió sin sentido, que funcionarios estadounidenses (también anónimos) dijeron que Cuba, para aliviar las presiones que Nicaragua en ese momento pasaba por las elecciones presidenciales, envió armas al FMLN, quien lo ayudaría a contrarrestar cualquier alteración del orden, por la ruta Cuba-Yucatán-Guatemala-El Salvador, y agregó que la complicidad de México podría ser materia de un reclamo formal.

Cabe mencionar aquí la irresponsabilidad por parte de Washington, tratándose de un país que mantiene con el nuestro una fluida comunicación, un tan oportuno intercambio de puntos de vista, ¿por qué no se ofreció la información vía diplomática?, sobre todo respecto a un asunto de tal gravedad. ¿Por qué se usó como voceros a funcionarios anónimos y como repetidores al gobierno de Cristiani?. Tales dudas quedarían disipadas con la solución al caso del tráfico de armas durante el año que iniciaba.

3.3 Se rompen las condiciones por alcanzar la paz.

En Enero de 1990 Cristiani viajó a los Estados Unidos en el marco de una reunión diplomática con el fin de reabrir el diálogo con la insurgencia al "más corto plazo posible", mejorar su imagen deteriorada en el exterior, y, obtener la renovación de la ayuda económica y militar de Washington. Antes de partir trató de llegar con la imagen de un buen gobierno, suspendió el toque de queda al considerar que las razones de su imposición habían sido superadas (no se cumplió) y reiteró su disposición de dialogar con la dirigencia del FMLN directamente, bajo la supervisión de la Iglesia

Católica y de los Secretarios Generales de la ONU y OEA. Sin embargo, sus declaraciones fueron contrarias en Washington, aquí estimó que no había cabida para una solución militar y negó que hubiera sido su gobierno el que se oponía a la mediación de Pérez de Cuéllar, como demandaba la insurgencia, al afirmar que fue el propio Secretario General quien indicó que deseaba limitarse a buscar la reapertura del diálogo (84).

La delegación del FMLN y Alvaro de Soto, representante de las Naciones Unidas para conseguir el diálogo salvadoreño, al mismo tiempo se reunieron en la ciudad de México. El FMLN estimó que podría: a) recibir formalmente la posición del gobierno, transmitida por Cristiani a Pérez de Cuéllar; b) concretar el carácter de la participación del Secretario General en el proceso; c) considerar la incorporación de otras fuerzas (empresarios, partidos, iglesia, organizaciones sociales) a la negociación, y, d) explorar la posible participación de otros gobiernos en apoyo al mecanismo resultante.

La insurgencia valoró que el núcleo del problema era un asunto de forma, es decir, que Pérez de Cuéllar fuera realmente mediador y activo concertador entre dos posiciones y no un simple testigo que interpusiera sus buenos oficios como vocero gubernamental del propio Cristiani; y dos de fondo, que la representación gubernamental tuviera capacidad de decisión y que las negociaciones incluyeran la depuración efectiva del ejército (85). Haciendo referencia al objetivo del viaje de Cristiani, juzgó que la posible ratificación por parte del Congreso estadounidense

del incremento de la ayuda económica y militar, expresaría una clara decisión de proseguir con la guerra, haciendo fracasar las posibilidades de dialogar (86).

Sobre la base de esta posición se encuentran los puntos centrales, que abrirían el camino hacia el nuevo diálogo: la reforma de la Fuerza Armada y la transformación del frente FMLN en partido político. Estos dos puntos se dispusieron en la propuesta de Septiembre de 1989, y para ambas se requería la presencia testificadora de las Naciones Unidas. Para el FMLN, los puntos indispensables para reformar el ejército fueron: (87)

1) La creación y desarrollo de instituciones civiles que contrabalancen la impunidad del ejército, esto es, un nuevo sistema judicial, reformado de arriba a abajo, para hacerlo fuerte; creación de instituciones como la Procuraduría Especial de Derechos Humanos, con capacidad de enjuiciar;

2) Reducción numérica del ejército, que es muy grande y costoso para el país, ya que se destina en costos directos cerca de la cuarta parte del presupuesto para defensa y en costos directos e indirectos es algo más de la mitad del presupuesto, además de la ayuda de los Estados Unidos, y eso no lo puede pagar ni sostener el país;

3) Separación de la policía del ejército y reestructuración de la policía para que sea civil y desmilitarizada y bajo mando civil, pues hasta ahora son la misma cosa ejército y policía y dependen del mismo jefe, y,

4) Depuración de jefes y oficiales pues consideran que hay

gente que está involucrada en violación a los derechos humanos.

El FMLN exigió negociar su incorporación a la vida política del país, reconociendo por tanto, que no sólo han sido una fuerza militar, sino también política. Sus principales dirigentes antes fueron políticos y después militares. El problema es poder diseñar un programa de transformación gradual para poder encajarlo con el programa de reforma del ejército, a esto se refirió un comandante insurgente: "tiene que llegar un momento de entrega de armas, al igual que la reducción del ejército supone también una entrega de armas, tiene que ser simultáneo" (88). Respecto a la participación de Naciones Unidas, esta es necesaria entre otras razones para que el diálogo pasara a ser negociación y para facilitar la movilización amplia de apoyo a la solución política, el problema es que la Fuerza Armada sólo ha aceptado que sea testigo y no mediador.

Este fue el desarrollo del primer trimestre de 1990, planes para debatir en una próxima reunión, pero también continuaron las ofensivas militares, ataques de ambos bandos, la Asamblea Legislativa aprobó otra prórroga por 30 días más del estado de sitio. El FMLN anunció la suspensión por tiempo indefinido de los sabotajes al transporte público, al comercio, comunicaciones telefónicas y atentados contra funcionarios y personas no vinculadas con los aparatos militares o paramilitares, como gesto para destrabar el diálogo de paz. (El vicepresidente Francisco Merino y el coronel Emilio Ponce, asentaron que la oferta era un gesto propagandístico, mientras que el coronel Francisco Elena

Fuentes consideró la iniciativa como una demostración de que los rebeldes estaban dispuestos a negociar en serio, y además propuso al gobierno que respondiera levantando el estado de sitio). Se buscó avanzar en el proceso de humanización del conflicto, por lo que se trató de contribuir a fortalecer los espacios de los partidos políticos, organizaciones sindicales y avanzar hacia una solución política negociada, así como fortalecer las posibilidades de éxito del papel mediador de la ONU. A su vez, representantes de partidos de oposición retaron al gobierno (Cristiani se encontraba en Chile para asistir a la toma de posesión del presidente Patricio Aylwin) a dar muestras en favor del diálogo y de la democratización del país.

Las consultas de Alvaro de Soto con la guerrilla siguieron su curso, quizá lentas porque únicamente se manejaron aspectos de procedimiento de negociación, pero no se discutió sobre los aspectos sustantivos de la guerra y la pacificación. Sin embargo, se adoptó un método de negociación aplicado durante el diálogo entre Egipto e Israel, que culminó con el Acuerdo de Campo David, según el cual el mediador, en este caso Alvaro de Soto, redactaría un borrador de resolución final sobre la base de los elementos recogidos de ambas partes en conflicto (89). Este borrador, afinado a lo largo de las consultas y reuniones, podría constituirse en un acuerdo de paz. Las consultas dieron sus frutos con la reunión de Caracas del 29 de Marzo de 1990, fue algo así como una coincidencia, Cristiani se encontraba en ese país para negociar su deuda externa y la delegación del FMLN, acompañada de la oposición

política, llevó su propuesta al presidente, incluso Javier Pérez de Cuéllar se encontraba también aquí. Guillermo Ungo del MNR y Rubén Zamora del FMLN, plantearon al presidente de aquel país, Carlos Andrés Pérez, la necesidad de la desmovilización de la guerrilla salvadoreña, que se daría al mismo tiempo con la desmilitarización de los escuadrones de la muerte y la democratización y depuración del ejército, como vías para alcanzar la paz, así como las reformas al poder Judicial y al sistema electoral para concretar el proyecto de democratización (90).

Cristiani se mostró optimista, "estamos seguros de que si logramos incorporar al grupo de extrema izquierda en el proceso democrático, habremos resuelto casi en su totalidad el problema de los abusos que son generados por la violencia", y es aquí cuando reconoció abiertamente la existencia de los escuadrones de la muerte, "los cuales son consecuencia de la acción generada por la guerrilla, pues la violencia genera violencia" (91).

De este encuentro "casual" y ante el secretario de ONU, Alfredo Cristiani, el FMLN y la oposición, acordaron celebrar una reunión en Ginebra, el 4 de Abril, para reiniciar el verdadero diálogo, es decir, sería ésta una reunión previa con la guerrilla y gobierno, como claramente explicó Cristiani, "servirá solamente para que el Secretario de la ONU de a conocer el texto de lo logrado hasta el momento y plantear los procedimientos que regirán el diálogo" (92), y adelantó que al encuentro de Ginebra irían "uno o dos representantes de mi gobierno, pero no la comisión de diálogo que tendría a su cargo las pláticas futuras" (93).

De aquí se desprenden varios puntos a considerar. Primero, la aclaración anterior de Cristiani, pareciera disminuir las expectativas en torno a la cita, ya que el interés estuvo puesto sobre las decisiones que podrían tomarse, ya fueran a favor o en contra; y segundo, la posición de reconocer la existencia de escuadrones, de que estos existen por que existe el FMLN, "por que la violencia genera violencia", da la idea de que se trata de justificar su existencia en ese país. Quizá para Cristiani tenía más importancia la reunión Cumbre de presidentes centroamericanos que estaba en puerta y donde sí tenía que manejar posiciones más concretas.

Mientras la reunión de Ginebra quedaba pendiente, se llevó a cabo, el 2 de Abril de 1990, una Cumbre Centroamericana más, en Managua. El tema candente fue, como siempre, la desmovilización y desarme de la contra financiada por los Estados Unidos. Por lo que respecta a El Salvador se analizó la evolución del diálogo entre la guerrilla y gobierno salvadoreño, por tanto, hubo dos posiciones: la del FMLN presentada vía Daniel Ortega, que pidió el apoyo de los cinco presidentes al diálogo-negociación de Naciones Unidas, el que se realizaría en Ginebra; y la posición de Cristiani, quien reafirmó, que la reunión de Ginebra sería únicamente para establecer las condiciones de una futura negociación, y que para la pacificación de su país se requería la desmovilización del FMLN con el mismo método utilizado para la desmovilización de la contra.

Un punto general discutido fue establecer un equilibrio para

la reducción de los ejércitos y el potencial militar de Centroamérica. La presencia aquí de los altos jefes militares de cada una de las naciones del área (entre ellos el general Humberto Ortega de Nicaragua y Humberto Laríos de El Salvador) despertaron especulaciones sobre la posibilidad de llevar a cabo una reunión militar paralela a la cumbre para tantear el terreno. Este fue desde los primeros años de la negociación centroamericana, un punto planteado por el Acta de Contadora. En su momento el tema no prosperó, hoy sin embargo se volvía a replantear. Empero, dos presidentes guardaron silencio sobre este punto: Alfredo Cristiani y Vinicio Cerezo. Ambos poderes civiles tienen frente a sí fuertes poderes castrenses y serios desafíos por sus respectivas insurgencias nacionales.

Después de la Cumbre Centroamericana se realizó la de Ginebra, el 4 de Abril. Javier Pérez de Cuéllar fue el único autorizado para revelar los eventuales acuerdos entre el régimen y el FMLN. El grupo gubernamental lo integraron el ministro de Justicia, Oscar Santamaría, el embajador en Italia, Guillermo Paz Larín, la embajadora en Francia, Ana Cristina Sol y el representante permanente de El Salvador en Ginebra, Carlos Ernesto Mendoza. La delegación del FMLN fue presidida por Shafick Jorge Handal y la integraron Salvador Samayoa, Ana Guadalupe Martínez y Roberto Cañas, miembros de la comisión político-diplomática. Por la ONU, Alvaro de Soto, representante personal de Javier Pérez de Cuéllar.

Ya Cristiani había señalado el carácter de esta reunión, y aunque no tuvo mucho éxito, el relizaria en Ginebra le dió una

seriedad que no tuvo anteriormente, además se formalizó el diálogo entre gobierno y guerrilla que se llevaría a cabo en Mayo con sede en México. La voluntad del FMLN quedó atestiguada con la participación total de la comisión negociadora y llama la atención el bajo nivel de representatividad por parte del gobierno, pues sólo acudió el Ministro de Justicia, Oscar Santamaría, porque los demás firmantes son sólo embajadores de Europa.

Es pertinente destacar que de ésta reunión se logró que las partes coincidieran en la necesidad de mantener mecanismos de información y consulta con los partidos y organizaciones sociales del país. Esto motivó a las organizaciones populares y a los mismos partidos a reunirse en instancias más amplias y específicamente dirigidas a lograr la paz por medio de las negociaciones, éstas son: (94) 1) La Interpartidaria, que reúne a los nueve partidos políticos existentes en el país; 2) La Intersindical; y, 3) El Comité Permanente del Debate Nacional, CPDN, Interestatal y Municipal que aglutina a 73 organizaciones empresariales, sindicales, religiosas y de profesionistas, entre otras.

Representantes de éstas agrupaciones se han reunido tanto con el FMLN como con el gobierno para exponer sus puntos de vista y para exponer una demanda concreta: participar directamente en las negociaciones. Para los dirigentes de la insurgencia, este fenómeno agrupador de organizaciones populares, representa un salto de calidad histórico que marcaría el inicio de un cambio en la correlación de fuerzas.

En otro sentido, prácticamente las posibilidades de paz no

tuvieron mucho éxito porque mientras se habla de ella, en El Salvador quedaba todo pendiente, por ejemplo, el caso del tráfico de armas destinados para la guerrilla, el tema representaba un punto a favor de Cristiani, que le sirvió por mucho tiempo, incluso se hablaba de una nueva ofensiva guerrillera, ya que se había capturado un cargamento en Honduras, de armas presuntamente dirigido al FMLN, (este consistía de 24 fusiles AK-47, 24 empuñaduras y 78 cargadores para esas armas, 80 rollos de marcha lenta de un peso superior a los dos kilogramos cada uno y gran cantidad de material para explosivos (95). Aprovechando la oportunidad, Cristiani anunció el aplazamiento del diálogo con la insurgencia que estaba previsto para el 3 de Mayo, expresando su preocupación por que las Fuerzas Armadas nicaragüenses continuaban enviando armamento a la guerrilla a espaldas del gobierno de Violeta Barrios (96).

Un segundo caso podría ser el asesinato del dirigente opositor y miembro de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, Héctor Oqueli Colindres. El asesinato, en Guatemala, demostró el interés de sectores centroamericanos por escalar los enfrentamientos en el área, y con ello, obstaculizar la vía de la negociación. El gobierno de Cristiani guardó silencio, a pesar de que Oqueli formó parte importante en los diálogos anteriores como representante del FDR, es obvio que estaba perdiendo el control de su ejército, de las facciones que se disputaban el poder, además sabía lo grave que era, o que los escuadrones de la muerte actuaran fuera de su país, o que los mismos se encadenaban con los de un

país vecino (97).

Por último, un tercer caso y posiblemente el más importante, fue (y sigue siendo) el de los jesuitas asesinados, caso que no había sido esclarecido y que estaba condicionado por el Congreso de los Estados Unidos, (no por Bush) a aprobar ayuda para El Salvador. Si bien, Cristiani había dado a conocer la detención de algunos militares implicados (Ver Anexo No.1), el caso no estaba del todo resuelto. Tenía, mientras tanto que tomar otros elementos a su alcance para salvar su imagen, así que levantó el estado de sitio que regía ya por cinco meses y que restringía la libertad de reunión para las organizaciones gremiales. De inmediato los Estados Unidos elogiaron la iniciativa, pero no le valió de mucho por que el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso Estadounidense votó en favor de una reducción de 50% de ayuda militar a El Salvador y por la imposición de nuevas y estrictas condiciones para proporcionar dinero en el marco de un acuerdo previo, a ser llevado al pleno del Congreso. Si en el futuro próximo se aprobaba el acuerdo, esto significaría reducir a la mitad los 85 millones de dólares anuales que los Estados Unidos proporcionan en ayuda a este país (98).

Cristiani tenía mucho que resolver y mucho que perder, advirtió que de concretarse el recorte de la ayuda militar, su gobierno se vería obligado a utilizar fondos propios sacándolos de otros sectores con el consiguiente daño a los programas sociales, a fin de trasladarlos al ejército para mantener una defensa eficiente (99), su desesperación y justificación se plasma en una

entrevista realizada por el "The Washington Post", que a continuación se describe íntegra:

"En El Salvador nos parece raro que se traiga el tema a colación en éste momento por que desde nuestro punto de vista nunca ha habido un progreso más alentador en todos los frentes que demuestra que la ayuda estadounidense se está aprovechando debidamente y que la estrategia norteamericana está bien cimentada. Por ejemplo: El Salvador se ha convertido en una democracia en funciones. Ha habido seis procesos electorales en los últimos diez años y, cuando yo tomé posesión del gobierno con el 54% de votación a mi favor, fue la primera vez en la historia del pueblo salvadoreño en que el gobierno pasaba de manos de un civil a otro civil en elecciones populares. Nuestra democracia constitucional pasó por un exámen crítico, lo cual debería complacer a todos los estadounidenses.

En mi discurso inaugural hace diez meses, declaré que la lucha en busca de una solución pacífica al conflicto que ya dura diez años con el FMLN es mi prioridad máxima y expuse un plan de cinco puntos para alcanzarla. Las conversaciones se iniciaron el año pasado pero el FMLN las suspendió en Noviembre con la ofensiva, en la creencia que a través de ella podría desencadenar un levantamiento popular contra el gobierno recién elegido. Pero el pueblo se negó, y se logró derrotar al FMLN.

En Diciembre pasado, los presidentes de los cinco países centroamericanos reunidos en San Isidro de Colorado, Costa Rica, emitieron una declaración directa de apoyo a mi gobierno que

describió como producto de un proceso democrático, pluralista y participativo. El ejército está más disciplinado y ha demostrado su disposición para investigar los abusos cometidos contra los derechos humanos entre sus miembros. Hace diez años el arzobispo (se refiere a Monseñor Oscar Romero) fue muerto a tiros por un escuadrón de la muerte, que según sospechas generalizadas estaría formado por militares. Nunca se hicieron pesquisas oficiales para dar con los culpables. Durante la ofensiva de Noviembre, seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas fueron asesinados en la UCA (la Universidad Centroamericana). Pocas horas después ordené una investigación a gran escala a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales, financiada y asesorada por los Estados Unidos, además solicité ayuda técnica adicional del FBI y de los departamentos de policía de Canadá y España. Gracias a esa ayuda internacional, efectuamos más de 300 pruebas de balística con las armas de soldados destacados cerca de la UCA en ese momento. Dos meses después, un coronel, tres tenientes y cinco soldados del ejército fueron detenidos y acusados del crimen. En tanto, continúan las investigaciones en busca de pruebas que relacionen a otras personas con éste hecho criminal.

Todavía sigue vigente nuestro ofrecimiento de una recompensa de 250,000 dólares a quien proporcione información adicional que permita más arrestos. Aunque es verdad que no podemos garantizar que un juez o un jurado contendrán a esos hombres por su acto tan vil, ejerceremos una vigorosa acción legal en este caso. Nos limita un sistema legal que se ha descrito como corrupto, pero estoy

promoviendo el establecimiento de una legislación adecuada para corregir estas limitaciones.

Nuestros programas económicos y sociales están dirigidos a los salvadoreños más empobrecidos. Además, otorgamos casi 15,000 nuevos títulos de propiedad de sus tierras a campesinos desposeídos que no los hubieran obtenido bajo el actual sistema de reforma agraria, que les imposibilitaría la obtención de créditos para el financiamiento de sus cosechas. Esto es una actualización del programa de reforma agraria salvadoreña. La ayuda norteamericana tuvo una influencia decisiva para auxiliar a los salvadoreños de pocos recursos que son los más directamente afectados cuando los guerrilleros atacan y vuelan los transportes rurales de pasajeros y las líneas de suministro de energía eléctrica. Los fondos estadounidenses nos permiten reparar la infraestructura básica con suficiente rapidez para minimizar el efecto que los atentados puedan tener sobre ellos. ¿Podemos decir que somos una democracia perfecta, sin problemas a violaciones de los derechos humanos?. Por supuesto que no, pero estamos obteniendo logros y nada es más importante para un avance continuo que un acuerdo de paz. Pero quiero ser claro al respecto: sería un grave error suprimir o disminuir la ayuda en esta etapa crucial del proceso de paz. Impulsaría a quienes quieren destruir por medios violentos nuestra democracia al creer que pueden lograr en Washington lo que no obtuvieron en El Salvador.

Si estas conversaciones tienen éxito y los guerrilleros del FMLN acceden unirse a nuestra democracia, nuestro objetivo es

reducir sustancialmente el tamaño de nuestro ejército y canalizar la ayuda de Estados Unidos hacia la educación, salud pública y otros programas de desarrollo para los más necesitados, incluso la capacitación para el trabajo a los excombatientes. Sabemos que los problemas de El Salvador no se pueden resolver con violencia. En cambio estamos convencidos de que el progreso económico en términos de justicia social para todos los salvadoreños, sólo se puede obtener dentro del marco de una democracia constitucional" (100).

Por las anteriores palabras de Cristiani, tal pareciera que el desarrollo del presente trabajo distaría mucho de la realidad, pero lo importante es destacar que un discurso exagerado tiene probablemente detrás de él, una situación desesperada y dudosa, difícil de controlar pero necesaria por arriesgar las alternativas existentes, máxime si éstas coinciden con el amigo poderoso.

Antes de retomar el tema del diálogo, existe un hecho que merece atención. Con motivo del Día del Trabajo, se verificó la importancia manifiesta de todas las organizaciones laborales para participar directamente en el diálogo. Por primera vez desde los años sesentas, todos los partidos políticos, todas las fuerzas sociales, todos los sectores, todos menos uno, el partido ARENA, marcharon al unísono. La Unión Nacional Obrero Campesina, UNOC, creada en tiempos de Duarte como expresión de masas del Partido Demócrata Cristiano, y su representante ahora, Amanda Díaz Toro, fue designada como oradora principal (101). Una vez más se dieron cuenta de la necesidad de formar comisiones representativas en los próximos diálogos, y que realizaron con éxito.

Llegaron los días 5 y 6 de Mayo, dirigentes de ocho de los nueve partidos salvadoreños se reunieron en la Ciudad de México a fin de analizar las perspectivas de paz. Sólo estuvo ausente el minoritario Acción Demócrata, de centro derecha, por no haber participado en el proceso de diálogo mantenido con las agrupaciones políticas días atrás, (de donde habían concretado las funciones de la Interpartidaria). Los puntos tratados fueron: la exposición por el FMLN de su posición y propuesta de paz; la exposición por los partidos sobre su papel en el proceso negociador; y, el establecimiento de mecanismos permanentes de comunicación con los insurgentes.

Posición del FMLN: a) disposición a desmovilizarse con las garantías para que los pasos que se dieran en este sentido no revertieran en su contra, b) la Fuerza Armada a su vez, debía dar pasos hacia una transición para que el poder civil fuera substituyendo el dominio militar, así el presidente civil podría efectivamente gobernar y se podría proceder hacia la gradual desmilitarización del sistema político, c) en el sentido anterior, la Fuerza Armada debía ser depurada, es decir, conseguir el fin de la impunidad; la reducción gradual del ejército, su profesionalización y, por último, la desmilitarización total, d) la negociación entre el gobierno y el FMLN pasaría por tres niveles: 1) Acordar condiciones para un cese de fuego, es decir, silenciar los fusiles aunque todos mantuvieran sus posiciones. Este sería el primer punto a abordar una vez iniciada formalmente las negociaciones directas, con la mediación del encargado personal del

Secretario General de ONU, Alvaro de Soto; 2) Cumplida la fase anterior, se discutiría un convenio para el cese de los enfrentamientos armados sobre la base de una serie de acuerdos políticos, tal y como fue acordado en principio en el documento de Ginebra; 3) Se llegaría a un acuerdo político fundamental: terminar la guerra con el cese definitivo de la lucha armada (102). El objetivo general partía de la idea que en 1991 se pudiera terminar con la guerra, y lograr mediante un calendario, la disolución gradual de las dos fuerzas armadas, la gubernamental y la del FMLN.

La posición del gobierno fue mínima, o nula, ya que había aclarado que el propósito de la reunión sería sólo intercambiar percepciones y posiciones con los insurgentes.

Los partidos políticos representados en la Interpartidaria coincidieron en el tema del ejército, a excepción de ARENA, "ya no basta pedir la autodepuración de la Fuerza Armada. Lo que quedó demostrado con la matanza de jesuitas, es que es imposible depurar a un ejército donde la responsabilidad criminal no corresponde a ningún individuo en lo particular, sino a la Fuerza Armada como institución. La autodepuración debe estar ligada a un proceso más amplio de desmilitarización" (103).

Mientras se agotaban los temas de la reunión, surgieron nuevos acontecimientos al interior del país que modificaron las reuniones próximas. En medio de la guerra de acusaciones, el FMLN y la Fuerza Armada salvadoreña no cesaron sus ataques, los Estados Unidos calificaron de contradictoria la actitud de la guerrilla de

continuar con sus operaciones militares en momentos en que se abría un proceso de diálogo, el FMLN respondió: "nuestra actividad no es contradictoria con la negociación, en tanto que no haya todavía un acuerdo de cese de fuego y por que se trata de acciones de respuesta contra las acciones militares del ejército" (104) y puntualizó que con pleno conocimiento de Cristiani y de los asesores estadounidenses, "la Fuerza Armada mantiene operaciones militares en todo el país, bombardeando, capturando, desapareciendo y asesinando civiles en el campo, y reprimiendo a los trabajadores de la ciudad" (105), por ello, la comandancia general del FMLN resolvió mantener sus acciones militares. En opinión del FMLN, el ejército reafirmó su voluntad guerrillerista al declarar que si los Estados Unidos les cortaba la ayuda, buscarían otros medios para obtenerla y continuar con sus planes de contrainsurgencia. Estaban en contra de los cambios militares que el ejército realizaba (106) pues sólo rompían la cadena de responsabilidades del alto mando en el asesinato de jesuitas, solicitaban más bien, una depuración a fondo. Por otro lado, se comprometió a no recibir más armas y aceptar una verificación internacional al respecto, siempre y cuando los Estados Unidos dejaran de entregar respaldo militar al régimen salvadoreño.

El 16 de Mayo de 1990 inició otra ronda "de reinicio" de diálogo con el gobierno y guerrilla, en Venezuela. La propuesta del FMLN ahora se ampliaba, e incluyó una negociación en etapas, sugiriendo para éstas su verificación y supervisión.

- Fin del conflicto armado a más tardar en Julio de 1991

conforme a un calendario para cumplirse progresivamente. El plan podría ser susceptible de modificación dependiendo de la rapidez con que se lograra avanzar en los acuerdos globales.

- La desmilitarización de la sociedad consistente en el ofrecimiento del FMLN de entregar totalmente sus armas a cambio de una reducción sustancial de las Fuerzas Armadas, pero para el efecto y como parte ya de un proceso de democratización.

- En el sentido anterior, demandó la depuración a fondo del ejército, la disolución de los cuerpos de seguridad y fuerzas paramilitares y la elaboración de una nueva Constitución. Para ello justificó que "la Constitución Política es expresión de un pacto social, que cuando se rompe como producto de un conflicto armado interno, debe restablecerse y formalizarse en una nueva Constitución" (107).

- Ya que las raíces de la guerra han residido en la desigualdad económica, propusieron un pacto económico entre el gobierno y las fuerzas sociales con base en el establecimiento de las reformas requeridas en ese campo.

- Durante los últimos tres meses del año se concretaría la reforma constitucional y se tomarían acuerdos en torno a los mecanismos de verificación del proceso negociador. Si al cabo de siete meses se avanzaba en los acuerdos se podría concertar una paz armada, y para los primeros seis meses de 1991 se pondrían en práctica los mecanismos de verificación para el cumplimiento de los acuerdos que se tomaran previamente, de modo que Julio de 1991 marcaría el fin del conflicto armado (108).

Respecto a la calendarización, una primera etapa se refirió a la firma de un alto al fuego, y de todo un acto que no respetara los derechos humanos antes del 15 de Junio de 1991. Entre el comienzo de las negociaciones de Caracas y el 15 de Junio, el gobierno y el FMLN negociarían acuerdos políticos sobre la reestructuración de la Fuerza Armada, la administración de la justicia, el proceso electoral, los derechos humanos y la reforma constitucional. Posteriormente, hasta el 15 de Septiembre de 1991, se concentrarían acuerdos sobre los anteriores puntos y los mecanismos, garantías y facilidades para que los integrantes de la guerrilla se reincorporaran, en un marco de plena legalidad a la vida civil, política e institucional del país. El calendario concluiría el 12 de Octubre de 1991 con la ejecución de los acuerdos (109).

La propuesta de Cristiani más bien fue respuesta, sólo habló de las diferencias con el FMLN: "No podemos aceptar la propuesta del FMLN con respecto a calendarizar hasta Diciembre de 1991. No podemos aceptar que continúe la violencia por tanto tiempo. El gobierno propone una tregua militar inmediata, mientras que la guerrilla, dice que el cese de hostilidades debe darse tras acuerdos políticos sustantivos que se firmen durante el transcurso de las negociaciones" (110).

El rasgo más destacado en esta ronda fue la participación de un mediador de las Naciones Unidas. La implicación de este nuevo elemento, que ya no fue sólo observador, bien podría establecer la diferencia entre las negociaciones hasta ahora infructuosas y una

gestión que se traduzca en acuerdos concretos de pacificación. Desafortunadamente la fluidez que pareció estar adquiriendo la negociación no implicó algún avance concreto en la fijación de las condiciones.

En algunas cuestiones relativas al ejército, el FMLN ha tenido lógica, los niveles de impunidad de que goza la Fuerza Armada salvadoreña son alarmantes, el ejército no debe ser visto como el punto más difícil sino como el más decisivo y determinante para consolidar el proceso de negociación. La Fuerza Armada se debe transformar, depurar, reducir y en definitiva buscar su extinción por que lo único que hace es consumir demasiados recursos y no le da bienestar al pueblo salvadoreño. La solución negociada de la guerra en El Salvador se sustenta en tres ejes: la desmilitarización, democratización y un pacto social y económico. De estos tres puntos el más decisivo es la desmilitarización, pues significa en gran medida la conversión de la Fuerza Armada en un cuerpo constituido para garantizar la soberanía e integridad del país, y no es un instrumento de represión y terror contra la sociedad civil, como lo ha asentado Shafic Handal, miembro de la comisión político diplomática del FMLN, "si no desaparece la impunidad castrense no puede haber una democratización real" (111).

El régimen por su parte ha pedido al FMLN un cese de fuego en el corto plazo, pero sin ninguna garantía, pero ello se contraponen a los acuerdos de Ginebra, además de constituir un criterio unilateral, y como ha dicho el FMLN, que propone primero el acuerdo político y después el cese de fuego, "de admitir éstas condiciones

sería un suicidio que no podríamos justificar ante nadie" (112). Este es el punto principal de discrepancia entre ambas delegaciones y los mismos planteamientos serían llevados a la ronda de Oaxtepec.

El 19 de Junio de 1990 inició la ronda de Oaxtepec, en México, con la mediación de Alvaro de Soto. La demanda al gobierno y el planteamiento a la nación fue la desmilitarización de la sociedad. La Iglesia Católica, por medio del Arzobispo de El Salvador, Monseñor Rivera y Damas, señaló que debía empezarse de lo más fácil a lo más difícil para que no fracasaran las pláticas (113), pero para el FMLN el tema del ejército era el más difícil, por lo cual debía discutirse a fondo y en serio para avanzar sólidamente hacia la búsqueda de la paz.

Proposición del FMLN; (114) a) La depuración del ejército y la baja de 200 oficiales de las Fuerzas Armadas, con rangos desde subtenientes hasta coroneles; b) negociación de la disolución de los cuerpos de seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, la defensa civil y del batallón Atlacatl; y c) Nombramiento, por consenso de ambas partes, del Ministro de Defensa y Viceministro de Seguridad Pública.

El asesor del presidente Cristiani, David Escobar Galindo, aclaró la posición del gobierno: tratar todos los temas de la agenda que se pudiera, y la Fuerza Armada y las elecciones podrían ser parte de ella. "No se trata de propuestas formalizadas, sino de una base de puntos de vista que se están manejando a fondo, pero sin la rigidez de propuestas formales" (115). La Fuerza Armada aclaró que no podía desaparecer por acuerdos políticos, ya que ello

implicaba estudios profundos y reformas constitucionales, pero manifestó su apoyo total a la posición que adoptara el gobierno, a la vez que condicionó la reducción de sus fuerzas a que los rebeldes desistieran de sus acciones armadas y depusieran las armas (116).

Desde el inicio de la guerra en El Salvador, se añadieron al ejército 55,000 elementos, y el ejército podría reducirlos si el FMLN depusiera las armas. El temor de los militares ha sido perder sus privilegios que en diez años de guerra han venido acumulando y el temor de enfrentar juicio y castigo ante crímenes cometidos contra la población civil. Saben que son los perdedores en un arreglo negociado, por que son ellos los que no han logrado victorias militares contra el FMLN, y los que están políticamente derrotados frente al conjunto de las fuerzas políticas y sociales del país y frente a la comunidad internacional, hasta los Estados Unidos han aceptado la necesidad de depurar al ejército y juzgar a los responsables de crímenes, como el caso de los jesuitas.

El régimen ha tenido un enfoque más restringido en relación al FMLN, su posición ha estado definida como una reestructuración y evolución de la Fuerza Armada, pero Cristiani entendía que si no negociaba en los meses próximos, tenía arruinada toda su presidencia y no podría ofrecer la reactivación económica al sector empresarial que lo llevó al poder. Entendía también que la ayuda militar de los Estados Unidos tenía ya contados sus días, y que si no negociaba ahora, tendría que hacerlo después en condiciones de mayor debilidad. Hasta este momento, los Estados Unidos estaban

convencidos, después de diez años de guerra, que la derrota militar del FMLN era imposible. "Esta conclusión fue uno de los logros importantes de la ofensiva de Noviembre. Hasta ahora han invertido en la guerra de El Salvador casi 5,000 millones de ayuda directa. Este dato lo sitúa en el quinto lugar de la lista de los gobiernos que reciben más ayuda de los Estados Unidos (detrás de Egipto, Israel, Turquía y Paquistán)", expresó Shafic Handal en una entrevista (117).

El resultado de las pláticas fue infructuoso en el sentido de lograr avances concretos sobre alguna petición, pero se discutieron los puntos de cada delegación, lo que constituye un avance si tomamos en cuenta que el diálogo se interrumpió siempre, y ahora se aseguraba por lo menos su secuencia, acordando una próxima reunión entre el 20 y 25 de Julio. Hubo pocos avances porque mientras en México se dialogaba, la Fuerza Armada lanzó una ofensiva militar en varios departamentos del país, con la participación de batallones de choque, brigadas y destacamentos militares respondidos por la guerrilla (118).

El 16 de Agosto se reanudaron las pláticas en Costa Rica. El FMLN no quitó el dedo del renglón en sus propuestas:

- a) desaparición del ejército, paralelamente con la desmovilización de sus combatientes;
- b) enjuiciamiento y castigo, antes de la concertación de un cese de fuego, de los autores intelectuales y materiales de más de 25 casos de crímenes individuales y colectivos cometidos por las fuerzas militares salvadoreñas desde 1979;

c) avanzar en el punto ya acordado sobre respeto a los derechos humanos, ampliándolo de tal manera que se permitiera acudir a una misión de la ONU a El Salvador para su verificación, con lo que se podría llegar más pronto a un cese de fuego (119);

d) creación de una comisión integrada por el gobierno y el FMLN para que evaluara y vigilara el desarrollo del proceso judicial, además de informar periódicamente a las delegaciones negociadoras y la comunidad internacional (120); y,

e) debate público en la Asamblea Legislativa sobre el tema de las Fuerzas Armadas.

El gobierno salvadoreño propuso una ley de punto final titulado "Papel de la Fuerza Armada dentro del proceso Democrático":

a) una ley parecida a la aprobada en Uruguay, que permitiría a los militares supuestamente involucrados en la violación de derechos humanos, no comparecer ante la justicia, y además supondría una amnistía que beneficiaría a los rebeldes y a todos los presos políticos;

b) la creación de un tribunal de honor militar, para juzgar dentro de la institución los delitos que pudieran ser cometidos por sus miembros;

c) en cuanto a la reducción de efectivos militares, se propuso el traslado de la Policía de Hacienda, que depende del ejército, al Ministerio de Hacienda y de la Policía Nacional militarizada, al Ministerio del Interior;

d) el desarme de las patrullas de defensa civil en cuanto el FMLN

firmara el cese de fuego, y su desmantelamiento, cuando depusiera las armas;

e) tras el cese de fuego, terminaría el reclutamiento obligatorio y se elaboraría una nueva ley de servicio militar justo cuando se desmovilizara el FMLN (121).

El ejército, obviamente fue el primero en protestar. Justificó que ha dispuesto de sus propios instrumentos de depuración y reestructuración, por tanto, plantearon únicamente cambios de forma en el aparato castrense. Para ellos, lo único susceptible de negociarse era el tamaño del ejército, pero no su desaparición.

El mediador de Naciones Unidas, Alvaro de Soto, introdujo un planteamiento nuevo en las conversaciones cuando propuso discutir el cese de la impunidad, tanto para las Fuerzas Armadas gubernamentales, como para el FMLN, pero la idea fue rechazada por el FMLN que no acepta violaciones a esos derechos por parte de sus fuerzas (122). La falta de acuerdos puso en duda la voluntad de las partes por ceder en sus demandas y alcanzar el fin de las hostilidades.

El 20 de Septiembre una delegación de guerrilleros salvadoreños se reunieron con funcionarios de las Naciones Unidas, primera reunión en diez años de conflicto. Estuvieron dispuestos a discutir con los Estados Unidos la pacificación del país, ante el fracaso de la ronda anterior. Ante Pérez de Cuéllar, la delegación replanteó su propuesta a un debate público con el gobierno de Cristiani para efectuarse en el extranjero y ofreció asumir la mitad de los gastos para una transmisión vía satélite en

vivo, considerando además que "los debates públicos son una práctica común en otros países, y estamos seguros que sobrarían anfitriones para realizar este evento" (123). Al día siguiente, lanzó una proclama planteando la necesidad de una revolución democrática nacional para alcanzar la paz. "Nunca como hoy se ha hecho evidente la necesidad de una Revolución Democrática Nacional, para poner fin al poder hegemónico de los militares y de las grandes familias oligárquicas, restablecer la soberanía nacional y alcanzar una paz duradera" (124). La significación de esta revolución reunió cuatro cambios:

1) El fin del militarismo como garantía principal para la existencia de una democracia real. "El ejército actual, traicionando su origen histórico, ha reprimido cruelmente al pueblo, y ha sido instrumento del gobierno de los Estados Unidos. Ha defendido sólo a los ricos, y por eso fue necesario el surgimiento del FMLN, como fuerza político militar, asumiendo el papel del ejército de los pobres. En nuestra democracia no debe haber ningún tipo de ejército, debemos todos decir adiós a las armas"(125). En ese sentido, propuso cuatro medidas: a) abolición total del ejército; b) creación de una nueva fuerza de seguridad pública, cuya dirección sería de carácter civil; c) juicio a los responsables de crímenes, y, d) fin de la persecución política.

2) Creación de un nuevo orden económico y social. "El poder económico está concentrado en unas pocas familias que han sacado del país enorme capital, y que derivan de sus enormes riquezas la capacidad de ejercer el poder político. Por ello es fundamental

establecer un nuevo orden económico que ponga fin a la hegemonía oligarca" (126). Con ese propósito planteó seis medidas; a) reforma agraria profunda, para resolver la miseria del campo; b) creación de un polo económico popular para equilibrar el poder económico existente, a través del fortalecimiento de las formas de propiedad corporativa, autogestionaria, social o colectiva; c) reforma urbana para combatir la marginalidad de las ciudades y asegurar el fortalecimiento económico del Estado con medidas que sean fruto de un entendimiento nacional; d) concentración nacional permanente para políticas de salarios, precios, empleos y créditos; e) la protección de la ecología; f) legislación especial para la mujer.

3) Democratización Nacional. "Entendemos la democracia como un sistema en el cual la libertad individual y el respeto de la persona son fundamento y objetivo primordial de la sociedad y del Estado" (127). Las medidas concretas fueron; a) una nueva Constitución Política cuya elaboración estará a cargo de una asamblea constituyente electa libremente; b) ampliación del poder legislativo y democratización del poder municipal; c) un poder judicial independiente e imparcial para poner fin a la corrupción; d) legislación de protección a los derechos humanos; e) libertad de expresión y medios de difusión a disposición de todos los sectores, rompiendo el monopolio del poder oligárquico sobre dichos medios; f) legislación para proteger la independencia del periodismo y garantizar a la sociedad una información veraz, sin riesgo para la seguridad y la estabilidad laboral de los periodistas; g) un nuevo sistema electoral, que garantice

elecciones libres y limpias.

4.- Rescate a la soberanía con la proposición de siete medidas: a) relaciones de respeto mutuo con los Estados Unidos, ampliadas y mejoradas sobre esa base; b) una doctrina de política exterior basada en la integración centroamericana y latinoamericana, sin condicionamientos ideológicos en el marco del conflicto Norte-Sur; c) una política internacional independiente y multipolar, que ponga fin al alineamiento político y a la dependencia económica, extendiendo las relaciones a otros polos de desarrollo; d) una política de neutralidad y ruptura de pactos militares; e) cooperación en la lucha internacional contra el tráfico de drogas, pero sin atentar contra la soberanía del país; f) convenios de protección para los salvadoreños residentes en los Estados Unidos; g) resolución definitiva del diferendo limítrofe con Honduras.

A este documento no hubo reacción inmediata por parte del gobierno, quizá por que se recrudecía la violencia en estos momentos, quizá por que se esperaba la decisión del Congreso norteamericano en relación a la ayuda económica, quizá por que vuelven a empantanarse las pláticas. Respecto de este último, ya que los dos primeros van a definir la situación imperante, cabe mencionar que la reunión se estancó, hasta su realización en Noviembre, en México. Representantes del gobierno de El Salvador y la insurgencia acordaron poner mayor énfasis en el papel de intermediación de la ONU y en retomar el carácter de confidencialidad en torno a las negociaciones. De Soto expresó su

esperanza de que con estas medidas, a la par con la flexibilidad y voluntad política, se contribuyera realmente a agilizar el proceso de paz.

Por otra parte, los acontecimientos a nivel internacional, fueron cambiando el rumbo de las ideas. Por un lado, la derrota de sandinistas en Nicaragua y de los gobiernos socialistas en los países de Europa central, hicieron cambiar el objetivo político del FMLN, ya no se plantea llegar al poder, formar un ejército ni un partido único, por otro lado, la crisis del Pérsico, puso nuevamente el aspecto militar en el primer plano. Hasta antes de la crisis del Pérsico, el FMLN consideraba que su estrategia militar estaba llegando a su fin y por ello se obligaba a negociar en un espacio de tiempo corto, pero en ese momento ya no era así. Si bien, el gobierno de Cristiani podía tener la decisión política de negociar, el hecho es que el ejército lo dominaba (y lo domina) además de que detrás del ejército está D'Aubuisson, esto ya no es secreto. Por ello el FMLN planteó la necesidad de una salida política al conflicto, pues demostró la posibilidad de dialogar con los partidos políticos, y hasta con ARENA, quienes han sabido siempre que el problema son las Fuerzas Armadas.

Retomando el punto sobre la ayuda económica estadounidense, el resultado significó un golpe para el gobierno salvadoreño. El Senado estadounidense finalmente aprobó la reducción a la mitad del paquete de asistencia militar a El Salvador, con el objeto de destrabar las negociaciones de paz entre el gobierno y la insurgencia. "Por 74 votos a favor y 25 en contra el Senado

respaldó una enmienda a la Ley de Asistencia Externa por la cual se reduciría en un 50% la ayuda de 85 millones de dólares pedidos por el presidente George Bush, y se daría por terminada completamente, si el régimen de Cristiani se niega a continuar las negociaciones de paz con el FMLN y auspiciadas por la ONU" (128).

Los primeros en reaccionar fueron los militares. El ministro de Defensa, Emilio Ponce, declaró que la retención limitaría la lucha mantenida por el ejército contra la guerrilla. Para su buena suerte, la iniciativa del Senado se enfrentaría a una enmienda del gobierno de Bush para invalidar la decisión. La propuesta de Bush aceptaría el corte de ayuda a la mitad, pero la reestablecería si el FMLN no aceptaba un cese de fuego incondicional en un plazo de 60 días (129). Aquí el que reaccionó fue el FMLN, y rechazó la condición aclarando que cualquier acuerdo sólo podía emanar de la mesa de negociaciones.

El clima a nivel diplomático tenso, y la violencia desatada al interior del país, nuevamente echaron por tierra lo poco logrado de las pláticas y el FMLN lanzó otra ofensiva (Ver Anexo No. 2), justamente en Noviembre, a un año de la anterior. Pero hubo un elemento más, las Naciones Unidas habían elaborado un documento confidencial de trabajo presentado a las partes a fines de Octubre en México, en una reunión secreta entre el Ministro de Justicia, Oscar Santamaría y el Jefe del Estado Mayor, Mauricio Ernesto Vargas, por un lado, y una comisión reducida del FMLN, por el otro. Aunque poco se sabe del contenido, trascendió que el proyecto de Alvaro de Soto contó con el abierto aval del Departamento de Estado

estadounidense, que se incertó en la corriente de opinión, cada vez más aceptada, de promover la gradual desmilitarización del área centroamericana, hasta lograr, eventualmente, la desaparición de los ejércitos, tanto del gubernamental como del irregular. La delegación gubernamental se negó a éste anteproyecto, y la guerrilla desató entonces la acción militar llamada "Castigo a la Fuerza Armada Antidemocrática" (130). La ofensiva, para el FMLN, tuvo como metas un objetivo militar y otro político. En la esfera militar, trató de abrir espacios para acelerar las negociaciones con el gobierno en la búsqueda de un acuerdo para finalizar la guerra; en términos políticos buscaron reducir la capacidad del ejército para obligarlo a negociar. Por eso no hablaron de una ofensiva como la calificaron los voceros de la Fuerza Armada "si fuera una ofensiva ya estaríamos en San Salvador" (131), y así lo entendió el Coronel Julio Cesar Grijalba jefe de la Sexta Brigada de Infantería quien afirmó que la estrategia de la insurgencia "persigue desgastar a nuestros hombres por medio de ataques realizados desde posiciones móviles" (132).

Junto con el accionar militar del FMLN, comenzó un proceso de conversión de sus fuerzas que denominaron Ejército Nacional para la Democracia, comenzó a formalizar su estructura militar como un ejército nacional, con rangos castrenses tradicionales. Todo ello para garantizar plenamente el propósito de la desmilitarización total del país en la guerra y en la negociación (133).

Como en la ofensiva anterior de Noviembre de 1989, los gobiernos centroamericanos de Costa Rica, Honduras, Guatemala y

Nicaragua, pidieron al secretario de la ONU, su intervención para tratar de poner fin a los combates. La ONU advirtió que en las reuniones de Ginebra y Caracas, el gobierno y la insurgencia aceptaron lograr primero acuerdos políticos y luego un cese de fuego. La comisión encargada de discutir los asuntos económicos y sociales de la 45. Asamblea General de la ONU, aprobó al mismo tiempo por consenso un proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, puntualizando que el sistema judicial en ese país continuaba siendo insatisfactorio. El organismo también manifestó su preocupación por la persistencia, por motivos políticos, de graves y numerosas violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones sumarias, torturas, secuestros y desapariciones forzadas. Esta resolución fue presentada por el Grupo de Río a España, Francia y Grecia y fue aprobada (134).

Como ya se mencionó, la estrategia tuvo como característica la movilidad, por ello el ejército entendió, no un repliegue táctico de la insurgencia, sino un fracaso, al grado de confundirlo como una huida. El gobierno a su vez, culpó de las acciones rebeldes al dirigente opositor socialdemócrata, Guillermo Ungo, y a Rubén Zamora, del Movimiento Popular Social Cristiano. Ambos habían estado muy cerca de las pláticas con el gobierno. Cabe recordar que acusaciones vertidas contra intelectuales y dirigentes populares habían llevado el año pasado al asesinato de los jesuitas.

La opinión pública manejó la idea de que las primeras

reacciones manifiestas de Cristiani contenían dos amenazas: primero, romper el proceso de negociación y agudizar la represión ante la acción guerrillera; segundo, poner en ejecución un nuevo plan Jakarta, como el de la matanza de los jesuitas, que incluiría atentados contra dirigentes de la oposición (135).

Por su parte, los Estados Unidos calificaron a la ofensiva rebelde como una de las mayores y más violentas de ese año y anunciaron la decisión de acelerar la entrega de un paquete militar a El Salvador por 48.1 millones de dólares a fin de contrarrestar la escalada ofensiva del FMLN. El FMLN consideró que "Washington pretende decidir sobre el futuro de El Salvador al oponerse a que sean los propios salvadoreños los que resuelvan sus problemas" (136).

Durante la acción militar se produjo la huida de unos 200 soldados del batallón Bracamonte hacia Honduras, confirmada por el propio gobierno hondureño e hizo un llamado para que interviniera la misión de observadores militares de las Naciones Unidas, ONUCA, pero el gobierno salvadoreño justificó que la incursión se debió por la necesidad de evacuar a militares heridos. Uno puede preguntarse si era más fácil trasladar a 200 soldados heridos para que recibieran asistencia médica en otro país, o responder directamente que se trataba de una evasión ante el avance del FMLN. En este momento se realizaba la Cumbre Centroamericana, quizá por ello Cristiani tenía más interés por participar en ella y le daba menos importancia al incidente, pero no hubiera sucedido así, si la guerrilla salvadoreña hubiera penetrado en Honduras, aquí se

hubiera hablado de violación al territorio hondureño.

La Cumbre Centroamericana del 15 de Diciembre en Puntarenas, Costa Rica, discutió temas referentes a; economía, violencia política, asuntos migratorios, seguridad, educación, ecología, narcotráfico, refugiados, acuerdo de libre comercio y representaciones diplomáticas conjuntas. Por lo que respecta a El Salvador, tal parece que la cumbre fungió como una mesa de juicio en contra del FMLN. Varios presidentes, como el de Honduras, El Salvador y Costa Rica, tenían especial interés por abordar la cuestión de la lucha armada salvadoreña. Cristiani declaró que su gobierno sólo aceptaría una reforma cualitativa y cuantitativa de la Fuerza Armada (137), mientras que el mandatario costarricense planteó la necesidad de solicitar a la ONU una acción más efectiva para la pacificación de El Salvador y de ella se buscó obtener una condena expresa contra el FMLN por su más reciente ofensiva militar, condenó las acciones de violencia y se le exigió el inmediato cese del empleo de armamento sofisticado utilizado.

La resolución de la cumbre demandó enérgicamente al FMLN el cese de fuego inmediato y efectivo "que demuestre su voluntad política de alcanzar, al más corto-plazo, acuerdos que permitan llegar a una paz firme y duradera en la región; se abstenga de obstaculizar las elecciones, abandone la lucha armada y se incorpore al proceso democrático" (138). Todos los mandatarios reconocieron la voluntad política y de cumplimiento del gobierno constitucional de El Salvador de los compromisos asumidos en favor de la paz. Pidió también a los pueblos y gobiernos del mundo

"contribuir, como medio para impulsar el proceso de solución al conflicto, poner fin a toda la ayuda militar, económica, logística y publicitaria de que goza aún el FMLN en varios lugares del mundo" (139). El documento solamente elogió en su parte introductoria las gestiones del Secretario General de la ONU, pero no introdujo en su parte resolutive ninguna iniciativa o respaldo adicional a esa mediación.

El FMLN y la izquierda legal salvadoreña, calificaron de "error político" y parcialidad a ésta declaración donde los presidentes se autodescalificaron como parte de la negociación, ya que sin ningún derecho negaron al pueblo salvadoreño y al FMLN su legítima defensa contra los bombardeos aéreos del ejército (140).

El año 1990 estaba finalizando, año calificado por ARENA como de "mayor negociación". El año en el que durante el primer trimestre la población estuvo sometida al estado de sitio, el año marcado por la reaparición de los escuadrones de la muerte, y el año que terminaba en medio de una guerra civil. Ni siquiera las festividades propias de la época pudieron detener los enfrentamientos, que aunque menores, siguieron en diversos puntos del país.

Al inicio del nuevo año, dos hechos amenazaron con empañar una vez más, la apertura de negociaciones; el derribamiento de un helicóptero tripulado por militares norteamericanos, y las denuncias sobre tráfico de armas antiaéreas a El Salvador.

El 2 de Enero de 1991 fue derribado un helicóptero UH-1H en el que viajaban tres norteamericanos que sobrevolaban una zona de

guerra y realizaban tareas de apoyo logístico a los equipos militares estadounidenses radicados en El Salvador. El problema se generó con la suposición de que los tres tripulantes fueron ejecutados en tierra, al aterrizar la nave de forma controlada, (141). Esta fue una oportunidad que los Estados Unidos no podían desperdiciar, y como bien explicó Emilio Ponce, "éste hecho puede hacer recapacitar al Senado estadounidense para liberar la mitad de la ayuda que restringió en Octubre pasado a causa de numerosos hechos de violación a los derechos humanos" (142). Y en efecto, el presidente George Bush pidió al Congreso que enviara a los militares salvadoreños los 42.5 millones de dólares en ayuda que les fueron retenidos. Para forzar su posición, el Departamento de Estado hizo la acusación al FMLN de abrir fuego contra un equipo de forenses estadounidenses que investigaba la zona del derribamiento (143). El canciller salvadoreño, Manuel Pacas, consideró que la renovación respondía a una observación objetiva sobre la evolución de las investigaciones del crimen de los jesuitas, el proceso de diálogo y el esclarecimiento sobre la muerte de los militares estadounidenses (144).

Lo que nadie esperaba fue que FMLN solicitara a Pérez de Cuéllar patrocinar la formación de una comisión independiente que investigara la muerte de los militares. "Debido a las implicaciones que éste hecho de guerra puede generar, consideramos la necesidad de gestionar la formación inmediata de una comisión médica y forense de carácter internacional de investigación" (145). Ante lo que nunca ha hecho el gobierno ni el ejército, el 21 de Enero,

el FMLN reconoció que los militares murieron al ser ejecutados por dos de sus efectivos, y anunció que los responsables serían enjuiciados por un tribunal especial integrado tanto por miembros de la guerrilla como por personajes independientes. Los implicados fueron acusados de crimen de guerra por haber violado los convenios de Ginebra que el FMLN suscribió (146).

Este acto de voluntad política, como lo calificó el FMLN, pone en claro que en éste país, una de las partes no sólo sabe reconocer sus errores, sino que además es una fuerza responsable, pues es capaz de rectificar determinaciones que incluso parecen decisivas para continuar con éxito una larga guerra civil. Por lo demás, se reveló, no la presencia de asesores militares estadounidenses en la guerra civil salvadoreña, ya que la misma es conocida desde hace tiempo, sino la tentación de Washington de cubrir las mentiras y los crímenes de un ejército aliado.

Respecto al segundo punto, sobre la posesión de armas del FMLN, la historia comenzó cuando los guerrilleros salvadoreños dejaron abandonada una lanzadera Sam, tras una refriega con el ejército. El artefacto tenía impresa la placa y hasta su "made in URSS"; sin perder tiempo, el gobierno de Washington pidió ayuda a Moscú para saber la identidad del destinatario original. Acorde con los nuevos tiempos, el liderazgo soviético se apresuró a corroborar las sospechas. El embarque de los cohetes Sam 7 se había efectuado en 1986 hacia Managua, para el gobierno sandinista. No había escapatoria, por fin el gobierno salvadoreño y Washington disponían de la prueba que sustentara sus repetidas denuncias: los

sandinistas proveían de armas a la guerrilla salvadoreña (147). Antes de empañar las pláticas de paz, el FMLN decidió entregar al gobierno de Nicaragua los cohetes Sam 7 y Sam 14 tierra-aire de fabricación soviética que adquirió ilegalmente (nunca se aclaró si fue venta o donación) a un grupo de oficiales del Ejército Popular Sandinista. La entrega, de 17 de los 28 cohetes, se realizó el 1 de Febrero. Primero, 9 misiles, entrega que confirmó el Ministro de la Presidencia de Nicaragua, Antonio Lacayo, y realizada en Perquín, El Salvador (la ceremonia fue supervisada por un funcionario mexicano); los otros 8 misiles fueron entregados en la sede diplomática de México en Managua bajo la supervisión del embajador Ricardo Galán. Los otros once restantes no pudieron ser entregados porque fueron utilizados en las anteriores operaciones militares. Por supuesto que Cristiani tuvo que mostrar su beneplácito ante la decisión del FMLN, "este hecho puede ser un indicio claro que apunta hacia el proceso de paz" (148).

Cabe destacar que en esta devolución, a pesar de haberse dado la petición, la ONUCA brilló por su ausencia, no obstante el FMLN había cumplido, "los devolvimos por las complicaciones políticas y las presiones a que todos fuimos sometidos en este tiempo" (149), también era obvio que seguiría utilizando otros misiles de origen estadounidense comprados a miembros de la desmovilizada contra nicaragüense (150). El FMLN cuenta con misiles Red Eye, que el Pentágono entregó a los ex contras nicaragüenses. Son armas más avanzadas, incluso que los Sam 7 y Sam 14. En cuanto a los misiles soviéticos, la guerrilla los usó por primera vez durante la campaña

militar del 20 de Noviembre pasado. Si los sandinistas vendieron armas, también la contra lo hizo, de aquí se explica que material bélico en poder del FMLN tenga ahora etiqueta de "made in USA".

La devolución mostró que el FMLN se encuentra en una fase de madurez que lo legitima ante la opinión pública mundial. Mostró nuevamente que el sector más importante y decisivo para una futura paz, la guerrilla, está dispuesto a buscar caminos hacia esa reconciliación nacional, actitud que sería lamentable que fuese confundida como una muestra de debilidad, porque entonces el conflicto bélico se alargaría innecesariamente.

Ambos problemas se resolvieron, pero opacaron una matanza de campesinos ocurrida el 22 de Enero, realizada por los escuadrones de la muerte. Al respecto, la Iglesia realizó sus propias investigaciones a través de la Oficina de Tutela Legal, quien responsabilizó a la primera brigada de infantería, con sede en San Salvador. La unidad militar controla la zona Norte y días antes del crimen, soldados de esa guarnición repartieron a los habitantes del sector volantes de contenido contrainsurgente. Para Tutela Legal los elementos existentes son suficientes de presunción para que el sistema judicial del país encauce su investigación hacia el interior de las Fuerzas Armadas (151).

A partir de la acusación a la Iglesia, los ataques contra ésta y contra la Oficina Legal de Tutela no se hicieron esperar. Este acontecimiento forma parte de la lista no resuelta y olvidada de otros muchos salvadoreños, el gobierno no respondió, estaba ocupado en lo prioritario del momento; las elecciones en puerta.

Es en este marco tuvo lugar, el 19 de Febrero de 1991, en San José, Costa Rica, la ronda de conversaciones entre gobierno y guerrilla. Fue presidida por el mediador designado por la ONU, Alvaro de Soto, mientras que la delegación gubernamental la encabezó el Ministro de Justicia, Oscar Santamaría y por el FMLN el comandante guerrillero, Joaquín Villalobos. Los temas tratados: la actuación de las Fuerzas Armadas y la declaración de un alto al fuego. El FMLN sacó a relucir la impunidad de las Fuerzas Armadas y la evidencia en la matanza de los 15 campesinos, atribuido a organismos de seguridad. A cambio, ofreció aceptar una investigación conjunta de las circunstancias que rodearon la muerte de los pilotos estadounidenses a manos de la guerrilla. No resultó fructuosa, sólo se dejaron las cartas sobre la mesa. Ciertamente las elecciones eran primero, además el FMLN sufría un golpe muy duro con la muerte de Guillermo Manuel Ungo (152), importante pilar de la paz, quien ya no participaría en los diálogos.

Durante el ambiente preelectoral, Radio Farabundo Martí anunció una tregua unilateral para los días 2 al 6 de Marzo, como homenaje a Ungo, pero ésta no incluiría las zonas de control del FMLN, y del 9 al 11 en respuesta para no entorpecer los comicios. Esta última fue adoptada a petición del Partido Demócrata Cristiano, de la coalición socialdemocrática, Convergencia Democrática y de la Unión Democrática Nacionalista, durante una reunión celebrada anteriormente en México, con los dirigentes políticos y la guerrilla de El Salvador (153), pero pasadas las elecciones amenazaron con lanzar una nueva ofensiva para recuperar

sus zonas de control. Estaban seguros de que el ejército trataría de recuperar zonas controladas por el FMLN, y no se equivocaron, inmediatamente de concluir las jornadas políticas para elegir los 84 escaños de la Asamblea Legislativa y las 262 alcaldías municipales, el ejército hechó a andar, en el contexto de una contraofensiva, un plan de seguridad nacional. A partir de ese momento se intensificaron los combates. El ejército recuperó posiciones insurgentes en varios departamentos.

Al analizar éste desarrollo, el comandante Joaquín Villalobos, comentó que "la Fuerza Armada está aprovechando que nosotros no podemos movilizar nuestras líneas de penetración, sólo las de nuestra retaguardia, en virtud de la tregua unilateral. Ellos están buscando un doble objetivo: primero, provocar acciones ofensivas de nuestra parte que nos lleven a afectar las elecciones, también pretenden ocupar posiciones nuestras para ir a la mesa de negociaciones con un planteamiento artificial sobre la territorialidad de cada una de las fuerzas en momentos en que se está discutiendo el tema de los territorios controlados para un cese de fuego" (154).

La ultraderecha salvadoreña presionó al Consejo Central de Elecciones para permitir el voto a la Fuerza Armada, como ocurría en el pasado cuando en los cuarteles se llenaban las urnas para imponer al candidato oficial. Tenían la esperanza de que en las filas del ejército los jefes reactivos ejercerían influencia sobre la tropa para vencer al partido oficial. Según el Movimiento Auténtico Cristiano, liderado por Julio Adolfo Rey Prendes, en

realidad "la Constitución no prohíbe a los militares, ejercer el sufragio, porque también son ciudadanos. Lo que pasa es que por razones de servicio no pueden hacerlo pues alguien destacado en el Oriente del país, con una cédula y carnet electoral registrado en Occidente, no podría hacerlo el día de las elecciones" (155). En 1982, cuando se efectuaron elecciones para la Asamblea Constituyente, el viceministro de Defensa, Francisco Adolfo Castillo, tuvo una iniciativa, aceptada por cierto, en el sentido de que ningún miembro de la Fuerza Armada votaría para dejar al sector civil elegir a las autoridades y el ejército cumpliera su misión constitucional de garantizar la soberanía del territorio nacional.

La Fuerza Armada, por su parte, emitió durante los días previos a las elecciones, un instructivo (156), distribuido a escala nacional para contribuir con su misión constitucional, como ellos mismos han dicho, de apoyar el proceso electoral sin injerencia de ninguna índole. En el instructivo prometían no obstaculizar la movilidad de los partidos políticos, no decomisarles propaganda, no proceder a detenciones administrativas, evitar actitudes discriminatorias, evitar simpatías con partidos y muchas disposiciones más que para la oposición, es precisamente lo que la Fuerza Armada ejerce.

Para la oposición, en especial el FDR, el problema de la Fuerza Armada no era que le hiciera propaganda al partido oficial, sino que radicaba en la represión y persecución a la que era sometida. Durante las elecciones siempre se ha acusado de

comunistas a quienes dan su apoyo a los partidos de la real oposición.

El 10 de Marzo se desarrollaron las elecciones en medio de fuertes combates entre la guerrilla y el ejército, el acceso a ellas fue imposible en varios lugares (Radio venceremos indicó que los comicios no se celebraron en 31 municipios del país, reflejando así la situación de doble poder que se vive). Los resultados perfilaban a ARENA como triunfadora, cifras oficiales basadas en el 36% del cómputo global, daban a ARENA el 44.6% de los votos emitidos, en tanto que la Democracia Cristiana y Convergencia Democrática aparecían en segundo y tercer lugar con serias posibilidades de, unidas en alianza, romper la mayoría de ARENA en la cámara legislativa. La meta para la CD, lograda, fue quedar en el tercer puesto como fuerza política nacional que en el futuro podría transformarse en una alternativa real del poder en El Salvador, y es que ARENA perdió, según las estadísticas, el 8% de los votos que ganó en las elecciones presidenciales de 1989, esto marcaba, según el FMLN, el principio del fin de ARENA.

Las características principales fueron: el abstencionismo, calculado en un 50%; y la participación de observadores internacionales, unos 800 dispersados por todo el país. Estuvo presente la delegación de la OEA así como otras provenientes de Europa, los Estados Unidos, y América Latina (157), todos ellos ejerciendo una profesión que al parecer cada día tiene más aceptación en los procesos electorales que se realizan ahí donde la limpieza y transparencia de métodos arroja dudas algo más que

razonables. La OEA anunció precipitadamente, antes del recuento oficial, el triunfo de ARENA por lo que el FMLN emitió un comunicado (158), asentando que su actitud podría dar cobertura al fraude del partido gobernante y por tanto, este no se vería así obligado a aceptar en la negociación los cambios para una real democratización y lograr un alto al fuego.

Cabe destacar aquí el papel desempeñado por la llamada Interpartidaria, surgida de las pláticas de Ginebra. Para estos comicios había planteado a la Asamblea Legislativa un programa de "carnetización" masiva, aumento del número de diputados, y la no participación de la Fuerza Armada en el evento electoral. El objetivo era crear el consenso en el sistema electoral, la administración de justicia y las libertades democráticas. También planteó la necesidad de una "observación prolongada" de la OEA y la ONU para todo el proceso. Shafic Handal, en España, se había referido ya al problema: "En El Salvador el registro electoral se está procesando desde hace ocho años. En mi país, tener el carnet para votar implica hacer mil trámites, moverse de un lado a otro, es decir contar con dinero. Por eso decimos que el gobierno debe dejar que se origine un proceso electoral, un proceso como en Nicaragua, con control internacional, y que todas las personas con edad de votar puedan hacerlo. No nos interesa que vengan observadores sólo el día del escrutinio, queremos que vengan como en Nicaragua, hay que verificar todo desde principio a fin, desde las inscripciones hasta el recuento" (159). La mayoría de las agrupaciones han coincidido en este punto, a excepción de ARENA.

Pasadas las elecciones, el 4 de Abril se llevó a cabo otra reunión gobierno-guerrilla en la Ciudad de México, esta ha sido la más larga con una duración de 24 días, pero una de las más improductivas. El FMLN llevó la propuesta de un cese de fuego a partir del 30 de Mayo de 1991 y la propuesta de reformar el artículo 240 Constitucional, que permitiría a su vez reformar la Constitución de manera más amplia. La delegación gubernamental al principio se mostró flexible, pero posteriormente, con la presión de la extrema derecha, mantuvo una postura inflexible y no presentó propuesta alguna. El panorama en El Salvador tampoco era alentador. El ejército hizo saber que no aceptaría reformas si antes no había un cese de fuego, mientras que Cristiani se mostró satisfecho hacia las reformas presentadas a la Asamblea Legislativa por cuatro partidos, al margen de la mesa negociadora, al tiempo que la ultraderecha intensificó su campaña para que los diputados rechazaran toda reforma a la Constitución propuesta por el FMLN.

La propuesta de reformas que plantearon los partidos fue mínima, de unos treinta artículos sólo cinco mostraban cambios de cierta consideración, pero dejó más fortalecido al partido ARENA en el control sobre el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, además de introducir la pena de muerte, de aquí que Cristiani estuviera a favor, mientras que el FMLN planteó por lo menos 19 reformas importantes.

Fue improductiva porque todos los esfuerzos se canalizaron a discutir las reformas, dejando pendientes el tema principal de depuración del ejército, seguridad y desmilitarización, así como

el cese de fuego. La firma del documento, llamado "Acuerdos de México", contuvo un punto sobre la creación de una Comisión de la Verdad, CV, que tendría bajo su responsabilidad la investigación de graves hechos de violencia desde 1980, estaría formada por tres personas designadas por las Naciones Unidas. Entre sus objetivos destaca el de investigación de hechos dentro de un marco de reconciliación nacional, y se propone recomendar disposiciones de orden legal, político y administrativo que puedan colegirse de los resultados de la investigación (160). Lo anterior significa que se hará sin menoscabo de las obligaciones que incumben a los tribunales salvadoreños para resolver en cada caso y aplicar las sanciones correspondientes.

Como en todas las pláticas anteriores, la negociación tuvo que fracasar, Cristiani y el ejército coincidieron en que las reformas a la Constitución se podrían ratificar si el FMLN aceptara pactar el cese de fuego, pero para éste, se trataba tan sólo de un pacto de carácter político y no técnico. La guerrilla ha insistido que la desmovilización del FMLN no está en negociación, a menos que la contraparte acepte negociar la desmilitarización total del país. "Si ninguna de las partes ha logrado hasta ahora una victoria militar, nadie puede pretender quitar las armas a la contraparte, mucho menos la Fuerza Armada puede exigirlo cuando ella está tan cuestionada, interna e internacionalmente, por su conocido historial de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos" (161).

Por lo menos la continuidad de las pláticas no se ha perdido.

El 25 de Mayo de 1991, en Caracas, durante la nueva ronda, el FMLN propuso al gobierno "congelar" la guerra mediante la separación y concentración de fuerzas militares de ambas partes, a fin de proporcionar gradualmente la restauración de la administración pública y, al mismo tiempo, el desarrollo de la actividad política de la guerrilla. Exigió la creación de una nueva Policía Civil para preservar el orden público, pero ésta organización debería tomar en cuenta que los policías que se encarguen del orden en las zonas actualmente controladas por el FMLN, así como de las llamadas zonas en disputa, deberían ser respectivamente militantes del FMLN o pobladores de las citadas zonas.

Antes de concertar un cese de hostilidades, el FMLN ha planteado la reducción del actual desequilibrio en la capacidad de los medios de comunicación de masas porque, con el actual esquema "será una batalla política en desventaja" (162). A este respecto precisó que en El Salvador de nada sirve hablar de libertad de expresión mientras un sólo empresario, destacado miembro del partido gobernante, sea el propietario de tres de los cuatro canales privados de televisión, de una importante cantidad de canales de TV en la banda UHF, de 17 radioemisoras y del 35% de las empresas de publicidad, en tanto que otras dos familias de ARENA controlan el 90% de los periódicos en circulación (163).

En cuanto a la apertura política para el FMLN, la insurgencia propuso la derogación de las leyes que limitan el libre derecho de organización y expresión, al tiempo que deberá procederse a la liberación de los militantes o simpatizantes del FMLN detenidos

actualmente. De igual modo han planteado la búsqueda de la reincorporación a sus antiguas organizaciones de masas de aquellos dirigentes que por diversos motivos, vinculados todos ellos a la situación imperante del país, tuvieron que salir de El Salvador o pasaron a la clandestinidad. Han exigido que deberá permitirse la presentación pública en el país de los dirigentes del FMLN "para que puedan contactarse libremente con las distintas fuerzas sociales y políticas a fin de acelerar la negociación y contribuir a generar un consenso nacional" (164). El gobierno por su parte, rechazó las propuestas del FMLN y en cambio presentó 40 enmiendas al tema de las Fuerzas Armadas y con ello eliminó el punto relativo a la impunidad del ejército; substituyó la palabra depuración por evaluación. El 2 de Junio terminaron las pláticas sin acuerdo.

Unos días después, el FMLN consideró posible y viable una fusión con la Fuerza Armada gubernamental si era necesaria para acelerar el fin de la guerra, no por ello dejaron a un lado el tema de la desmilitarización total del país. La base para tal planteamiento fue la consideración de que la raíz del conflicto no es el ejército, sino la desigualdad económica, "en las Fuerzas Armadas no hay una posición sólida con relación al conflicto. Por un lado están los de la jeraquía, los que han hecho de la guerra un tremendo negocio. Pero no están sólo ellos porque hay otro sector que piensa de otra manera, que entiende la realidad y que además no sale beneficiado con la guerra, por eso nosotros les decimos que dejen a un ejército que nada bueno les da" (165). Esta afirmación la confirmó posteriormente un jefe militar de Usulután:

"la existencia de un importante sector de oficiales del ejército salvadoreño proclive a poner fin a la guerra por medio de la negociación seria y responsable con la insurgencia, es real" (166), incluso, afirmó que "en un clima de paz democrática, el ejército garantizaría la estabilidad del país aún en el caso de que, por aquello del destino, el hoy comandante guerrillero Joaquín Villalobos, o cualquier otro líder insurgente, llegara a ser electo en las urnas como presidente de El Salvador" (167).

La idea de fusionarse en un sólo ejército, resulta difícil de alcanzar por que existen rencores acumulados, abriendo una enorme brecha que no podría ser sorteada sin la buena disposición de las partes. No hay posibilidad de una fusión ya que el ejército salvadoreño ha sido la única institución armada legal del país, de acuerdo con la Constitución. Si la guerra pudiera terminar, el ejército de El Salvador tendría que reducirse obligadamente y volcarse más a obras sociales porque ya no habrá motivos para el militarismo.

Las expectativas son muchas, quizá en el corto plazo El Salvador viva la paz tan merecida. Si uno de los problemas son los militares, hay esperanza al constatar que no todos quieren seguir actuando contra la población. Se hace referencia a los oficiales jóvenes quienes no han soportado quedarse callados, ni soportan disparar en contra de sus propios hermanos, y han enviado durante los tres últimos años varios comunicados de denuncia. En uno de ellos, dirigido a Julio Portillo, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS, detallaron sobre varios casos

mencionando los nombres de militares involucrados en asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte. Aseguraron que las estructuras de dichas bandas están activas dentro de la primera y quinta brigadas de Infantería, la Policía Nacional, La Policía de Hacienda, la Guardia Nacional, y el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI.

El grupo de oficiales tomó la decisión de enviar el comunicado por el deseo de que la guerra en el país, tuviera una salida política favorable al pueblo salvadoreño (168). Se pronunciaron contra la situación de caos y corrupción dentro de las Fuerzas Armadas en un segundo comunicado, y rechazaron los actos criminales de los escuadrones de la muerte. El documento difundido por la radio local, estableció que los cuadros de alto rango del ejército se han beneficiado del contrabando que ingresa al país, y se ha vendido protección a los grandes empresarios (169). En otro comunicado se manifestaron por una depuración de la Fuerza Armada y acusaron al alto mando de la matanza de los jesuitas. Esta vez, mediante una carta abierta que hicieron circular entre los medios informativos, habían decidido romper el silencio para evitar que se siguiera empañando la imagen de la institución armada.

Alfredo Cristiani negó autenticidad a los comunicados y señaló que los máximos implicados en la matanza se mantenían alejados, pero incluso los oficiales jóvenes dijeron desde la clandestinidad, que fue el embajador estadounidense, William Walker, quien alertó al alto mando salvadoreño sobre las acusaciones del coronel retirado Sigfrido Ochoa (Ver Anexo No. 1), quien implicó a la

cúpula militar en la matanza de los jesuitas (170). En la carta pública establecieron que el alto mando pretendió inculpar de este crimen sólo a los oficiales de baja graduación.

Pese a las muchas reuniones por alcanzar la paz y a los centenares de discursos y a los supuestos buenos propósitos de las partes en pugna, todavía existen esperanzas, como la de estos oficiales jóvenes.

Citas bibliográficas del capítulo 3

- 1) Se utilizaron aviones Cessna Push and Pull y aviones Cessna a recesión A-37 y lanzacohetes RPG. La Jornada. 20/Mar/89. pp. 1 y 36.
- 2) La Jornada. 10/Abr/89. p. 43.
- 3) El Día. 13/Abr/89. p. 12.
- 4) Elaboración propia basada en La Jornada y El Excelsior del 24 de Febrero al 13 de Marzo de 1989.
- 5) El Día. 23/Mar/89. p. 12.
- 6) Guillermo Ungo denunció el fraude por alcanzar el tercer lugar. Primeramente, los datos provisionales arrojaron para su partido un 10% a su favor. Denunció que fue una maniobra del PDC y PCN porque cuando se encontraban haciendo el recuento de votos, éstos dos partidos decidieron no revisar las cajas electorales con los votos, sino sólo las actas, con lo cual aparecen anomalías destacando una gran cantidad de votos nulos y elevando, por tanto, el porcentaje a PCN sobre CD. Al respecto Ungo declaró que "la CD barrió al PCN en todos los centros urbanos principales como en La Libertad, Santa Ana, Sonsonate, y San Miguel. Ya nos parece muy sospechoso que el CCE ofreciera dar resultados en una fecha fija y no los dá".
El Día. 23/Mar/89. p. 12.
- 7) La Jornada. 20/Mar/89. p. 1
- 8) El Día. 23/Mar/89. p. 12.
- 9) La Jornada. 20/Mar/89. pp. 1 y 29.
- 10) Uno más Uno. 31/May/89. p.22.
- 11) El Día. 23/Mar/89. p. 12.
- 12) Elaboración propia basada en La Jornada. del 24 de Mayo al 15 de Junio de 1989.
- 13) La Jornada. 03/Jun/89. p. 30.
- 14) La Jornada. 21/Mar/89. pp. 1 y 34.
- 15) Ibid. p. 34.
- 16) La Jornada. 22/Mar/89. p.32.
- 17) La Jornada. 21/Jun/89. pp. 1 y 29.
- 18) La Jornada. 22/Mar/89. p. 32.
- 19) La Jornada. 21/Mar/89. p. 27.
- 20) GRUSON, Lindsay. The New York Times, News Service, en Excelsior. 10/Jul/89. p. 3.
- 21) La Jornada. 03/Oct/89. p. 25.
- 22) La Jornada. 22/Ago/89. p. 32.
- 23) Excelsior. 31/Ago/89. p. 2.
- 24) La Jornada. 02/Set/89. p. 29.
- 25) La Jornada. 11/Set/89. p. 37.
- 26) IRIZAR, Guadalupe. La Jornada. 14/Set/89. pp. 36 y 40.
- 27) IRIZAR, Guadalupe. Hace el comentario el comandante del FMLN, Joaquín Villalobos en La Jornada. 14/Set/89. p. 40.
- 28) IRIZAR, Guadalupe. La Jornada. 15/Set/89. p. 28.
- 29) La Jornada. 20/Set/89. p. 30.
- 30) IACUB, Pablo. Excelsior. 27/Set/89. p. 2..
- 31) Ibid. p. 2.
- 32) El 29 de Octubre los lisiados de guerra salieron por la puerta

trasera de la Catedral y llegaron a la Embajada de los Estados Unidos, burlando la vigilancia de los soldados. De ahí, México trataría de lograr los trámites para su salida. Por ello no se llevó a cabo ni el asilo ni la amnistía. La Jornada. 30/Oct/89. pp. 38 y 40.

- 33) PETRICH, Blanche. La Jornada. 18/Oct/89. p. 36.
- 34) PETRICH, Blanche. La Jornada. 19/Oct/89. p. 34.
- 35) Ibid. p. 34.
- 36) PETRICH, Blanche. La Jornada. 21/Oct/89. pp. 34 y 40.
- 37) GOMEZ, Ricardo. Excelsior. 01/Nov/89. pp. 1 y 15.
- 38) Ibid. pp. 1 y 15.
- 39) La Jornada. 03/Nov/89. pp. 42 y 48.
- 40) Ibid. pp. 42 y 48.
- 41) Roberto D'Aubuisson dijo que era un autoatentado los hechos dinamiteros contra oficinas de Rubén Zamora. Se inscriben dentro de la ola desatada tratando de obstaculizar el trabajo político de dirigentes opositores. Excelsior. 01/Nov/89. p.28.
- 42) La Jornada. 09/Nov/89. pp. 44 y 48.
- 43) El Día. 11/Nov/89. p. 15.
- 44) La Jornada. 13/Nov/89. pp. 1 y 33.
- 45) Ibid. pp. 1 y 33.
- 46) Ibid. pp. 1 y 33.
- 47) La Jornada. 14/Nov/89. p. 28.
- 48) Ibid. p. 28.
- 49) IRIZAR, Guadalupe. La Jornada. 15/Nov/89. pp. 1 y 34.
- 50) La Jornada. 19/Nov/89. p. 33.
- 51) Ibid. p. 33.
- 52) El 21 de Noviembre cuando el FMLN controlaba el Hotel Sheraton trasladó su ofensiva de los suburbios pobres a las zonas elegantes. Primero desalojó a un primer grupo de huéspedes de diferentes nacionalidades, pero el personal estadounidense, fuertemente armado con fusiles M-30 y M-203 se negó a salir. Se supo que los militares estuvieron en el país independientemente del plan asesor vigente entre los Estado Unidos y El Salvador por medio del cual aquí residen 55 personas con ese rango. La Jornada. 19/Nov/89. p. 33.
- 53) La Jornada. 23/Nov/89. p. 29.
- 54) La Jornada. 22/Nov/89. pp. 32 y 40.
- 55) La Jornada. 23/Nov/89. p. 34.
- 56) Excelsior. 18/Nov/89. p. 37-A.
- 57) La Jornada. 23/Nov/89. pp. 1 y 34.
- 58) IRIZAR, Guadalupe. La Jornada. 24/Nov/89. p. 32.
- 59) El Financiero. 24/Ago/89. p. 47.
- 60) Uno más Uno. 17/Nov/89. p. 25.
- 61) La Jornada. 14/Nov/89. p. 28.
- 62) IRIZAR, Guadalupe. La Jornada. 21/Nov/89. pp. 1 y 49.
- 63) La Jornada. 27/Nov/89. p. 40.
- 64) Excelsior. 18/Nov/89. p. 37-A.
- 65) La Jornada. 15/Nov/89. pp. 1 y 29.
- 66) La Jornada. 14/Nov/89. p. 1.
- 67) Excelsior. 17/Nov/89. pp. 1 y 28.
- 68) Excelsior. 18/Nov/89. p. 37-A.

- 69) La Jornada. 19/Nov/89.
- 70) La Jornada. 02/Dic/89. p. 37.
- 71) La Jornada. 06/Dic/89. pp. 1 y 26.
- 72) La Jornada. 19/Nov/89.
- 73) LIRA, Carmen. La Jornada. 27/Nov/89. p. 40.
- 74) La Jornada. 28/Nov/89. p. 40.
- 75) BLANCHE, Petrich. La Jornada. 11/Dic/89. p. 29.
- 76) BLANCHE, Petrich. La Jornada. 10/Dic/89. p. 26.
- 77) La Jornada. 11/Dic/89. pp. 1 y 40.
- 78) La Jornada. 29/Ene/90. p. 28.
- 79) La Jornada. 30/Ene/90. p. 27.
- 80) BLANCHE, Petrich. La Jornada. 20/Dic/89. pp. 1 y 37.
- 81) Ibid. pp. 1 y 37.
- 82) La Jornada. 26/Dic/89. pp 8 y 32.
- 83) La Jornada. 28/Dic/89. p. 9.
- 84) La Jornada. 03/Feb/90. p. 26.
- 85) ARREOLA, Gerardo. La Jornada. 02/Feb/90.
- 86) IRIZAR, Guadalupe. La Jornada. 03/Feb/90. p. 26.
- 87) IRIZAR, Guadalupe. La Jornada. 14/Feb/90. p. 44.
- 88) Declaró Rubén Zamora en La Jornada, 14/Feb/90. p. 44.
- 89) BLANCHE, Petrich. La Jornada. 23/Mar/90. p. 25.
- 90) La Jornada. 27/Mar/90. p. 26.
- 91) Excelsior. 30/Mar/90. pp. 2 y 39.
- 92) Ibid. pp. 2 y 39.
- 93) Ibid. pp. 2 y 39.
- 94) La Jornada. 20/May/90. p. 35.
- 95) La Jornada. 12/Abr/90. p. 1.
- 96) La Jornada. 27/Abr/90. p. 27.
- 97) Oqué! fue abogado con un doctorado obtenido en Inglaterra y formaba parte de aquella generación que en 1980 tuvo que salir al exilio luego del golpe militar que derrocó a Humberto Romero y produjo una matanza de dirigentes políticos, muchos de los cuales se integrarían a partir de entonces al movimiento insurgente.
- 98) La Jornada. 27/Abr/90. p. 27
- 99) La Jornada. 28/Abr/90. p. 21.
- 100) CRISTIANI, Alfredo. The Washington Post, en Excelsior. 28/Abr/90. pp. 2 y 39.
- 101) BLANCHE, Petrich. La Jornada. 02/May/90. p. 40.
- 102) La Jornada. 08/May/90. p. 30.
- 103) Ibid. p. 30.
- 104) La Jornada. 09/May/90. p. 40.
- 105) Ibid. p. 40.
- 106) Los supuestos cambios de fondo fueron: el jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce, substituiría al general Rafael Humberto Larios en el Ministerio de Defensa; el coronel Mauricio Ernesto Vargas, jefe de la Tercera Brigada de Infantería, tomaría el lugar del coronel Ponce; el coronel Francisco Elena Fuentes, jefe de la primera brigada, ascendería a nivel de viceministro, en substitución de Juan Orlando Zepeda. Los cambios denotan una mayor presión de los Estados Unidos para "limpiar" la imagen de la institución

- armada. Zepeda, segundo en el alto mando y uno de los 35 miembros de la Tandoná, representa al ala dura de los militares que han tenido fricciones con el sector proestadounidense que encabeza Ponce. Este sector pone en duda la eficacia de la estrategia de guerra de baja intensidad, diseñada por el Pentágono. La Jornada. 02/May/90. p. 39.
- 107) La Jornada. 16/May/90. p. 25.
- 108) Ibid. p. 25.
- 109) La Jornada. 19/May/90. p. 36.
- 110) Excelsior. 21/May/90. p. 2.
- 111) RAMÍREZ, Roque, de Radio Venceremos, en Excelsior. 30/May/90. pp. 2 y 20.
- 112) Excelsior. 01/Jun/90. p. 16.
- 113) El Financiero. 19/Jun/90. p. 40.
- 114) El Financiero. 25/Jun/90. p. 61.
- 115) PLIEGO, Felicitas. Excelsior. 21/Jun/90. pp. 1 y 28.
- 116) El Financiero. 21/Jun/90. p. 42.
- 117) La Jornada. 18/Jun/90. p. 32.
- 118) El Financiero. 26/Jun/90. p. 43.
- 119) La Jornada. 18/Ago/90. p. 25.
- 120) La Jornada. 19/Ago/90. p. 23.
- 121) El Financiero. 24/Jul/90. p. 32.
- 122) La Jornada. 18/Set/90. p. 20.
- 123) La Jornada. 22/Set/90. p. 39.
- 124) El Nacional. 25/Set/90. p. 13 y Excelsior. 24/set/90. p.5-A.
- 125) Ibid.
- 126) Ibid.
- 127) Ibid.
- 128) La Jornada. 20/Oct/90. p. 27.
- 129) Ibid. p. 27.
- 130) BLANCHE, Petrich. La Jornada. 30/Nov/90. pp. 38 y 48.
- 131) ZALDUA, Josetxo. La Jornada. 23/Nov/90. p. 36.
- 132) ZALDUA, Josetxo. La Jornada. 22/Nov/90. p. 33.
- 133) El Sol de México. 28/Nov/90. p. 5-A.
- 134) La Jornada. 01/Dic/90. p. 24.
- 135) La Jornada. 23/Nov/90. p. 37.
- 136) La Jornada. 08/Dic/90. p. 25.
- 137) La Jornada. 16/Dic/90. p. 24.
- 138) Ibid. p. 24.
- 139) Ibid. p. 24.
- 140) La Jornada. 16/Dic/90. pp. 1 y 24.
- 141) Excelsior. 03/Ene/91. p. 2.
- 142) La Jornada. 05/Ene/91. p. 32.
- 143) La Jornada. 08/Ene/91. p. 32.
- 144) Ovaciones. 17/Ene/91. p. 2.
- 145) El Universal. 07/Ene/91. pp. 1 y 5.
- 146) La Jornada. 22/Ene/91. pp. 19 y 40.
- 147) La Jornada. 31/Ene/91. p. 34.
- 148) La Jornada. 01/Feb/91. p. 19.
- 149) La Jornada. 02/Feb/91. p. 33.
- 150) Ciertamente el ejército salvadoreño ha incautado a la guerrilla armas pertenecientes a la contra nicaragüense.

Este es el nuevo rumbo cada día más en uso que han tomado las armas en América Central desde los primeros acuerdos de Esquipulas, pero más acentuada desde los acuerdos de Tela de Honduras. Con las elecciones generales en Nicaragua, la moral de la contra, ahora condenados a observar cómo los fondos que antes venían para ellos van ahora a la financiación de la campaña electoral de Violeta Chamorro. Las circunstancias han abierto un aparatoso mercado de tráfico de armas, entre otras fusiles ametralladores M-16 de fabricación norteamericana, minas magnéticas Clymor- que se utilizan enterrándolas a un palmo por los caminos hasta que algún vehículo blindado que pasa por encima de ellas las activa- y lanzacohetes de precisión RPG-7 más conocidos en la región por el sobrenombre de bastones chinos. Revista Cambio 16, 16/Oct/89, pp. 85-88.

- 151) Los campesinos se encontraron acuchillados, clásico en los escuadrones de la muerte. Excelsior, 04/Feb/91, pp. 2 y 27.
- 152) Manuel Ungo fue ex-miembro de la Junta de Gobierno posmilitarista en 1980, expresidente del FDR, excandidato presidencial en 1989 y actualmente era candidato a una diputación. Ungo también vivió, junto a su esposa, la invasión de Panamá.
- 153) La Jornada, 02/Mar/91, p. 39.
- 154) La Jornada, 06/Mar/91, p. 29.
- 155) Excelsior, 04/Feb/91, pp. 2 y 5.
- 156) Ibid., pp. 2 y 5.
- 157) Una delegación de hispanoestadounidenses participó como observadores independientes del Instituto de Investigación para el Votante del Suroeste de Estados Unidos, SVRI, siglas en inglés, y a través de su proyecto latinoamericano, desde 1986 han organizado 12 misiones de consulta y verificación en México, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y ahora en El Salvador. La Jornada, 19/Feb/91, p. 12.
- 158) La Jornada, 14/Mar/91, p. 40.
- 159) GASPARINI, Juan. Revista Tiempo de Hoy, 14/May/90, pp. 92 y 93.
- 160) La Jornada, Ver del 05 de Abril a 27 de Abril de 1991.
- 161) La Jornada, 07/May/91, p. 30.
- 162) La Jornada, 09/May/91, p. 32.
- 163) Ibid., p. 32.
- 164) Ibid., p. 32.
- 165) Entrevista al Comandante Carmelo, en La Jornada, 13/May/91, pp. 34 y 48.
- 166) La Jornada, 20/May/91, p. 44.
- 167) Ibid., p. 44. El militar entrevistado de Usulután pidió el anonimato, según dijo, "para hablar sin fronteras".
- 168) El Día, 11/Nov/89, p. 15.
- 169) La Jornada, 12/Nov/89, p. 31.
- 170) La Jornada, 04/May/90, pp. 28 y 44.

V. Capítulo 4. Los Estados Unidos. Guerra y Dinero, límites para la paz salvadoreña.

4.1 La Administración Reagan y su modalidad estratégico-militar hacia El Salvador.

Como se ha descrito en los capítulos anteriores, el proceso histórico de El Salvador se caracteriza por la injusta estructura social que ha propagado las condiciones actuales de guerra civil. Empero, existe otro elemento de este proceso histórico a nivel de las relaciones internacionales que es la dependencia económica y política con los Estados Unidos. En general, Centroamérica ha constituido, junto con el Caribe, una zona estratégicamente vital para los intereses del imperialismo norteamericano. La importancia de la región, puede considerarse desde la construcción del Canal de Panamá y el establecimiento del semiprotectorado en la zona. En particular, El Salvador ha tenido una importancia geopolítica, por ello las dictaduras militares, aliadas con diversos sectores de la burguesía, han gobernado desde hace cincuenta años y no han dejado de recibir ayuda estadounidense.

A lo largo de este capítulo, se tratará de explicar el desarrollo histórico de la política económica y militar norteamericana hacia El Salvador, durante la presidencia de Ronald Reagan y George Bush, con el fin de alinear los acontecimientos de la guerra salvadoreña y entender que buena parte de ésta, la han intensificado y mantenido los Estados Unidos.

Retomando algunos elementos de orientación, encontramos que

durante la Administración de Jimmy Carter (1977-181), la política exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, estuvo basada en la combinación de enfoques nuevos y políticas tradicionales, sugeridas por sus colaboradores más inmediatos. Principalmente, las que incluyeron, en el plano militar y político, al caso de El Salvador, fueron las replanteadas en el documento de Sol Linowitz conocido como "Informes Sobre las Relaciones Exteriores Estados Unidos-América Latina", y la doctrina de la estrategia militar de rápido despliegue.

Respecto al plano político, Linowitz hizo planteamientos de la entonces situación internacional de la siguiente manera: (1)

a) El desarrollo tecnológico y económico había creado nuevos problemas internacionales y la interdependencia había generado una urgente necesidad de buscar un nuevo enfoque global de esos problemas; b) Era necesario desechar la idea de que los Estados Unidos debían tener una política especial hacia la región en una esfera de interés donde ellos debían y podían intervenir, abierta o encubiertamente, para impedir el ascenso de gobiernos indeseables. La seguridad nacional debía ser un determinante fundamental de la política norteamericana en esa área (en Latinoamérica); c) Por lo anterior, la política debería preocuparse menos por la seguridad militar, un enfoque exento de paternalismo, ser respetuoso de la soberanía y tolerante ante la diversidad política y económica.

De acuerdo a los anteriores planteamientos, Linowitz hizo las siguientes recomendaciones: a) llegar a una negociación sobre los

tratados del Canal de Panamá; b) fomentar la normalización de las relaciones con Cuba; c) liberalizar el intercambio e internacionalizar la asistencia; d) promoción a los derechos humanos (2); e) total abstención de intervenciones militares; y, d) no ver las revoluciones en otros países y los conflictos interregionales como campos de batalla de la guerra fría.

En cuanto al plano militar, la Administración Carter aplicó la estrategia militar de rápido despliegue, que buscó concentrar en un espacio, lo más reducido posible, la mayor cantidad de fuerza militar para obtener una victoria contundente en corto tiempo, de aquí que se haya creado la Fuerza de Despliegue Rápido, en Octubre de 1979, y la única unidad denominada como elemento central a estas fuerzas, ha sido la División Aerotransportada No. 82, situada en Fort Bragg, Carolina del Norte.

Cabe hacer referencia primero a lo que para el Departamento de Defensa Norteamericano significa el empleo de la estrategia militar: "son fuerzas armadas de una nación para asegurar los objetivos de la política nacional por medio de la aplicación de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza" (3). Esta definición ha sido la base de los principios de política militar de las administraciones Reagan y Bush, pero más ampliada.

El principio de las Fuerzas de Despliegue Rápido es la sorpresa, y también existe una definición por parte del Departamento de Defensa; "es la fuerza necesaria para la intervención global de carácter convencional, cuyo distintivo es la capacidad de saturar el teatro de operaciones, que en términos

de tiempo puede ser involucrada rápida y contundentemente para resolver con la mayor rapidez posible, y en un espacio lo más reducido posible" (4). El coronel Fletcher Ware anticipó en 1976 que la nueva idea de la estrategia de intervención, debería consistir "en una invasión rápida para emplear la fuerza, seguida de un despliegue rápido de fuerzas suficientes para lograr objetivos específicos probablemente dentro de limitaciones geográficas y de tiempo. Se necesitaba, por tanto, una fuerza ligera capaz de invadir rápidamente y, una vez cumplida su misión, salir lo antes posible" (5).

Asimismo, se desarrolló la tesis del "enfoque global", la cual argumentaba que no debía haber una política norteamericana en América Latina, sino que sería incorporada en un marco global tratada en el contexto del Diálogo Norte-Sur. Según Jeane Kirkpatrick, ésto significaba reducir la asistencia norteamericana en la región. Y en efecto, la asistencia declinó, en 1980, la Administración solicitó sólo la mitad de la asistencia económica para América Latina. "La asistencia militar cayó, y se pusieron más condiciones sobre el uso de las partidas recibidas. No podían comprarse nuevos sistemas de armamentos, en cambio todos los países del área debían ser alentados en adquirir armas no letales, se alentó la restricción de la venta de armas" (6).

Lo anterior forma la base fundamental que explica la política exterior de los Estados Unidos a El Salvador.

En otro sentido, las elecciones presidenciales de El Salvador de 1977, realizadas justo un mes después de la toma de posesión de

Carter, fueron vistas con cierta desconfianza, ya que en Washington se conocía perfectamente el deficiente registro de ese país en materia de elecciones libres, y en particular se manejaba hasta en detalle el despojo electoral efectuado en 1972 al líder demócrata cristiano, Napoleón Duarte (7), además, entre 1976 y 1977, que cubre las elecciones salvadoreñas y el periodo posterior hasta un mes antes de la toma de posesión del general Humberto Romero, fueron entregadas una buena cantidad de notas de protesta, en su mayoría no respondidas, por detención de misioneros mormones norteamericanos, expulsión de jesuitas, desaparición de ciudadanos norteamericanos bajo detención de autoridades migratorias, etc (8). Se procedió a una audiencia en que prácticamente se revisaron todos los elementos violatorios de los derechos humanos, desde la llegada al gobierno de Molina en 1972, hasta la ocupación militar de la Universidad de El Salvador, UES, (Julio 1972) la persecución del movimiento obrero y campesino y de los frentes de masas (1978-79).

No obstante, y con los juicios de Linowitz como base, en general las relaciones de la política de Carter hacia El Salvador tuvieron características positivas, como lo muestran los siguientes acontecimientos en 1977 (9).

- 1) Julio. Entrevista del Sr. Richard Arellano, asistente del vicesecretario para Asuntos Latinoamericanos con el nuevo presidente, Romero,
- 2) Agosto. Entrevista en El Salvador con Patricia Dorian, asesora del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos.
- 3) Agosto 28. Préstamo por 31.7 millones de dólares para proyectos

de desarrollo.

4) Agosto. Invitación de Carter, por intermedio de la OEA para asistir a la firma de tratado canalero con Panamá en Washington.

5) Noviembre 3. Concesión de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por 90 millones de dólares para un proyecto hidroeléctrico.

De igual manera, respecto a la represión continua en El Salvador, "dentro" y fuera de la ley, los Estados Unidos tenían un punto de vista más bien de defensa al régimen salvadoreño: "El gobierno de El Salvador definitivamente debe tomar todas las medidas necesarias dentro de la ley para combatir éstas provocaciones (se refería a las movilizaciones y descontento en contra del régimen salvadoreño)...Permítanme (al gobierno salvadoreño) asegurarles que su gobierno puede continuar contando con nuestra activa colaboración y apoyo en promover el desarrollo económico y social mientras combate el cruel y condenable reto del terrorismo dentro del marco de protección de nuestros compartidos patrones sobre los derechos humanos" (10).

Después de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a El Salvador, Terence Todman, Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, visitó El Salvador en Noviembre de 1978 y declaró que "el presidente Carter ha colocado los derechos humanos en el centro de la política exterior de los Estados Unidos, en ésto nosotros somos apoyados por los gobiernos de otros países democráticos del mundo, incluyendo al gobierno de El Salvador" (11).

Lo anterior prueba que para el caso salvadoreño, se presentó la oportunidad de aplicar la política de Carter, sugerida por Linowitz en el renglón de los derechos humanos, la Administración "alineó a los Estados Unidos con las fuerzas del cambio" (12), "no se trata de defender la estabilidad frente a una revolución, sino de construir un orden más estable, equitativo y pluralista" (13), por ello, como ya se anotó en capítulos anteriores, la remoción del gobierno opresor de Romero, a fines de 1979, tuvo el beneplácito de los Estados Unidos, cuya administración, vió la circunstancia más adecuada para implantar un moderado proyecto reformista, que permitiría, según los estrategas norteamericanos, la solución a la crisis global salvadoreña, a la vez que disminuiría las alarmantes tensiones en el Istmo continental. La necesidad de mantener en apariencia el principio de los derechos humanos, a pesar del retorno de una política tradicional, llevó en el caso salvadoreño, a una situación aparentemente paradójica; la institucionalización de la violación de los derechos humanos, en todos sus aspectos, y mediante una ley que pretendió defenderlos (14).

La Junta Militar de 1979, fue apoyada y respaldada por Carter, a la que sugirió las reformas sociales y económicas. Envió expertos que planearon la reforma agraria, y para fincarlas, la embajada de los Estados Unidos colaboró con casi 20 millones de dólares en préstamos a largo plazo con muy bajo interés (15). Dirigido por el Instituto Norteamericano para el Desarrollo del Trabajo Libre y patrocinado por la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO, se redactó un plan para

transferir a unos 250,000 de 300,000 campesinos salvadoreños la propiedad de la tierra que trabajaban (16). (Se hace incapié sobre la corrupción en el gobierno salvadoreño que ha impedido repartir las tierras equitativamente).

Los Estados Unidos ansiaron más imponer la reforma agraria que las elecciones en El Salvador. Según el vocero del Departamento de Estado, Thomas Reston, "en El Salvador las autoridades estaban dispuestas a realizar reformas electorales reales y significativas, durante los comicios a celebrarse a principios del próximo año (de 1980)" (17). En esencia, renacía en forma más clara la famosa política de las democracias restringidas, que como ha señalado Luis Maira, estas vienen a ser "como de un origen electoral, que asegure la dirección de los gobiernos a sectores civiles y que tuvieran en el fondo dos requisitos: su apoyo en organizaciones políticas con apoyo popular y que al mismo tiempo, garantizaran un definido rechazo a la aplicación de programas radicales de perspectivas socialistas" (18).

La Junta de Gobierno que depuso a Romero significó también en su identidad un desesperado intento de sectores de la Casa Blanca por mediatizar el movimiento revolucionario y evitar la nicaragüización de El Salvador y de paso, crear las condiciones para un cerco a la revolución sandinista. En primer lugar, a partir de que se produjo la vinculación entre organizaciones de masas y las fuerzas políticas (FMLN, FDR, FARN, ERP, FAPU etc., Ver capítulo 1), este segmento tan amplio de organizaciones de izquierda tuvieron capacidad suficiente para desarticular desde la

base, a cualquier gobierno resultante de reajustes no compartidos en la estructura de poder tradicional, y por tanto, plantearon una situación difícil para los formuladores de política norteamericana, los cuales se convirtieron en factores que acentuaron la agitación, apartando la posibilidad de consolidar un gobierno moderado, que fuera capaz de convocar a un proceso electoral limpio y otorgar un mínimo de estabilidad al proceso político que respondiera a las expectativas de Washington (19). Por ello, el 26 de Enero de 1980, el embajador estadounidense en El Salvador, Frank Devine, anunció que los Estados Unidos reforzarían su ayuda mediante la AID. Esto significó la redacción en inglés de los planes de gobierno y la extensión de la asistencia técnica a los cuerpos represivos.

En segundo lugar, con la toma del poder sandinista, con la vieja tradición de la "exportación de la revolución", se intentó chantajear a la revolución nicaragüense. El 30 de Enero del mismo año, el General Schweitter, Director de Estrategia, Planes y Políticas del Ejército Norteamericano, expresó claramente la idea anterior en Santo Domingo: "Estoy precisamente por el problema que hay en el Caribe y en todas partes del mundo: la amenaza comunista" (20). Esta amenaza comunista bien podría extenderse a El Salvador en un momento de definición de las organizaciones político militares que deseaban la toma del poder.

Por otra parte, en el terreno militar la intervención basada en el despliegue rápido se justificó en El Salvador, doctrinaria y prácticamente, donde el objetivo de las maniobras fue el entrenamiento base de elementos militares salvadoreños. La base

principal de las Fuerzas de Despliegue Rápido no ha sido militar sino política, por ello se ha tratado de instrumentar con los ejércitos aliados para que sean éstos los que saturen el teatro de guerra y derroten al enemigo. Así, los Estados Unidos entrenaron a batallones para saturar el teatro de guerra del FMLN, mediante operativos de "cerca" y "aniquilamiento". Hay que recordar que el FMLN llevó a cabo una gran maniobra militar que mermó las filas del ejército, por lo que para contrarrestar la ofensiva de 1981, se entrenó al batallón Atlacatl y posteriormente el batallón Atonal y Beloso, siempre con el fin de lograr la derrota militar rápida, utilizando fuerzas aliadas, pero reservando la posibilidad de que ante una derrota, las Fuerzas de Despliegue Rápido pudieran invadir. El problema fue que la fuerza militar del FMLN puso en tela de juicio la posibilidad de lograr la victoria instantánea y contundente, visualizándose ya el empujamiento militar. A todas luces, la victoria militar de despliegue rápido contra el FMLN había fracasado, (simultáneamente se daba la consolidación del gobierno sandinista) por ello, la naciente Administración de Reagan buscaría la manera de recuperar su hegemonía y evitar llegar al extremo de invasión así como el de reducir los costos, en caso de realizarla.

La nueva modalidad estratégica aplicada durante el gobierno de Reagan, es conocida como Guerra de Baja Intensidad, y está contenida en el Manual de Campo 100-20, publicado por el Departamento del Ejército en 1981. En éste manual, el término de contrainsurgencia no aparece, pero su definición oficial se

encuentra en el Diccionario de Términos Militares, que al respecto dice: "aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno para derrotar la insurgencia" (21). Tuvo mayor importancia durante la segunda Administración Reagan, pero antes conviene conocer primero el desarrollo de la política norteamericana de 1981 a 1984, para retomar, posteriormente, la Guerra de Baja Intensidad.

Al inicio de la presidencia de Reagan, Alexander Haig, Secretario de Estado (Marzo 1981-Jun 1982) y Thomas Enders, Secretario Adjunto para Asuntos Hemisféricos (Marzo 1981-Mayo 1983), elaboraron la estrategia para Centroamérica y en especial para enfrentar el caso salvadoreño, definida como "caso prueba" (test case, que incluyó también a Nicaragua). Tuvo como fin, enfrentar la supuesta infiltración soviético-cubana hacia la región. La estrategia se basó en una política de "doble carril", uno político y otro militar, es decir, se basó en "la aplicación consciente de una línea política destinada a sustentar y cubrir los escalones militares previstos" (21).

Concretamente, el carril político consistió en buscar y consolidar la institucionalidad, por medio de elecciones, de los países centroamericanos aliados, en este caso El Salvador, para demostrar que la estabilidad y legitimidad democrática de Centroamérica era mermada por la realidad del sandinismo en Nicaragua y de la revolución salvadoreña, ambos dependientes del eje Moscú-La Habana.

En tanto, el carril militar, enfatizó tres aspectos: sobre la

ayuda militar, logística, financiera y de entrenamiento para el gobierno salvadoreño (y aliados); sobre la realización de una estrategia militar en contra del FMLN-FDR; y sobre el acondicionamiento militar y desarrollo de la intervención norteamericana directa (bases militares, ubicación de tropas y asesores en la región, maniobras navales y terrestres). Sin embargo, las tesis de doble carril fue debatida por el entonces secretario de Defensa, Caspar Weimberger quien señaló que la precipitación de estas medidas "incidiría negativamente en los aliados occidentales, a quienes los Estados Unidos tendrían que convencer para que aceptaran medidas estratégicas globales, como la instalación de los cohetes Pershing en Europa Occidental" (23). Con este argumento, se llegó a definir una política más precavida, que introdujo la ampliación y transformación de las Fuerzas de Despliegue Rápido, creadas durante la Administración Carter en 1979, ahora bautizadas con el nombre de United States Forces Caribbean Command (24).

En Julio de 1981, ocurrió la primera incursión de tropas salvadoreñas a Honduras para actuar desde ahí contra el FMLN, y operó en el Departamento de Chalatenango en Agosto del mismo año y tal fue su magnitud de acción, que posteriormente las tropas hondureñas y salvadoreñas actuaban indistintamente en territorio salvadoreño y en la zona fronteriza supervisada por la OEA.

Cuando George Shultz substituyó a Haig, Thomas Enders desarrolló más libremente la política militar de doble carril, para involucrar a todos los países centroamericanos en la estrategia

militar contra el FMLN-FDR. Políticamente, se tuvo el objetivo de llevar a cabo una campaña diplomática más diligente, principalmente para hacer cambiar a México (de la declaración Franco-Mexicana) y a la social democracia en Europa, sobre el reconocimiento, como fuerza beligerante al FMLN y para promover el apoyo a los partidos demócratas (25). Esta circunstancia generó una modificación significativa del balance de fuerzas internas en los Estados Unidos a favor de las posiciones republicanas, que comenzaron a definir metas para el caso de El Salvador, entre ellas:

- 1.- Facilitar las certificaciones presidenciales ante el Congreso norteamericano y garantizar la aprobación de la ayuda económica y militar solicitada por la Casa Blanca.
- 2.- Incrementar el apoyo internacional para el gobierno salvadoreño de Alvaro Magaña (1982-1984).
- 3.- Insistir en una fase nueva de amortización de los intereses de las fuerzas dominantes en El Salvador, tratando de evitar que los conflictos continuaran incurriendo en la unidad del ejército.
- 4.- Separar progresivamente al poder militar de las tareas administrativas y políticas, a fin de eludir que los debates partidarios incidieran en el ejército.
- 5.- Reducir el poder del líder de la Asamblea Constituyente, Roberto D'Aubuisson.
- 6.- Cooptar las tendencias de negociación en El Salvador presentes en la Iglesia y en los sectores medios salvadoreños.
- 7.- Ubicar las demandas de negociación en el terreno del diálogo para la reconciliación nacional, con la incorporación de los

frentes guerrilleros al proceso electoral.

El Departamento de Estado y la embajada norteamericana tuvieron la visión de seguir conduciendo la lucha contrainsurgente dentro de los esquemas tradicionales, con la esperanza de que una aplicación perfecta fuera capaz de evitar la nueva Indochina. Se planeó ganar base social y reconocimiento internacional a partir de éxitos militares sobre la guerrilla y de una campaña político-diplomática orientada a recuperar consenso y lograr la participación de sectores moderados de la oposición. Se trataba de quitar la base social a la insurgencia mientras se le sometía a una guerra de desgaste, todo basado en el improbable supuesto de que la prolongación de la guerra, dadas las capacidades logísticas en juego y el ímpetu del proyecto aperturista institucional, deterioraría y aislaría a la oposición (26). Desde principios de 1983, para dejar a la guerrilla sin base de apoyo, se recurrió a la eliminación masiva de los habitantes, empleando el ataque tipo "tierra arrasada" desatado en el Departamento de Morazán, que reveló la nueva táctica de liquidación masiva del pueblo adaptada por represores salvadoreños bajo asesoría de oficiales del Pentágono.

Políticamente, en Febrero de 1983 la Administración Reagan tendría un éxito notable. El plan de convergencia nacional, sugerido por el Departamento de Estado se había concretado en el Pacto de Apaneca (suscrito por PDC, PCN, ARENA y PPS). La Comisión Política, primer órgano ejecutivo del Pacto, reconoció la existencia de un balance de fuerzas fuertemente desfavorables al

partido ARENA. A partir de aquí se recrudeció la lucha interna en El Salvador de las fuerzas dominantes, cuyos logros del Departamento de Estado fueron la preeminencia de la alianza de fuerzas centristas en torno al presidente salvadoreño, Alvaro Magaña, pero al costo de una reactivación de los conflictos en el seno del régimen salvadoreño.

En el plano militar, en cambio, no hubo éxito, ya que a principios del mismo año, el fracaso contrarrevolucionario fue evidente. El primer plan estratégico imperialista tomó en consideración que había existido un avance importante de las fuerzas revolucionarias en el aspecto político-militar, expresado en los primeros gérmenes del ejército popular y en el desarrollo del poder popular en las zonas de control político militar en el área rural. Los expertos del Pentágono no ignoraban la consolidación de una retaguardia político militar insurgente rural y urbana, ni la disposición por parte de las fuerzas populares de considerable cantidad de armamento recuperado a las fuerzas militares del régimen, a la que se agregó el adquirido en el mercado negro internacional. Al mismo tiempo, las estrategias de represión debieron admitir que el ejército salvadoreño por sí solo, había sido y seguía siendo incapaz de derrotar militarmente a la insurgencia, por lo que se requería un volumen creciente de ayuda militar y técnica de los Estados Unidos.

El plan estratégico contrainsurgente se fue desarrollando de acuerdo a los objetivos de la Guerra de Baja Intensidad que de forma abreviada son los siguientes:

1.- Cortar toda posibilidad de abastecimiento estratégico a las fuerzas revolucionarias, sobre todo a nivel regional, mediante métodos operativos específicos para reducir el flujo logístico desde el exterior, cortando vías marítimas, aéreas y terrestres. Se estableció así un patrullaje combinado de las costas por navíos de guerra norteamericanos y guardacostas salvadoreños, completando con un cordón sanitario en las zonas fronterizas en coordinación con los ejércitos, guatemalteco y hondureño. Simultáneamente, el gobierno de los Estados Unidos, presionó política y económicamente a los gobiernos del área, con el fin de crear espacios políticos que pudieran ser favorables a las fuerzas gubernamentales salvadoreñas.

2.- Sometimiento de la insurgencia a un desgaste continuo, ejerciendo presión militar constante sobre las zonas de control militar guerrillero, con el objeto de ir disminuyendo la capacidad ofensiva de las fuerzas militares revolucionarias, manteniéndolas a la defensiva y ubicando los puntos más débiles con miras a obtener una victoria militar contundente mediante grandes operativos de aislamiento y aniquilación.

3.- Se incrementó el ataque y exterminio contra la población civil dentro de las zonas de control o zonas en disputa, como una línea militar que buscaría aislar a las fuerzas revolucionarias de sus bases sociales de apoyo.

4.- Función y adiestramiento de la fuerza móvil estratégica compuesta por los tres batallones élite, Atlacatl, Atonal y Belloso, de gran movilidad y capacidad de maniobra, encargados de

dar el golpe estratégico una vez consumados los tres puntos anteriores del plan. Un factor fundamental para el empleo de esta fuerza fue el uso de helicópteros, capaces de conferirles movilidad aérea y ubicarlos rápidamente en la retaguardia de las fuerzas insurgentes o en otros puntos estratégicos que les permitieran obtener algunas ventajas en la capacidad de maniobras militares. Para el transporte de esta tropa y como apoyo aéreo artillado, los Estados Unidos proporcionaron al ejército salvadoreño helicópteros Bell modelo 205, helicóptero utilitario con capacidad para el piloto y 14 soldados completamente equipados y con una velocidad máxima de unos 200 km/hora (27).

El plan encontró serias dificultades técnicas y tácticas, entre ellas: la resistencia activa insurgente en todos los frentes bélicos; los problemas políticos internos en la Fuerza Armada gubernamental; las insuficiencias en la articulación operativa entre los asesores militares norteamericanos y la ejecución de los lineamientos planteados por el ejército salvadoreño, y por la falta de asimilación o aprendizaje en el uso de los nuevos medios militares proporcionados por los Estados Unidos (28).

Desde aquí, ya es posible afirmar que la conducción estratégica de la lucha revolucionaria en El Salvador, estaba en manos del equipo de asesores militares norteamericanos, (en su mayoría miembros de las fuerzas especiales del Pentágono, conocidas como "Boinas Verdes") que se observan en un conjunto de prácticas políticas y militares confluyentes. Es claro, también, el interés de moderar las contradicciones dentro de las Fuerzas Armadas

salvadoreñas, en general mediante la amenaza del cese a la ayuda militar norteamericana. A pesar de ello, se ha tenido un refuerzo con la constitución de un estado mayor en Fort Gullik, enclave militar norteamericano en la zona del Canal de Panamá, encargado de asesorar al alto mando salvadoreño en la conducción estratégica de la guerra. No sólo aumentaron y se cualificaron los programas de entrenamiento para oficiales de mediana y baja graduación, cadetes y clases del ejército, sino que se mejoró la infraestructura militar para hacer más efectivas las comunicaciones entre el combate urbano y rural, así como el desplazamiento rápido de tropas.

Crecieron notablemente las tareas de asesoría, en comunicaciones, logística e inteligencia militar, y se puso a disposición de las fuerzas militares, toda la información de servicios de espionajes e inteligencia militar norteamericana sobre la situación salvadoreña. Entre otros, los servicios de inteligencia norteamericanos, dieron datos sobre la configuración geográfico-militar por medio de sensores remotos a través de fotografía infrarroja desde satélites, además, navíos de guerra de los Estados Unidos se han desplazado libremente por las costas de El Salvador, provistos de equipo electrónico sofisticado, con el fin de interceptar e interferir las comunicaciones y los programas de radio de las fuerzas revolucionarias (29).

Para desgracia de los Estados Unidos y para el gobierno salvadoreño, toda ayuda no sirvió para detener el avance insurgente, y ante el fracaso, Reagan ordenó, en Febrero de 1983,

una revisión de la política hacia El Salvador. Jeane Kirkpatrick, embajadora ante la ONU, viajó a Centroamérica para estudiar la situación e informó que los errores de la política exterior de Washington habrían agravado dos situaciones negativas para este: a) el crecimiento de la capacidad de defensa de Nicaragua, lo que transformaba la revolución sandinista en un proceso prácticamente irreversible, y, b) el deterioro político y militar del gobierno salvadoreño, acompañado de un crecimiento muy significativo de fuerzas opositoras. Esto constituyó la antesala de los cambios de la política exterior de los Estados Unidos hacia El Salvador. Ahora Reagan se negaba a cualquier negociación que llevara la guerrilla con el gobierno salvadoreño e insistió abiertamente en el camino de guerra-elecciones presidenciales, pero sin aceptar la política de doble carril respecto a la participación en las elecciones de la fuerza opositora, es decir, del FMLN-FDR.

A partir de Marzo de 1983, y una vez aprobada la ayuda militar por parte del Congreso norteamericano, el Departamento de Estado fijó las siguientes medidas: 1) la urgente unificación del ejército, sacrificando a las piezas militares conflictivas y procurando una separación de funciones entre el Ministerio de la Defensa y el Estado Mayor del Ejército, (lo cual logró cuando el general José Guillermo García fue substituido por Eugenio Vides Casanova en el Ministerio de Defensa) y, 2) la efectiva aplicación de la estrategia norteamericana de contrainsurgencia a efectos de lograr éxitos en la lucha contra la guerrilla (30), (el plan "Bienestar para San Vicente" es un ejemplo).

Reagan decidió que el Secretario de Estado, George Shultz, se hiciera cargo de la dirección de la política exterior hacia Centroamérica (pero la conducción real la llevaron a cabo Jeane Kirkpatrick y el Consejero de Seguridad, William Clark, por lo menos al principio, como se verá más adelante), la Casa Blanca optó explícitamente en el plano declarativo por la línea más dura: una victoria militar sobre las fuerzas revolucionarias. Reagan incrementó la escalada belicista hacia El Salvador al intensificar la ayuda militar (capacitando mayormente a los batallones Atlacatl, Belloso y Atonal), al incrementar el dispositivo de seguridad en Honduras y al reforzar el Comando Sur en Panamá.

El Secretario de Defensa, Caspar Weinberger, después de una visita a El Salvador, específicamente en San Vicente, "constató" los progresos de las Fuerzas Armadas contra la guerrilla y solicitó al Congreso la aprobación de 84 millones de dólares de ayuda para el ejército oficial salvadoreño (31) (simultáneamente, entró en funciones el 11 de Agosto la Comisión Kissinger, que se retomará más adelante), y a fines de 1983, se puso en marcha un plan para realizar una acción conjunta de los ejércitos salvadoreño y hondureño en contra del FMLN, operación dirigida por Wallace Nutting, Jefe del Comando Sur, y Fred Ikle, Subsecretario de Defensa. El plan contempló la participación de otros países latinoamericanos, que fueran capaces de encubrir la intervención directa de las tropas de "Boinas Verdes".

La presencia norteamericana en la región no encontró obstáculos ni críticas por parte de los gobiernos centroamericanos,

hasta que el 19 de Julio de 1984, William Clark notificó que una flota de guerra norteamericana, compuesta por nueve buques de guerra comandados por el portaviones Ranger, avanzaba hacia las costas centroamericanas (32). La primera reacción fue de la Casa Blanca, pero tenía sus razones porque en medio de la Cumbre de Cancún, en México, que buscaba la paz centroamericana (México, Venezuela, Colombia y Panamá firmaron el Documento de Objetivos de 21 puntos para la paz de Centroamérica), esta acción representaba darle totalmente la espalda a los esfuerzos de Contadora, además el entonces presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge, los países de la OTAN (excepto Inglaterra) y de la propia OEA, es decir, los aliados de los Estados Unidos, vieron el envío de tropas como un acto unilateral que rompía abruptamente con los esfuerzos por lograr la paz. El epílogo de la acción lo constituye la justificación de Richard Stone en su viaje por Centroamérica: "la flota se encontraba en Centroamérica para la protección de la paz y para aliviar las tensiones" (33), quien además sugirió a Contadora "que debería trabajar mas bien por la democratización de Centroamérica a través de la promoción del pluralismo ideológico" (34).

Posteriormente, Richard Stone se entrevistó con Rubén Zamora, integrante de la comisión político diplomática FMLN-FDR. La reunión tuvo dos significados contradictorios: para la parte revolucionaria constituyó la oportunidad de forzar a la Administración Reagan al reconocimiento oficial de la alianza FMLN-FDR; la parte norteamericana la usó para neutralizar el rechazo hacia la política

de Reagan que crecía tanto en los Estados Unidos como en el contexto internacional. Tratando de neutralizar los efectos del envío de la flota, el Secretario de Estado, George Shultz, ofreció estudiar las proposiciones del jefe de gobierno de Cuba, Fidel Castro, sobre la pacificación del área y la disposición de Nicaragua a aceptar negociaciones globales en el marco del documento de Cancún. Este intento no pudo ocultar la existencia de una división en el gobierno norteamericano, un abierto apoyo de Reagan hacia George Shultz en desmedro de William Clark. La pugna Sultz-Clark comenzó a resolverse a favor del primero cuando el presidente Reagan anunció que había decidido mantener el límite de 50 a 60 asesores militares en El Salvador después de considerar los argumentos del Pentágono y del Departamento de Estado (35). Posteriormente se confirmó la substitución de William Clark como Consejero de Seguridad Nacional, por Robert Mac-Parlane.

En Octubre de 1984, fecha de ambiente preelectoral en El Salvador, la Comisión Kissinger dió su primer informe sobre la cuestión centroamericana (36). Esta Comisión, formada por doce personas, entre ellas Jeane Kirkpatrick (37), y cuyo presidente fue Henry A. Kissinger, entró en funciones desde el 11 de Agosto de 1983 y durante un año se dedicó a realizar una agenda de entrevistas con el Departamento de Estado, expresidentes de los Estados Unidos, dirigentes de los cuerpos de paz y de los sindicatos norteamericanos, expertos de la CIA y especialistas en población, reforma agraria, asuntos de seguridad, etc.. En el contexto latinoamericano, la Comisión trabajó con embajadores,

funcionarios de la OEA y de relaciones exteriores de los países de Contadora, personalidades académicas y políticas y círculos de la prensa mundial que desarrollaban sus actividades en el área. La meta central que buscó Kissinger, a través de sus contactos con grupos de presión en los Estados Unidos y en su trabajo diplomático, consistió en lograr que los argumentos y recomendaciones que contiene el Informe, fueran percibidos por los distintos sectores como el resultado de una muestra balanceada de opiniones, donde se habrían tomado en cuenta los criterios de la mayoría de los entrevistados.

El Informe Kissinger fue presentado el 11 de Enero de 1984. consta de ocho capítulos y establece claramente a lo largo de ellos, que "Centroamérica es nuestra vecina cercana y está críticamente dentro de nuestros intereses de seguridad nacional" (38). En términos generales recomendó un masivo plan de ayuda para Centroamérica (24 millones de dólares) como muralla contra "la intervención militar soviética en América Central y el Caribe". Sobre ayuda económica, recomendó el establecimiento de "un programa urgente de estabilización", con una revitalización del Mercado Común Centroamericano, y de participación del sector privado, una asistencia a los problemas de la deuda exterior de la región, el incremento de la asistencia económica bilateral, así como un programa de reconstrucción y desarrollo a mediano y largo plazo. "Instamos a los líderes de los Estados Unidos de América y a los países de América Central a reunirse a fin de iniciar un plan integral de desarrollo económico de la región y la revitalización

del Mercado Común Centroamericano" (39). "Estimulamos la mayor incorporación posible del sector privado al esfuerzo de estabilización" (40). "Recomendamos que los Estados Unidos de América enfoquen activamente los problemas de deuda externa de la región" (41). "Recomendamos que un impulso mayor de ayuda se dirija a la infraestructura intensiva de trabajo y a los proyectos de vivienda" (42). "Recomendamos que los Estados Unidos de América otorguen un crédito de emergencia al Central American Common Market Fund, para refinar parte de los déficits de balanza comercial" (43).

En particular para El Salvador, el Informe recomendó: a) un incremento de 400 millones de dólares para el año fiscal de 1984, cifra similar a la solicitada para atender los problemas económicos de todos los países centroamericanos; y b) abandonar lo que llama "un problema filosófico" sobre la percepción de que las operaciones diplomáticas eran incompatibles con las operaciones militares. A juicio de la Comisión, un éxito de contrainsurgencia no tenía por que substituir las negociaciones. Para Kissinger, una contrainsurgencia exitosa lo más rápido posible, es una condición necesaria para una solución política dentro de la perspectiva norteamericana. También aclara que la guerra en El Salvador está en empate, y ésta situación debe cambiar. Los insurgentes tendrían capacidad de poner 12,000 combatientes en el campo de batalla, mientras que el ejército dispondría de 35,000 hombres, pero la relación adecuada para hacer exitoso este tipo de contrainsurgencia era de 10 a 1. Además de la carencia de hombres, el empate militar

sería también producto de un equipamiento y entrenamiento insuficiente de la tropa (44). En síntesis, la causa de que el ejército salvadoreño se encontrara en posición estática y hubiera dado muestras de desmoralización, ha sido la carencia de un apoyo substancial por parte de los Estados Unidos y la escasez de personal necesario.

Por otro lado, según el Informe, en El Salvador ha existido un gobierno débil e incapaz de soportar un conflicto prolongado, por ello "La Comisión recomienda que los Estados Unidos de América otorguen a El Salvador niveles de ayuda militar significativamente mayores... Recomendamos además, que el compromiso de hacerlo sea tomado lo más pronto posible, de manera que las autoridades salvadoreñas puedan actuar ahora con la seguridad de que la ayuda que necesitan ha de ser recibida" (45). "Sin ayuda militar adecuada las fuerzas salvadoreñas no podrían llevar a cabo la táctica contrainsurgente moderna que ayudaría a mantener las pérdidas entre los civiles a un mínimo. Si se corta la ayuda militar, se abriría el triunfo para la guerrilla, una eventualidad que nadie que se preocupe sobre el bienestar de los salvadoreños puede aceptar con ecuanimidad" (46).

Respecto del aprovisionamiento de la guerrilla, el Informe no explica cómo los insurgentes son capaces de introducir en El Salvador sus equipos militares a través de territorio hondureño que está ocupado por tropas militares norteamericanas, ni tampoco cómo la guerrilla ha burlado la vigilancia de fuerzas navales estadounidenses que circulan en el Mar Caribe y el Golfo de

Fonseca. Solamente definió su relación con Managua: "El frente guerrillero FMLN ha establecido un comando militar unificado con su cuartel general en Managua" (47). Del anterior argumento resulta una paradoja: una insurgencia que supuestamente no tiene apoyo de la población ni tampoco apoyo externo significativo, posee un ejército de 12,000 hombres capaz de mantener en jaque a un ejército de 35,000 hombres apoyados abiertamente por la primera potencia militar mundial. Es natural que la Comisión Kissinger no haya confiado en derrotar a esa misteriosa guerrilla sólo a través del incremento de la ayuda militar a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Por tanto, resulta clave en las argumentaciones del Informe la recomendación de aumentar las fuerzas del ejército oficial, es decir la relación de 10 a 1.

En el marco de las recomendaciones militares, el Informe Kissinger hizo de las elecciones presidenciales en El Salvador un momento privilegiado de su estrategia política. Señaló que la Comisión de Paz Gubernamental Salvadoreña, ofreció discutir con los frentes FDR-FMLN las condiciones sobre las cuales la izquierda podría participar en los comicios. Como ya se ha mencionado, la insurgencia rechazó la oferta debido a la falta de garantías de seguridad para su participación en el evento. Sin pronunciarse acerca de la legitimidad de ésta demanda, la Comisión no propuso la postergación de las elecciones presidenciales a fin de hacer viable una posible incorporación de la oposición al proceso electoral; encomendó que se reprimiera eficazmente los actos de los escuadrones de la muerte, que se ofreciera seguridad a profesores,

editores, dirigentes sindicales y religiosos y que se garantizara la libre expresión. No obstante, la Comisión Kissinger estuvo al tanto de las denuncias formuladas por un ex funcionario del Departamento de Estado, quien reveló que varios líderes de los escuadrones de la muerte ocupaban puestos de alto rango en las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales salvadoreñas (48). Paradójicamente serían estos jefes los encargados de reprimir con sus propios excesos y de garantizarles la vida a los líderes guerrilleros.

La estrategia diplomático-militar diseñada por el Informe Kissinger para El Salvador fue inmediatamente puesta en marcha con ocasión de las elecciones presidenciales de 1984. El patrocinio por parte de la Administración Reagan a las elecciones tuvo el propósito de construir un consenso a nivel internacional en torno al gobierno salvadoreño, un acuerdo bipartidario en los Estados Unidos para respaldar el escalonamiento militar norteamericano, la reconciliación de los sectores dominantes en el escenario salvadoreño y, por último, la articulación de un escenario doméstico e internacional favorable para derrotar al FMLN.

Reagan apoyó contundentemente a Napoleón Duarte, fue el favorito en las elecciones presidenciales y fue la culminación de la creciente predilección en el Departamento de Estado por una opción de centro que en esta nueva etapa y bajo los lineamientos de la Comisión, permitiera una redefinición de las alianzas internacionales y político sociales en El Salvador para aislar a la guerrilla. Esto solamente vino a intensificar el accionar del

FMLN, y más aún, cobró nuevamente victorias desgastando militarmente al ejército, y económicamente al gobierno. Fue entonces cuando la estrategia de Guerra de Baja Intensidad cobró nuevos rumbos para evitar la victoria militar del FMLN.

La nueva estrategia trataría de implementar una guerra contrarrevolucionaria prolongada, que para el caso de El Salvador se manejaría sobre el eje de que en este país, ha existido una amenaza evidente al orden establecido. Esta estrategia es conocida como Conflicto de Baja Intensidad, CBI, o Guerra de Baja Intensidad, GBI, o con sus siglas en inglés, Low-Intensity Conflict, LIC, "y se ubica en el extremo más bajo del escenario de un conflicto, cuya cúspide es la guerra nuclear total, con una amplia gama de retos que pueden ir desde las actividades terroristas, pasar por la guerra de guerrillas y puede terminar en una guerra convencional sin la utilización de armas atómicas" (49). En el presente trabajo sólo se mencionaran las principales características de la Guerra de Baja Intensidad y mejor se describirá su aplicación para el caso salvadoreño.

El concepto de Guerra de Baja Intensidad todavía posee imprecisiones, incluso aún existen desacuerdos y diferencias en la literatura especializada. Aunque no es el objetivo del presente trabajo, cabe mencionar que el concepto ha logrado ciertos sentidos relativamente aceptados. Por un lado, alude a las formas de lucha del enemigo; pero también se refiere a la respuesta estadounidense, por otro, se usan indistintamente "guerra" y "conflicto", lo poco explicable sería definir si existe baja intensidad. Cabe la duda

que se utilicen instrumentos bélicos menos sofisticados y un menor volumen de fuego, como lo han establecido militares norteamericanos, no obstante la realidad es otra porque el pueblo salvadoreño, el que recibe directamente el accionar militar es el que podría contestar esta duda. "La distinción básica es que la GBI cambia la naturaleza de la guerra, la hace irregular, la prolonga y la convierte en un embate político-ideológico. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional, por lo que no es simplemente en escala menor de una guerra convencional" (50). Finalmente se reconoce que la GBI no es fácil de llevar a cabo ni a corto plazo, sino que tiene varios niveles y dimensiones.

La Guerra de Baja Intensidad tiene las siguientes características:

1.- Impedir el triunfo de movimientos populares que inclinen la balanza a favor del mundo comunista; restarles peso por la vía de revertir los procesos ya consolidados y en el poder, es decir, tiene que revitalizar la doctrina de la contrainsurgencia para enfrentarse a los movimientos populares, en este caso al FMLN.

Por ejemplo:

a) La elaboración de un plan global para El Salvador, adaptación de lo que se implementó en Vietnam con el nombre de Civil Operation and Revolutionary Development Support, CORDS, cuyo objetivo fue quitarle a la guerrilla su base social. El plan tuvo cuatro fases: Primera, el ejército trató de sacar a la guerrilla de San Vicente y Usulután por medio de acciones clásicas de búsqueda y de destrucción ejecutadas por los batallones cazadores

y batallones élite. (Fue necesario aumentar los efectivos del ejército, ya que habían muerto muchos soldados en las ofensivas) Segunda, se instauró un cordón de defensa alrededor de la zona en cuestión, para impedir el regreso de la guerrilla. El ejército realizó algunas acciones para ganarse a la población; construcción de caminos, arreglos de edificios públicos, construcción de escuelas y hospitales y repartición de alimentos, para lo cual se creó, en Octubre de 1982, un órgano coordinador: la Comisión Nacional de Reconstrucción de Areas, CONARA. Tercera, los militares fueron substituidos por patrullas civiles, que recibieron armas para protegerse de la guerrilla (51).

2.- Para que el punto anterior resultara positivo, debía realizarse la recuperación de la ofensiva tanto a nivel estratégico como táctico, inutilizando doctrinas como la de contención, que asume la defensa estratégica como opción, ya que esta política ocasionó, según los estrategas de GBI (Coronel Harry G. Summers), la derrota de Corea y Vietnam.

Por ejemplo:

a) El 10 de Enero de 1986 inició el operativo "Fénix" el más grande lanzado por el ejército salvadoreño. 5,000 hombres y 1,500 kilómetros a la redonda, tres batallones de ración inmediata para limpiar la zona "pulgada por pulgada", comentó entonces el general Balndón. El objetivo: extender un anillo defensivo de la retaguardia estratégica, la capital, para "impedir que en el futuro vuelvan a agruparse los guerrilleros del FMLN, utilizaremos nuevos

elementos tácticos como la dispersión rápida, movilización adecuada, golpes de mano y bombardeos de saturación oportunos" (52).

La acción fracasó porque los guerrilleros se acercaron a la capital, aún cuando el general Blandón declaró que la Operación Fénix sería indefinida. Ante la operación "Fénix", sectores moderados y de izquierda se manifestaron preocupados por tales cambios, el ejército se podría "endurecer" más y subirían a los mandos militares los allegados a la Guerra Total que buscan una pacificación del país pronta y efectiva, acabando en pocos meses con unos 100,000 ciudadanos opuestos al régimen. La Guerra Total, expresión acuñada por la ultraderecha, se contrapuso abiertamente a la Guerra de Baja Intensidad. Cuando Blandón fue substituido por Emilio Ponce, y para calmar éstos ánimos, sugirió que se debía proseguir con la estrategia integral de combinar lo político, económico, psicológico, priorizando lo militar (53).

3.- En la GBI es fundamental la legitimación y credibilidad de las fuerzas apoyadas, "la intervención militar norteamericana en apoyo de una élite gubernamental o de un sistema político que no tiene un mínimo nivel de apoyo interno, es probable que erosione cualquier apoyo público existente...esto significa que la intervención americana debe ser política y militarmente balanceada, principalmente en lo que concierne al refuerzo y legitimación al régimen existente" (54). Se ha buscado superar las dictaduras abiertas, para que puedan ser reemplazadas por regímenes

democráticos que legitimen los gobiernos y la GBI. Se trata de mejorar la imagen de los aliados, cuyo deterioro configura un obstáculo para el logro del consenso y apoyo popular. Desde 1981 se empezó a estimular la instauración de democracias restringidas, particularmente en países asediados por insurgencias revolucionarias y/o involucradas en el acoso a Nicaragua. En el caso de El Salvador, en 1984, se acudió al partido demócrata cristiano, visualizado como apto para reconstruir ese consentimiento (55).

Por ejemplo:

a) Desde Washington se decidió que en Marzo de 1982 debían celebrarse elecciones libres para una nueva Asamblea Constituyente, donde la fuerza política hegemónica sería la democracia cristiana.

b) Para las elecciones presidenciales de 1984, Ronald Reagan prometió desde la Casa Blanca, 10 millones de dólares para compra de computadoras y otra tecnología que permitiera el orden electoral. Por medio del Instituto Venezolano para la Educación Popular, IVEPO, ligado a la democracia cristiana de Venezuela, la CIA "obsequió" 2 millones de dólares al partido de Duarte (56).

c) Duarte buscó su aliado principal en los Estados Unidos, de aquí le vino una gran ayuda para ganar las elecciones presidenciales convirtiéndose así en parte del proyecto norteamericano. No tuvo otro sitio a donde ir para alcanzar el poder, necesitaba quien lo defendiera frente a los embates del FMLN, quien le pudiera controlar de algún modo a la Fuerza Armada para evitar golpes de estado y para lograr cierta mejora en los

derechos humanos, necesitaba quien lo ayudara económicamente para evitar un colapso económico, sólo los Estados Unidos le pudieron ofrecer todo esto. En contrapartida, le exigieron que no se apartara en lo fundamental de sus intereses ni de sus estrategias en la región (57).

d) La embajada norteamericana en El Salvador se convirtió en activo promotor de legitimación del gobierno salvadoreño, tanto por necesidades de su propia política interna (porque Reagan necesitaba obtener el apoyo a sus planes por parte del Congreso norteamericano como para legitimar su política exterior, porque le era difícil argumentar que se defendía la democracia cuando los aliados que se tienen son dictadores militares) como por la evidente necesidad de complementar los planes de contrainsurgencia con medidas políticas y sociales destinadas a cohesionar un apoyo social mínimo a sus aliados internos desbordados por la movilización que representaban el FDR-FMLN (58).

e) A mediados de Agosto de 1988, la política estadounidense de aislar a los rebeldes mediante la presión militar al tiempo de llevar a cabo reformas políticas y económicas para extirpar las raíces del conflicto, había fracasado. Esto fortaleció la postura de aquellas fracciones moderadas salvadoreñas que abogaron por que cada parte abandonara sus esperanzas de conseguir la victoria y aceptara negociar un tratado de paz. La política norteamericana en este sentido, fue poco estable y más en esos momentos en que ambos países estaban por renovar su poder ejecutivo. La embajada de los Estados Unidos en El Salvador inicialmente tenía programado

participar en una conferencia próxima donde participarían el gobierno y la guerrilla, pero luego de recibir órdenes de Washington, de no aparecer junto a los dirigentes políticos rebeldes hasta que éstos no rompieran con su ala militar, para no darles legitimidad, se negaron a asistir (59) Esta decisión, evidentemente contravino el deseo de incorporar a los rebeldes a un proceso político.

f) Las elecciones municipales han sido parte integrante de la guerra contrainsurgente. Desde las alcaldías, el enemigo implementó proyectos civiles bajo la conducción de los jefes militares, con los cuales buscaron recuperar la autoridad y el poder local, intimidar la organización popular para impedir la autogestión en las comunidades campesinas de las zonas conflictivas y evitar la expansión y crecimiento del FMLN. Buscan crear redes de informadores y de defensa civil en las municipalidades, convirtiendo al poder civil, personificado en alcaldes y jueces, en apéndice de los planes de la guerra contrainsurgente. Por eso el FMLN ha mantenido una línea permanente de desarticulación y desestabilización de poder local.

Las elecciones del 20 de Marzo de 1988 se llevaron a cabo en 28 municipios, mientras que en decenas de otros, las urnas correspondientes fueron instaladas en las cabeceras departamentales. Así se votaron los alcaldes cuyos municipios estaban a kilómetros de distancia y cuya autoridad sólo funcionó nominalmente. El FMLN no reconoció la "legitimidad" del gobierno ni de las elecciones (60).

4.- Se establece que el objetivo es político, por lo que la respuesta no puede ser exclusivamente militar, sino que tiene que integrarse una serie de elementos y reformas tolerables a nivel político, económico y militar, así como el uso de factores no militares en la guerra. La GBI debe descansar en los gobiernos o grupos que puedan influenciar un cambio en el largo plazo, en el cual las opciones políticas económicas y psicológicas, provean el camino para el triunfo final. El triunfo final hace la diferencia entre operaciones militares de baja intensidad y los niveles de mediana y alta intensidad, porque el triunfo tiene que ser medido en términos de ganar campañas y batallas.

Por ejemplo:

a) El gobierno de los Estados Unidos planteó que la continuación de la reforma agraria, iniciada en los ochenta, era una condición para el apoyo militar y económico a El Salvador. En Abril de 1983, Jeane Kirkpatrick planteó durante su visita a El Salvador "sin reforma agraria, aunque sólo fuera en apariencia, no había dinero; sin dinero, no había guerra; y sin guerra no se podría eliminar a la guerrilla, y lo que es peor aún, la guerrilla acabaría con el ejército salvadoreño" (61). La Administración Reagan deseaba aumentar el apoyo militar y las reformas tenían que justificar aquel apoyo, aunque ARENA, triunfante en las elecciones de Marzo de 1982, se opusiera.

b) En relación a la dimensión de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, éstas han pasado de una dotación cercana a los 15,000

efectivos a un contingente de cerca de 50 o 55,000 hasta Agosto de 1987 (62), este crecimiento se ha acompañado de un incremento en los recursos técnicos que dispone. Este volumen desborda con creces la capacidad de sostén que pueda ofrecerles la economía del país, tal déficit ha sido cubierto mediante la abundante cooperación norteamericana.

c) Los institutos armados salvadoreños se han modernizado, han debido adaptar su estructura, su armamento, la instrucción de sus tropas y la formación de su oficialidad a las necesidades de una guerra irregular y prolongada. Han surgido nuevas ramas de especialización y otras se han ampliado: tropas aerotrasportadas, batallones especiales, incremento de armas de apoyo y desarrollos de los aparatos de inteligencia, todas notoriamente diferentes a las que tradicionalmente exhibió el estado salvadoreño. Lo anterior se fundamenta en un cambio en las prioridades de la defensa nacional que realiza el alto mando. La evaluación estratégica que este efectuó durante el inicio de la década de los ochenta, puso el acento en la hipótesis de guerra interna relegando a un segundo plano la hipótesis de guerra basada en la defensa territorial.

La ausencia de los mecanismos de negociación política han colocado a los institutos armados ante la tarea de enfrentar una guerra civil para la cual no estaban preparados y de no contar con la ayuda y asesoría norteamericana ya habrían sufrido reveses de grandes proporciones. Las Fuerzas Armadas han experimentado un proceso de ideologización conservadora, inclusive en desmedro de las manifestaciones nacionalistas que emergieron en su seno a

inicios de la crisis, de los oficiales jóvenes. Al transformar al enemigo en el objetivo principal a derrotar han reorganizado su doctrina de defensa nacional. Al poner el acento en el enemigo interno y en las tareas de contrainsurgencia, cambian las presunciones de la defensa nacional. Si el enemigo es la guerrilla, entonces los enemigos de ayer (el ejército hondureño) pueden ser los aliados de hoy. El buen entendimiento de ambos ejércitos permitirían amagar por la retaguardia los bastiones insurgentes de todos los puntos.

5.- Siendo el objetivo de carácter político, el blanco son las masas de la población, para ganarse a ésta, es necesario su control por medio de operaciones psicológicas (propaganda, manipulación de la opinión pública), acciones cívicas que mejoren la imagen represiva a través de atención médica, construcción de obras de infraestructura, reparto de víveres, etc., con el supuesto de incorporar a ésta población a las tareas de defensa.

En la nomenclatura militar, el concepto de operaciones psicológicas se emplea, generalmente, para dar cuenta de objetivos y herramientas que buscan influir en la conducta de la población civil, del enemigo o de las fuerzas propias. Usualmente se basa en el aprovechamiento de vulnerabilidades (miedos, necesidades, frustraciones). Existen otros sectores que también se dirigen a incidir en los comportamientos sociales, como la acción cívica y el control de poblaciones (desplazados, refugiados, formación de aldeas estratégicas, autodefensa civil). La finalidad común es el

logro del consentimiento activo en la población civil (63). Por ejemplo:

a) Dentro del plan CONARA, el 12 de Junio de 1983, el ejército inició la operación masiva, "Bienestar para San Vicente". Primero pretendió "limpiar" el volcán Chinchontepeque de la guerrilla, para después iniciar un programa de pacificación. El operativo militar se inició con fuertes bombardeos, y sólo después, los 6,000 soldados participantes avanzaron hacia la cima del volcán (64). El 20 de Junio empezó otra operación en Usulután, realizada por los batallones Atlacat y Atonal. Ambas operaciones fracasaron y los resultados preocuparon al Pentágono: 795 soldados muertos, 194 prisioneros y 268 armas requisadas por la guerrilla (65). Tales cifras impidieron considerar el éxito de los planes pero para compensar las bajas, 3,000 nuevos reclutas fueron incorporados al ejército.

b) En 1984 se abrió en El Salvador el Centro de Entrenamiento Nacional de Defensa Civil, en el departamento de San Vicente, y poco después trasladado a San Juan Opico, departamento de La Libertad. Aquí actúan instructores estadounidenses que dan cursos de seis semanas a soldados especialmente seleccionados. También proporcionan estudios de quince días a los comandantes locales de las patrullas (66).

6.- La GBI considera la necesidad de apoyar a gobiernos o grupos que estén combatiendo el comunismo en sus países. La asistencia gubernamental de los Estados Unidos incluye asistencia de seguridad

y asistencia económica. El gobierno estadounidense define la asistencia de seguridad como asistencia militar y fondos de ayuda económica. La asistencia militar consiste en préstamos o donativos de gobierno a gobierno a través del Programa de Asistencia Militar y Programa Internacional de Educación Militar y Entrenamiento, para la compra de armas, equipo militar y entrenamiento. Los fondos de ayuda económica son fondos depositados en el Tesoro Nacional de manera que ayuden al pago de déficits de aquellos gobiernos en que los Estados Unidos estén especialmente interesados por razones políticas o de seguridad. La asistencia económica incluye los programas "Ayuda para el Desarrollo" y "Alimento para la Paz" (67). La ayuda humanitaria se ubica en programas médicos y distribución de alimentos, dirigidos para la población civil, y en especial para refugiados o desplazados. (En realidad la diferencia entre ayuda humanitaria y militar es superflua, porque contribuye a la edificación de un consentimiento activo que aporta el logro de los objetivos político ideológicos).

Por ejemplo:

a) En 1981, la Junta que encabezó Duarte había recibido apoyos financieros por un volumen cercano a los 900 millones de dólares. Via financiamiento se hicieron llegar unos 660 millones; como ayuda militar directa fueron poco más de 100, y otros países como Reino Unido y Venezuela colaboraron con aproximadamente 140 millones (68). Se subraya que tales recursos han sido administrados por una burocracia militar y civil netamente corrompida.

b) En Enero de 1983, Reagan certificó una vez más ante el

Congreso de los Estados Unidos que era necesario seguir dando ayuda militar oficial al régimen salvadoreño, argumentó que había hecho considerables avances en materia de derechos humanos. Indudablemente no era cierto, "hipocresía y confusión son las resultantes de la ley que obliga al jefe del ejecutivo a decir cada seis meses algo que muy pocos creen: que en El Salvador se han logrado progresos en cuanto al respeto de los derechos humanos y las reformas políticas" (69).

c) En Febrero de 1984, los norteamericanos dieron su primer apoyo táctico: pilotos norteamericanos partieron desde Honduras con aviones OVI MOHAWKS especiales, para ejecutar vuelos de reconocimiento sobre El Salvador. Estos aviones poseen sensores infrarojos especiales para detectar los desplazamientos de la guerrilla o grandes concentraciones de población.

d) Al comprender los Estados Unidos que la guerra no era sólo una cuestión militar, pusieron grandes esperanzas en el Informe de la Comisión Kissinger. Kissinger y sus colegas dieron por hecho que la seguridad de los Estados Unidos estaba amenazada por Cuba y la Unión Soviética, y las recomendaciones se concentraron en torno al aumento de los programas de ayuda militar y económica. El Informe pidió un apoyo de 8,000 millones de dólares para la región, en el marco de un plan quinquenal (1984-1989) de los cuales, 3,000 millones serían destinados a El Salvador. El dinero se utilizaría para apoyar las empresas privadas y para desarrollar un capitalismo moderno (70).

e) El 30 de Junio de 1988, el Secretario de Estado

norteamericano, George Shultz, firmó en la Casa Presidencial en El Salvador un convenio de donación de 125 millones de dólares canalizados por la AID. Los Estados Unidos no permitirían que triunfaran los esfuerzos de subvertir la democracia, «el pueblo salvadoreño ha escogido su forma de gobierno y el sistema de vida más propicio para alcanzar la justicia social y la libertad, no dejaremos que "irrespeten" sus determinaciones» (71).

f) A mediados de 1988, el deterioro de la situación política nicaraguense hizo dudar sobre la posibilidad de lograr una paz negociada en Centroamérica. Empero, la tenacidad de los combatientes por ambas partes en El Salvador, demostraron que esta es la única vía posible.

A fin de conseguir un apoyo a las negociaciones como el que consiguió el proceso nicaraguense (una tregua con duración de seis meses que disminuyó la matanza en Nicaragua), los senadores Mark Hatfield y Tom Harkin llevaron la cuestión ante el Comité Senatorial encargado de preparar los proyectos de ley para conseguir ayuda económica. Los senadores propusieron congelar el envío de ayuda militar a El Salvador hasta que el gobierno informara respecto a su progreso en el país para lograr una paz negociada. Además, propusieron redirigir una tercera parte de la ayuda económica (que indirectamente contribuye a acrecentar el ejército salvadoreño) hacia proyectos hidrológicos y de salud en beneficio directo del pueblo salvadoreño. La respuesta del gobierno norteamericano fue muy instructiva, se negó a debatir siquiera el fracaso de su política para lograr la paz en el país y consideró

la propuesta como un ataque personal contra Duarte, quien solicitó expresamente que fuera descartada la medida. No obstante, los patrocinadores de la propuesta lograron redirigir una cuarta parte de la ayuda económica al país hacia las necesidades básicas del pueblo salvadoreño. Por primera vez en cuatro años el Congreso consiguió arrebatarse al gobierno parte del control del financiamiento a El Salvador (72).

7.- La implementación de la GBI en el aspecto contrainsurgente, recae fundamentalmente en las Fuerzas Armadas de los países aliados, mientras el papel del gobierno norteamericano se circunscribe en la ayuda económica y militar, a la asesoría y entrenamiento.

Por ejemplo:

a) La asistencia de los Estados Unidos prácticamente alimenta, viste y equipa a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Las armas y equipo norteamericano aumentan en alto grado el poder bélico, la movilidad de las tropas y las comunicaciones de las unidades de combate. A finales de 1980, se firmó un contrato por 250,000 dólares para un equipo técnico norteamericano de campo para implementar un mantenimiento/apoyo efectivo y de apoyo para la logística, señales y motores. A principios de 1982 se propuso que la asistencia norteamericana estableciera una escuela de inteligencia y sistemas, la cual mejoraría la capacidad de las fuerzas terrestres, mejoraría el comando y control a través de instalaciones de radios y teletipo de alcance nacional y proveería

de aviones, repuestos y fondos para cubrir su asesoría logística y costos administrativos (73).

b) De acuerdo al Pentágono, cerca del 90% de la solicitud para el año fiscal 1983 de la Junta salvadoreña, fue para material de combustible y de apoyo, munición, botas y otros equipos personales, transporte en vehículos y equipo de comunicaciones. En su propuesta de asistencia militar adicional para el año fiscal 1983-1984, la Administración Reagan enfatizó la necesidad de proveer más entrenamiento militar a las fuerzas armadas salvadoreñas (74).

c) Estados Unidos ha admitido que sus asesores militares en El Salvador participaron en enfrentamientos con la insurgencia, pero Reagan justificó que todos los asesores de su país en América Latina siguieron órdenes de la Casa Blanca de responder si son atacados. "Los asesores dispararon en defensa propia con sus rifles M-16" (75). (Hasta Septiembre de 1988 los Estados Unidos tenían 119 asesores en El Salvador, de los cuales sólo 49 eran militares).

d) La Administración Reagan nunca excluyó la posibilidad de intervención directa de tropas norteamericanas tomando las medidas necesarias: Honduras desempeñó un papel crucial y fue considerada como la base para combatir tanto al régimen sandinista de Nicaragua, como a la guerrilla salvadoreña. En Honduras entró en funcionamiento un nuevo centro de entrenamiento en Puerto Castilla, donde unos 2,500 soldados salvadoreños serían entrenados por 120 Boinas Verdes (76).

e) La deuda contraída por el gobierno salvadoreño en gastos militares en ocho años de guerra, se eleva a 108 millones de

dólares, ya que lo demás es donado, cuya cifra es del orden de más de 3 mil millones (77).

8.- En el terreno militar la GBI es irregular, es una guerra no convencional que descompone a las Fuerzas Armadas aliadas, y crea unidades élites con un entrenamiento especializado, de gran movilidad.

Por ejemplo:

a) Los batallones entrenados por asesores norteamericanos han sido cinco y actualmente se encuentran en funciones: el Atlacatl, ubicado en la Escuela Normal Alberto Masferrer, carretera San Salvador-Santa Ana; Ramón Belloso, ubicado en San Bartolo, San Salvador; Atonal, Ubicado en la Cooperativa Algodonera en el Departamento de Usulután; Bracamonte, Ubicado en el Aeropuerto Internacional El Salvador, en Comalapa, Departamento de La Paz; y en menor medida el Manuel José Arce, ubicado en la Tercera Brigada de Infantería en el Departamento de San Miguel (78).

b) Los batallones élite bombardean aldeas del país para obligar a sus habitantes a abandonarlas. Tal es el caso de habitantes de la localidad de Cerro Blanco, en las cercanías de Dulce Nombre de María, quienes han expresado que el ejército usa para asustarlos aviones bombardeos A-37 de fabricación norteamericana. "El batallón Bracamonte los ha conminado para que abandonen la zona, de lo contrario van a ser arrasados" (79).

9.- Como guerra irregular, debe enfrentarse con fuerzas bien

entrenadas y hábiles de la guerra irregular: las Fuerzas de Operaciones Especiales, FOE. Las FOE, institucionalizadas durante la Administración Kennedy y congeladas después de la guerra de Vietnam, ahora se reactivan desde 1982 y han aumentado sus efectivos. En esencia son entrenadas para operar como guerrillas y para realizar actividades clandestinas. Aprenden a pelear en cualquier clima o terreno y a conducir operaciones aéreas y submarinas. Su especialización incluye demolición submarina, sabotaje, sobrevivencia en el desierto, paracaidismo, buceo, combate mano a mano, entrenamiento como francotiradores, camuflaje, escape y evasión, interrogación y operaciones psicológicas. Sus elementos son básicamente los Boinas Verdes, que empezaron a llegar a Centroamérica a partir de Julio de 1983 (80). El fin es perfeccionar a éste tipo de fuerzas en los Estados Unidos, aumentar su número, solucionar problemas de comando y control, y crear fuerzas similares en países afectados real y potencialmente por desórdenes sociales.

10.- La invasión directa no se descarta cuando las Fuerzas Armadas aliadas sean derrotadas o sean incapaces de mantener el control en una situación difícil.

Por ejemplo:

a) Los Estados Unidos tienen 440,000 soldados y 660 aviones listos para enfrentar cualquier agresión externa, "Estados Unidos no puede permitirse el lujo de perder otro país" (81).

Por lo anterior puede afirmarse que el principal objetivo de la intervención estadounidense es debilitar o aniquilar cualquier movimiento popular que tienda a la transformación radical de la estructura social y a la instauración de la soberanía nacional. La respuesta de la Casa Blanca al movimiento popular ha sido la difamación, la desinformación y la represión indiscriminada. Se ha hecho necesario redefinir la totalidad del proyecto contrainsurgente bajo éste esquema de Guerra de Baja Intensidad.

Finalmente, la intervención estadounidense se incrementó cualitativa y cuantitativamente durante la Administración Reagan y trajeron efectos negativos en todo sentido:

En lo económico; 1) por que el creciente apoyo financiero de carácter desarrollista para proyectos financieros provocaron el distanciamiento de la oligarquía y el Estado, 2) la economía salvadoreña ha pasado a ser una economía para el mantenimiento de la guerra, como lo demuestra la utilización de altos porcentajes del presupuesto nacional para financiarla. (Durante 1988 se designó un 40% del presupuesto nacional para los rubros de defensa y seguridad pública en detrimento de los rubros de servicio social y cultural para la población).

En lo político; 1) el proyecto contrainsurgente requirió de credibilidad nacional e internacional, debido a ello se dió un incondicional apoyo al proyecto demócrata cristiano, 2) requirió

la legitimación del nuevo proyecto a través de un cambio en el discurso político de la promoción de elecciones, de cambios superficiales a nivel económico, de una búsqueda de base social con el fin de ahogar el auténtico movimiento popular y con el aparente interés de mejorar la situación de los derechos humanos.

En lo militar; 1) el abastecimiento económico y la infraestructura a las Fuerzas Armadas, que como ya anotamos, ha correspondido a dinero, armamento, unidades de transporte terrestre y aéreo, 2) el crecimiento y reestructuración de la totalidad del ejército con el fin de modernizarlo y prepararlo para la guerra contrainsurgente, sin olvidar que el fin último es acabar con el FMLN, no importando si es a costa de vidas inocentes, 3) la presencia de asesores militares estadounidenses con el fin de garantizar la claridad y eficacia de las Fuerzas Armadas, y, 4) la búsqueda de una nueva imagen para el ejército a partir de programas civico-militares fundamentalmente desarrollados en la zona rural.

En lo social; 1) se han deteriorado las condiciones de vida de la población salvadoreña, a pesar de los insignificantes e infructuosos programas de desarrollo en las áreas de vivienda, salud y educación, y, 2) los miles de salvadoreños desplazados y refugiados, debido a los enfrentamientos armados y bombardeos indiscriminados. (Los repatriados han sido reclutados por la fuerza por la Guardia Civil, han pedido al gobierno que no militarice las rutas de retorno y que se les garantice libertad de movimiento).

4.2 Bush-Cristiani y la ayuda norteamericana.

Con el ascenso de Bush a la presidencia de los Estados Unidos, no se dieron cambios significativos en la política hacia El Salvador. Seguiría el empeño por continuar la guerra, por ello, se afirma que el cese de la intervención estadounidense está ligada a la construcción de la paz en El Salvador.

"Estados Unidos apoyará vehementemente a los contras nicaragüenses y no permitirá la existencia de un gobierno con ideas marxistas en Latinoamérica y mucho menos aceptará que un régimen comunista lleve su revolución más allá de sus fronteras", decía el exdirector de la Central Intelligence Agency, CIA, vicepresidente del gobierno de Ronald Reagan y desde agosto de 1988, candidato presidencial del Partido Republicano, George Bush, quien de ninguna manera estaba satisfecho "con las amenazas del marxismo en Latinoamérica" (82).

La preocupación central de George Bush en su política exterior hacia sus vecinos del subcontinente se centra en América Central "porque el comunismo implantado por los sandinistas es una amenaza para la seguridad nacional del gran imperio" (83). Desde entonces no se avisó ningún cambio substancial en la política norteamericana hacia El Salvador, incluso el embajador William Walker había afirmado que la ayuda norteamericana continuaría independientemente de los cambios de administración. La afirmación se basa en la firma de un acuerdo de ayuda alimenticia del Ministerio de Planificación de los Estados Unidos y el embajador Walker, en Noviembre de 1988, otorgándose al gobierno salvadoreño

30 millones de dólares para una compra de alimentos. Esta suma formó parte de una partida de 145 millones de dólares para los mismos fines, que se destinó para el año fiscal 1988-1989. El gobierno norteamericano además entregaría 85 millones de dólares en apoyo militar y 305 en asistencia económica, entre Octubre de 1988 y Septiembre de 1989. Aunque el monto total que ascendió a 535 millones de dólares fue aprobado por el Congreso norteamericano, una comisión de este órgano legislativo se opuso a la asistencia debido a la corrupción del gobierno y a la utilización del dinero para campañas contrainsurgentes (84).

El día de la toma de posesión de George Bush, el 20 de Enero de 1989, un centenar de personalidades norteamericanas publicaron desplegados en periódicos salvadoreños expresando que con la nueva administración "los pueblos centroamericanos enfretan la posibilidad de que la locura de la Administración Reagan no sólo va a continuar, sino que tal vez escalará hasta el punto de comprometer tropas norteamericanas en la región" (85), se criticó a la embajada estadounidense por bloquear la entrega a la Universidad de El Salvador, UES, dos millones de dólares aprobados por el Congreso norteamericano (86). Otros sectores estadounidenses instaron a los dirigentes salvadoreños a no convertir a su país en otro Líbano porque que eso podría convertirse en la primera crisis latinoamericana que enfrentaría Bush (87). Pese a los 3,000 millones de dólares en asistencia militar y económica de los Estados Unidos, "El Salvador continúa siendo una pesadilla sin fin. El abismo que se está abriendo parece ser tan profundo que parece

que ninguna política concebida en Washington o plan de paz estructurado por sus vecinos podrán detener la caída" (88).

Cuando fue elegido Alfredo Cristiani presidente de El Salvador, las autoridades estadounidenses expresaron su beneplácito: "los comicios han dado muestra de un fuerte deseo de elecciones y de la posibilidad de participar en el proceso democrático, los Estados Unidos continuarán ejerciendo presión en favor de la democracia y el mejoramiento de los derechos humanos, y esperará las medidas que tomará el nuevo gobierno en este campo" (89), y agregó que "es una ultrasimplificación decir que la democracia cristiana representaba el centro y ARENA la derecha en el abanico político salvadoreño. Uno de los fenómenos entre éstas elecciones es que ambos partidos modificaron sus posiciones desde 1984 moviéndose en tal sentido, uno desde la izquierda y el otro desde la derecha, ARENA no es más un partido de derecha sino un partido de base amplia" (90).

La Casa Blanca no ignora que Alfredo Cristiani es un presidente que reina pero no gobierna, por que el partido ARENA está dominado por Sigfrido Ochoa y por Roberto D'Aubuisson, los militares retirados conocidos por su violencia y contactos directos con los escuadrones de la muerte, pero se pudo justificar dando una "oportunidad a este gobierno, ya que fue una lección justa y libre. Hubo más de 50% de concurrencia a las urnas, o sea, mejor de lo que sucede en Estados Unidos, y antes de criticar debemos reflexionar sobre este hecho" (91).

Los primeros logros de Bush, mientras continúa la guerra

salvadoreña, fue conseguir del Congreso un acuerdo histórico que no consiguió Reagan: el acuerdo para una política bipartidista. El Congreso aceptó conceder ayuda a la contra nicaragüense y un aumento a la ayuda para el gobierno salvadoreño. Los textos de Bush y de Baker fueron claros: "ayuda de carácter humano", pero acuerdo profundo de senadores y funcionarios de la Casa Blanca para entender que cualquier solución centroamericana pasa por la democratización. Es paradójico que mientras se eleva el número de muertos en El Salvador, los senadores estadounidenses destaquen el progreso de la democratización de este país. Los senadores demócratas Bob Graham y Chuck Rodd, así como los republicanos John McCain y Connie Mack, declararon que "nuestra delegación bipartidista está muy complacida con el progreso de la democratización" (92).

Pero no todos estuvieron de acuerdo en los Estados Unidos con el nuevo presidente salvadoreño y se desató una ola de protestas, no por parte de la Administración, sino de los civiles quienes condenaron la ayuda de más de mil millones de dólares diarios que otorga su gobierno al gobierno salvadoreño, censuraron al nuevo gabinete compuesto por diversos personajes ligados a los escuadrones de la muerte. Chicago, Nueva York, Los Angeles fueron lugares donde se llevaron a cabo marchas, inclusive la prensa estadounidense publicó desplegados firmados por personalidades de cine, música y la empresa privada, exigiendo la suspensión de la ayuda militar a El Salvador y publicaron una larga lista de nombres de salvadoreños asesinados en los últimos años por los escuadrones

de la muerte, el ejército y las diversas policías del país centroamericano, "Imagínense seis millones de norteamericanos asesinados, imagínense 50 millones de norteamericanos refugiados", fueron los títulos de los desplegados dirigidos al Congreso estadounidense, contra la guerra sostenida por Estados Unidos mediante esos miles de millones de dólares diarios (93). Ante las vastas denuncias de la violación a los derechos humanos, de las comisiones gubernamentales y no gubernamentales, los Estados Unidos ampliaron sus contactos con líderes de la derecha salvadoreña, incluido D'Aubuisson. Esto significó un cambio en la política exterior estadounidense que puso en peligro el apoyo incondicional del Congreso hacia este país. El Secretario de Estado, James Baker, recibió una fuerte crítica en la Cámara de Representantes por "ignorar" la flagrante violación a los derechos humanos en El Salvador tras el atentado contra un grupo de monjas (21 de Junio 1989) donde resultó gravemente herida una de ellas de nacionalidad estadounidense. En una audiencia ante el Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Baker fue reprendido por el representante demócrata Ted Weiss, quien no sólo le reclamó por el caso de la monja sino que también le planteó el caso de un dirigente sindical salvadoreño, secuestrado y torturado por la Policía de Hacienda, justo cuando se encontraba de visita en El Salvador el vicepresidente Dan Quayle: "Y yo me pregunto si usted tendrá tiempo de prestar atención a esto. Lo que los militares salvadoreños están haciendo ahora es literalmente dejar al gobierno de los Estados Unidos con un palmo de narices" (94).

Posteriormente se envió una comisión del FBI para investigar los casos de tortura y secuestro, pero la ola de violencia contra civiles no hizo eco en los Estados Unidos, más bien se anunció que una brusca reducción de la ayuda militar al régimen salvadoreño serviría, a los elementos extremistas de derecha e izquierda, para incrementar aún más la violencia. El subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina, Bernard Aronson, defendió la ayuda económica y militar a El Salvador ante las fuertes críticas de los legisladores demócratas quienes expresaron la intención de retener por seis meses la mitad de 85 millones de dólares en asistencia militar estadounidense a El Salvador y condicionar su desembolso a una certificación de que Cristiani avanzara hacia una solución pacífica (95), pero la Cámara de Representantes aprobó por amplia mayoría, 85 millones de dólares en ayuda militar para el nuevo gobierno salvadoreño, dentro del proyecto del presupuesto para el año fiscal de 1990, (el mismo día que la UCA fue blanco de potentes bombas que destruyeron sus talleres gráficos, el 22 de Julio de 1989). El proyecto estadounidense de ayuda exterior, aprobado por 329 votos contra 60, determinó una asistencia militar y económica por 14,100 millones de dólares destinadas a las naciones aliadas y a otros países de interés para Washington (96). (El Salvador figura entre los principales países favorecidos, después de Israel y Egipto).

El 30 de Agosto de 1989, los gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador firmaron un convenio de donación por 75 millones de dólares, mediante el cual se pretendió impulsar un proyecto de

mejoramiento de los servicios públicos salvadoreños. El documento fue suscrito por el embajador norteamericano en El Salvador, William Walker y el Director de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, Henry Bassford, en representación del gobierno de Washington y los ministros de Planificación y Obras Públicas, por parte del gobierno salvadoreño. Los fondos servirían para la restauración de los servicios públicos dañados por el FMLN, la restauración de 1,600 kilómetros de carreteras, la instalación de sistemas de agua potable y la aplicación de programas de educación y salud a nivel nacional (97).

Como continuación de la Guerra de Baja Intensidad, el 20 de Septiembre de 1989, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea salvadoreña bombardearon el sector sureste del volcán de Guazapa, irónicamente el Senado estadounidense rechazó una enmienda mediante la cual se condicionaba la ayuda al progreso de las pláticas entre la guerrilla y el gobierno y al respeto de los derechos humanos, y por si fuera poco, aprobó por 82 a 18 votos un incremento de la asistencia militar a El Salvador, de 65 a 90 millones de dólares para el año de 1990, y la abolición de las restricciones económicas monetarias para ese régimen, se argumentó que así se le daba "una oportunidad" al gobierno de Cristiani (98).

Todo el espectro político y militar de la insurgencia, criticó en fuertes términos la reanudación de la ayuda militar y acusaron a Washington de fomentar la guerra en su país y de lesionar el proceso de paz, en cambio Cristiani se manifestó muy satisfecho por la decisión que a su juicio "constituye una muestra de confianza

a mi gobierno mientras la guerrilla no deponga las armas" (99). Oficialmente, el 10 de Noviembre se fijó la suma, no de 90 sino de 85 millones de dólares, el monto, incluyendo todos los rubros, equivale a unos cuatro y medio millones de dólares diarios. La ayuda para el gobierno de Cristiani fue incluida en la Ley de Ayuda Exterior para 1998, que totaliza 14,400 millones de dólares y fue aprobada por un comité de conciliación del Senado y la Cámara de Representantes. También se incluyen 12 millones de dólares para financiar entrenamiento técnico y legal a la policía, pero esta partida fue acompañada por el requerimiento de que el presidente George Bush informara al Congreso sobre los esfuerzos de gobierno de Cristiani para establecer responsabilidades del atentado contra FENASTRAS (100).

No es comprensible que habiendo inestabilidad interna en El Salvador, en donde el terror y la muerte han sentado sus bases reales poniendo en peligro un todavía incierto diálogo de paz, el gobierno de los Estados Unidos contruibuya a fomentar en aumento de belicosidad en este país, la aprobación del Congreso vino a derramar la gota del vaso que desató la ofensiva de Noviembre de 1989. Bush ha declarado: "Estamos tratando de cooperar y defender el avance de la democracia y el desarrollo ...nosotros queremos trabajar juntos para combatir el narcotráfico y vamos a movernos en esa dirección. Pero obviamente, y antes que nada, nosotros estamos comprometidos en construir una paz duradera en la región" (101).

La ofensiva de Noviembre, con la matanza de los jesuitas de

la UCA, vino a cambiar las decisiones del Congreso norteamericano en el sentido de recortar la ayuda militar a ese país si es que no cesaban los combates con la guerrilla y se investigaba el asesinato de los seis sacerdotes. La magnitud de la ofensiva fue tal, que incluso un general estadounidense, Fred Woerner, ex jefe del Comando Sur, afirmó tener profesionalmente en alta estima a la guerrilla salvadoreña y ésta no podría ser vencida militarmente. Pete Williams, portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, anunció el envío a El Salvador de nuevo armamento, que incluyó armas ligeras y equipo antimotines, para que fuera utilizado por las tropas regulares: "Algunas armas son nuevas, otras habían sido pedidas hace tiempo y simplemente estamos acelerando las entregas"(102).

Mientras tanto, se desarrollaba una agitada audiencia en el Senado, el diputado demócrata, David Obey, presidente del Subcomité de Asignaciones de la Cámara Baja con poderes sobre la concesión de ayuda exterior, asentó firmemente que la masacre de los jesuitas representaba otro caso de las actividades de los escuadrones de la muerte de la extrema derecha, y advirtió que si el gobierno salvadoreño no llevaba ante la justicia a los responsables, el único remedio sería el recorte de la ayuda para 1990, por lo que de inmediato el Departamento de Estado instó a Cristiani a cumplir su promesa de investigar el asesinato, aunque por su parte, los Estados Unidos ya habían enviado una unidad especial equipada para la investigación (103), mientras que Bernard Aronson defendía, ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Senado, la ayuda a El

Salvador, porque "lleva implícita la demanda de mejoras en el respeto a los derechos humanos, pero si ese requisito no se cumple, la ayuda no continuará" (104). El senador Alan Cranston pidió de plano la suspensión inmediata de la ayuda económica y militar, en tanto que para Christopher Dodd era evidente que quien había ordenado la muerte de los jesuitas eran los escuadrones de la muerte, los cuerpos de seguridad y el gobernante partido de ARENA.

Ante tal circunstancia, las dos Cámaras bloquearon los intentos de limitar la ayuda militar a El Salvador. en una votación producida luego que Bush advirtió al Congreso que suspender la ayuda era inaceptable y reiteró su confianza a su homólogo salvadoreño. Bush también rechazó enérgicamente las acusaciones de que los Estados Unidos tenían responsabilidad sobre los asesinatos. El Senado votó por 59 a 39 contra una enmienda a la ley de asistencia, mediante la cual se habría retenido el 70% de la ayuda, hasta que los asesinos fueran sometidos a juicio (105).

Por su parte, los senadores norteamericanos Bon Graham y Dennis Deconcini, manifestaron su total respaldo a las gestiones del gobierno de Alfredo Cristiani durante una breve visita a San Salvador y en la cual se entrevistaron con el jefe de Estado. Ambos consideraron como remota la posibilidad de que su gobierno suspendiera la ayuda a El Salvador, pues confiaban en el esclarecimiento del asesinato.

El 19 de Diciembre de 1989, el senador Eduard Kennedy pidió a la oficina del procurador general determinar si la ayuda militar al gobierno de Cristiani había sido usada eficientemente,

precisando que la solicitud de revisión se hizo al surgir dudas de la eficiencia con que las autoridades salvadoreñas han utilizado el apoyo militar luego de la ofensiva lanzada por el FMLN.

En Enero de 1990, Cristiani reconoció que existieron militares en el asesinato, y con esto se entendió que sí había cumplido sus promesas, anotándose un punto a su favor para los ojos del Departamento de Estado: "Cristiani ha dado muestras de valor y merece mucho crédito" (106). Cuando se habló del involucramiento de militares en el caso de los jesuitas, los funcionarios gubernamentales estadounidenses presionaron a El Salvador para que investigara el crimen en un intento por obstaculizar los esfuerzos de los demócratas en el Congreso, para cesar la ayuda norteamericana al ejército salvadoreño.

Joe Moakley, presidente del Comité de Procedimientos de la Cámara de Diputados, y un crítico de la ayuda estadounidense a El Salvador, opinó que Cristiani estaba cooperando plenamente con los esfuerzos congresionales para supervisar la investigación. Si bien hasta el momento se habían manifestado complacidos con la investigación, los miembros del Congreso consideraron que necesitaban revisar la misma en una forma más minuciosa antes de decidir si restringirían la ayuda. Pero otros funcionarios expresaron que el vigor de la investigación oficial salvadoreña demostraba que no había razón para que los Estados Unidos redujeran o restringieran la ayuda a El Salvador, aunque lo ideal sería que el futuro de la ayuda no involucrara a la investigación de la masacre.

De cualquier manera, cabe aclarar que Cristiani ya había recibido a fines de 1989, 298 millones de dólares en ayuda económica, a raíz de la ofensiva del FMLN (107). (Durante estos nueve años de guerra en El Salvador, los Estados Unidos proporcionaron, oficialmente, 4 billones de dólares en ayuda militar, entre 1.8 y 2 millones de dólares han entregado a las Fuerzas Armadas y policíacas para sus actividades contrainsurgentes)

La fecha clave de decisión del Congreso sobre la ayuda a El Salvador, el 23 de Enero de 1990, hizo que los demócratas se esforzaran para evitar el apoyo. En este marco se inserta la iniciativa de John Kerry, titulada "Acta para la paz y la Democracia en El Salvador", la cual señala el no envío de más ayuda al gobierno salvadoreño a menos que los cuerpos de seguridad fueran depurados de todos los individuos involucrados directa o indirectamente en torturas y asesinatos indiscriminados. También condiciona la ayuda a que el presidente Cristiani demuestre que ejerce control completo sobre la Fuerza Armada y las fuerzas de seguridad y que tales fuerzas demuestren su completa subordinación al presidente como comandante en jefe. Pone igualmente como condición, el enjuiciamiento de los responsables del asesinato de los jesuitas de la UCA. El texto señaló que en lo general, la política de los Estados Unidos, en concertación con sus aliados en América Latina, debería lograr la terminación del conflicto de El Salvador mediante la suspensión de la asistencia militar enviada por otros países a cualquiera de las dos partes del conflicto y

mediante una solución política negociada a la brevedad.

La asistencia militar a El Salvador según la propuesta de Kerry (108), estaría condicionada a los siguientes elementos:

-La revocación en la Asamblea Legislativa de todas las medidas que limitaran los derechos a la libertad de expresión, prensa, derecho de organizar libremente sindicatos y grupos campesinos, derecho de asamblea y derecho de libertad de religión.

-El respeto a la libertad de religión y el cese de la expulsión arbitraria de los trabajadores de iglesias y de derechos humanos.

-Depuración de militares y cuerpos de seguridad relacionados con la tortura y el asesinato, en particular, los individuos que integran la lista que George Bush presentó al gobierno de El Salvador en 1983 (cuando este era vicepresidente).

-Que Cristiani demostrara que las Fuerzas Armadas estaban subordinadas a su mando.

-Separación de las funciones de la Policía Nacional del control de la Fuerza Armada y que se llevara a cabo su reestructuración como una policía civil bajo control de un ministro civil.

-Incorporación de una representación amplia de todas las fuerzas políticas y sociales, incluyendo el Comité Permanente del Debate Nacional, en las negociaciones para una solución política.

-Negociación de un cese de fuego.

-Juicio a los responsables del caso de los jesuitas.

-Garantías para un ambiente pacífico y seguro, para poder desarrollar plenamente un programa de reforma económica y proceso democrático. (El arresto del coronel Guillermo Benavides, acusado

formalmente por el crimen de los jesuitas, se interpretó como una reacción de Cristiani a la iniciativa de Kerry).

Esta iniciativa tiene un carácter extraordinario, establece una excepción en el trámite ordinario que sigue el proceso de aprobación en el Congreso de la ayuda exterior de los Estados Unidos y contó con la aprobación de 40 senadores. En contrapartida, el Departamento de Estado solicitó al Congreso un incremento de 61.8 millones de dólares a la ayuda económica y militar a El Salvador. El Secretario de Estado, James Baker, explicó al Congreso su propuesta de aumento de ayuda para el año fiscal de 1991, el cual desglosó en un incremento de 55 millones de dólares en asistencia económica, que significa pasar de 229 millones de dólares a 284, y en 6.8 millones en el rubro militar para llevar la cifra de 84.6 a 91.4 millones de dólares (109).

Lo anotado arriba, originó nuevamente los debates en el Senado, el senador Edward Kennedy formalizó la presentación de un proyecto de ley para suspender la ayuda militar sin afectar los suministros de alimento y otros fondos para el desarrollo del país, Christopher Dodd presentó su proyecto de ley ante el Congreso por el que condicionaba la ayuda militar al régimen salvadoreño, al respeto de los derechos humanos y a la búsqueda de una negociación con FMLN, al mismo tiempo que le otorgaba su respaldo porque propuso la suspensión de toda ayuda en caso de que Cristiani fuera removido inconstitucionalmente (110). A juicio de David Obey, los Estados Unidos han gastado en el régimen de El Salvador unos 3,800 millones de dólares en los últimos diez años, y que desde entonces

no había ninguna mejoría en los derechos humanos (111).

Mientras se realizó la reunión de Ginebra, entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla, en Abril de 1990, Bush se encontraba súbitamente con un nuevo problema ante el Congreso norteamericano, pues la mayoría demócrata deseaba reducir por lo menos en 50% la ayuda hasta que no fuera aclarado el asesinato de los jesuitas. El 26 de Abril de 1990, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso votó en favor de la reducción del 50% y por la imposición de nuevas y estrictas condiciones para proporcionar dinero, en el marco de un acuerdo previo llevado al pleno del Congreso.

La medida tomada por este comité, totalmente contraria a la posición de Bush, fue incorporada como enmienda al proyecto de ley que autorizaría al mandatario a entregar en ayuda de emergencia 420 millones de dólares a Panamá y 300 millones a Nicaragua. Pero nótese que se estableció llevar un acuerdo previo, por lo que Bush se enfrentaría a la disyuntiva de aprobar o vetar todo el paquete.

A pesar de que la enmienda pretendió con ello favorecer el diálogo entre gobierno y guerrilla, presentó también condiciones para forzar a ambas partes a que concretaran las referidas conversaciones de pacificación. En consecuencia, dejó abierta la posibilidad de restablecer la ayuda militar si la insurgencia continuaba recibiendo armas del exterior, saboteaba las pláticas de paz o lanzaba una nueva ofensiva. Y, respecto al régimen, dispuso retener la otra mitad de la ayuda si este evidenciaba mala fe en las negociaciones o si fallaba en llevar ante la justicia a los militares responsables de los crímenes.

En respuesta, el FMLN ofreció no recibir armas y aceptar una verificación internacional, siempre y cuando los Estados Unidos dejaran de entregar respaldo al régimen salvadoreño. "Es como una propuesta donde las dos partes tendrán que ceder algo. Es un plan sumamente ingenioso porque empuja al esclarecimiento del asesinato de los jesuitas y a negociar de buena fe entre las partes para alcanzar la paz, por lo que exhorta a los protagonistas aprovechar la oportunidad que se abre frente a los Estados Unidos y lograr también un concenso bipartidista con El Salvador, dejándole al Ejecutivo suficiente discreción" (112).

Tal y como se esperaba, Bush rechazó la iniciativa de los demócratas porque "la introducción de enmiendas no será útil ni facilitará las negociaciones de paz con El Salvador" (113), y el 23 de Mayo de 1990, la Cámara de Representantes rechazó el proyecto de ley que consideraba el recorte del 50% de la asistencia militar por 244 votos a favor y 171 en contra.

Los demócratas no desean ser vistos como obstaculizadores de la ayuda extranjera en general, pero han insistido en que la ayuda a El Salvador debe ser condicionada al respeto por parte del gobierno de esa nación de los derechos humanos y a un avance de las negociaciones de paz. El Secretario de Estado James Baker, de inmediato comenzó a negociar con los líderes de la Cámara respecto a la política estadounidense para El Salvador sobre la premisa de que ciertas condiciones podrían ser impuestas a la ayuda de ese país en el futuro, pero para el próximo año fiscal de 1991, que iniciaría el 1 de Octubre (114).

La decisión del Congreso significaba para el pueblo salvadoreño la continuación de la guerra, pero simultáneamente se discutía el no otorgamiento de la ayuda. el 24 de Mayo se conoció en Washington que la Casa Blanca y el Departamento de Estado, habían sellado un pacto con la mayoría demócrata del Congreso para reducir la ayuda militar del año fiscal de 1991. El representante demócrata Joe Moakley, presidente del Comité de Reglas de la Cámara Baja, reveló que ese acuerdo fue concretado con James Baker y que surgió a raíz del rechazo a la reducción del 50%. La Cámara de Representantes aprobó por 308 votos a favor y 117 en contra la iniciativa para la asistencia al extranjero, la cual condicionaba la entrega de la mitad de los 85 millones de dólares a El Salvador. Por ello esta reducción todavía esperaba ser debatida en el Senado, antes de ser enviada a la Casa Blanca donde podría ser vetada por Bush.

Aparentemente para Washington no era posible ya mantener los millonarios niveles de asistencia a las Fuerzas Armadas salvadoreñas, primero por que los Estados Unidos precisan de fondos para otras áreas ahora más importantes, y porque después de diez años de conflicto y una inversión de casi 5,000 millones de dólares, el ejército en El Salvador no ha logrado siquiera limitar en su extensión los frentes de guerra insurgente.

El 12 de Julio de 1990, los senadores demócratas Christopher Dodd, de Connecticut, y Patrich Leahy, de Fermont, presentaron al Congreso una nueva propuesta sobre la ayuda militar, planteando una reducción condicionada de los 85 millones de dólares presupuestados

para 1991 y que preveía acabar con esa asistencia si el régimen de Cristiani rehusaba negociar con la guerrilla. Según el documento, el gobierno estaría dispuesto a retener un 15% de la ayuda militar hasta el 1 de Abril de 1991, al concluir el primer semestre del año fiscal, y ser enviado a esa nación si se alcanzaban significativos progresos en las posibilidades de juzgar y condenar a los asesinos de los jesuitas. La propuesta estableció que otro 15% adicional sería congelado para asegurarse que el gobierno negociara de buena fe con el FMLN y este aceptara una tregua, y se abstuviera de actos de terrorismo (115).

A diferencia del proyecto aprobado por la Cámara Baja, la iniciativa anterior también previó la reducción de la asistencia castrense anteriormente otorgada pero aún no entregada, e incluso la suspensión total de la misma si el gobierno de Cristiani rechazaba su participación en las negociaciones de paz. En cambio si el FMLN rehusaba negociar o lanzaba una ofensiva, la ayuda total podría ser reanudada.

El 19 de Octubre de 1990, el Senado finalmente aprobó reducir a la mitad el paquete de asistencia militar a El Salvador, con el objeto de destrabar las negociaciones de paz entre el gobierno y la insurgencia que en este momento se llevaban a cabo, así como una forma de presionar para que se produjeran resultados en la investigación del caso de los jesuitas. Por 74 votos a favor y 25 en contra, el Senado respaldó la enmienda a la ley de asistencia externa por la cual se redujo en un 50% la ayuda de los 85 millones de dólares pedidos por Bush al Congreso, y se daría por terminada

completamente si el régimen de Cristiani se negara a continuar con las negociaciones. Empero, la decisión pronto se enfrentaría a una dura prueba al considerar la enmineda que presentó Bush con el objeto de invalidar la decisión. La propuesta consistió en aceptar el corte de la ayuda militar, pero se restablecería si el FMLN no aceptaba un cese de fuego incondicional en un plazo de 60 días (116). A fin de año envió al Congreso la solicitud de apresurar la entrega de los 48.1 millones de dólares, pretextando la escalada ofensiva del FMLN. El Departamento de Estado indicó que de esa suma, 37.5 corresponden al presupuesto fiscal de 1991, y 10.6 millones al de 1990 que estaban pendientes, y que se utilizarían para reponer los aparatos aéreos derribados (117).

Aprovechando la situación ofensiva del FMLN que empleó cohetes tierra-aire, Bush solicitó al Congreso el envío de los 42.5 millones de dólares que les fueron retenidos, y para reforzar su posición al respecto, el Departamento de Estado acusó al FMLN en el sentido que días antes, miembros de esa organización abrieron fuego contra un equipo de forenses estadounidenses que investigaban el derribamiento de un helicóptero militar norteamericano.

El Departamento de Estado, en su informe anual sobre violación a los derechos humanos, concluyó que en Centroamérica subsistían las violaciones a estos, pese a la total democratización de la región, y lo envió al Congreso para que lo tomara en cuenta en la asignación de programas de ayuda a los países de la región. El trabajo indicó que en El Salvador (y Guatemala), las acciones de las guerrillas izquierdistas y los excesos represivos de las

fuerzas de seguridad, provocaron la muerte o desaparición de centenares de civiles e incontables casos de torturas y destacó que tanto guerrilleros como fuerzas de seguridad cometieron violaciones a los derechos fundamentales (118).

Ante las evidencias, y estando de por medio la asignación de ayuda, Bush dirigió en otro sentido su pretensión e instó al Consejo de Seguridad de la ONU para que fijara como fecha de cese de fuego en El Salvador, el 30 de Mayo (119), fecha que resultó ilógica incluso para Cristiani y la guerrilla.

Bush aún no encontraba la manera de conseguir la aprobación del Congreso, cuando el tema de los jesuitas volvió a cobrar importancia con las declaraciones al FBI de Eric Buckland, asesor militar del ejército gubernamental quien conoció de antemano el plan de asesinato (120), y aunado al creciente accionar militar de los dos bandos en El Salvador, la Cámara de Representantes decidió aplazar hasta Septiembre de 1991 la discusión sobre la ayuda militar. El congresista demócrata Joseph Moakley, quien impuso ésta iniciativa instó a Bush a continuar reteniendo el paquete de 42.5 millones de dólares de la ayuda militar de este año.

Estas decisiones coincidieron con la la visita a Washington del presidente Cristiani, en Junio de 1991. La propuesta de Moakley, que para algunos observadores constituyó una maniobra poco usual, consistió en dejar en blanco el espacio correspondiente a El Salvador en dos proyectos de ayuda exterior que la Cámara debatió posteriormente, tratando de que ese espacio fuera ocupado según avanzaran las negociaciones y el fallo en torno a la matanza

de los jesuitas. No obstante, Moakley hizo ver que la medida se dirigía tanto al gobierno salvadoreño como a la insurgencia, ya que el gobierno podría perder millones de dólares en ayuda si detuviera las negociaciones, reprimiera a civiles o fracasara en sus investigaciones sobre el caso de los jesuitas, pero también aclaró que el gobierno recibirá más ayuda si el FMLN no avanzaba en las pláticas, y seguía recibiendo armas del exterior (121).

Cristiani fue recibido con palabras, no con hechos, por el subsecretario de Estado, Lawrence Eaglegurger quien expresó: "todo grupo e institución en El Salvador sabe que el presidente Cristiani cuenta con el apoyo total del presidente Bush" (122), pero mientras se entrevistaba con Bush, el senador Christopher Dodd, propuso reducir la ayuda militar a El Salvador en un 50%, pero para el año fiscal 1991-1992 (123).

Resulta irónico que después de un largo periodo, de estira y afloje en el Congreso, el 27 de Junio de 1991, el gobierno de Bush haya anunciado la reanudación de la ayuda militar, con un primer desembolso de 21 millones de dólares que mantenía congelados. La Casa Blanca indicó que la ayuda se entregaría en breve tiempo y que respondió a la continuación de la lucha armada por parte del FMLN. No obstante, se aclaró que la asistencia consistiría en material no letal, ya que comprendería básicamente piezas de repuesto, medicamentos, alimentos y ropa. La primera partida se entregaría en Agosto y el Congreso autorizó la entrega de cinco millones de dólares para financiar a las fuerzas de Naciones Unidas, ONUSAL (124) que verificarán el cumplimiento de un acuerdo en materia de

derechos humanos, signado con anterioridad con el gobierno salvadoreño y el FMLN.

En síntesis, el monto aprobado por el Congreso para el año fiscal 1990-1991 fue de 294.2 millones de dólares de asistencia global para El Salvador y el gobierno de Bush pidió 308 millones adicionales para el periodo 1991-1992. Cada una de las partidas incluyen una cifra idéntica de 85 millones de dólares en ayuda militar cuya entrega correspondiente a 1990 fue reducida a la mitad, pero después, Bush logró restablecer el monto original.

Citas bibliográficas del capítulo 4.

- 1) KIRKPATRICK, Jeane. Dictadura y Contradicción. Ver el capítulo "La Seguridad Norteamericana y América Latina. pp. 61 a 107.
- 2) Ibid. pp. 73 a 75. La política de derechos humanos ha sido duramente criticada por Kirkpatrick en el sentido de que su preocupación se limitó a la violación de estos por parte de los gobiernos, por tanto, "las actividades terroristas y guerrilleras no podían considerarse violación a los derechos humanos. No fueron definidos en términos de derechos legales (tortura desaparecidos, encarcelamiento, arresto arbitrario), sino con una concepción más amplia que incluía los derechos políticos disponibles sólo en las democracias, y los derechos económicos prometidos por el socialismo (vivienda, alimentos, salud, educación). La Administración Carter creyó que en la mayor parte del mundo, el pensamiento ideológico había cedido ante el pragmatismo y la búsqueda de soluciones, y que la preocupación de la ideología comunista era otra reliquia arqueológica de la guerra fría".
- 3) BERMUDEZ, Lilia. Guerra de Baja Intensidad. Reagan contra Centroamérica. p. 11.
- 4) Ibid. p. 65.
- 5) Ibid. p. 50.
- 6) KIRKPATRICK. op. cit. p. 71.
- 7) MAIRA, Luis. Centroamérica en Crisis. p. 184.
- 8) Fue confirmado por el embajador salvadoreño en los Estados Unidos, Sr. Lozano. Ver, MENJIVAR, Rafael. El Salvador, el eslabón más pequeño. p. 19.
- 9) Ibid. p. 24.
- 10) Ibid. p. 27. Así habló el Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Terence Todman.
- 11) Ibid. p. 27.
- 12) KIRKPATRICK. Op. cit. p. 92.
- 13) Ibid. p. 92. Declaración de Warren Christopher.
- 14) MENJIVAR, Rafael. Op. cit. p. 29.
- 15) KIRKPATRICK. Op. cit. p. 98.
- 16) Ibid. p. 98.
- 17) MENJIVAR. Op. cit. p. 59.
- 18) Ibid. p. 31. Ver ampliamente a MAIRA, Luis. "Fracaso y reacomodo de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica" en Centroamérica en Crisis.
- 19) MAIRA, Luis. Op. cit. pp. 189 y 190.
- 20) MENJIVAR, Rafael. Op. cit. p. 116.
- 21) BERMUDEZ, Lilia. Op. cit. p. 113.
- 22) MAIRA, Luis. La Crisis Centroamericana y su contexto externo. De la guerra de las Malvinas a la invasión a Granada. Mimeo.
- 23) Cuadernos CECARI. "La primera Administración Reagan y El Salvador". p. 7.
- 24) Ibid. p. 10.
- 25) Ibid. p. 13.
- 26) ECHEVERRÍA, Zuno. Centroamérica, la Guerra de Reagan. pp. 64 a 67.

- 27) Algunas características de armamento militar proporcionado por los Estados Unidos y que se ha manejado en el presente trabajo son: a) helicóptero UH Iroquois y helicóptero Bell. Son conocidos también como "Huey" y se usaron ampliamente en Vietnam, transporta hasta 15 hombres o 5000 libras de equipo militar. Su fuselaje estilizado lo hace difícil blanco.
- b) Aviones Jets de ataque A-37B, Dragonfly y Cessna. Se usan contra objetivos en tierra, de alta precisión, maniobrable, ideal para terreno quebrado, transporta cerca de 5000 libras de bombas montadas externamente y municiones aéreas.
- c) Transporte C-47 Skytrain. Capacidad para 70 hombres.
- d) Avión de entrenamiento T-41, Mescalero y Cessna. Carga 900 libras de equipo militar bajo ala.
- d) Sistemas de armas M-23. Incluye 2 ametralladoras M-60D 7.6mm una para cada puerta de helicóptero; 600 cargas por arma con una capacidad de disparo de 500-600 rpm.
- e) Rifle sin retroceso M-67, 90mm. Dispara una carga altamente explosiva hasta 560 yardas.
- f) Rifle sin retroceso M-18A1. Dispara una carga altamente explosiva a una distancia mayor de 1 milla y una carga de fósforo blanco a una distancia mayor de 1 milla.
- f) Mortero M-1 81mm. Dispara a 30 rpm cargas altamente explosivas y fósforo blanco a una distancia mayor de 1 milla.
- g) Mortero M-19, 90mm. Igual al anterior pero la distancia es mayor a 1 milla.
- h) Lanzagranadas M-79, 40mm. Dispara certeramente una granada hasta a 180 yardas.
- i) Bomba Mk-82, 500 lb. Hace un cráter de aproximadamente a 10 pies de profundidad y 30 pies de circunferencia.
- j) Granadas de mano de fragmentación M-67. Envía fragmentos letales hasta un radio de 20 yardas.
- K) Equipo antimotín. Granadas de gas de 40mm, elemento que causa náusea. Lanzagranadas de gas y máscaras protectoras.
- l) Munición. Artillería, rifle y pistola; granadas de humo y mechas. Ver con amplitud a BERMUDEZ Lilia. Op. cit. y Revista ECA. "Documento especial de la Guerra Centroamericana" pp. 808 a 817.
- 28) ECHEVERRIA, Zuno. Op. cit. pp. 83-85.
- 29) Ibid. pp. 88-89.
- 30) Cuadernos CECARI. Op. cit. p.16.
- 31) Uno mas Uno. 08/Set/83.
- 32) Cuadernos CECARI. Op. cit. p.19.
- 33) Ibid. p. 20.
- 34) Ibid. p. 20.
- 35) Ibid. p. 21.
- 36) El tema se basa en el Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroamérica, Comisión Kissinger.
- 37) Doce miembros formaron la Comisión Kissinger; Dr. Henry A. Kissinger, Presidente; Sr. Nicholas F. Brady, Director General de Dillon, Read & Co.; Alcalde Henry G. Cisneros, Alcalde San Antonio Texas; Gobernador William P. Clements, ex-gobernador de Texas; Dr. Carlos F. Díaz-Alejandro, Profesor de Economía

en la Universidad de Yale; Sr. William S. Johnson, Presidente de la Federación Nacional de Empresas Independientes; Sr. Lane Kirkland, Presidente de AFL-CIO; Sr. Richard M. Scammon, Asesor de Ciencias Políticas; Dr. John Silber, Presidente de la Universidad de Boston; Juez Potter Stewart, (retirado); Embajador Robert S. Strauss y Dr. William B. Wals, Presidente del Proyecto Esperanza.

- 38) Comisión Kissinger. Op. cit. p. 2.
- 39) Ibid. p. 61.
- 40) Ibid. p. 62.
- 41) Ibid. p. 62.
- 42) Ibid. p. 64.
- 43) Ibid. p. 65.
- 44) Ibid. pp. 129 a 131. "La situación en El Salvador".
- 45) Ibid. p. 135.
- 46) Ibid. p. 138.
- 47) Ibid. p. 129.
- 48) Cuadernos CECARI. Op. cit. p. 32.
- 49) BERMUDEZ, Lilia. "El Nuevo Modelo de Intervención Norteamericana en Centroamérica" p. 17. mimeo.
- 50) ESCURRA, Ana María. Intervención en América Latina. pp. 93-94.
- 51) LIEVENS, Karin. El quinto piso de la alegría. pp. 54-55.
- 52) El Día. 06/Nov/88. p. 11. Declaración del general Blandón.
- 53) Ibid. p. 11.
- 54) BERMUDEZ, Lilia. El Nuevo Modelo... Op. cit. p. 18.
- 55) MAIRA, Luis. Centroamérica en crisis. p. 183 y 183.
- 56) LIEVENS. Op. cit. p. 114.
- 57) Revista ECA. Junio 1988. p. 474.
- 58) Cuaderno de divulgación. CINAS. "El Salvador: ¿Es la Democracia Cristiana un Partido de Centro?. p. 41.
- 59) Excelsior. 11/Ago/88. P. 2A.
- 60) Revista ECA. Mayo 1988. pp. 341 a 348. Entrevista a Nidia Díaz, comandante del FMLN.
- 61) LIEVENS. Op. cit. p. 50.
- 62) Cuaderno de divulgación. CINAS. Op. cit. p. 39.
- 63) ESCURRA. Op. cit. pp. 120 y 121.
- 64) LIEVENS. Op. cit. p. 73.
- 65) Ibid. p. 74.
- 66) ESCURRA. Op. cit. p. 138.
- 67) Revista ECA. Documento Especial. pp. 808 a 813.
- 68) ECHEVERRIA, Zuno. Op. cit. p. 22.
- 69) Ibid. p. 67. Comentario de The New York Times.
- 70) Comisión Kissinger. Op. cit. pp. 129 a 131.
- 71) Revista ECA. Junio 1988. p. 557. Declaración de Shultz.
- 72) Excelsior. 11/Ago/88. p. 2A.
- 73) Revista ECA. Documento Especial. p. 811.
- 74) Ibid. p. 811.
- 75) La Jornada. 28/Set/88. pp. 29 y 32.
- 76) LIEVENS. Op. cit. pp. 74 y 75.
- 77) La Jornada. 09/Set/88. p. 20. Cifras que dió a conocer Eugenio Vides Casanova.
- 78) Unidades Militares del Ejército Salvadoreño. p. 5. Mimeo.

- 79) El Día. 31/Oct/88. pp. 1 y 11.
- 80) Las Fuerzas de Operaciones Especiales, FOE, están divididas en seis grupos: Boinas Verdes, Rangers, Asuntos Civiles, Operaciones Psicológicas, Fuerza Delta y la 160a, Fuerza de Tarea de la 101 División de Asalto Aéreo del Ejército. Las dos últimas son unidades ultrasecretas. La descripción de cada una de ellas se encuentra ampliamente explicadas en, BERMUDEZ, Lilia. Guerra de Baja Intensidad. Op. cit. pp. 95 a 106.
- 81) Frase de un militar anónimo, en Excelsior. 27/Oct/88. p.28.
- 82) Excelsior. 18/Ago/88. p. 10A.
- 83) Ibid. p. 10A.
- 84) El Día. 04/Nov/88. p. 10.
- 85) El Día. 22/Ene/89. p. 13.
- 86) Ibid. p. 13.
- 87) La Jornada. 24/Ene/89. Editorial del diario The New York Times.
- 88) La Jornada. 24/Ene/89. p. 32.
- 89) La Jornada. 24/Ene/89. p. 32. Declaración de Marlin Fitzwater.
- 90) La Jornada. 21/Mar/89. p. 1. Declaración del embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Walker.
- 91) La Jornada. 22/Mar/89. p. 32. Declaración de James Baker ante el Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.
- 92) La Jornada. 25/Abr/89. p. 33.
- 93) La Jornada. 02/Jun/89. pp. 1 y 34. Menciona sobre los desplegados en el New York Times y contiene acusaciones sobre los personajes que integran el gabinete de Cristiani, entre ellos, Humberto de Sola, líder de una de las fracciones más conservadoras de El Salvador, la Fracción Miraflores, a la que también pertenecieron miembros de la familia Regalado Dueñas.
- 94) La Jornada. 23/Jun/89. p. 36.
- 95) La Jornada. 04/Jul/89. p. 22.
- 96) La Jornada. 23/Jul/89. p. 19.
- 97) Excelsior. 31/Ago/89. p. 2.
- 98) La Jornada. 21/Set/89. p. 34.
- 99) La Jornada. 23/Set/89. pp. 36 y 40.
- 100) El Día. 11/Nov/89. p. 14.
- 101) La Jornada. 15/Nov/89. p. 39.
- 102) Excelsior. 18/Nov/89. p. 37-A.
- 103) Ibid. p. 37-A.
- 104) La Jornada. 18/Nov/89. p. 35.
- 105) La Jornada. 21/Nov/89. pp. 1 y 46.
- 106) La Jornada. 09/Ene/90. p. 32. Declaración de Fitzwater.
- 107) PEAR, Robert. The New York Times, en Excelsior. 13/Ene/90. pp. 1 y 5.
- 108) ALEMÁN, Alemán Ricardo. La Jornada. 18/Ene/90. p. 24.
- 109) La Jornada. 02/Feb/90. pp. 26 y 40.
- 110) La Jornada. 10/Feb/90. p. 29.
- 111) La Jornada. 20/Mar/90.
- 112) La Jornada. 11/May/90. Declaración del The New York Times.
- 113) La Jornada. 22/May/90.
- 114) El Financiero. 24/May/90. p. 46.
- 115) GOMEZ, Ricardo. El Financiero. 13/Jul/90. p. 38.

- 116) La Jornada, 20/Oct/90. p. 27.
117) La Jornada, 08/Dic/90. p. 25.
118) La Jornada, 02/Feb/91. p. 17.
119) La Jornada, 11/May/91.
120) SELSER, Gregorio. "Un militar gringo occidental...y cristiano"
Son documentos de trabajo del autor sobre las informaciones
del FBI referentes al caso de los jesuitas. Es un documento
seriado en La Jornada, del 3 al 7 de Junio de 1991.
121) La Jornada, 07/Jun/91. p. 34.
122) La Jornada, 12/Jun/91. p. 32.
123) La Jornada, 26/Jun/91. p. 33.
124) ONUSAL es una Misión de Observadores de las Naciones Unidas
para El Salvador, aprobada por el Consejo de Seguridad de la
ONU cuyos trabajos son vigilar el cumplimiento de los acuerdos
sobre derechos humanos que el gobierno salvadoreño y la
guerrilla firmaron el 26 de Julio de 1990 en San José de Costa
Rica.

Conclusiones

A pesar de que El Salvador es uno de los países más pequeños de América Latina, es sin duda uno de los más conflictivos en el momento actual. Históricamente, desde la aparición del capitalismo, Latinoamérica se ubicó a la zaga de éste, tardíamente, El Salvador, por tanto, presencia un capitalismo tardío, que lo caracteriza como país subdesarrollado y dependiente.

Desde que surge como estado independiente, la formación económica y social imperante respondió sólo al monocultivo del añil, y posteriormente del café, época caracterizada por grandes contingentes de trabajadores, sujetos a la explotación de unas cuantas familias que poseían la tierra o eran herederas del monopolio del comercio.

Los problemas generados en el pasado, principalmente la miseria, el hambre y la explotación de la mano de obra, no fueron resueltos, por lo que en la década de los treinta del presente siglo, las masas campesinas y obreras comenzaron a reivindicarse, acrecentando cada vez más sus demandas.

Como forma de aglutinar a estas masas mayoritarias, se formaron grupos cuyas bases políticas lograron la identificación de aquellas mayorías y estuvieron de acuerdo, incluso, con una línea militar. Los dirigentes del país optaron por la represión mediante la policía y los escuadrones de la muerte, con el fin de apaciguar los ánimos reivindicativos, surgiendo así la lucha entre dos bloques que generaron la guerra civil.

Los frentes de masas han tratado de dar un golpe

principalmente a la economía, con el objeto de hacer que el gobierno se desestabilice y reconozca que la situación de crisis es debido a este y a las reformas que plantea, las que sólo han empeorado la situación del país. Por ello, lleva a cabo sabotajes, destrucción de los servicios más elementales del país (agua, luz, vías de comunicación, salud, etc.), y bombardeos dirigidos al ejército gubernamental.

El gobierno de Duarte y de Cristiani se han visto favorecidos al contar con la ayuda de los Estados Unidos, pero a un costo muy alto, ya que por una parte se le ha exigido al gobierno salvadoreño, implantar reformas afines a los intereses de aquella potencia, y por otro lado, ha creado fricción al interior del estado salvadoreño y del ejército, a tal grado que hoy se duda sobre si es el presidente o el jefe de las Fuerzas Armadas quien lleva las riendas del gobierno.

La ayuda proporcionada por la potencia mundial es económica y militar, la cual ha aumentado vertiginosamente desde 1981, al extremo de colocar a El Salvador entre los primeros cinco países del mundo que reciben ayuda, directa o indirectamente, ligada a la guerra, y tan sólo una pequeña parte se ha orientado hacia programas de desarrollo.

El principal apoyo ha sido en el rubro militar, ya que además de proporcionar armas, aviones, equipo, uniformes, refacciones, etc, el Congreso de los Estados Unidos permite que en El Salvador presten sus servicios 55 especialistas militares al mismo tiempo, sin embargo, el contingente de asesores tiene entre 90 y 100

miembros, debido a que este límite no incluye a oficiales que se encuentran en misiones de corto plazo, que están adscritos a la Embajada o que cumplen misiones de supervisión.

El grupo más afectado por la estrategia militar de los Estados Unidos hacia el Salvador es el pueblo, porque la Guerra de Baja Intensidad ha demostrado que la evolución de esa estrategia es de alta intensidad al interior de la sociedad salvadoreña, destacándose en la misma, la ampliación de la guerra, el incremento de la ayuda militar y económica, la oposición del sector privado al esquema reformista, el control y la dirección de la política económica, y la exaltación política y laboral de las grandes mayorías.

Además de la grave situación de guerra, y de los problemas que ella genera, El Salvador es el que tiene mayor densidad de población en relación con los países del Tercer Mundo; su economía se ha fundamentado en el monocultivo y agroexportación del café; y no ha sido equitativa la apropiación de los bienes naturales. A ello se suma la emigración de la población económicamente activa, aumento en los niveles de desnutrición, falta de generación de fuentes de trabajo, que a su vez generan delincuencia, corrupción y contrabando, y en fin, una tremenda desconfianza e incertidumbre sobre el destino del país. No obstante, lo prioritario es crear un ambiente de paz que permita superar los obstáculos de su desarrollo.

Desde la presidencia de Duarte en 1984, se ha tratado de poner fin a la guerra sin conseguir que las partes se pongan de acuerdo,

siete años de hablar de paz, pero no de actuar, once años de aceptar la realidad, pero no de convertirla en paz. La guerra civil salvadoreña demuestra que la solución de llegar a un cese de fuego, no bastaría para resolver los problemas inmediatos. No podemos decir que con el fin de la guerra, se terminarían los problemas en El Salvador, porque las causas que los originaron, la injusticia social, la pérdida de democracia y libertad, todavía siguen vigentes.

Por lo anterior, se tratará de aportar algunas alternativas de solución.

En primer lugar, si el problema principal es terminar con la guerra, se hace necesario, por parte de la comunidad internacional, alentar la continuidad de diálogo, situación que permite por lo menos, vislumbrar un futuro más halagador y posibilitar la superación de la guerra actual. Sin embargo, los principales actores que deberán comprometerse son el gobierno salvadoreño y la guerrilla, por ser ellos los principales bloques de poder reconocidos al interior del país.

En segundo lugar, considerando que cualquier acción que lleve al establecimiento de la paz debe ser a corto plazo, para no seguir desgastando al país, las medidas sugeridas deberán estar bien fundamentadas, pero sobre todo, deberán favorecer primeramente a las mayorías. Ello podría lograrse creando una comisión donde estuvieran representados verdaderamente todos los sectores de la población, es decir, la cúpula gubernamental, partidos políticos, sector público y privado, los sindicatos y confederaciones obreras

y campesinas, la guerrilla, el sector educativo, la Iglesia, etc., a fin de discutir la crisis salvadoreña e iniciar juntos de manera objetiva, las formas de solución.

Por otro lado, el desafío principal para las fuerzas democráticas, nacionales y revolucionarias, está en la capacidad de estructurar una nueva dirección en la sociedad, que uniendo a todo el pueblo, pueda separar a todo aquel que esté contra él.

En tercer lugar, es necesaria la autodeterminación del pueblo salvadoreño sin la intervención de los Estados Unidos en la conducción de su destino. Con el desgastado y falso pretexto de su lucha contra el comunismo y con la concepción falsa de que el conflicto salvadoreño se circunscribe en la confrontación de las grandes potencias mundiales, La Casa Blanca y los sectores dominantes, han desatado una batalla contra la voluntad de crear espacios de paz y contra el deseo del pueblo de mejorar sus condiciones de vida. Es necesario el cese de la ayuda estadounidense que financia, promueve, desarrolla y ejecuta la guerra en contra de los salvadoreños.

No obstante, cualquier colaboración o ayuda, de cualquier país, deberá dirigirse a financiar, promover y desarrollar, planes económicos para satisfacer las necesidades del pueblo.

En cuarto lugar, simultáneamente al diálogo, debe ponerse en marcha un programa económico que promueva no sólo el café como producto principal de exportación, que de por sí ni siquiera es aprovechable al cien por ciento, porque el gobierno mantiene el monopolio y porque la guerrilla quema los sembradíos de este

producto. Debe fomentarse el cultivo de otros productos, por ejemplo del algodón, que mucho tiempo atrás estaba en el segundo lugar de producción, o retomar la producción del añil. Esto es, se requiere de una economía mixta para la regulación del mercado agro-exportador, y en la misma dirección se impulsaría una verdadera reforma agraria.

Queda descartada como alternativa para alcanzar la paz la vía militar que pudieran seguir el FMLN y el gobierno salvadoreño. Ella significa; mermar la población a causa del reclutamiento, forzoso o no, a las filas de cada bando; significa más lisiados de guerra y consecuentemente, menos gente productiva que podría trabajar para sacar el país adelante; significa la huida en la búsqueda de otro país más tranquilo donde poder vivir con sus familias, es decir, habrá más refugiados con los consecuentes problemas a nivel internacional.

Finalmente, ya que una de las formas para solucionar el conflicto es el respeto de cualquier diálogo para poder llegar a la negociación, justo al término de la elaboración del presente trabajo, se abrieron nuevamente las puertas de la esperanza en la sede de las Naciones Unidas. Las pláticas del 16 y 17 de Septiembre, dieron como resultado los Acuerdos de Nueva York, constituido por ocho puntos, que de ahora en adelante tendrán que analizarse y superarse paso a paso.

El primer punto prevé la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de Paz, COPAZ, como mecanismo de control y participación de la sociedad civil en el proceso de cambios

resultante de las negociaciones, tanto en relación con los de la Fuerza Armada como con los puntos que se manejen en las futuras agendas.

COPAZ será respaldada expresamente en la resolución que adopte el Consejo de seguridad de la ONU sobre los acuerdos de paz. Si bien es cierto que se han creado organismos con similar función, y no han tenido éxito, lo importante de este punto es que incluye a la sociedad civil, la directamente afectada y antes aislada.

Uno de los incisos refuerza lo anterior porque establece la integración específica de COPAZ. El papel de la Iglesia en el diálogo, anteriormente fue marginada, hoy el Arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera y Damas, y un delegado de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador, ONUSAL, tendrán acceso a los trabajo y deliberaciones, en calidad de observadores.

El segundo punto se refiere al proceso de depuración de la Fuerza Armada, que a juicio personal, es la clave para el buen desarrollo de una vida digna, porque como se ha demostrado, el aparato militar es el que ha llevado las riendas de la política, pasando por encima de la investidura presidencial.

El tercer punto garantiza la reducción de la Fuerza Armada, cuyos criterios serán acordados entre las partes y desarrollados de manera calendarizada.

El cuarto punto, aunque resulta ser un talón de aquiles por que dependerá de la posible reforma constitucional, señala la Doctrina de la Fuerza Armada cuya misión es la defensa de la

soberanía del Estado y de la integridad del territorio, y de que esa doctrina debe partir del principio, según el cual, la actuación y el régimen de la Fuerza Armada se enmarcarán de los principios que emanen del Estado de Derecho, de la primacía de la dignidad de la persona humana y el respeto a sus derechos.

El quinto punto establece la vigencia del Acuerdo de México de Abril de 1991, donde por primera vez se creó un marco que preveía el inicio para reformar la Constitución, y aunque irónico resulte, también se refiere al sistema educativo de la Fuerza Armada. A juicio personal, se trata de educar a los militares, haciendo énfasis en lo que significa la dignidad humana, los valores democráticos y los derechos humanos.

El sexto punto hace mención sobre la Policía Nacional Civil, muy importante por que se refiere a la posible disolución de la Guardia Nacional y Policía de Hacienda, que con prepotencia, son las que han sembrado el terror a lo largo del territorio.

El séptimo, uno de los más importantes hasta ahora en materia agraria, es el de la regularización de las tierras en las zonas en conflicto, en manos de quienes las trabajan actualmente, además de una rápida reforma agraria para dotar de tierras a los campesinos que no tengan parcelas.

Por último, el punto ocho, compromete a las partes a garantizar el cumplimiento de los acuerdos, en base a lo establecido en el futuro.

Frente a esta nueva iniciativa, lo primero ya está dado: el diálogo, falta llegar plenamente a la negociación, lo segundo es

respetar dignamente el Acuerdo de Nueva York, pero para que éste sea el definitivo y no para que en el futuro se siga dialogando infructuosamente. Es necesaria una solución a la guerra a corto plazo, tomando en cuenta que los múltiples problemas a resolver, en caso de lograr la paz, serán económicos, políticos, sociales, militares, e inclusive, culturales.

ANEXO No. 1

Caso de los jesuitas asesinados por militares.

El hecho que conmovió a la comunidad internacional durante la ofensiva guerrillera de Noviembre de 1989 fue el asesinato de sacerdotes jesuitas, catedráticos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Si bien es cierto que diariamente en El Salvador, mueren asesinadas decenas de personas inocentes y, el caso de los jesuitas reviste importancia por que fueron los denunciantes directos del estado gubernamental, fueron ampliamente conocidos en foros latinoamericanos, e incluso europeos, por su arduo trabajo por construir una sociedad justa.

Ignacio Ellacuría, nacido en España y nacionalizado salvadoreño, fue Rector de la Universidad; intelectual, conotado y teólogo de la liberación (La teología de la liberación formula la opción preferencial y solidaria hacia los pobres. Plantea la tesis de una sociedad distinta en la cual no haya antagonismos de clase, y que haya más vida, empezando por los empobrecidos). Desde diversos foros y especialmente desde la revista editada por la UCA que él dirigía, contribuyó a difundir la necesidad de la búsqueda de la solución política al conflicto salvadoreño;

Segundo Montes, Presidente de la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos y académico;

Ignacio Martín Baró, nacido en España y nacionalizado salvadoreño, Doctor en Psicología Social por la Universidad de Chicago, Vicerrector de la UCA (estos tres fueron duros críticos de la realidad salvadoreña);

y, Juan Ramón Moreno; Armando López; y Joaquín López.

Todos ellos, entre muchos otros, fueron acusados de participar con la guerrilla, sus instalaciones, ha dicho el gobierno, son refugio de "terroristas". Para Ellacuría, esto no era nuevo, "entre 1976 y 1977 la UCA y la Iglesia Católica fueron objeto de presiones por parte del gobierno, encabezado por el entonces presidente Arturo Molina cuyo resultado fueron los asesinatos de sacerdotes como el párroco de Aguilares, Rutilio Grande, y fueron acusados varios religiosos de llevar a la práctica la teología de la liberación" (1).

El 22 de Julio de 1989, estallaron cuatro bombas en la UCA que provocaron daños materiales por unos 100,000 dólares, las acusaciones fueron las mismas: "los jesuitas colaboran con los guerrilleros y sus instalaciones son el centro de reunión de rebeldes de los comandos urbanos" (2).

Los hechos.

El asesinato ocurrió el 16 de Noviembre de 1989, en el Centro de Reflexión Teológica, donde vivían los sacerdotes, además asesinaron a dos personas más, la cocinera del seminario y su hija, que a causa del toque de queda, pidieron permiso para quedarse esa

noche ahí. El ejército, fue el único que podía movilizarse en la ciudad durante el estado de toque de queda.

El 4 de Diciembre del mismo año, D'Aubuisson fue señalado como el responsable intelectual de los asesinatos. Basándose en un reporte oficial de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, medios estadounidenses, impresos y electrónicos, mencionaron al ultraconservador personaje como el virtual asesino. D'Aubuisson se había expresado ante sus asesores contra las víctimas: "hay que hacer algo con esos curas" (3).

Las versiones:

a) Fidel Chávez Mena, Secretario General de la Democracia Cristiana, afirmó que días antes del asesinato, la casa de Ellacuría fue sometida a un allanamiento por el ejército y supuso que este cateo pudo haber servido para investigar cómo estaba ubicado el lugar.

b) La Compañía de Jesús, cuya sede provincial para Centroamérica es encabezada por José María Tojeira, dió a conocer una cronología de los hechos. "En el momento en que estos (los jesuitas) eran ultimados brutalmente, en el sector había un fuerte dispositivo militar, que se extendía hasta los alrededores de la casa de Ellacuría y que continuaba dentro de las instalaciones de la Universidad, cubriendo también su zona aledaña.... Un incidente ocurrido mientras Ellacuría se encontraba en el extranjero y que se produjo el día que inició la ofensiva rebelde fue cuando un grupo de guerrilleros del FMLN huyeron esa noche a través de la residencia de los padres tras colocar una bomba de bajo poder explosivo en el portón de la residencia, a los diez minutos, las fuerzas armadas se hicieron presentes y controlaron la situación. Al día siguiente, se presentaron en la residencia de los padres miembros de las Fuerzas Armadas.... La Radio Cuscatlán operada por el Ejército, con todas las emisoras del país encadenadas a la misma, irradió amenazas de muerte contra Monseñor Rosa Chávez y Rivera y Damas, como contra los jesuitas de la UCA, y otros sacerdotes en general, pero en particular contra el padre Ellacuría" (4).

c) Arturo Rivera y Damas, Arzobispo de San Salvador, basó sus razones para responsabilizar a los militares en los siguientes argumentos: "En ese momento estaba vigente el toque de queda, y en las cercanías de la Universidad hay una colonia militar, el Estado Mayor y el Centro de Jesuitas llamado Loyola, el cual se hayaba ocupado por militares del batallón élite Atlacatl. La operación duró media hora, pero las personas en uniforme se demoraron mucho más, dos o tal vez tres horas. Si hubieran sido guerrilleros habrían atacado y huido inmediatamente. Pero no fue así. Llevaron a los padres al jardín, los mataron, hicieron estallar bombas y quemaron un local. Después se detuvieron en el lugar durante mucho tiempo. Significa que se sentían seguros. Las razones de la matanza están en el hecho de que los sectores de derecha querían que los

jesuitas se fueran del país, y no habían descartado la posibilidad de eliminarlos" (5).

d) El sector de los militares jóvenes, acusaron al coronel Héctor Heriberto Hernández, Director de la Policía de Hacienda, afirmando que él había dado la orden (6), pero el Ministro de Defensa, Emilio Ponce negó la acusación.

El 18 de Noviembre se realizó la misa de cuerpo presente de los jesuitas, el decano de la UCA, Francisco Javier Ibizate, concluyó: "No queremos venganza; los perdonamos", pero pidió el esclarecimiento de los hechos y rechazó que "algún grupo utilice los mismos para continuar con la violencia" (7). Al sepelio asistieron Cristiani y Rubén Zamora, hecho inaudito porque este último se había refugiado en una embajada a causa de la ofensiva. Rivera y Damas en su homilía, no vaciló nuevamente en acusar a los culpables: "Los sacerdotes asesinados eran analistas agudos de la situación del país, que realizaban estudios para elaborar diagnósticos que dejaban al descubierto el pecado social que había que repudiar con sus transformaciones profundas, este fue sin duda su pecado, que provocó el odio ciego que les costó la vida" (8).

Posteriormente, los medios religiosos entendieron al hecho como una declaración de guerra a la Iglesia. Denunciaron que desde esa fecha, fueron arrestados doce trabajadores extranjeros del staff de la Iglesia Luterana, dejados en libertad con la condición de que abandonaran el país, al igual de que las amenazas habían continuado contra los más importantes líderes religiosos, entre ellos al Arzobispo Arturo Rivera y Damas de la Iglesia Católica, al Obispo de la Iglesia Luterana, Medardo Gómez; al reverendo Edgar Palacios de la Iglesia Bautista y a los Reverendos Luis Serrano y Bertí Quiñónez, de la Iglesia Episcopal (9).

El esclarecimiento para encontrar a los culpables, se convirtió en condición para que los Estados Unidos siguieran manteniendo la ayuda militar a este país, no obstante el terreno estuvo preparado. El embajador norteamericano en El Salvador, William Walker, ofreció "protección" de Washington para los testigos de la masacre. Pero Rivera y Damas denunció que en lugar de ser protegida una testigo (que vivía cerca de lugar y por una ventana vió cómo fueron asesinados), fue sometida en los Estados Unidos a "un lavado de cerebro y al chantaje de que sería deportada si no decía la verdad", denuncia confirmada por Scott Greathead, abogado de los jesuitas: "el interrogatorio a que fue sometida resultó agresivo y violento, y después de este tormento psicológico la mujer vaciló y se retractó de la declaración que hizo en El Salvador. La testigo había repetido que los asesinos vestían todos de uniforme, y habían actuado sin ninguna prisa ni ocultamiento" (10).

Cristiani tuvo que enfrentar las consecuencias del asesinato, primero indicó que la investigación del crimen estaría dirigida al

interior de la Fuerza Armada, y se llevarían a cabo pruebas balísticas, se analizarían cartuchos, y se interrogaría a los efectivos militares que ocuparon la zona en las cercanías de la UCA. El 8 de Enero de 1990; elementos del ejército salvadoreño fueron detenidos por su presunta participación, tras investigaciones realizadas por el gobierno salvadoreño, agentes estadounidenses, españoles y británicos. Se detuvo a dos tenientes, un subteniente, dos sargentos, un cabo y un soldado, pero sólo un militar de alto rango, el Jefe del Departamento de Inteligencia del Alto Mando de la Fuerza Armada, coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, responsable de custodiar la zona (11), todos pertenecientes al batallón Atlacatl.

Las acciones de Cristiani reaccionaron a su favor, otras en cambio crearon desconfianza:

a) Estados Unidos elogió al gobierno salvadoreño, "es un paso decisivo el que este gobierno haya identificado a los perpetradores de los despreciables asesinatos" dijo Margaret Tutwiler, vocero del Departamento de Estado (12);

b) Los militares desmintieron que el alto mando se encontrara involucrado, pero el reconocimiento público de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas desató una tensión entre el gobierno y el ejército, pues se había desvirtuado su imagen;

c) La UCA en voz del nuevo Rector, reverendo Francisco Estrada, dijo que "se limitó a confirmar lo que hemos dicho desde el principio. No es suficiente que (las Fuerzas Armadas) presenten a un sargento. La cuestión es determinar quien le dió la orden a los sargentos (13). A Benavides se le encontró culpable, no obstante, él no ejercía mando directo sobre el batallón Atlacatl, así que la orden debió ser recibida por altos jefes.

Pero la ayuda norteamericana no estaba asegurada aún, por lo que Cristiani envió una carta al Ministro de Defensa, Humberto Laríos: "Ruego a usted dar instrucciones a todas las unidades de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad, abstenerse de ejecutar acciones contra los bienes o representantes de organizaciones gremiales y sindicales, partidos políticos legalmente constituidos, entidades religiosas de cualquier congregación y miembros de la prensa nacional e internacional" (14). El quedar bien ante los ojos de los Estados Unidos, fue una reacción de Cristiani a la iniciativa del demócrata Kerry, titulada "Acta para la Paz y Democracia en El Salvador" que enviaría al Congreso, y que de aprobarse, dejaría sin fondos al gobierno salvadoreño para continuar la guerra. La iniciativa señalaba que no se enviaría más ayuda a El Salvador a menos que los cuerpos de seguridad se depuraran de todos los individuos involucrados directa o indirectamente en torturas y asesinatos indiscriminados (15).

Posteriormente, Cristiani viajó a los Estados Unidos sin conseguir su objetivo, mientras que los militares se presentaban

ante la Corte a declarar ante el juez Ricardo Zamora, quien procedió a ordenar el arresto formal decretando el embargo de bienes por 40 mil colones (poco más de 6,000 dólares) para Benavides y una menor suma para el resto (16).

Las investigaciones se estancaron a principios de Abril de 1990 con las siguientes características:

a) inexplicablemente, el libro de registros de las personas que entraron y salieron de la Escuela Militar, de la cual Benavides fue Director, se extravió, (17), (después, en Junio se ordenó el arresto del subdirector de la escuela, acusado de ordenar a oficiales menores de quemar el libro en Diciembre de 1989);

b) con las primeras pistas en la mano empezó a perfilarse lo que una editorial de la Revista Proceso, del Centro Universitario de Documentación e Investigación de la UCA, llamó "una amplia conspiración en la cúpula castrense", el boletín de la UCA argumentó que "hay razón para el escepticismo", se refería al intento de la defensa de los militares presos, a trasladar el juicio a una jurisdicción diferente (que no procedió) y quitar el proceso al Juez Ricardo Zamora (quien fue alumno de varios de los jesuitas asesinados y tendría interés más activo en llegar hasta el final en el proceso); y,

c) se destaca el hecho de que el Viceministro de la Defensa, coronel Zepeda, que públicamente había sostenido que en la UCA se planificaban acciones guerrilleras y hasta terroristas, no había sido llamado a declarar (18).

Otra publicación de la Universidad Jesuita, Estudios Centroamericanos, ECA, apunta una serie de irregularidades en las investigaciones. ECA se pregunta si el asesinato fue planeado con anticipación, sobre la base de varias pistas: el cateo hecho por el mismo comando el día 13 de Noviembre de 1989; la entrega de un fusil AKA a uno de los soldados de la patrulla, encargado de disparar con esa arma contra los sacerdotes; la elaboración por parte de Benavides de una parte de guerra falso en el que quedó "registrado" un enfrentamiento con la guerrilla con dos horas de anticipación a los hechos y la idea de dejar supuestas huellas del FMLN en el lugar del crimen. Estos detalles "llevan a pensar que el plan estaba debidamente elaborado. Pero las narraciones extrajudiciales recogidas por el juez "tienden sorprendentemente a soslayar todo dato que pueda responder a estas interrogantes", advierte la publicación (19).

En Junio de 1990, el Juez Zamora solicitó a la Corte Suprema de Justicia gestionar por vía diplomática, que los Estados Unidos entregaran unos documentos en su poder de importante contenido sobre el asesinato. Se trataba de un testimonio de un mayor del ejército estadounidense, Erick Buckland, quien supo con anticipación del asesinato, presentado por él mismo ante agentes del FBI en

Washington, el 12 de Enero, mes y medio después del crimen, del cual se han conocido sólo algunos aspectos que revelan parte de la trama que al conocerse públicamente, estalló en el arresto de los militares. De lo que se ha conocido de esta declaración (20) revela que a fines de Octubre de 1989, y cuando ya el alto mando de la Fuerza Armada se temía una ofensiva del FMLN como la del 11 de Noviembre, el coronel Carlos Armando Avilés llegó acompañado de Buckland a la sede de la Escuela Militar. Según le comentó al mayor estadounidense, asesor e íntimo amigo suyo, Avilés llevaba la misión encomendada por el entonces jefe del Estado Mayor, Emilio Ponce, de intentar persuadir al director de la escuela castrense, coronel Benavides, de su plan de asesinar al Rector de la UCA, contra quien Benavides y otros jefes militares profesaban un odio extremo. Avilés explicó a Buckland, según esta versión, que Benavides era considerado como de mano dura de la vieja escuela.

La entrevista de Avilés con Benavides y otros tres oficiales entre los cuales sólo se identificó a uno, el coronel Oscar León Linares, entonces comandante del batallón Atlacatl, ejecutor de la masacre, duró apenas quince minutos y evidentemente no tuvo éxito.

En una segunda declaración, el 18 de Enero de 1990, Buckland se retractó de su declaración inicial al informar ante el poder judicial sobre el caso. Negó haber identificado a los militares con quienes se entrevistó Avilés. En esta segunda declaración ofreció nuevas pistas, informó que tenía conocimiento de que el 20 de Diciembre, Avilés le hizo una nueva confesión. Le dijo que otro militar, el coronel Iván López, quien entonces formaba parte de la Comisión de Investigación del crimen, integrada únicamente por oficiales del ejército, le había confiado que Benavides, había recurrido al coronel Manuel Antonio Rivas, jefe de la Policía Especial designada para este caso, y textualmente le dijo: lo hice yo". ¿Qué podés hacer para ayudarme?. Con esta información en la mano y temeroso de ser objeto de algún atentado por saber demasiado, Buckland decidió revelar estos datos al FBI, no sin antes enviar una carta a su hermana con todos los detalles y con la advertencia de no dar a conocer su contenido sino en caso de una emergencia. El Juez Zamora no tuvo conocimiento directo de estas versiones, a pesar de haber hecho una solicitud al FBI sino hasta que la embajada estadounidense entregó estos documentos al gobierno salvadoreño a través del Estado Mayor.

La Compañía de Jesús no tuvo estos testimonios a través de las vías institucionales, sino por conducto de sus propios contactos. Más aún, trascendió que uno de los primeros funcionarios estadounidenses en tener en sus manos la versión original y no censurada del testimonio de Buckland, fue el propio subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson. Tiempo después salió a la superficie el que Aronson estaba al tanto de esta información y que intentó encubriarla. Estos hechos se conocieron hasta finales del 1990, cuando aún se tenía la duda sobre si los Estados Unidos mantendrían la ayuda económica al

gobierno salvadoreño.

Ante este crimen y cúmulo de hechos, que parecieran tratarse de una novela policiaca, recordamos que los escuadrones de la muerte han actuado siempre con impunidad y bajo protección del ejército, pues han estado dirigidos desde las instancias especializadas de las Fuerzas Armadas. Pero hoy existen diferentes circunstancias, aquellas, las de Monseñor Romero, las de las monjas de la orden de Maryknoll, la de líderes asesinados, buscaron sin conseguirlo, frenar el auge de la combatividad u organización popular, que emergía como respuesta a décadas de represión y aplastamiento de los derechos elementales del pueblo y de sus miserables condiciones de vida.

Hoy, los asesinatos de estos sacerdotes, son fruto no sólo de la maldad, sino también de la impotencia, del miedo y desesperación de quienes presenten el derrumbe de un régimen de oprobio. A quienes les quepa duda sobre la responsabilidad de los escuadrones de la muerte y del ejército, habría que acercarnos al pensamiento y al rol político desempeñado por este sacerdote y su grupo de jesuitas. Ellacuría fue un hombre sensible a la realidad del país que no lo vio nacer, pero a cuyo pueblo entregó amor y acciones constantes por reivindicarlo de la miseria y la ignorancia. A pesar de las reiteradas amenazas contra su vida se mantuvo firme y honesto.

El asesinato no sólo fue contra sacerdotes, fue un ataque frontal a la inteligencia, cuyo reducto era la UCA y cuya presencia era un símbolo de la resistencia de todos los salvadoreños al gobierno genocida que a estas fechas se volvió más sanguinario. Ya Ignacio Ellacuría lo había planteado: "La esperanza de los pobres no se fundamenta en una genérica bondad de los hombres, ni en la buena voluntad de los poderosos, ni en los dinamismos del desarrollo. Hubo un tiempo en que se les predicó una fe que les hacía fatalistas o, al menos, no les impulsaba a salir del fatalismo: resignación ante el presente, espiritualización de sus carencias y de sus sufrimientos, consuelo en un futuro más allá de la historia. Hoy ya no es así... Dios quiere la negación activa de un presente de pecado y la afirmación operativa de un futuro que se acerque más y más a las exigencias del Reino de Dios. No tanto se anuncia la abrogación del presente por la promesa del futuro sobre la negación del presente..." (21).

Todo esto no es más que un síntoma de paranoia y otras desviaciones, el que enmedio de una guerra abierta, con ejércitos desplegados y un enemigo a la ofensiva, el hecho de que un grupo armado al servicio del Estado salvadoreño haya decidido atacar una Universidad. Hasta ahora, 1991, el caso de los jesuitas no ha sido aclarado, quizá no lo será en el futuro, pero muestra que la postura humanitaria, abierta, cristiana en sentido estricto, de los miembros del clero, desde sacerdotes hasta la alta jerarquía, han colocado a la Iglesia Salvadoreña en el catálogo del objetivo de

represalias, que han permitido que los escuadrones de la muerte dispongan de impunidad para asesinar en horas de toque de queda. La posición de la Iglesia Católica de luchar por el respeto de los derechos humanos, denunciar los atropellos de los militares y propiciar un diálogo entre el gobierno y la guerrilla, la han puesto en contradicción con un régimen multihomicida. En este caso, la hostilidad contra la Iglesia no representa sino el esfuerzo de un régimen que ya es incapáz de resistir, siquiera, la confrontación con los empeños humanitarios.

El nuevo Rector de la UCA, antes mencionado, y el Vicerrector reverendo Charles J. Beirne, han continuado con la labor de sus predecesores, "la Universidad debe seguir apuntando a la verdad", por ello, la UCA seguirá siendo un lugar inseguro y antidemocrático, y sus problemas sociales serán incurables hasta que los Estados Unidos dejen de financiar a los militares salvadoreños. Quizá los militares salvadoreños desearían eliminar a las nuevas autoridades de la UCA, pero saben que no podrían hacerlo impunemente, al respecto Charles Beirne ha declarado que "se dan cuenta (los militares) de la terrible publicidad que resultaría si matan a más jesuitas, especialmente un jesuita norteamericano" (22).

La UCA, con 8,000 estudiantes y 250 docentes, es la única Universidad de importancia que continúa funcionando en El Salvador ya que la Universidad Nacional ha sido cerrada por los militares. Irónicamente, fue fundada en 1965 con el propósito de hacer de ella, un bastión de estudiantes acomodados, protegidos contra lo que algunos consideraban el comunismo y secularismo prevalecientes en la Universidad Nacional.

Heimerografía del Anexo 1

- 1) Excelsior. 24/Abr/89. p. 2.
- 2) La Jornada. 23/Jul/89. p. 39.
- 3) La Jornada. 05/Dic/89. p. 36.
- 4) La Jornada. 18/Nov/89. p. 39.
- 5) La Jornada. 06/Dic/89. pp. 1 y 27.
- 6) Excelsior. 02/Dic/89. pp. 1 y 48.
- 7) La Jornada. 19/Nov/89. p. 32.
- 8) La Jornada. 21/Nov/89. p. 47.
- 9) La Jornada. 27/Nov/89. p. 37.
- 10) La jornada. 19/Dic/89. p. 21.
- 11) La jornada. 10/Ene/90. p. 22.
- 12) La Jornada. 10/Ene/90. p. 22.
- 13) La Jornada. 09/Ene/90. p. 26.
- 14) La Jornada. 18/Ene/90. p. 24.
- 15) La Jornada. 18/Ene/90. p. 24.
- 16) La Jornada. 18/Ene/90. p. 24.
- 17) Financiero. 28/jun/90. p. 36.
- 18) La Jornada. 16/May/90. p. 25.
- 19) La Jornada. 16/May/90. p. 25.
- 20) PETRICH, Blanche, en La Jornada. 23/Nov/90. pp. 36 y 48.
- 21) La Jornada. 19/Nov/89. p. 28.
- 22) Ovaciones. 15/Jun90. p. 2.

ANEXO No. 2

Cronología militar desde el inicio de la presidencia de Alfredo Cristiani hasta Septiembre de 1991.

1989.

- 1.- 19 de Marzo. Paro de transporte durante los comicios, motivado por el FMLN. Paralización del 90% del tránsito de vehículos.
- 2.- 5 de Abril. Ofensiva insurgente en ocho provincias: en Santa Ana, contra sembradíos de café en "las Cruces"; en La Libertad contra el cuartel de la Policía Nacional de Quezaltepeque; en San Salvador; Cuscatlán; Cabañas; Usulután; San Miguel y Morazán. Ataque por primera vez contra objetivos económicos estadounidenses: destrucción de 35 máquinas de construcción de la Compañía Norteamericana L.H. Harrison, más doce de sus vehículos. Las pérdidas aproximadas fueron de 3 millones de dólares, según la propia compañía. Adjudicación del FMLN de la destrucción de 10 agencias bancarias, 4 fábricas (propiedad del Alcalde de San Salvador, Armando Calderón Sol), y oficinas de comunicaciones y juzgados.
- 3.- 6 de Abril. Ataque del FMLN contra la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso, Departamento de Chalatenango, y simultáneamente contra el cuartel de infantería de Zacatecoluca, en el Departamento de la paz. Armas utilizadas: morteros, lanzacohetes y fusiles automáticos.
- 4.- 21 de Abril. Ataque insurgente contra el cuartel de la Marina Nacional en San Salvador. Utilizaron fusiles M-16 y G-3.
- 5.- 10 de mayo. Primera ofensiva nacional, "Todos Contra ARENA por la Paz" en 11 departamentos: Tejutepique, Departamento de Cabañas; Tejutla, Departamento de Chalatenango, contra el Batallón Atlacatl; La Paz; San Vicente; Usulután; Morazán; Santa Ana con la destrucción de una torre transmisora; Sonsonate; Cuscatlán contra el Batallón élite Bracamonte y La Unión, contra la tercera Brigada de San Miguel.
Hechos que demostraron el realismo de la magnitud y desafíos que afrontaba el nuevo presidente. El ejército declaró estado de máxima alerta en todo el país. Se daba un cambio en el enfrentamiento militar, de una guerra de desgaste a otra, donde se combate de día en zonas densamente pobladas. E l combate de día es una ventaja en la neutralización del apoyo aéreo en las tropas.
- 6.- 23 de Mayo. Nueva ofensiva "Junto a Panamá en la Lucha por el Canal y su Soberanía", en respuesta ante la posibilidad de intervención militar de los Estados Unidos y respeto a los tratados Torrijos-Carter. Acciones insurgentes contra puestos militares en Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Miguel, Morazán, Santa Ana, La Unión, y La Libertad; sabotajes contra nueve líneas primarias de 115 mil voltios, provocando el 70% de la interrupción de fluido eléctrico en todo el país.
- 7.- 25 de Mayo. Segunda etapa de "Todos Contra ARENA", que incluyó ataques contra la primera Brigada de Infantería de San Salvador, ataques al cuartel policial y posiciones del ejército en Mejicanos, San Miguelito y Zacamil. Sabotaje al

sistema eléctrico.

Según observadores, éste ha sido el más importante ataque durante los diez años de guerra en la capital. El ejército gubernamental allanó el campus de la Universidad de El Salvador, UES.

- 8.- 1 de Junio. Toma de posesión de Cristiani. Paro de transporte con duración de tres días. El ejército gubernamental realiza el operativo "Plan Fuego" como dispositivo de seguridad. Los principales hoteles y oficinas públicas fueron rodeados de soldados con armas M-16 en riestre, acompañados con perros (a quienes daban instrucciones en inglés).
- 9.- 8 de Junio. Continúa la ofensiva insurgente "Todos Contra Arena" y abarca los cuatro frentes de guerra. Emboscadas y sabotajes de día y de noche. Destrucción de la oficina paraestatal Compañías de Telecomunicaciones, en Temanique, Departamento de La Libertad. El reporte semestral del FMLN indica que desde el inicio de 1989 hasta esta fecha causó al ejército gubernamental más de 5 mil bajas, de las cuales 1688 fueron efectivas, es decir un promedio de 29 bajas por día, resultado de más de 4 mil acciones en 13 departamentos. Además se ejecutaron seis maniobras nacionales en la mayoría de los departamentos con excepción de Sonsonate. 1463 fueron acciones de desgaste, 1142 de sabotaje a la economía de guerra y 1436 de propaganda. En la mayoría de las acciones se incautaron armas y pertrechos de guerra.
- 10.- 2 de Julio. Ataque insurgente contra la Central Hidroeléctrica "5 de Noviembre" en Chalatenango, la que provee gran porcentaje de energía eléctrica al país.
- 11.- 3 de Julio. Maniobra insurgente "Guerra en contra de los militares que comandan la guerra en El Salvador", incluido un ataque contra las instalaciones de la Policía Nacional de San Salvador.
- 12.- 4 de Julio. Inicio de una maniobra insurgente a nivel regional "A derrotar la guerra sucia, represión y paquetazo de ARENA". Combates en: Chalatenango, contra 7 posiciones gubernamentales y recuperación abundante de material bélico; en Morazán contra el batallón Arce, recuperación de material bélico; en Usulután; San Miguel; San Vicente y Cabañas. El ejército salvadoreño respondió con morteros contra la población de San Francisco Gotera en el Departamento de Morazán. El 50% de la capital quedó sin energía eléctrica.
- 13.- 13 de Julio. Destrucción parcial del edificio público más grande de San Salvador denominado "Torre de la Democracia".
- 14.- 20 de Julio. Combates entre ambos bandos en San Miguel y Morazán. El FMLN combatió contra el batallón de paracaidistas quienes recibieron apoyo de helicópteros artillados y cazabombarderos A-37. La zona fue sobrevolada por aviones de reconocimiento estadounidense provenientes de la base de Palmerola, en Honduras, hecho denunciado por Radio Venceremos posteriormente.
- 15.- 10 de Agosto. Sorpresivo ataque guerrillero a un cuartel

- paramilitar en Mejicanos, San Salvador. Utilización de fusilería y morteros.
- 16.- 5 de Septiembre. Ofensiva simultánea contra tres posiciones de las fuerzas armadas. La operación llamada "Oriente tiene valor; todos contra ARENA" se desarrolló en Morazán contra el batallón Cacahuatique, y en Usulután. Comandos guerrilleros lograron la requisita de fusiles D-16 y dos subametralladoras M-60. El gobierno lleva a cabo un programa de recuperación económica en esta zona denominado "Para El Salvador, Oriente tiene valor".
 - 17.- 13 a 23 de Septiembre. El FMLN decretó una tregua unilateral pero reinició sus ataques en respuesta a las capturas por parte de los cuerpos de seguridad que realizaron semanas anteriores. El más importante de los ataques fue lanzado por el denominado Frente Central, contra posiciones de artillería en la localidad de Entre Ríos, en Zacatecoluca, Departamento de La Paz. Dañó una pista de aterrizaje oficial y una cooperativa de granos básicos.
 - 18.- 30 de Octubre. Inicio de la Ofensiva "Todos Contra ARENA y la Tandona". Incluyó el atentado contra la sede del Estado Mayor del ejército salvadoreño en la capital. Tal fue la magnitud de la maniobra, que Cristiani consideró que podría decretar el estado de emergencia para proteger a la población.
 - 19.- 11 de Noviembre. Inicio de la ofensiva del FMLN "Febe Elizabeth vive" de considerable magnitud. El FMLN tomó puntos estratégicos en siete cabeceras departamentales atacando por lo menos 50 objetivos militares, 20 de los cuales se produjeron en la periferia de la capital. Se incluye el ataque contra la casa presidencial, y contra casas de varios funcionarios como la del presidente de la Asamblea Legislativa, Roberto Alberanga. Los principales operativos se registraron en Santa Ana, San Miguel y Usulután, en el Este; Zacatecoluca, en la zona Central; y, Chalatenango en el Norte, todos bastiones tradicionales de la insurgencia salvadoreña. La Fuerza Armada realizó una contraofensiva en la capital que incluyó bombardeos y ametrallamientos aéreos en Zacamil (barrio popular considerado como el más densamente poblado de Centroamérica, con cerca de 300 mil habitantes), Mejicanos y San Marcos. Guerrilleros utilizaron morteros de fabricación casera contra el cuartel central de la Guardia Nacional, al norte de la capital. Las fuerzas castrenses, pidieron apoyo a helicópteros de la Fuerza Aérea. Tropas gubernamentales formaron un cordón de unos 15 kilómetros de largo para tratar de avanzar hacia el norte, pero los comandos urbanos de la guerrilla, apostados en azoteas y casas, repelían tanto el avance de la tropa por tierra como los ametrallamientos de helicópteros HUGHES 500 y aviones A-37. Según Radio Venceremos, fue atacada la sección de transportes militares del aeropuerto dañando tres helicópteros de la Fuerza Aérea, afectando pistas y dos hangares, y requisando 50 fusiles y ametralladoras. Todas las aerolíneas suspendieron vuelos. Unidades insurgentes controlaban el tráfico de las dos

principales carreteras del país, la Panamericana y la del Litoral. La Universidad de El Salvador fue atacada por un fuerte contingente militar gubernamental, apoyado por tanquetas y helicópteros. Radio Venceremos llamó a la población a sumarse a una huelga general cuyo objetivo sería debilitar al régimen, y terminar con el paro de trasporte para permitir la incorporación de todos al combate, acciones mantenidas en forma indefinida.

- 20.- 13 de Noviembre. En la población de Los Santos, según Radio Venceremos, los vecinos ayudaron a la construcción de trincheras. Combates en Chalatenango; en Morazán el FMLN rodea la tercera Brigada de Infantería; en San Vicente; y, en Usulután donde la guerrilla tomó el control de la ciudad de Ozatlán. Inicio de combates en el sur de San Salvador, a menos de 900 metros de la casa presidencial, especialmente contra el cuartel de El Zapote, y contra el centro de transmisión de las Fuerzas Armadas.
- 21.- 17 de Noviembre. La insurgencia efectuó un retiro parcial de sus posiciones de Soyapango y Zacamil, en la capital, parte de un repliegue táctico de cambio de posiciones. Simultáneamente se fortalecieron y abrieron otros frentes en la capital. La táctica utilizada fue de gran movilidad, no de guerra de posiciones, con el fin de seguir combatiendo.
- 22.- 18 de Noviembre. Continúan combates en Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Soyapango y San Miguel, barrios de la capital, fue derribado un avión de combate gubernamental. Se instaló nuevamente la guerrilla en Zacatecoluca.
- 23.- 23 de Noviembre. Radio Venceremos informó que el cuartel de la tercera brigada de Infantería de San Miguel, se encontraba sometido a fuego de fusilería, morteros y lanzagranadas. Informó de numerosas bajas entre los soldados.
- 24.- 27 de Noviembre. Ataque insurgente contra fuerzas del ejército de San Salvador. En el Departamento de Santa Ana el FMLN atacó con fuego de cohetes, fusilería y artillería popular, las posiciones del ejército en la colonia Santa Isabel. En San Miguel, los insurgentes pusieron en fuga a una compañía del batallón de élite Arce. El FMLN dió a conocer el balance de los primeros logros de la ofensiva, señalando el desplazamiento del teatro de operaciones de guerra, del campo a la ciudad. Se logró liberar extensas zonas del país, perdiendo el enemigo terreno y legitimidad. El ejército tuvo que abandonar posiciones.
- 25.- 29 de Noviembre. Ofensiva insurgente, segunda fase, sobre barrios residenciales al oeste de la capital, incluyendo un ataque contra el cuartel del Estado Mayor. Utilizaron armas automáticas de grueso calibre, morteros y lanzagranadas RPG-7. La guerrilla denunció ataques sobre zonas residenciales de asesores militares estadounidenses en el Barrio de San Benito. La segunda fase de la ofensiva guerrillera desarrolló choques con el ejército en las colonias de Escalón, San Benito, San Francisco, Jardines de Guadalupe y Maquilliswas. Radio Venceremos instó a los residentes de estas zonas a desalojar

los lugares, debido al peligro de bombardeos por parte del ejército. La Fuerza Aérea se encontró ante el dilema de bombardear los barrios exclusivos, donde viven los propios jefes militares y las autoridades, a diferencia de los bombardeos en las zonas marginales. El FMLN controló todos los accesos terrestres a la capital, entre los que figuran las autopistas Sur, Santa Tecla, Santa Ana, Ilopango-San Martín, Carretera Panamericana y Carretera Troncal del Norte.

- 26.- 4 de Diciembre. Combates en Zacatecoluca entre insurgentes y fuerzas militares, estas últimas apoyadas por la Fuerza Aérea que realizó bombardeos contra la población civil.
- 27.- 5 de Diciembre. Combates contra el ejército al oeste de San Salvador, sobre todo en las zonas de San Antonio Abad y Ayutuxtepeque. Simultáneamente, comandos urbanos realizaron sabotajes al sistema de energía eléctrica y volaron una estación de gasolina, en la capital. El FMLN derribó un avión de la Fuerza Aérea, del tipo Push and Pull, en Usulután, y un avión O2 que daba apoyo de observación militar a unidades de la sexta brigada de Infantería, además, averió un helicóptero UH-1H en las inmediaciones de San Miguel y Morazán.
- 28.- 17 de Diciembre. Batalla "del Nisperal" en Usulután, la guerrilla tomó prisioneros a 24 soldados.
- 29.- 18 de Diciembre. Ataque contra posiciones militares en la ciudad de Merliot, al norponiente de San Salvador. Enfrentamientos en los departamentos de Santa Ana, Cuscatlán, San Miguel y Chalatenango. Cae en combate el comandante guerrillero Dimas Rodríguez, fundador y segundo responsable de las Fuerzas Populares de Liberación. Reporta el FMLN la caída de 401 de sus combatientes y de 2,000 del ejército gubernamental.
- 30.- 19 de Diciembre. El FMLN decreta un paro nacional de transporte, afectando a todas las carreteras del país y toma el control de un tramo de la carretera de Usulután. Atacó también la academia de la Policía Nacional, en la capital.
- 31.- 23 de Diciembre. Ataque insurgente contra objetivos económicos en beneficios cafetaleros y haciendas ganaderas en las provincias de Usulután y San Miguel. Hostigamiento al cuartel de la Guardia Nacional en la suburbana Ciudad Delgado. A pesar de la tregua unilateral, el ejército salvadoreño incrementó la vigilancia en la capital, con cateos a casas.
- 32.- 30 de Diciembre. Combates sostenidos en el Departamento de Cuscatlán contra el ejército, mientras una compañía del batallón Bracamontes, efectuaba operaciones militares en territorios ocupados por el FMLN.
- 33.- 31 de Diciembre. El FMLN desarticuló la segunda compañía del batallón Bracamontes. Choques armados en Las Peñitas, Departamento de La Libertad. En Usulután, el ejército dijo haber encontrado un depósito subterráneo de armas, supuestamente pertenecientes al FMLN (50 bloques de TNT, doce granadas y otros pertrechos).

1990

- 34.- 2 de Enero. Reinicio de sabotajes contra transporte público y ataques contra posiciones militares. Simultáneamente, un autobús de transporte urbano y un camión de refrescos, fueron incendiados en la zona poniente de San Salvador por el FMLN, además incendió una fábrica de productos agropecuarios. El comité de prensa de la Fuerza Armada, COPREFA, reportó choques en las cercanías de Apopa, 12 km. al norte de la capital, luego de que el FMLN atacó con morteros un puesto de la Guardia Nacional. Enfrentamientos en los Departamentos de Morazán, Usulután y en San Miguel. Derribó el FMLN seis torres de tendido eléctrico.
- 35.- 9 de Enero. El FMLN anuncia la suspensión del boicot al transporte terrestre que rege desde el 13 de Noviembre de 1989. Sostiene combates con el ejército en los Departamentos de Usulután, San Miguel y San Vicente. Bombardeos realizados por la Fuerza Aérea en presuntas posiciones guerrilleras en el cerro de Guazapa.
- 36.- 10 de Enero. Presuntos comandos guerrilleros efectúan cuatro atentados dinamiteros en la capital contra una distribuidora de autos y al sistema de energía eléctrica, en tanto, la Fuerza Aérea continua sus bombardeos en el cerro de Guazapa y sus alrededores.
- 37.- 17 de Enero. El FMLN se adjudica la destrucción de un puente en el Departamento de Sonsonate y continúa con las acciones de sabotaje contra el sistema de energía eléctrica provocando un apagón en el oriente del país.
- 38.- 25 de Enero. El ejército salvadoreño refuerza la vigilancia en San Salvador e intensifica sus planes de contrainsurgencia, al insistir que tiene informes de que el FMLN estaría preparando el lanzamiento de una nueva ofensiva general.
- 39.- 29 de Enero. La guerrilla destruye una fábrica de detergentes, cerca de Usulután, con pérdidas de aproximadamente 200,000 dólares según el dueño de la empresa; incendia el ingenio Chaparrastique, en el Departamento de San Miguel, destruyendo las instalaciones y vehículos livianos; ataca posiciones del ejército contra la base militar de Altos del Ahuacate, Departamento de Morazán. El ejército mantiene patrullajes aéreos y terrestres.
- 40.- 6 de Febrero. El ejército bombardea una zona de asentamiento de repatriados en Morazán. Radio Venceremos indica que la acción se produjo luego de que el vicepresidente Francisco Merino y el viceministro de Seguridad, Inocente Montaña, visitaron los campamentos civiles.
- 41.- 11 de Febrero. Bombardea la Fuerza Aérea sobre Corral de Piedra, población de repatriados, en Chalatenango. Radio Venceremos y Farabundo Martí informan que 4 helicópteros y dos aviones A-37 lanzaron un ataque con bombas y cohetes de las tropas de infantería del destacamento militar No.1.
- 42.- 7 de Febrero. Comandos urbanos incrementan sabotajes contra tendidos de energía eléctrica y contra la empresa privada, en la capital, pese a la estricta vigilancia militar.

- 43.- 14 de Febrero. La insurgencia deja sin electricidad al 50% de la capital y a un 25% en el resto del país, al realizar sabotajes contra cinco líneas primarias de alto voltaje de 115,000 voltios, obligando al gobierno a racionar el servicio en todo El Salvador. Las autoridades de la Compañía de Alumbrado de San Salvador dan a conocer el plan de racionamiento eléctrico en el país, afectando principales zonas industriales de Soyapango e Ilopango, indica que se provocó un déficit del 42%. Departamentos sin energía: Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.
- 44.- 17 de Febrero. Ataque insurgente contra una subestación eléctrica de San Antonio Abad, al noroeste de la capital.
- 45.- 28 de Febrero. Radio Venceremos informó que el FMLN averió un helicóptero artillado UH-1H en Morazán, y un UH-1H en el Departamento de Chalatenango. Según el balace mensual se adjudicó 331 bajas al ejército, daños a cinco helicópteros artillados y sabotajes contra 203 torres de alta tensión.
- 46.- 8 de Marzo. Ataque insurgentes contra posiciones militares al norte de la capital. Varios helicópteros de la Fuerza Aérea se desplazaron a las zonas de los hechos. La guerrilla derribó postes de tendido eléctrico y dinamitó locales comerciales.
- 47.- 19 de Marzo. Comandos urbanos del FMLN atacaron posiciones de la primera brigada de Infantería en el barrio de Mejicanos.
- 48.- 22 de Marzo. Combates entre ejército y guerrilla en el Departamento de Chalatenango. El nuevo jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Rafael Villamariona, culpó al FMLN del atentado contra un familiar suyo. La Fuerza Armada anunció el reforzamiento de la vigilancia en la capital para preservar la seguridad.
- 49.- 23 de Marzo. El ejército gubernamental informa tener el control de la zona de Las Vueltas, en el Departamento de Chalatenango.
- 50.- 5 de Abril. Choque armado en la periferia sur de la capital, con fuego de fusilería y artillería, lo que obliga a la Fuerza Aérea a enviar helicópteros a la zona. Combates suscitados en las afueras de Perquín, Departamento de Morazán. El ejército reconoce que uno de sus helicópteros UH-1H (fabricación estadounidense) fue averiado por insurgentes en Chalatenango.
- 51.- 11 de Abril. Rebeldes atacan posiciones del ejército en la jurisdicción de Berlín, Departamento de Usulután. Habitantes de Chalatenango denuncian que la Fuerza Aérea bombardeó las comunidades de Sica huites y Las Vegas.
- 52.- 2 de Mayo. En el Departamento de Cuzcatlán se producen combates entre insurgentes y soldados apoyados por helicópteros. Las acciones rebeldes obedecen tanto a la actitud triunfalista y prepotente del gobierno y los militares como contra las medidas económicas oficiales que han provocado el descontento de amplios sectores. Los rebeldes atacaron con granadas impulsadas por cohetes, el domicilio del Ministro de Obras Públicas y las instalaciones del Consejo Electoral.
- 53.- 16 de Mayo. Las Fuerzas Armadas lanzan una ofensiva general que incluye bombardeos aéreos, ataques masivos de artillería,

desembarcos helitransportados y despliegue de tropa de infantería en todos los frentes rurales del FMLN. El FMLN señala que a partir del acuerdo de Ginebra de Abril pasado, le gobierno incrementó la interferencia de Radio Venceremos y Farabundo Martí.

- 54.- 26 de Mayo. La guerrilla dinamita tres torres de alta tensión y por lo menos diez postes de tendido eléctrico en diversos puntos de la capital, provocando insuficiencia en el suministro de energía eléctrica. Choques armados en Nueva Trinidad, Departamento de Chalatenango.
- 55.- 28 de Mayo. Emboscada contra la columna del FMLN por efectivos del batallón Tazumal de la segunda brigada de Infantería con sede en el Departamento de Santa Ana.
- 56.- 1 de Junio. La guerrilla desarrolla una amplia campaña de sabotajes contra el sistema eléctrico, causa apagones en casi todo el territorio. Derribó 17 postes y dos torres conductoras en la zona central y occidental. En la zona oriental, según la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, están fuera de servicio importantes líneas de suministro eléctrico. Combates en la periferia de El Salvador, el ejército estuvo apoyado por helicópteros artillados de la Fuerza Aérea.
- 57.- 20 de Junio. Radio Venceremos acusa al ejército de aumentar operativos contrainsurgentes en zonas de presencia rebelde. El FMLN busca aflojar la tensión en sus zonas al iniciar un aparente repliegue táctico, pero aumentando sabotajes.
- 58.- 26 de Junio. Enfrentamientos en Usulután. Siguen los sabotajes a la infraestructura del tendido eléctrico, que han provocado millonarias pérdidas a ese sector durante las últimas semanas.
- 59.- 4 de Julio. El ejército allana el local del Movimiento Popular Social Cristiano, registraron archivos e instalaciones.
- 60.- 10 de Julio. Un vocero del Frente Central "Modesto Ramírez" del FMNL se responsabiliza del atentado que costó la vida al mayor Carlos Figueroa Morales, jefe del Departamento Jurídico del Estado Mayor. Según el FMLN, es inminente una nueva ofensiva militar con nuevas modalidades en el uso de artillería.
- 61.- 28 de Julio. Violentos combates en las afueras de San Salvador, luego que la insurgencia emboscó un convoy del regimiento de caballería en Santa Tecla, Departamento de Santa Ana. La emboscada comenzó con el estallido de minas colocadas al borde de la autopista.
- 62.- 2 de Agosto. Denuncia de organizaciones políticas y sociales sobre crecientes violaciones a los derechos humanos contra sus activistas, reportan asesinatos de varios dirigentes. En la población de Cacaotera, Departamento de Morazán, versiones periodísticas refirieron que once civiles, de entre 12 y 57 años, fueron asesinados de forma salvaje por desconocidos. Asimismo, la capital y cuatro departamentos continuaron por segundo día sin energía eléctrica luego que unidades del FMLN derribaron 10 torres primarias de 115,000 voltios.

- 63.- 8 de Agosto. Combates en Chalatenango, el FMLN denunció que se han extendido las capturas por parte del ejército. Asimismo refirió los ataques contra la población civil y centro de estudio en Quezaltepeque del Departamento de La Libertad.
- 64.- 21 de Agosto. La guerrilla incrementa ataques contra posiciones militares, dinamitó seis estructuras de tendido eléctrico, denunció que el ejército salvadoreño lanzó en las últimas semanas una ofensiva general llamada "Héroes del 89" con bombardeos aéreos, desembarco de helitransportados y despliegue de tropas de infantería en todos los frentes de guerra. En respuesta el FMLN atacó posiciones del ejército acantonadas en tres poblados ubicados en la zona central y oriental del país.
- 65.- 31 de Agosto. Unidades de la Fuerza Armada bombardean zonas de cultivo de repobladores de Copapayo, Departamento de Cuscatlán (denuncia Rosa Chávez, Arzobispo de El Salvador).
- 66.- 6 de Septiembre. Tres helicópteros de fabricación estadounidense bombardean zonas agrícolas en San José Las Flores, Departamento de Chalatenango, región habitada por exrefugiados.
- 67.- 20 de Septiembre. Los rebeldes atacan las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública ubicada en el Departamento de la Libertad. Hicieron disparos con morteros de 60 y 79 milímetros contra las posiciones de la brigada del batallón Atlacatl que daba seguridad a la Academia. Otro ataque similar fue contra posiciones militares de la Policía Nacional en Nueva Concepción, Chalatenango. El ejército incrementó los patrullajes por tierra y aire para prevenir ataques que supuestamente la guerrilla realizaría.
- 68.- 23 de Septiembre. Comandos urbanos de la guerrilla del FMLN piden a comandantes rebeldes de alto rango que hagan del personal e instalaciones estadounidenses objetivos en la guerra civil. Esto se produce después de incidentes en el que oficiales de la Policía Nacional que otorgan seguridad a la embajada de los Estados Unidos participaron en el arresto de cinco integrantes de los comandos urbanos que instalaron una bomba en un poste de luz próximo a la embajada. (Después la embajada dijo que ningún miembro del personal de Estados Unidos estuvo involucrado en el arresto. Fue una operación estrictamente de la Policía Nacional). Hay combates en el Departamento de Chalatenango, incautan a las tropas del ejército, dos fusiles M-16, una ametralladora, lanzagranadas y pertrechos de guerra y realizan numerosas destrucciones a estructuras de fluido eléctrico.
- 69.- 1 de Octubre. Siguen combates en Chalatenango, Cabañas, Morazán, San Vicente y Cuscatlán, en el marco de la campaña guerrillera "Todos a Luchar por la Revolución Democrática". El combate más espectacular ocurrió en las inmediaciones de la población Victoria, Departamento de Cabañas, donde causó numerosas bajas de militares. Radio Venceremos precisó en su informe mensual que el FMLN causó 589 bajas, entre muertos y heridos, durante Septiembre, derribó un helicóptero y averió

otros ocho. Dañaron dos aviones, capturaron un cañón de 90 milímetros, 35 armas de guerra, 6 radios, 65 mochilas y derribó 70 estructuras de tendido eléctrico.

- 70.- 8 de Octubre. Ataque guerrillero considerado como de "envergadura" lanzado contra responsables de la seguridad de la cárcel más grande del país, ubicada en la capital. Abarcó todo el perímetro de las instalaciones, y posiblemente el fin era liberar a los presos. Dos helicópteros fueron enviados de inmediato a la zona para contrarrestar el ataque mientras que por tierra se desplegaban tropas del ejército. Simultáneamente, el FMLN ataca varias patrullas policiales, en el sector norte de la capital y dinamita 7 postes de líneas eléctricas en diferentes puntos.
71. 17 de Octubre. El FMLN lanza violento ataque contra las instalaciones de la Fuerza Aérea en la capital, uno de los principales cuarteles del país. Simultáneamente se escucharon fuertes explosiones en diversos puntos, que estremecieron casi a todo San Salvador.
- 72.- 1 de Noviembre. El FMLN dió a conocer su balance destructivo del mes de Octubre: sabotaje a la red eléctrica destruyendo 41 estructuras entre postes y torres, requisó a las tropas del ejército, cuatro fusiles M-16, un radio de comunicación PRC-77 y otros pertrechos bélicos.
- 73.- 20 de Noviembre. El FMLN inicia otra ofensiva, llamada "Campaña Militar Limitada", la segunda en importancia desde el 11 de Noviembre del año pasado.
- 74.- 21 de Noviembre. La Fuerza Armada indica que vuelve a controlar Chalatenango, Morazán y Usulután. El ejército realiza un intenso patillaje de seguridad en Zacamil, Ayutuxtepeque y Mejicanos. Ocurrieron ataques en la carretera de Apopa y Zaragoza, al sur de la capital. En Usulután, tropas de infantería apoyadas por la aviación, intentaban desalojar a los rebeldes de la zona. En San Francisco Gotera, Departamento de Morazán y en Chalatenango siguen los ataques.
- 75.- 21 de Noviembre. El batallón élite Atonal, cuerpo especializado en la acción rápida, se mantiene en el poblado de Santa Elena, al oriente de San Salvador. En una confusión de disparos, un avión C-47 de la Fuerza Aérea tratada de fijar posiciones guerrilleras.
- 76.- 22 de Noviembre. Continúa la "operación limitada", la situación fue crítica en el Departamento de Chalatenango debido a que los efectivos del ejército impidieron el paso a periodistas que pretendía llegar a la zona. La acción más espectacular ejecutada por el FMLN ocurrió en San Miguel, la sede de la tercera brigada de Infantería fue atacada con fuego de fusilería, morteros de 81 mm y proyectiles RPG-7. Intensifica sus acciones contra posiciones del ejército en los Departamentos de San Miguel, Cuscatlán, Morazán, Cabañas, San Salvador, San Vicente, y la carretera troncal a Chalatenango. La insurgencia daña parcialmente la subestación de energía eléctrica en la zona norte de San Salvador, destruye nueve tanquetas blindadas del ejército, averió tres aviones y capturó

35 fusiles, dos lanzacohetes y cinco radios de intercomunicación.

- 77.- 29 de Noviembre. La insurgencia se adjudica el derribo de un helicóptero UH-1H en fuertes combates en la localidad de Dulce Nombre de María, en Chalatenango. También hay fuertes combates en Usulután. En la capital, la guerrilla operó en la zona de Zacamil, y utilizó fuego de fusilería y morteros.
- 78.- 30 de Noviembre. En Usulután se combate no sólo contra las fuerzas del ejército, sino también contra la aviación militar. El FMLN derriba una avioneta O-2, un helicóptero artillado, averió un avión C-47 y otro helicóptero de combate.
- 79.- 1 de Diciembre. Comandos guerrilleros bombardean dos represas en la zona norte de El Salvador. Una de las tribunas de la presa "5 de Noviembre", quedó totalmente inutilizada (y solamente se podrá reponer cuando los fabricantes la reconstruyan en Alemania, comunicó la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, empresa estatal que administra el servicio). También destruye dos transformadores y cuatro postes eléctricos en diferentes puntos. Los combates se sostienen contra tropas del ejército en Santa Ana, San Miguel y Morazán.
- 80.- 12 de Diciembre. La guerrilla ataca guarniciones militares en Chalatenango, San Miguel, San Vicente, y Usulután. Dinamitó una agencia bancaria en el centro de San Salvador y atacó el puesto de vigilancia en una subestación eléctrica de Cuscatlán.
- 81.- 13 de Diciembre. Continuación ininterrumpida de ataques. Los guerrilleros siguen atacando guarniciones del ejército, pero además en la base militar La Cierpe, en las afueras de Chalatenango. En Morazán los rebeldes incendian la alcaldía de Osicala, lanzan sabotajes contra el sistema eléctrico en San Rafael Cedros, y hostigan a unidades militares de la Marina Nacional en Usulután.
- 82.- 17 de Diciembre. Las fuerzas del FMLN causan bajas al ejército en La Laguna, al norte del país. Se informa que el FMLN entregó a la Cruz Roja Internacional a once soldados gubernamentales hechos prisioneros durante los combates en Las Vueltas, en la frontera con Honduras.
- 83.- 21 de Diciembre. Emboscada al ejército y nuevos sabotajes guerrilleros a instituciones financieras se producen en la capital. Un comando emboscó con minas y disparos al batallón Atlacatl. Fueron saboteados cuatro oficinas de empresas financieras en San Salvador con cuantiosos daños materiales.
- 84.- 28 de Diciembre. La guerrilla ocupa ocho poblaciones en el norte del país como reacción a la amplia operación militar que se desarrolla en la zona, simultáneamente anuncia que el 31 de Diciembre terminará su actual campaña "Castigo a la Fuerza Armada antidemocrática", en la que causó 199 bajas al ejército. Unidades del FMLN penetran en los poblados de La Palma, San Ignacio, Santa Rita, Nueva Concepción, Agua Caliente, La Reina, Comalapa y Dulce Nombre de María, del Departamento de Chalatenango. Aunque el ejército dice que realiza actualmente un operativo mayúsculo con más de 3,000

hombres en ese departamento, los guerrilleros no encuentran resistencia en esas poblaciones y no hay enfrentamiento. Los ataques guerrilleros en el marco de la campaña de "castigo" son los más fuertes del año y según la insurgencia, entre las bajas se encuentran 41 oficiales, quince de ellos pertenecientes a la Fuerza Aérea. En un balance global, informa que durante 1990 causó al ejército 6,423 bajas entre muertos y heridos, incluidos 245 oficiales. También fueron destruidos 15 helicópteros, especialmente a partir de un informe, según el cual durante 1990 fueron asesinados cuando menos 900 personas, 100 desaparecidas y 500 capturadas por el ejército.

1991

- 85.- 2 de enero. Helicóptero UH-1H estadounidense guiado por tres estadounidenses es derribado por la guerrilla. Enfrentamientos en Chalatenango. Ataque rebelde a una base militar en San José Guavabal, al norte de la capital.
- 86.- 3 de Enero. La guerrilla destruye una agencia del Banco Comercial Agrícola, y ataca dos puestos de la Primera Brigada de Infantería, ambos en San Salvador.
- 87.- 15 de Enero. El FMLN anuncia el comienzo de una maniobra militar denominada "Por Nuestros Héroes y Mártires del 10 de Enero de 1981, Juramos Vencer". Se inicia con el ataque a una compañía del batallón Tehuacán, en la carretera Panamericana, Departamento de San Vicente, donde el ejército reconoce la muerte de 14 soldados, pero dice haber provocado el mismo número a la guerrilla.
- 88.- 16 de Enero. El FMLN embosca una patrulla militar en San Vicente. Los combates se produjeron un día después de que los Estados Unidos decidieron descongelar una ayuda militar a El Salvador por 42,500,000 dólares.
- 89.- 23 de Enero. Enfrentamientos en Morazán. De acuerdo con el COPREFA, tropas del ejército mataron a cuatro rebeldes e hirieron a otros seis, en las cercanías de San Simón. El FMLN, por su parte asegura haber matado a ocho militares y herido a otros trece en combates sostenidos al sur del Río Torola. Un resumen del FMLN asegura haber provocado al ejército 475 bajas.
- 90.- 18 de Febrero. El FMLN ataca la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (y sede del Ministerio de Defensa), según Emilio Ponce, los guerrilleros utilizan proyectiles tipo RPG-7, conocidos también como "bastones chinos", lanzados desde una distancia aproximada de 300 metros. Es el cuarto ataque en once años de guerra.
- 91.- 26 de Febrero. El FMLN irrumpe durante la noche la exclusiva colonia de Escalón y dispara contra la Guardia del presidente Cristiani. Simultáneamente, otro comando hace estallar unas 10 bombas que destruyen 10 postes de tendido eléctrico, dejando sin luz a casi todo San Salvador. Hay también un tiroteo entre elementos de la Policía Nacional y del batallón élite especializado en contrainsurgencia Belloso, apoyados por

- helicópteros de la Fuerza Aérea.
- 92.- 1 de Marzo. El FMLN ataca la hidroeléctrica de Cerro Grande, la mayor del país, provocando daños de consideración en sus instalaciones. Daña tres transformadores de alta potencia, varios aisladores y otros sistemas. Anuncia que causó más de un centenar de bajas al ejército, a las filas del destacamento militar No.1, con sede en Chalatenango, que tiene el cuidado de la represa. Asimismo requisó 30 fusiles M-16, dos cañones y dos ametralladoras. La acción incluyó la ocupación de cinco poblaciones de Chalatenango, donde las fuerzas guerrilleras celebraron mítines con los habitantes para explicarles la situación del país y la falta de condiciones para las elecciones legislativas y municipales del próximo 10 de Marzo. Anuncia también que suspenderá sus acciones ofensivas del 2 al 6 en homenaje al fallecido Guillermo Ungo, y del 9 al 11 de dirigido a no entorpecer el proceso electoral.
 - 93.- 9 de Marzo. Efectivos de la guerrilla y del ejército gubernamental libran recios combates en la localidad de San Javier. Morteros de 81 mm, lanzagranadas de 61mm utiliza el ejército.
 - 94.- 21 de Marzo. Choques armados entre ejército y guerrilla en Tecoluca, Departamento de San Vicente contra la quinta brigada de Infantería y, en Chalatenango contra el primer destacamento de tropas gubernamentales. Ataque guerrilleros con artillería contra la "Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre".
 - 95.- 15 de Abril. Emboscada del batallón Atlacatl en Chalatenango. El FMLN atacó una subestación de energía eléctrica en San Salvador que interrumpieron el sistema eléctrico.
 - 96.- 27 de Abril. Fuerte ofensiva contrainsurgente de la primera brigada de infantería y del batallón Belloso en San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán, apoyados por la Fuerza Aérea. La guerrilla derriba dos helicópteros artillados UH-1H. El balance mensual del FMLN indica haber causado 691 bajas al ejército y dos helicópteros derribados, mientras que COPREPA señala que hubo 161 muertos y 267 heridos distribuidos entre guerrilleros, soldados del ejército y civiles.
 - 97.- 6 de Mayo. El 70% de la energía eléctrica está fuera de servicio a causa del sabotaje. Un comando urbano del FMLN ataca con cohetes RPG-7 tierra-tierra la subestación eléctrica de San Antonio Abad.
 - 98.- 9 de Mayo. El FMLN ataca la "Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre", destruye dos torres de conducción eléctrica primaria. Utilizaron cohetes tierra-tierra RPG-7, granadas de mano y fusilería.
 - 99.- 10 de Mayo. El FMLN anuncia que su campaña de sabotajes puede ser negociable con acuerdos en materia militar. Estas han sido las mayores campañas de boicoteo provocando un déficit de 47% en el servicio y la peor crisis energética desde que empezó la guerra.
 - 100.- 15 de Mayo. La guerrilla se adjudica 62 baja militares de enfrentamientos en Chalatenango. Hay choques en cinco departamentos.

101. -18 de Mayo. La guerrilla y el ejército continúan los combates, se extienden a siete departamentos; San Vicente, Usulután, Chalatenango, La Paz, La Libertad, Cabañas y San Salvador. Destaca el ataque guerrillero contra la subestación eléctrica de Agua Caliente.
102. -31 de Mayo. El ejército salvadoreño lanzó una ofensiva para reducir las zonas bajo control de la insurgencia, mientras el FMLN incrementó los sabotajes. El balance mensual insurgente indica haber causado al ejército 772 bajas.
103. -6 de Junio. Ocupación rebelde de un tramo de la carretera Troncal del Norte, paralizando el tránsito de vehículos para realizar actividades de propaganda. Asimismo, efectuaron acciones de sabotaje contra el sistema eléctrico provocando apagones que afectaron la zona norte del país.
104. -7 de Junio. El ejército gubernamental incrementa sus patrullajes porque se rumora que el FMLN prepara otra ofensiva.
105. -15 de Junio. El ejército gubernamental realiza operativos en las zonas de Guazapa y Morazán. Los rebeldes atacan posiciones del ejército en el área metropolitana. Radio Venceremos indica que entre el 9 y 15 de Junio ha causado cerca de 127 bajas al ejército salvadoreño. Respecto al rumor de una nueva ofensiva emite que es sólo que el gobierno quiere justificar las operaciones militares.
106. -16 de Junio. Acciones armadas del ejército y la guerrilla que incluyen bomba rdeos a poblaciones civiles por parte de la Fuerza Aérea. En Chalatenango, varios poblados fueron bombardeados como parte de la amplia operación militar del ejército salvadoreño quien además emplazó varias piezas de artillería a poca distancia de un hospital de la zona, para disparar a presuntas posiciones del FMLN. Entre los poblados destacan: Agua Caliente, San José de las Flores, Las Vueltas y San Antonio los Ranchos. Se responsabiliza al comando urbano "Modesto Ramírez" del FMLN de la muerte del capitán Carlos Alfredo López en San Salvador (Adjunto del Ministerio de Defensa), en la acción denominada "Comandante Jesús Rojas, hasta la victoria siempre". (El comandante Rojas, de origen nicaragüense, muerto en combate en Abril, fue jefe rebelde en el Departamento de Chalatenango).
107. -18 de Junio. Se incrementan ataque por parte de la insurgencia. En Mejicanos, periferia norte de San Salvador, liberó a más de 400 presos del penal La Esperanza, utilizando fuego de fusilería, morteros y potentes explosivos. Simultáneamente, destruyeron gran parte de la red eléctrica en la capital y atacaron un puesto de seguridad del Estado Mayor Conjunto. Combates entre ambos bandos en Santa Clara, Departamento de San Vicente y en Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango. Emboscada en la carretera Panamericana.
108. -20 de Junio. Radio Farabundo Martí informó que el ejército mantiene sus operativos de contrainsurgencia en Chalatenango, que han dejado cerca de 20 bajas entre ejército y guerrilla.

(El 30 de Junio aparecen asesinados 12 campesinos en el Departamento de San Vicente).

109. 3 de Julio. La insurgencia denuncia que dos aviones espías estadounidenses sobrevuelan la zona norte del país, provenientes de la base de Palmerola en Honduras cuyo objetivo es detectar las posiciones rebeldes en Morazán. Se informa sobre enfrentamientos armados en San Salvador, Cuscatlán y Cabañas.
110. 8 de Julio. Se recrudecen combates entre guerrilla y ejército. Combates contra la sexta brigada en Chinameca, Departamento de San Miguel. Obstrucción de la carretera Panamericana. Combates simultáneos en La Libertad, Usulután y San Miguel. Asesinan los escuadrones de la muerte, de la primera brigada de infantería al dirigente popular del Movimiento Comunal Salvadoreño, Martín Ayala.
111. 9 de Julio. Acciones del FMLN en Chalatenango, ocupando cinco poblados: Nueva Concepción, San Francisco Morazán, La Palma, Agua Caliente y San Ignacio. Anuncian que se mantendrán aquí por tiempo indefinido para realizar actividades de propaganda. Las tropas de la segunda brigada de infantería, se replegaron al no poder remontar posiciones insurgentes.
112. 10 de Julio. Nueva e intensa campaña militar insurgente denominada "Si la Fuerza Armada quiere armas que gane la guerra". Esta nueva fase se desarrolla en siete departamentos e incluye ataques contra posiciones militares, toma de poblaciones, control de carreteras y combates simultáneos de envergadura y larga duración. Atacó posiciones militares en Nueva Concepción, en Chalatenango. La guerrilla afirmó haber causado 124 bajas al ejército, 90 de ellas a las fuerzas de la Policía Nacional en Nueva Concepción y 34 más a las tropas de la segunda brigada de infantería. Unos 200 rebeldes ocuparon el cuartel de Nueva Concepción y la Fuerza Aérea no intervino. Comandos urbanos lanzaron un cohete de fabricación artesanal contra las instalaciones de la nueva Academia Militar en El Espino, en la periferia occidental de San Salvador.
113. 12 de Julio. La guerrilla toma el poblado de San José de las Flores y lanza un aplio ataque contra el cuartel de la quinta brigada de infantería en el Departamento de San Vicente, utilizan morteros y toman varios soldados como prisioneros e incautan material de guerra. Se extienden los combates en ocho departamentos: Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán, San Salvador y Morazán. El ejército bombardea con artillería pesada, aldeas en Usulután.
114. 13 de Julio. Los rebeldes toman la localidad de Dulce Mombre de María. En contraposición, la Fuerza Armada responde con un amplio despliegue de tropas que realizan un operativo de máxima seguridad para proteger a los presidentes centroamericanos que participan en la Cumbre, el Viceministro de Seguridad Pública, coronel Orlando Montaña tiene a su cargo el diseño de tres anillos de seguridad para evitar cualquier

- atentado durante el cónclave.
115. 27 de Julio. Dos secuestrados, el de Guillermo Sol Bang, uno de los fundadores de ARENA y Gregorio Zelaya, este último sí fue secuestrado por el FMLN según las versiones directas de Nidia Díaz, comandante del FMLN. Ataque de la insurgencia al Puesto de la Defensa Civil en la zona sur de San Salvador. Combates en Chalatenango, Usulután y San Miguel. El FMLN afirmó que su defensa antiaérea averió un helicóptero militar que Abastecía a la tropa gubernamental en las cercanías de la población de San Gerardo.
 116. 3 de Agosto. La guerrilla ataca una subestación de energía eléctrica en la capital. Lanza además un ataque contra el puesto de la Guardia Nacional.
 117. 5 de Agosto. El FMLN difunde un comunicado responsabilizándose del secuestro de Zelaya, argumenta que "por el estado de guerra que vive El Salvador, tenemos derechos para realizar el cobro de impuestos de guerra". El coronel Inocente Montaña Viceministro de Seguridad Pública, asegura que el FMLN pide un millón de dólares como rescate, "a los guerrilleros les urge recaudar fondos para sus paupérrimas arcas, ya que no reciben apoyo financiero de los países comunistas". No se hace referencia al caso de Sol Bang.
 118. 9 de Agosto. Un operativo militar conjunto cerca los terrenos ubicados a cinco kilómetros al este de San Salvador, para desalojar a cerca de 800 familias instaladas aquí desde hace nueve meses. "Los habitantes de la gigantesca ciudad perdida opusieron resistencia a soldados que llegaron en camiones para destruir las viviendas de cartón y madera levantadas por sus moradores".
 119. 12 de Agosto. El FMLN, a través de Radio Venceremos, indica en un balance que el ejército salvadoreño sufrió 4 mil 684 bajas, entre muertos y heridos, en los primeros siete meses del año, sabotearon 828 estructuras del sistema eléctrico y 13 subestaciones distribuidoras de energía fueron dañadas. Destrucción de 6 helicópteros, 3 aviones A-37 Dragonfly y 2 avionetas tipo Push and Pull. Uno de sus mayores triunfos fue la neutralización de la Fuerza Aérea. "El uso de los cohetes y el sólo anuncio del emplazamiento de esa arma en tierra ha obligado al enemigo a modificar todo su plan de defensa y ha tenido en todos sus efectivos una fuerte repercusión en la moral y en la capacidad de respuesta". El informe no ofrece cifras de bajas propias.
 120. 14 de Agosto. Con el operativo de containsurgencia en el Departamento de Chalatenango, la Fuerza Armada desencadenó acciones represivas contra la población y comunidades rurales hechos denunciados por el Comité Cristiano Pro Desplazados.
 121. 15 de Agosto. La Fuerza Aérea lanzó bombardeos en las áreas rurales de Usulután, mientras que un batallón de paracaidistas arribaron a la localidad de El Fraille, a 60 kilómetros de San Salvador. Siguen los enfrentamientos en Chalatenango.
 122. 18 de Agosto. El FMLN anuncia la puesta en práctica de una nueva campaña militar dirigida contra las empresas

- constructoras del país, por "lucrar con las necesidades del pueblo y por los desalojos forzosos de familias de comunidades marginales". Radio Venceremos denunció la "incursión" del ejército en territorios bajo control rebelde en el Departamento de Morazán, cuya acción fue posible "gracias a la colaboración del ejército hondureño".
123. - 21 de Agosto. Combates entre ambos bandos principalmente en Morazán, en la que batallones élite dispararon contra zonas repobladas de refugiados. El ejército descubrió cinco misiles antiaéreos, un millón de cartuchos y otros pertrechos militares, según información del ejército salvadoreño.
124. - 22 de Agosto. Segundo decomiso de armas en San Salvador y Santa Tecla. El arsenal, que pertenecía a las Fuerzas Populares de Liberación, consiste en seis misiles tierra-aire: tres son del tipo Sam-14 y uno Sam-7 de origen soviético, y los dos restantes Red Eye de fabricación estadounidense. Continúan los combates en San Miguel y Morazán.
125. - 27 de Agosto. Combates en Perquin, Morazán. Los rebeldes lanzan una serie de sabotajes contra el sistema de energía eléctrica provocando apagones en las provincias de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Vicente y San Miguel. Se declara, por tanto, un plan de emergencia que consiste en el racionamiento, hasta por nueve horas diarias, del servicio de energía eléctrica.
126. - 1 de Septiembre. El FMLN informa en su balance mensual correspondiente al mes de Agosto, que averió un helicóptero tipo UH-1H, seis camiones de transporte militar y una tanqueta. Además obtuvieron material bélico destacando un cañón de 90 mm sin retroceso, cinco morteros, dos lanzacohetes, y varios fusiles. 22 estructuras de tendido eléctrico fueron saboteadas, incluida la central hidroeléctrica El Guajoyo, en el Departamento de Santa Ana. Reconoce la muerte de once de sus combatientes.

NOTA: Esta cronología ha sido elaborada sobre la base de la prensa nacional mexicana. Cuando se hace referencia a las bajas de cualquier bando, deberá entenderse como elementos fuera de acción, encontrándose entre ellos muertos y heridos. No obstante se mencionan en algunos casos el número de muertos, pero no se han contabilizado ya que las cifras pueden estar manipuladas. Por otro lado, el calendarizar las acciones, no implica que entre un día y otro no haya habido combates, como ya es costumbre en este país, diariamente se realizan maniobras militares de ambas partes.

Bibliografía Consultada

- Almanaque Mundial 1985. México. Editorial POPUMEX S.A. de C.V. 1985.
- ARRIOLA, Mario. "Centroamérica: Conflicto o negociación? en Cuadernos de Política Exterior Mexicana, Año 1, Núm. 1 Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. CIDE. Primera Edición. México, 1984.
- BERMUDEZ, Lilia. Guerra de Baja Intensidad. Reagan contra Centroamérica. Editorial Siglo XXI. Primera Edición. México, 1987.
- CABARRUS, Carlos R. "El Salvador de movimiento campesino a revolución popular" en Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos. Editorial Siglo XXI. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Primera Edición. México, 1985.
- CAMACHO, Daniel y Rojas Manuel. La Crisis Centroamericana. Editorial Universitaria Centroamericana. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Primera Edición. Costa Rica 1984.
- COMISION KISSINGER. Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroamérica. Editorial Diana. Primera Edición, 1984. México.
- DALTON, Roque. Las historias prohibidas del pulgarcito. U.C.A. Editores. Primera Edición. San Salvador, 1988.
- DALTON, Roque. Taberna y Otros Lugares. La Letra, Editores. Edición definitiva. México, 1988.
- DEALY, Glen Claudill. An Honorable Peace in Central America. Books/Cole Publishing Company. Pacific Grove, California, USA, 1988.
- Diccionario de Ciencias Sociales de la UNESCO. Editorial Planeta-Agostini. Volúmen II. Impreso en España. 1988.
- DOLJANIN, Nicolás. Chalatenango, la Guerra Descalza. El Día. Primera Edición, 1982. México.
- ECHEVERRIA, Zuno Alvaro. Centroamérica, la Guerra de Reagan. Primera Edición. El Día. México, 1983.
- ESCURRA, Ana María. Intervención en América Latina, Los Conflictos de Baja Intensidad. Instituto de Estudios y Acción Social. Primera Edición. Buenos Aires, 1988.

- FISH, Joe y Sganga Cristina. El Salvador, Testament of Terror. Olive Branch Press. New York, USA, 1988.
- GILLY, Adolfo. Guerra y Política en El Salvador. (Serie Testimonios). Editorial Nueva Imagen. Primera Edición. México, 1981.
- GORDON, Rapoport Sara. Relaciones Centroamérica-México. El Salvador. Programa de Estudios de Centroamérica, PECA-CIDE. Primera Edición. México 1987.
- GUIDOS, Véjar Rafael. Ascenso del militarismo Salvadoreño. (Colección Debate). Segunda edición. Editorial Universitaria Centroamericana: San José, Costa Rica, 1982.
- HERNANDEZ, Vela Edmundo. Diccionario de Política Internacional. Primera reimpresión. U.N.A.M. México, 1983.
- KIRKPATRICK, Jeane J. Dictadura y Contradicción. Editorial Hermes. Primera Edición. México, 1984.
- LAZO, Marín José Francisco. La Factibilidad de Implementar un Programa de Estabilización y Reactivación Económica en una Economía de Guerra. El caso de El Salvador: 1986. Tesis. C.I.D.E. 1986.
- LIEVENS, Karin. El Quinto Piso de la Alegría. Ediciones Sistema Radio Venceremos. El Salvador, 1989.
- MAIRA, Luis. Centroamérica en Crisis. Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México. Primera Edición. 1890. México.
- MAIRA, Luis. "La crisis centroamericana y su contexto externo: de la guerra de las Malvinas a la invasión a Granada". mimeo. México, D.F. Octubre 1983.
- MENENDEZ, Rodríguez Mario. El Salvador: Pueblo contra la Oligarquía. (Colección Nuestro Continente). Num. 7. Universidad Autónoma de Sinaloa. México, 1981.
- MENJIVAR, Rafael. Formación y Lucha del Proletariado Industrial Salvadoreño. (Colección Debate) Editorial Universitaria Centroamericana, EDUCA. Segunda Edición. San José, Costa Rica, 1982.
- MENJIVAR, Rafael. El Salvador: El Eslabón más Pequeño. (Colección Debate). Editorial Universitaria Centroamericana, EDUCA. Segunda Edición. San José, Costa Rica, 1981.
- POULANTZAS, N. Fascismo y Dictadura. Editorial siglo XXI. México. 1971.

SALAZAR, Valiente Mario. "El Salvador: crisis, dictadura y lucha" en América Latina. Historia de Medio Siglo. Instituto de Investigaciones Sociales de la U.N.A.M. Tomo 2. Editorial Biglo XXI. México, 1984.

VENTURA, José. El Poder Popular en El Salvador. Editorial Mex-Sur y Salpress. s/f.

TORRES-RIVAS, Edelberto. Centroamérica: la Democracia Posible". Primera Edición. EDUCA Editores. Centroamérica, 1987.

Artículos y Revistas.

ALGARRAZ, Juan Carlos. "En El Salvador la matanza se cobra mártires españoles", en Revista Cambio 16. 4-Diciembre-1989. Num. 940. Madrid, España.

ARMITAGE, Richard L. "Special Operations Forces and Low-Intensity Conflict". 23 February 1988. s/l mimeo.

BOLOS, Silvia. "Investigación Documental. Las Elecciones en El Salvador. 25 de Marzo-6 de Mayo de 1984" Avances de Investigación. Centro de Estudios Centroamericanos de Relaciones Internacionales, CECARI. Núm. 1. México.

CORDOVA, M. Ricardo. "El Salvador: un cambiante escenario de la paz" en Revista Polémica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, F.L.A.C.S.O. Num. 5. Segunda Epoca. 1988. San José, Costa Rica.

CORDOVA, Ricardo. "Guerra de Baja Intensidad contra Centroamérica", en Estudios Latinoamericanos. C.E.L.A.-U.N.A.M. Año 2. Num. 3. Julio-Diciembre 1987. México.

DIAZ, Nidia. "Perspectivas de una solución política", en Revista ECA. Num. 475-Mayo-1988. Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas, UCA Editores. El Salvador, C.A.

GASPARINI, Juan. "En El Salvador hay que hacer elecciones con las mismas garantías que en Nicaragua" en Revista Tiempo de Hoy. 14 de Mayo de 1990. Num. 419. Madrid, España.

GONZALEZ, Marín Manuel. "El Salvador; Crisis y Política Económica del Régimen Demócrata Cristiano, 1984-1988". Ponencia presentada en el VIII Congreso Centroamericano de Sociología. Guatemala, 10-15 de Octubre de 1988.

GOROSTIAGA, Xavier. "La coyuntura centroamericana parte II" en Pensamiento Propio. C.R.I.E.S. Año VI. Num. 51. Junio 1988. Managua, Nicaragua.

- MAZA, Enrique. "Todos los indicios y testimonios conducen a los militares" en Proceso. Semanario de información y análisis. Num. 683. 4-Diciembre-1989. México.
- MENJIVAR, Rafael. "La asistencia norteamericana en la Administración Reagan. Un Intento de Evaluación". Ponencia presentada en el VIII Congreso Centroamericano de Sociología. Guatemala, 10-15 de Octubre de 1988.
- MORENO, Francisco. "El Reformismo en El Salvador", en Cuadernos Políticos. Ediciones ERA. Enero-Marzo de 1985, Num. 42. México.
- NIETO, Miguel Angel. "La contra vende sus armas a precio de saldo" en Revista Cambio 16. 16-October-1989. Num. 933. Madrid, España.
- SANCHEZ, Ramos Irene. "La nueva estrategia contrainsurgente en El Salvador" en Estudios Latinoamericanos. Centro de Estudios Latinoamericanos, C.E.L.A.-U.N.A.M. Año 2. Num 2. Enero-Junio de 1987. México.
- SANCHEZ, Ramos Irene. "El proceso de Esquipulas II en El Salvador. El manejo contrainsurgente de la propuesta de paz". Ponencia presentada en el Simposio Esquipulas II del 24 al 26 de Agosto de 1988. México, D.F.
- SELSER, Gregorio. "Un militar gringo occidental y cristiano" en La Jornada. 3 al 7 de Junio de 1991. México.
- ZAMORA, Rubén. "No hay tercera vía en El Salvador", en Pensamiento Propio. Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, C.R.I.E.S. Año V. Num. 43. Julio-Agosto 1987. Managua, Nicaragua.
- "Ataque guerrillero a la Cuarta Brigada" en El Salvador. PROCESO. Centro Universitario de Documentación e Información. U.C.A. Num. 352. Septiembre 14 de 1988. El Salvador.
- "El Salvador: Diálogo sí, negociación no", en Coyuntura Centroamericana. P.E.C.A.-C.I.D.E. Año 1. Num. 2-3 Octubre-Noviembre 1987. México.
- Documento Especial. "La guerra centroamericana. Una guía de la ayuda militar de Estados Unidos", en Revista ECA.
- Cuadernos Políticos. "FMLN, Revolución e Intervención en El Salvador". Documento. Ediciones ERA. Enero-Marzo de 1984, Num. 39. México.

Documento. "Testamento Político de Duarte", en Revista ECA. Num. 476-Junio-1988. Cañas", UCA, Editores. El Salvador, C.A.

"El Salvador: Es la Democracia Cristiana un Partido de Centro?" en Cuadernos de Divulgación. Centro de Investigación y Acción Social, C.I.N.A.S. Num. 3. Agosto 1987. México. Documento. "Programa Político del Partido Demócrata Cristiano", en Revista ECA. Num. 473-374, Marzo-Abril, 1988. UCA, Editores. El Salvador, C.A.

"La Primera Administración Reagan y El Salvador" en Cuadernos Cecari. Num. 1. Serie Avances de Investigación. Junio 1986. México.

"Unidades Militares del Ejército Salvadoreño". mimeo. s/f, s/l.

"Propuesta del Arzobispo de San Salvador para realizar un debate nacional sobre la paz en El Salvador". Documento en Revista ECA. Num. 476. Junio 1988. UCA Editores. El Salvador C.A.

"El Salvador. Cambios en los mandos militares" en Centroamérica Hoy. Consejo Superior Universitario Centroamericano, C.S.U.C.A. 17 julio 1988. Num 7. San José, Costa Rica.

"De la Contención a la Doctrina Reagan" en Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana. Vol. 11. Num. 3. Marzo 1986. CIDE. México.

El Mundo. Periódico de El Salvador. 10/Oct/88.

Diarios nacionales utilizados, principalmente La Jornada. Han sido revisados consecutivamente desde el 1 de Enero de 1988 a Septiembre de 1991.

El Excelsior. Fundamentalmente entrevistas o artículos traducidos del New York Times. Diferentes Fechas.

El Financiero. Diferentes Fechas.